

La farsa neodesarrollista
y las alternativas
populares en América
Latina y el Caribe

LA FARSA NEODESARROLLISTA

y las alternativas populares
en América Latina y el Caribe

**Mariano Féliz y
Maria Orlanda Pinassi
(compiladores)**



Herramienta
ediciones

Índice

Introducción: La farsa neodesarrollista y las alternativas populares en América Latina y el Caribe.....	9
Breve genealogía del capitalismo dependiente latinoamericano: la superexplotación como combustible del neodesarrollismo	15
Roberta Traspadini	
La Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana. Reorganizando el saqueo del continente.....	33
Álvaro Álvarez	
Argentina, de la crisis neoliberal a la crisis del neodesarrollo, de Kirchner a Macri. Hipótesis sobre el tiempo que nos toca	49
Mariano Félix	
Economía política del Uruguay progresista (2005-2015)	71
Gabriel Oyhantçabal Benelli	
El gobierno de Fernando Lugo y el golpe de Estado de 2012: luchas, cambios, continuidades y aprendizajes.....	87
Cecilia Vuyk	
El equívoco venezolano.....	103
Guillermo Cieza	
Neoliberalismo y neodesarrollismo en Centroamérica: ¿proyectos diferentes?.....	121
María Gabriela Guillén Carías	
Judite Stronzake	
Ocupación, cólera y negocios: las virtuosas actuaciones de la MINUSTAH	135
Franck Seguy	
Neodesarrollismo: una parábola de ricos para pobres	153
Maria Orlanda Pinassi	
Los pueblos de los bosques y el desarrollo. Las retomadas indígenas en Brasil.....	171
Silvia Beatriz Adoue	

Inédita alianza neodesarrollista en el campo: la asociación educativa entre el MST y el agronegocio en Bahía.....	183
Arlete Ramos dos Santos	
Dos caras de la minería en el sudeste paraense: la extracción minera como base material del neodesarrollismo....	195
Celia Regina Congilio	
Criminalización de la pobreza, encarcelamiento en masa y represión social en el Brasil del neodesarrollismo.	215
¿Qué hay de nuevo?	
Camila Marcondes Massaro	
Monetarización y financiarización de las políticas sociales: ¿expresiones del neodesarrollismo?.....	233
Sara Granemann	
Crisis, desarrollismo y neodesarrollismo en Brasil.....	245
Frederico Daia Firmiano	
Sobre los autores	267

Introducción: La farsa neodesarrollista y las alternativas populares en América Latina y el Caribe

El capitalismo fue incapaz de introducir en América Latina el ciclo de sus revoluciones típicas. Para garantizar su desarrollo, el capital tuvo que recurrir a menudo a dictaduras crudas. Siempre ha oscilado entre el conservadurismo, la revolución política (por la cúpula) y las reformas de superficie, de alcance social restringido, culminando en la contrarrevolución preventiva como último recurso de autodefensa.
(Florestan Fernandes, 1973: 71)¹

Nuestra experiencia nos ha enseñado que, sobre todas las cosas, debemos ser pacientes, perseverantes y decididos. A veces pasan meses sin que nada aparentemente suceda. Pero si se trabaja con ejercicio de estas tres cualidades, la tarea siempre ha de fructificar; en una semana, en un mes o en un año. Nada debe desalentarnos. Nada debe dividirnos. Nada debe desesperarnos.
Agustín Tosco²

En este último período, América Latina y el Caribe atravesaron dos décadas de proyectos de orientación general neodesarrollista. Por procesos diferentes, nuevos gobiernos asumieron la tarea de intentar enfrentar las limitaciones del proyecto hegemónico del neoliberalismo en crisis en la región.

En algunos casos, procesos populares de masividad proyectaron en el Estado propuestas de transformación más o menos radical de las socie-

1 *Democracia y desarrollo*. San Pablo: Hucitec, 1973, p. 71.

2 Activista sindical, líder en la rebelión popular argentina conocida como el Cordobazo, que tuvo lugar en mayo de 1969.

dades. El caso de la Revolución Bolivariana en Venezuela, desde 1999; el Proceso de Cambio en Bolivia, a partir de 2005; o aun la Revolución Ciudadana en Ecuador, desde 2007, se presentaron como programas de irrupción del pueblo trabajador que posibilitaron modificaciones reales en los regímenes políticos constitucionales. Esas transformaciones aparecieron como alternativas al programa neoliberal, pero, como procesos abiertos –de intensidades y ritmos diferentes–, enfrentaron y enfrentan las presiones desarrollistas del capitalismo globalizado. Reformas que apuntan a construir un Estado plurinacional en Bolivia, que incluyen a la Naturaleza como sujeto de derecho en Ecuador o los primeros pasos en la construcción del Estado Comunal en Venezuela son avances notables en el camino del cambio social en la región.

En otros procesos, las fuerzas políticas en el Estado enfrentaron el programa neoliberal con políticas de alivio social, pero no tuvieron ninguna disposición de encontrar vías para proyectar las demandas más radicales de sus pueblos. Los de Argentina y Brasil son –entre otros– ejemplos de procesos de esta naturaleza. En Argentina, el movimiento social más disruptivo (el liderado por los movimientos piqueteros a comienzos de los 2000) pudo ser neutralizado por la potencia política de la estructura del Partido Justicialista (PJ) como expresión actual del peronismo (en su nueva forma, como kirchnerismo). En Brasil, por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT) concluyó con su integración sistémica (iniciada años antes), ganando las elecciones en 2003, pero sin la disposición de impulsar transformaciones sociales más profundas. En otros territorios, movimientos populares fragmentados y debilitados fueron incapaces de siquiera impulsar cambios en las fuerzas políticas gobernantes, aun si en algunos casos pudieron propiciar algunas reformas parciales de corte redistributivo. El caso de Chile o el de Colombia han sido ilustrativos al respecto. En Centroamérica y el Caribe, por su parte, se evidencia la indivisible relación que el proyecto neodesarrollista tiene con la barbarie de las intervenciones institucionales, militares y civiles, contra los pueblos afectados por flagelos sociales y ambientales. La violencia de la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití) en Haití³ y los crímenes de las bandas rivales en El Salvador o los del narcotráfico en México, ejercen un enorme control sobre las poblaciones en la pobreza. En muchos

3 En la MINUSTAH Brasil y Argentina lideran las fuerzas de intervención militar, con el primero buscando disputar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

casos, miles de personas huyen de la miseria social en sus países en la búsqueda de trabajos cada vez más precarios en los países vecinos. En mayor o menor medida, el conjunto de la región se vio atrapada en procesos de similares características.

Todos estos procesos políticos se vieron condicionados por la coyuntura del capitalismo internacionalizado, con su renovada impronta extractivista, y la tendencial transición hegemónica desde Occidente a Oriente (es decir, simplificando las cosas, de EE.UU. a China). El capitalismo a escala global atravesó el punto alto de un proceso de valorización especulativa exacerbada (expresión final de la crisis del ajuste neoliberal global) y el inicio de la crisis tardía neoliberal en el centro en el segundo quinquenio de la década de 2000. La primera fase creó un marco propicio para la avanzada regional de los rasgos más destructivos del neoextractivismo; también, promovió la reproducción ampliada de aquellos rasgos más regresivos de las facetas neodesarrollistas de las distintas estrategias de desarrollo. El alza en los precios internacionales de las materias primas favoreció, en nuestra región, la construcción de hegemonías políticas basadas en la redistribución marginal de los ingresos antes que transformaciones más profundas en las formas de producción y reproducción social. Las experiencias más radicales (con el caso de la República Bolivariana de Venezuela como punto más alto) fueron –como señalamos– la excepción más que la regla. La crisis en el centro, desde 2008, comenzó a desbaratar las condiciones generales expansivas y contribuyó a crear un marco general menos propicio para cambios siquiera leves, favoreciendo a la vez el avance de fuerzas reaccionarias.

Las dificultades de los movimientos sociales para imponer su agenda de cambio radical se tornaron más evidentes a partir de ese momento. Con marcados obstáculos para articular las demandas en un proyecto colectivo de masas, los movimientos populares fuimos contenidos e incorporados parcialmente en la estrategia dominante. Esa estrategia no pudo, en general, romper con la impronta histórica del desarrollismo en sus diversas versiones. Las “urgencias” de la construcción hegemónica y las contradicciones de la geopolítica y la política “de Estado” operaron para frenar o bloquear las sendas más ofensivas de los procesos sociopolíticos más avanzados en marcha. En casos como los de Bolivia, Ecuador o Venezuela, las dificultades fueron evidentemente grandes. En los dos primeros, la reforma constitucional fue el pináculo del cambio, que luego prácticamente se detuvo. En Venezuela, el *momentum* del cambio radical fue profundo hasta al menos la muerte de Hugo Chávez, en 2013, a partir de lo cual las

dificultades políticas se multiplicaron. Si bien es evidente que el giro conservador y rapaz del imperialismo actuó como un condicionante creciente (en especial, como es evidente en estos días en Venezuela), las complejidades de la construcción de poder popular y las dificultades estratégicas sumaron elementos.

Mucho más débil fue el cambio en aquellos países donde la ‘toma del poder’ por parte del pueblo nunca se planteó como proyecto. Mucho más fácil fue allí que las fracciones de las derechas tradicionales y los sectores capitalistas más concentrados pudieran presentarse como alternativas políticas en el nuevo contexto. En países como Argentina o Brasil, las fuerzas políticas que arribaron al gobierno a comienzos de los 2000 se propusieron de entrada la construcción de formas de “crecimiento con inclusión” o “capitalismo en serio”, sin intención de superar el régimen social de explotación. En general, esas fuerzas políticas (también en Uruguay con el Frente Amplio) llegaron al gobierno con el fin de recomponer las condiciones para la acumulación de capital en la periferia. Partieron de la hipótesis de que ello sería compatible, a mediano plazo, con formas de redistribución parcial de ingresos y construcción de ciudadanía, aunque no necesariamente con el fortalecimiento del poder popular.

La historia reciente del giro conservador en la región pone en cuestión las dificultades de los movimientos populares para irrumpir y subvertir las estructuras sociales del capital en sus diferentes formas. Esto parece ser evidente cuando las consecuencias políticas de las luchas populares no logran consolidar procesos que simultáneamente fortalezcan la construcción del poder popular y radicalicen la crítica social.

Este giro “a la derecha” ha sido encarado activamente por gobiernos llamados progresistas (como el de Brasil con Lula y Dilma, o en el Uruguay de ‘Pepe’ Mujica y Tabaré Vázquez), pero también por gobiernos de impronta más radical (como el de Evo en Bolivia). Por supuesto, este cambio se ha acelerado en aquellos países donde las derechas tradicionales o las nuevas derechas han logrado desplazar a esas fuerzas autoproclamadas progresistas; en Brasil, por la vía de un golpe de Estado; o en Argentina, por la vía de las elecciones. Si, como señalamos, la faceta redistributiva y popular/populista del neodesarrollo tuvo enormes limitaciones, el giro conservador en él (y más allá de él) expresa la propia naturaleza de las demandas sistémicas. ¿Es el ajuste tendencial, la “sintonía fina” como la denominó en 2011 la presidenta argentina Cristina Fernández, un tiempo necesario en el camino del neodesarrollo? La superación neodesarrollista hacia la derecha apareció a la vez como camino inevitable de una estrate-

gia reformista y, a la vez, como expresión de los límites para la estrategia de construcción de poder de las organizaciones populares. La caracterización del momento actual como mero “regreso del neoliberalismo” proyecta como alternativa la matriz política del “volveremos” de los movimientos políticos que sostuvieron el neodesarrollo como estrategia. Ese recurso aparece privilegiando las políticas del mal menor convertido en estrategia y, por ello, conduce –como explicaba Gramsci– a un callejón sin salida para las fuerzas populares.

Se abren múltiples interrogantes en la nueva etapa que se ha iniciado. ¿Los progresismos tienen una debilidad congénita para canalizar las ansias populares de cambio social radical? ¿Solo pueden operar como amortiguadores de las luchas populares, como cara amable de proyectos sociales injustos? Y, si eso fuera así, ¿qué papel tenemos los movimientos populares de la región para evitar que esos procesos se consoliden como medios para la reproducción ampliada de la explotación, el saqueo y la muerte? Las trampas del neodesarrollo nos han dejado con un sabor amargo, al parecer. En la batalla contra la avanzada neoliberal de las décadas anteriores, no hemos sabido superar los límites de un Estado social precario que promete el desarrollo (capitalista) como medio universal de inclusión.

Pero, ¿qué tipo de inclusión puede ofrecer un Estado construido sobre la base de las relaciones sociales capitalistas y patriarcales en nuestras sociedades, atravesadas por la colonialidad? Por otra parte, ¿cómo se vincula la inclusión en un marco capitalista con las demandas de cambio social por parte de los movimientos populares?

¿Es posible que debamos volver a pedir lo imposible? El cambio social radical, revolucionario, nos convoca a todas y todos a una batalla integral que suponga una lucha en, contra y, sobre todo, más allá de las formas sociales que hoy nos atraviesan: más allá del Estado, del capital, de la mercantilización de la vida.

¿Y cómo hacer? ¿Cuáles son las mediaciones necesarias para proyectar ese cambio social? La construcción de formas del poder popular, donde la participación activa, donde el protagonismo del pueblo sean ejes articuladores del cambio, aparece como elemental. ¿De qué manera podemos superar las formas organizativas que replican la jerarquía, verticalidad y opresión que impone el sistema? Esa es la búsqueda más importante, sin dudas. Lograr la construcción de procesos colectivos y diversos que nos permitan canalizar nuestras esperanzas, nuestros sueños y proyectos de transformación, se convierte en una de las prioridades.

Este libro presenta una serie de trabajos realizados por académicos y/o militantes populares de la región. Cada uno de ellos hace, a su manera, un intento de problematizar las contradicciones de estos procesos de cambio, el lugar de las organizaciones populares y las necesidades tácticas y estratégicas. Sin pretender ser respuestas contundentes o acabadas, intentan de conjunto aportar elementos para comprender la coyuntura actual y, sobre todo, proveer pistas para renovar las prácticas de cambio social radical que hoy, nuevamente, se presentan como indispensables.

Esta compilación ha sido un esfuerzo colectivo de muchos meses que no podríamos haber realizado sin el apoyo y acompañamiento de muchas y muchos. En particular, yo, Mariano, quisiera reconocer a Melina, quien siempre acompaña mis ideas y proyectos, aportando su mirada aguda y su colaboración intelectual y amorosa. Y yo, María Orlanda, agradezco la colaboración de Camilla Marcondes Massaro, Roberta Traspadini y Ana Raquel de Oliveira Alves en la organización y revisión de los textos en portugués. Finalmente, nos gustaría agradecer a las y los compañerxs de Herramienta, que pusieron tanto esfuerzo para que este libro llegara a buen puerto.

Dedicamos este libro a todxs lxs compas perseguidxs por el capital, por todxs lxs compas encarceladxs, torturadxs, asesinadxs, desaparecidxs por el Estado militarizado de Argentina, Brasil y toda América Latina. Santiago Maldonado, militante solidario con lxs Mapuche, hoy desaparecido por las fuerzas de represión del Estado argentino, José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espírito Santo da Silva, líderes anti-extractivistas y ambientalistas (Pará, 2011), Amarildo Dias de Souza, albañil, negro y pobre (Río de Janeiro, 2013); Ricardo Nascimento, cartonero, negro y pobre (San Pablo, 2017); Clodiodi de Souza, trabajadora de la salud, indígena guarani-kaiowaá (Mato Grosso do Sul, 2016), y todxs lxs compañerxs caídos en las luchas, presentes. A Facundo Jones Huala, líder Mapuce, injustamente preso.

Mariano Féliz y María Orlanda Pinassi
Agosto de 2017

Breve genealogía del capitalismo dependiente latinoamericano: la superexplotación como combustible del neodesarrollismo*

Roberta Traspadini

Introducción

Este texto introductorio tiene dos objetivos centrales: 1) explicitar, de forma sucinta, las raíces del neodesarrollismo en América Latina, a la luz del debate de la teoría marxista de la dependencia; 2) evidenciar la superexplotación de la fuerza de trabajo como mecanismo de apropiación y transferencia de valor en la conexión entre el capitalismo dependiente y el imperialismo.

La tesis de este trabajo es que el neodesarrollismo¹ debe ser explicado como proceso inherente al desarrollo capitalista dependiente, resultante, a partir de la década de 1960, de dos condicionantes: 1) de la re-

1 En la década de 1960, Ruy Mauro Marini utilizaba el término neodesarrollismo para explicitar las modificaciones que se derivan tanto en la política económica de Estados Unidos sobre América Latina, como en los argumentos de los defensores de la internacionalización de las economías latinoamericanas; por ejemplo los textos y abordajes de Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto y José Serra. Para un análisis sobre este tema ver la densa y profunda crítica hecha por Marini a Cardoso y Serra en: Marini, 1978.

* “Breve genealogía do capitalismo dependente latino-americano: a superexploração como combustível do neodesenvolvimentismo”. Trad. de María Belén Castano.

configuración del posicionamiento imperialista de Estados Unidos frente a la disputa con Japón y Alemania y del blindaje del continente contra su principal enemigo: la URSS; 2) de los resultados de las políticas desarrollistas de las décadas de 1930-1940 que generaron las discusiones sobre la dependencia.

Las raíces del neodesarrollismo se asientan en la estructura del capitalismo dependiente. Este, a su vez, tiene en la superexplotación de la fuerza de trabajo como la forma-contenido particular de la relación de sometimiento de América Latina en la economía mundial protagonizada por el capital financiero monopolístico (Marini, 2011). La superexplotación presenta distintos tonos y a medida que el imperialismo avanza, produce crisis, y se recompone de manera progresivamente más violenta sobre los mecanismos anteriormente creados para respaldarlo.

En este sentido, así como el neodesarrollismo encarna nuevas fases de una política de desarrollo que se modifica en la forma para reforzar el mismo contenido de producción de valor, la superexplotación que lo fundamenta expone la forma-contenido de la extracción de valor en el continente, bajo el dominio del imperialismo en fases distintas: a) en la década de 1940 la superexplotación funcionó como mecanismo de compensación interna de los capitales nacionales, dada su fragilidad externa para concurrir con los capitales monopolísticos; b) en las décadas de 1950/60 la superexplotación funcionó como mecanismo de intensificación de transferencia de valor ligado a la participación directa del capital extranjero en América Latina; c) en la década de 1970 en adelante, cuando la faceta financiera expone las nuevas formas de producción y de apropiación del valor por los capitales monopolistas, la superexplotación sufre nuevos mecanismos de acentuación de la violencia a costa de políticas neoliberales que debilitan aún más el sentido del trabajo en el continente.

Actualmente la superexplotación funciona como una doble condición: 1) permitir que el capital transnacional ocupe los territorios nacionales y los Estados y conforme una producción destructora de derechos sociales mínimos conquistados por las luchas sociales pero que nunca demarcaron la presencia de un Estado de bien estar social en Latinoamérica; 2) manutención en niveles aún más intensos de la remesa neta de ganancia y otros mecanismos de producción-apropiación, parte expresiva de la riqueza producida en el continente hacia el exterior.

Basándose en esa caracterización el neodesarrollismo –entendido como transitividad– dimensiona la particular y estructural dimensión de la superexplotación en el continente y expone las diferentes fases de la

participación condicionada y funcional de América Latina en el escenario de las disputas imperialistas.

La pregunta central de este trabajo es la siguiente: si el neodesarrollismo nos conduce a diferentes fases del desarrollo capitalista dependiente de América Latina y el período neoliberal se deriva de los impactos de la crisis del petróleo en la década de 1960, ¿qué permitiría a gobiernos latinoamericanos autodenominados “progresistas” defender la tesis del neodesarrollismo como contrapunto al neoliberalismo?

1. De lo nacional al neodesarrollismo: ¿el progreso de quién a costa de cuántos?

América Latina vivenció, en la primera década del siglo XXI, disputas políticas que encarnaron una diversidad de situaciones nacionales de resistencia y crítica a la ofensiva neoliberal. Cada uno de estos procesos demarcó historias particulares de refundación de políticas reformistas frente a la avalancha de situaciones de destrucción de proyectos nacionales resultantes de la legitimación del poder imperialista en el territorio latino en las últimas décadas del siglo XX.

A pesar de ser de diferentes tonos y sentidos, parte expresiva de estos procesos particulares del ambiente político latinoamericano expone, expresivamente, el tenor de las reformas, el retroceso de los debates sobre la revolución y explicitan el freno o continuidad de los mandos del capital imperialista en el continente. Como ejemplo tuvimos las victorias electorales de Hugo Chávez en Venezuela (1999), de Luis Ignacio Lula da Silva (2003) y Dilma Rousseff (2011) en Brasil, de Evo Morales en Bolivia (2005), de Tabaré Vázquez (2005) y José Mujica (2010) en Uruguay, de Rafael Correa en Ecuador (2006), de Cristina Kirchner en Argentina (2007) y de Fernando Lugo en Paraguay (2008), sumados a varias otras disputas electorales en América Latina, como por ejemplo los pleitos de Andrés Manuel López Obrador en México (2006).

Estos procesos demarcaron cómo, dentro de cada uno de estos países, las ejecuciones de las políticas de desarrollismo “nacional” o “internacionalizado” llevadas a cabo a partir de la década de 1930, culminaron en la continuidad y aceleración de las desigualdades inherentes al proceso de expansión y dominio del capital financiero monopólico. El resultado histórico de los procesos de desarrollo fue la acentuación de los problemas sociales y económicos anclados en la estructural desigualdad que fundamenta el capital (propiedad y uso de la tierra; de los

medios de producción, de la riqueza, del poder y de la totalidad de la acumulación capitalista).

En cierto sentido, el siglo XXI representa el ápice de la diferencia entre los discursos y las prácticas acerca de la ideología del desarrollo calcados en el progreso tecnológico como sinónimo de mejora de vida para la clase trabajadora del campo y de la ciudad. En todo el movimiento de realización de la política desarrollista –nada original puesto que se fundó en la reproducción del modelo supuestamente exitoso de las economías centrales– a partir de la década de 1930², la idea de “progreso” perpetuó las desigualdades en el interior de las naciones, tanto entre las regiones como entre los trabajadores de estas. Estas desigualdades están ancladas en la funcional y equivocada distinción entre el campo (vendida la idea de atraso) y la ciudad (proyectada como espejo de la modernidad) y son parte de la lógica capitalista de concentración de la riqueza y masificación de la pobreza.

Los fundamentos de la economía política del desarrollo capitalista latinoamericano se estructuran como instrucción político pedagógica acerca de la falsificación discursiva de las ideologías del desarrollo, pregonada por los mentores de la lógica del capital. Esto se hace explícito en el siglo XXI, momento de ápice de la crisis de la fase neoliberal del neodesarrollismo. Sin embargo, en la década de 1940, en el ámbito de una América Latina y Caribe expresamente rurales y centrados en las más indignas formas de violencia vinculadas a la propiedad privada de la tierra y la superexplotación de la fuerza de trabajo con centralidad para el trabajo del campesino, tal afirmación no era tan evidente. En ese sentido, parte de los ideólogos de desarrollo latinoamericanos creía, de hecho, en la posibilidad de una “autonomía relativa” y de un protagonismo “nacional” en la ejecución de las políticas de desarrollo en plena post Segunda Guerra Mundial y con el mundo dividido en dos horizontes (capitalismo versus socialismo).

2 El advenimiento de la crisis de 1929 expone la recomposición del capital monopólico y las nuevas estrategias del imperialismo estadounidense de figurar como potencia en el ámbito mundial. Los cambios hacia adentro y hacia afuera condujeron a una estrategia de repensar el engranaje capitalista a partir de lo que podrían establecer como patrón en el mercado internacional. Estudiar el nacional- desarrollismo sin entender la estrecha relación entre él y las transformaciones provenientes de un escenario internacional reorganizado, no solo limita el análisis sino que además transforma a este en un proceso idílico acerca de las posibilidades de mejoras concretas.

Entre los intelectuales con intervención política en sus países que defendían la “modernización” estaban el argentino Raúl Prebisch, el brasileño Celso Furtado, la luso-brasileña Maria da Conceição Tavares, el chileno Aníbal Pinto, entre otras grandes referencias latinoamericanas (Marini y Millan, 1997). Estos sujetos políticos partían de la premisa del desarrollo como sinónimo de “mejora de las condiciones de vida del pueblo”³. Sin embargo, la historia del desarrollo desigual y combinado fue la referencia didáctico-pedagógica que se responsabilizó por despojar de sentido dichas tesis originadas en el pensamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dada la acentuación de las desigualdades hacia dentro de estas economías y hacia afuera en la participación complementaria en el capital monopólico dentro de la división internacional del trabajo.

Parte de la intelectualidad involucrada en la política desarrollista de la década de 1940 creía, de hecho, en la modernización como sinónimo de progreso, situación que dispararía procesos internos capaces de dinamizar las economías y pautar los cambios hacia nuevas fases menos desiguales del desarrollo. El despliegue de la lucha de clases en la historia contemporánea sirvió como instrucción político pedagógica acerca de los equívocos y límites de sus proposiciones, puesto que no tomaron con el debido rigor el impacto de proyectar el “desarrollo modernizante” en plena era de protagonismo del capital financiero monopólico bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Celso Furtado es un ejemplo emblemático de esta caracterización de aprendizaje, revisión y autocrítica histórica. Sus textos de la fase madura son ilustrativos acerca de esa autocrítica tan ausente en tiempos actuales (Furtado, 1983; 1985).

Sin embargo, a pesar de la buena fe, ¿por qué intelectuales orgánicos preocupados por el cambio se enredaron en esa confusión política y teórica de entender el desarrollo “nacional” como plataforma de la transformación?

Tres elementos estructurales nos ayudan en la comprensión de las transformaciones ocurridas en el capitalismo mundial y periférico después de la Segunda Guerra Mundial y nos dan algunas pistas para entender el pensamiento cepalino de la década de 1940:

3 Vale la pena la recuperación de los textos clásicos de este período. El keynesianismo expresado en los documentos de la CEPAL si bien se caracterizaba por un protagonismo estatal en la conformación de la industria, tal dimensión estaba lejos de romper la lógica desigual inherente al metabolismo del capital. Ver: Bielschowsky (2000).

- 1) la ausencia de las teorías del imperialismo y de la crítica de la economía política en la comprensión de estos autores sobre el desarrollo capitalista y el funcionamiento metabólico de su organismo y tentáculos;
- 2) la desconexión en sus argumentos entre la comprensión del papel histórico-social de las formaciones económicas y sociales de América Latina en el período colonial y en adelante, y sus funcionalidades en la constitución y desdoblamientos del capitalismo;
- 3) la conformación de un equipo técnico latinoamericano, bajo la égida del imperialismo estadounidense, que pensaría el problema bajo los marcos de la defensa nacional, de la idea de progreso, de la unidad y de la paz. Las políticas generadas en el Norte para el control del Sur –Tratado Interamericano de Asistencia recíproca (TIAR), 1947, Organización de los Estados Americanos (OEA) y CEPAL, 1948– sirvieron como mecanismos de protección y expansión de la hegemonía de Estados Unidos sobre América Latina, teniendo como discurso prioritario la idea de “igualdad y soberanía”. Como si la ONU representase una esfera de producción internacionalista asentada sobre otras bases que la del capital financiero y de las disputas imperialistas en evidencia.
- 4) tal blindaje, además de servir como protección comercial, tenía el sentido político de bloquear el comunismo en el continente. El peligro soviético era así tratado como enemigo principal. El discurso de la paz y de la soberanía se aliaban así al discurso de la protección y de bloqueo al peligro eminente de los principales rivales de Estados Unidos.

En este sentido, la CEPAL, como referencia de las tesis desarrollistas vinculadas al idealismo del progreso, nace aparentemente desvinculada del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BIRF) –creados en 1944–, pero tanto estos como aquella fueron estructurados bajo una misma plataforma: la hegemonía del imperialismo de los capitales monopólicos de los Estados Unidos.

El estructuralismo cepalino y el monetarismo financiero del FMI y del BIRD se presentaban como diseños distintos en la década de 1940 sobre las políticas de desarrollo. Pero, a medida que el capitalismo dependiente avanza en su relación umbilical con el imperialismo estadounidense, estas dos visiones se aproximan con vistas a realizar consideraciones acerca de las políticas de ajustes necesarias para reordenar la ruta del desarrollo posible. Situación evidente en los argumentos de la nueva CEPAL –décadas de 1990– conducida por Fernando Fajnzylber (Bielchowski, 2000) y relatada en los informes del FMI y del BIRD de este mismo período.

El FMI y el BIRD nunca estuvieron ausentes en el proceso de desarrollo estructuralista latinoamericano, ya sea en las fases iniciales “nacionalistas” del emprendimiento, ya sea en las subsiguientes fases del neodesarrollismo. Estos organismos, afianzadores de la hegemonía del dólar en el comercio internacional, fueron los financiadores del capitalismo dependiente latinoamericano en todas sus fases. Esto explicita una matriz de desarrollo cuya idea de lo nacional, entendida como el Estado protagonista del proceso de “edificación” de la matriz urbano-industrial, tenía como base tanto los préstamos financieros, como las maquinarias a ser compradas con estos préstamos, cuyas políticas eran definidas en el Norte y ejecutadas en el Sur.

Para los cepalinos lo nacional significaba protagonismo público estatal en la estructura de la producción de las políticas de desarrollo urbano-industrial. Para el capital financiero estadounidense, tal política era entendida como estrategia de avance de su actuación imperialista basada en la hegemonía del dólar, en el poder militar de sus fuerzas armadas y en la revolución técnico-científica que reposicionaría estos capitales en nueva ofensiva de competencia monopólica mundial.

Estos condicionamientos provenientes de los capitales monopólicos de los Estados Unidos les permitía exportar tecnología obsoleta a nuestras economías al mismo tiempo que definían las ideologías del desarrollo que las modelaría. Los capitales monopólicos financieros de Estados Unidos, sumados al poder político del Estado de esta potencia imperialista, demarcaban los límites concretos de las proyectadas ideas de “nación”, “autonomía”, “soberanía”, presentes en los argumentos de los autores latinoamericanos defensores del desarrollo en marcos capitalistas.

Tales políticas de desarrollo –Norte-Sur y Sur-Sur– ocurrieron en un contexto mundial agudizado por las posiciones en disputa entre dos grandes potencias con matrices de desarrollo diferentes: el capitalismo estadounidense versus el socialismo ruso. La Guerra Fría como escenario del conflicto hegemónico-contra-hegemónico entrelazó una situación política concreta muy particular en América Latina: la construcción narrativa, a partir de la década 1940, del enemigo principal del capitalismo –en progreso: el comunismo ruso y todos los colores que de él derivaron por el mundo–. En el caso de América Latina, tal tonalidad provenía, sin duda, de las luchas sociales protagonizadas en el campo que, antes incluso del advenimiento de la revolución rusa, había eclosionado en la forma-contenido de la revolución mexicana. Ayer y hoy, hablar del atraso impacta directamente en seguir la ideología de desa-

rollismo de Estados Unidos y pintar en violentos tonos de preconceptos a los trabajadores del campo que denuncian los crímenes y anuncian históricamente las luchas contra la ofensiva del capital. El peligro comunista sigue vivo en América Latina y aún tiene aires de campo en la lucha anticapitalista.

Este hecho refuerza cómo la idea del progreso se vinculaba al avance del capitalismo al mismo tiempo que proyectaba la idea de atraso del campo y del comunismo. Hecho curioso este: en la perspectiva del desarrollo como “progreso”, el campo latinoamericano, tuvo las mismas proyecciones ideológicas de atraso vinculadas a la perspectiva política anticomunista y ambos fueron entendidos como peligros a ser contenidos. Las luchas contra el comunismo y contra el campesinado fueron presentadas por Estados Unidos en la década de 1960 como políticas preventivas en defensa del “progreso”, basadas en la “limpieza” social de los enemigos principales –léase criminalizaciones, persecuciones, torturas y muertes de los principales exponentes de lo que era visto como freno al “progreso”–⁴.

Estos breves apuntes históricos traen a la superficie los sentidos profundos de una idea de desarrollo proyectada con amplitud como “progreso”, “modernidad”, cuando en realidad se encontraba sitiada por la era del capital financiero monopólico, situación que condicionaba el desarrollo capitalista en el continente y lo convertía en territorio directo de producción y realización del capital financiero monopólico de Estados Unidos y de las acciones políticas de sus representantes públicos. En este contexto, pensar en el desarrollo de las fuerzas productivas en la década de 1940 pasaba necesariamente por la hegemonía de Estados Unidos, lo que consolidaba de forma estructurante al capitalismo dependiente latinoamericano como proceso inherente a los marcos estructurales del sistema metabólico del capital en general.

2. ¿Neo o viejo desarrollismo con otros ropajes?

Sobre la base de las teorías del imperialismo y las leyes generales del movimiento del capital Ruy Mauro Marini definió en la década de 1960, la dependencia como marco formal de “independencia políti-

4 Este punto será asunto de otro texto semejante a su centralidad en el debate de reforma-revolución pasado-presente. Las luchas originadas en el campo en América Latina a partir del período colonial desencadenan la historia de las revoluciones en el continente, tema aún poco explorado por el pensamiento marxista latinoamericano.

ca” y proceso real de condicionamiento económico táctico/estratégico de los monopolios en su dinámica de valorización del capital. En ese período la categoría de neodesarrollismo se presentaba, en los análisis marxistas, como la explicitación de la transición de participación indirecta a la acción directa del capital financiero monopólico en las economías latinoamericanas.

El neo, entendido como transición, demarcaba que el nacional-desarrollismo de las décadas de 1930-1940 daba paso al nuevo desarrollismo de las décadas de 1950-1960, sustentado por la bonanza del nuevo ascenso de las tasas de ganancia del capital financiero en el ámbito mundial y la recomposición de la tríada (Estados Unidos, Japón, Alemania) en la competencia imperialista por la hegemonía.

La “nueva” política de desarrollo de la década de 1960 se anclaba en las estructuras de la participación del capital monopólico en la forma de inversión directa externa en las economías latinoamericanas. Un hecho no menos importante tiene que ver con la política internacional de Estados Unidos en las décadas de 1940/1950 y su prioridad en la financiamiento de la reconstrucción de Japón y Alemania tras la Segunda Guerra (Plan Marshall). Este punto se presenta como un cuestionamiento sobre la interpretación del nacional-desarrollismo como sinónimo de “proteccionismo” en América Latina de las décadas de 1930/1940.

La pregunta que se plantea es: ¿el proteccionismo fue una política deliberada o una mera situación pasajera frente al escenario internacional posterior a la Segunda Guerra? A modo de ejemplo, el caso del aumento de la inversión directa externa en Brasil a partir de 1955 expone elementos para posibles respuestas a la pregunta.

La política comercial trazada para la continuidad del desarrollo (infraestructura) urbano-industrial brasileño fue la Instrucción 113 de la Superintendencia de la Moneda y del Crédito (SUMOC). Esta instrucción explicitó lo que ya funcionaba anteriormente: el protagonismo del capital monopólico financiero de Estados Unidos en los procesos industriales de América Latina. En el gobierno de Juscelino Kubitschek dicha política fue potencializada con el fin de promover el Plan de Metas y ejecutar, en cinco áreas, treinta acciones prioritarias conducidas con la participación directa del capital financiero internacional (Marini, 2011).

El informe de la SUMOC evidencia que de 1955 a 1963 se invirtieron 486 millones de dólares en la industria de transformación por el capital extranjero sin restricción cambiaria. De este monto, el 43,5% vino del capital financiero estadounidense, el 18,7% de los capitales alemanes y el 7,2%

del capital suizo. Del total de las ganancias realizadas por los capitales monopólicos de los Estados Unidos, la parte relativa a la remesa líquida de ganancia pasó del 5,2% en 1950 al 7,6% en 1960 (Caputo, 2010, no está en bibliografía).

La década de 1960 desencadenó una nueva fase del imperialismo de abundante crecimiento fruto del desarrollo técnico científico y de la internacionalización de los monopolios a través de la exportación de capitales, lo que recondujo la ideología del desarrollo hacia la interpretación de los límites e insuficiencias de lo “nacional” en la conducción del proceso. La internacionalización de las economías latinoamericanas se presentaba como una forma “natural” de entender la fase actual del imperialismo.

Las interpretaciones de Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1981) son ejemplos de esta comprensión en nombre del protagonismo del capital en las economías nacionales. La categoría “interdependencia” era entendida por estos autores como una conexión incuestionable entre los diversos territorios de actuación del capital (Traspadini, 2014). Esta interpretación de la nueva fase imperialista como posibilidades de cambios internos, dados los nuevos mecanismos externos, de afirmación de la supremacía del capital financiero y posibilidades abiertas por el mismo en la conducción del desarrollo de las naciones, daba alas al neodesarrollismo.

En un texto-respuesta riguroso a los comentarios maliciosos y peyorativos de Cardoso y Serra, expuestos en “Las desventuras de la dialéctica de la dependencia” (1978), Marini destaca que las razones del neodesarrollismo se vinculan con dos puntos de conexión: a) el reformismo mantenedor del orden del capital que oculta y elimina la posibilidad de la revolución; b) la descalificación de los intelectuales y militantes que defienden a la luz del pensamiento de Marx y Lenin otra comprensión de las contradicciones con vistas a la superación sistémica. Estas dos características demarcan que la batalla de las ideas es siempre de tenor político y su fundamento es la continuidad, o no, del orden sistémico.

En líneas generales, la instrucción 113 de la SUMOC potenció el giro, tanto en el discurso como en la acción política del modelo de desarrollo antes protagonizado por el Estado y, a partir de la década de 1950, fomentado por el capital extranjero en asociación directa con los capitales públicos y privados nacionales (Marini, 2011).

El neodesarrollismo debe entenderse entonces como el marco político de afirmación del poder de Estados Unidos sobre el territorio –la tierra y

el trabajo– latinoamericano, fundamentando la acción directa económica, política y militar de esa potencia-sede de los capitales monopólicos hegemónicos en el continente.

La raíz del neodesarrollismo es el imperialismo en sus bases consolidadas, movimiento que, en América Latina retrata la dependencia y, si a principios del siglo XX había espacio para la idea de lo nacional anclada bajo la dependencia de la exportación de capitales de las economías más avanzadas, después de la afirmación de su estructura, década de 1950 en adelante, lo nacional fue sustituido por lo internacional y lo público fue gradualmente dando lugar a la hegemonía del capital financiero monopolista.

El neodesarrollismo en sus aspectos políticos, económicos y culturales debe ser entendido como proceso inherente al desarrollo capitalista dependiente latinoamericano y su faceta indisociable de la dinámica general del imperialismo. Dicho marco expone dos grandes fases: 1) fase expansiva del neodesarrollismo: de aumento de la tasa en el ámbito internacional de los años 1955 a 1968 y 2) fase neoliberal del neodesarrollismo: de crisis y tendencia a la caída de la tasa de ganancia en los años 1968 en adelante.

Sin embargo, si en el debate de la dependencia el neodesarrollismo explicitaba las varias fases del capitalismo dependiente, ¿por qué en el siglo XXI ese discurso aparece como contrapunto al neoliberalismo? ¿Es posible, de hecho, pensar en retroceso en las estrategias y tácticas montadas por el capital para recomponer su pérdida tendencial resultante de las contradicciones inherentes a su metabolismo?

A partir del discurso neodesarrollista en Brasil, Argentina y en varios otros países de América Latina, los sujetos políticos en los gobiernos crearon una atmósfera de cambio en medio de una estructura de continuidad. Esta perversidad discursiva se presentaba como alternativa cuando en los marcos de fundamento del capital no lo frenaban en el continente, mucho menos cuestionaban sus acciones político-jurídicas de transformación de los derechos sociales en mercancías (De Paula, 2005).

El neodesarrollismo como discurso oculta la continuidad de la plataforma neoliberal en el continente y amortigua, así, las luchas que vienen ocurriendo como contestación directa al orden del capital en los territorios a partir de la década de 1990. La idea de reformas presentada por los ideólogos del neodesarrollismo sirvió para acallar el sentido histórico de revolución, única matriz posible, en el pasado y en el presente, de ruptura con las desigualdades estructurales definidas por el proceso de producción y valorización del capital.

La facilidad de la propagación discursiva del neodesarrollismo como alternativa se debe a algunos elementos clave: al impacto del Consenso de Washington y de la destrucción del Muro de Berlín en 1989; a la formación de una generación poco vinculada al con el pensamiento marxista-leninista y muy centrada en el estudio de los localismos, vía sistema-mundo; la aceleración técnico-científica informacional y la potenciación de la sociedad de consumo dando primacía a las mercancías en detrimento de las demás esferas de la vida cotidiana; la centralidad dada por los Estados Unidos a la “paz” y al combate del terrorismo en los diferentes matices con que él es presentado; la intensificación de la superexplotación de la fuerza de trabajo en América Latina y de la financierización de la reproducción social de la vida (deuda); la consolidación de una matriz política centrada en la idea de la “ineficiencia” de lo público y la eficiencia de lo privado.

La combinación entre estos elementos refuerza la ideología dominante y la continuidad de los argumentos de los teóricos neoliberales de la dependencia, cuya lectura del neodesarrollismo se relaciona con la necesidad de conexión entre capitales fuertes o conducción directa de estos en cualquier territorio. La victoria del pensamiento teórico de Fernando Henrique Cardoso y la ejecución de su gestión como Presidente abrió el paso para que parte de la intelectualidad de izquierda sustituyera la histórica producción revolucionaria mundial y latinoamericana por la centralidad del reformismo como si este pudiera significar ruptura. En ese sentido, el neodesarrollismo pregonado por los ideólogos latinoamericanos en el siglo XXI intenta distanciarse del neoliberalismo, pero se asienta en la misma estructura metabólica del capital. Esta estructura está basada en la centralidad del capital financiero monopólico internacional y no fue cuestionada en ninguna de sus fracciones productivas (agronegocio, bancos, sector productivo, servicios).

Apuntes para el debate contemporáneo

La primera pregunta que debemos hacernos en el debate del neodesarrollismo se refiere a la actualidad de la superexplotación de la fuerza de trabajo como mecanismo histórico-contemporáneo del capitalismo dependiente (Carcanholo, 2008). En la década de 1960 la superexplotación fue la categoría que fundamentó la caracterización de Marini de la dialéctica de la dependencia en América Latina. En los marcos del siglo XXI esta categoría expresa la trayectoria histórica del capitalismo dependiente.

En la demarcación urbano-industrial del desarrollo, la superexplotación de la fuerza de trabajo en América Latina demarca dos movimientos indisociables: 1) la relación desigual entre las diferentes composiciones orgánicas del capital entre campo y ciudad y entre regiones más y menos avanzadas tecnológicamente (Mandel, 1982); 2) la compensación en el interior de las economías dependientes del carácter periférico y secundario de los capitales nacionales frente a la era de los capitales monopólicos financieros de las economías tecnológicamente más desarrolladas (transferencia de valor) (Marini, 2011).

En el doble sentido de *cooperación antagónica* demarcada por la desigualdad estructural funcional y sistémica del capital, a cada una de las fases del desarrollo capitalista dependiente corresponde un matiz específico de la superexplotación como fundamento de la dependencia. De forma simplificada podríamos explicitar las siguientes especificidades:

De la década de 1930 a la década de 1950: la superexplotación definió en la centralidad de la tierra y del trabajo en el campo, la construcción urbano-industrial pautada en una forma-contenido de la producción de valor basada en la tendencia salarial por debajo del pago de las condiciones mínimas de supervivencia del trabajador. Mientras en este período la tasa media salarial en las economías centrales equivalía a la relación indisociable de los ciclos del capital, producción y realización, en América Latina la matriz seguía la de producir para exportar, ligada a salarios bajos en el perímetro urbano-industrial, y condiciones de trabajos violentamente degradantes en el campo desasistido por políticas laborales y sociales.

De las décadas 1950 a 1970: la superexplotación, aún demarcada por la centralidad del campo en la vida de los trabajadores, pautaba, en la transición de una sociedad urbana, al menos en el eje Sudeste-Sur del país, un proceso expresamente desigual entre los asalariados de las ciudades que,

en la precarización de la producción cotidiana de valor, constituían las periferias urbanas al mismo tiempo que contribuían a la consolidación de la imagen del país industrial. Esto asociado al crecimiento de un funcionariado público y de un sector medio vinculado a los servicios y comercios provenientes del boom industrial, fomentaba en el interior de la superexplotación, las composiciones funcionales orgánicas desiguales que en la media tiraban hacia abajo los salarios con miras a conformar tasas medias de ganancias internamente compensatorias para la burguesía (industrial y agraria) nacional y valorizadoras del capital extranjero que actuaba en el continente.

De la década de 1970 en adelante: la superexplotación, demarcada por la desigualdad regional y agrario-industrial, fue rediseñada en las diversas formas de precarización de las leyes laborales y sociales, expresamente delineadas por la era de las finanzas especulativas. La superexplotación expuesta por la particularidad histórica del neoliberalismo expuso la continuidad de la sangría sobre el trabajo (y sus derechos mínimos), dada la nueva característica del aumento de la informalidad, de la tercerización y la aceleración tanto del ritmo de trabajo, como de los múltiples trabajos realizados por el mismo trabajador a lo largo del día. En otras palabras, la característica de la superexplotación en la era de las deudas es que, sumados a los bajos salarios y a las altas y mediáticas propagaciones de una sociedad de consumo, la clase trabajadora debe cargar con todos los compromisos de asumir los derechos como deberes a ser pagados en forma de salarios aún más bajos.

Sin embargo, si en el nacional-desarrollismo la tónica de la superexplotación era la de crear las condiciones internas de una modernidad sitiada por el avance del imperialismo, en las fases subsiguientes del neodesarrollismo la superexplotación tuvo la función de compensar aún más dichas pérdidas nacionales –públicas y privadas– en forma de un endeudamiento personal y familiar “naturalizado”. El neoliberalismo, como la era del fin de los mínimos derechos sociales adquiridos con mucha lucha de clases en América Latina, fundamentó la superexplotación en su doble sentido –tasas medias de ganancias y transferencias de valor– como elemento político de disputas electorales trabadas a costa de un, debate sobre derechos mínimos dentro de la lógica del capitalismo (Féiz, 2011).

De esta disputa neoliberal reformista u ofensiva neoliberal, se desencadenó el proceso contemporáneo de recuperación por derecha de las pautas proyectadas en los pleitos electorales que culminaron en las victorias denominadas “progresistas” en el continente en el siglo XXI. Sin embargo, las políticas sociales deflagradas para la reforma dentro del orden,

al mismo tiempo que funcionaron como adjetivación de izquierda, frente al período de desmantelamiento nacional anterior, dieron vida a diversas formas de cooptación de los movimientos sociales que hasta entonces se encontraban en luchas directas contra el capital.

Movimientos sociales del campo, trabajadores obreros fabriles, trabajadores de la educación, movimientos sociales de las ciudades, tomaron las calles al final del siglo XX de América Latina explicitando las nuevas facetas de las históricas venas abiertas en el continente. Los reformismos tuvieron impactos directos sobre estas agendas y, en la apuesta que hicieron de los principales representantes de este movimiento, los combativos trabajadores de estas organizaciones entraron en una fase de esperas y negociaciones. Las políticas sociales asistenciales promovieron un freno en la lucha de clases en el continente. Al mismo tiempo que abrieron alas a la recuperación por parte de la derecha más espuria de retomar las viejas ideas de desarrollo “global” para el continente. Desde el Norte hasta el Sur de América los tiempos son duros. A la precarización del trabajo en general corresponde una situación aún más violenta y perversa para los trabajadores del campo –pueblos tradicionales, campesinos y *quilombolas*⁵ vinculados al aumento de la miseria y de la informalidad en la ciudad.

La fase actual de la superexplotación como mecanismo inherente al capitalismo dependiente demarca porque –en la esfera global de la internacionalización y de la financierización del capital monopólico– América Latina sigue funcional en la dinámica general del movimiento del capital. Los recursos naturales y energéticos estratégicos a la expansión del orden del capital exponen los límites de la idea de soberanía, autonomía, frente a la ampliación de los esquemas de reproducción del capital. Tal situación nos exige un análisis riguroso acerca de los límites políticos del neodesarrollismo en el pasado y en el presente.

El neodesarrollismo, como movimiento propio del capital en el continente condicionado a la dinámica del capital en general, narra la violencia estructural sobre los seres humanos, demás seres vivos y naturaleza. El modo de producción capitalista calcado en la propiedad privada de los territorios y de las vidas expone las insuficiencias de las prácticas reformistas ante la vigencia sin límites de las violencias estructurales (Pinassi, 2013). Esto a su vez, exige la recuperación explícita de teorías y prácticas revolucionarias en el continente. Al viejo-nuevo desarrollismo correspon-

5 El término designa a los esclavos refugiados en *quilombos*, es decir: en los refugios de esclavos africanos y afrodescendientes en todo el continente americano (nota de la trad.).

de la vieja-nueva lucha de clases en su carácter internacional. Los colores de la revolución en Nuestra América diversa y una fueron y son múltiples en contraposición a los tonos de gris que impregnan los corazones y mentes de los defensores del neodesarrollismo (Traspadini, 2016).

Asistimos actualmente en toda América Latina a la recuperación por parte del capital transnacional de sus operaciones directas sin mediadores nacionales que provoquen posibles desvíos a su ruta. El conservadurismo es históricamente extractivista, así como el extractivismo es conservador. Sus dueños extraen minerales, expropián territorios, superexplotan violentamente a los trabajadores, matan la vida. Ante la crisis civilizatoria que emana de la ofensiva del capital, la reanudación, en unidad, de proyectos revolucionarios se sitúa como movimiento histórico necesario y viable.

Bibliografía

- Bielschowsky, Ricardo (comp.), *Cinquenta Anos de pensamento da CEPAL*. Río de Janeiro: Record/CEPAL/Corecon, 2000.
- Carcanholo, Marcelo, “Dialética do desenvolvimento periférico. Dependência, superexploração da força de trabalho e política econômica”. En: *Revista de Economia Contemporânea* 12 (2008).
- Cardoso, Fernando Henrique / Faletto, Enzo, *Dependencia y desarrollo en la América Latina*. 6ª ed. Santiago del Chile: ILPES, 1981.
- Félix, Mariano, “Neoliberalismos, neodesarrollismos y proyectos contrahegemónicos em Suramérica”. En: *Revista Nueva Epoca* 7, 211. Disponible en: http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/neoliberalismos_neodesarrollismos_y_proyectos_contrahegemonicos_en_suramerica_.pdf (último acceso: 20/5/2016).
- Fiori, José Luis, “A miséria do “novo desenvolvimentismo”. En: *Jornal Valor Econômico* (30/11/2011).
- Furtado, Celso, *O mito do desenvolvimento*. Río de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
- , *A fantasia organizada*. Río de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
- Lenin, Vladimir Ilich, *O imperialismo fase superior do capitalismo*. San Pablo: Editora Expressão Popular, 2012.
- Mandel, Ernest, *Capitalismo Tardio*. San Pablo: Editora Abril Cultural. Colección “Os Economistas”, 1982.
- Marini, Ruy Mauro, “Las razones del neodesarrollismo Respuesta a F. H. Cardoso y J. Serra”. En: *Revista Mexicana de Sociología* XL (1978).

- , “Dialética da dependência”. En: Traspadini, Roberta / Stédile, João Pedro (eds.), *Ruy Mauro Marini vida e obra*. 2ª ed. San Pablo: Expressão Popular, 2011.
- / Millán, Mária, *La teoría social latinoamericana*. 3 vols. México: Ediciones El Caballito, 1994.
- Paula, João Antônio de (comp.), *Adeus ao desenvolvimento: a opção do governo Lula*. San Pablo: Editora Autêntica, 2005.
- Pinassi, Maria Orlanda, “Brasil. (Neo)desenvolvimentismo ou luta de classes?”. En: *Revista Herramienta Web* 13 (junio de 2013). Disponible en: <<http://www.herramienta.com.ar/revistaweb/herramienta-web-13>> (último acceso: 14/11/2013).
- Traspadini, Roberta, *A teoria da (inter)dependência de Fernando Henrique Cardoso*. San Pablo: Editora Outras Expressões, 2014.
- , *Imperialismo, dependência e questão agrária na América Latina: a trajetória do MST entre novas-velhas encruzilhadas*. Tesis de Doctorado presentada en la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, 2016.

La Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana. Reorganizando el saqueo del continente

Álvaro Álvarez

En Suramérica los años '70 marcaron el fin de un capitalismo desarrollado en base a la intervención estatal en la economía. El keynesianismo dejó de ser un paradigma eficaz para perpetuar las necesidades del capital y los profundos desequilibrios en las balanzas de los principales países impulsaron un modelo de producción más flexible y transnacionalizado, abandonando los intentos desarrollistas de las décadas precedentes.

Las dictaduras generalizadas en el subcontinente, desde fines de los '60 y comienzos de los '70, pusieron fin a la industrialización sustitutiva de importaciones y al desarrollo del mercado interno, para iniciar políticas de desregulación económica y apertura comercial y financiera, provocando una importante transformación en el modo de acumulación y consecuentemente en el mundo del trabajo, ferozmente golpeado por las medidas económicas y represivas. Estas políticas, de corte neoliberal, encontraron su apogeo en los años '80-'90 y eclosionaron a principios del siglo XXI en una de las crisis sociales y políticas más profundas de la historia latinoamericana (en Argentina los índices de pobreza alcanzaron el 50% y la desocupación el 25%).

La reincorporación de la economías de la región a la economía internacional, con posterioridad a dichas crisis, fue posible mediante el incremento de la oferta de recursos considerados estratégicos para los actuales patrones productivos. Proceso dinamizado por las grandes corporaciones transnacionales y traccionado por el aumento de la demanda internacional

de commodities en un contexto de transformación y reordenamiento de los equilibrios de poder en el sistema internacional.

El subcontinente inmerso en esas disputas de poder, experimentando fuertes retracciones en la captación de inversiones y una acuciante necesidad de divisas, inició una etapa marcada por el neo-desarrollismo donde la agroindustria y la minería serían las actividades más dinámicas. En este proceso de profunda reorganización territorial los Estados se abocan desde el año 2000 a modernizar la infraestructura latinoamericana en las áreas de energía, transporte y comunicaciones, condición *sine qua non* para la atracción de inversión extranjera.

Esta readecuación de la infraestructura se canaliza, en América Latina, en dos proyectos: el Plan Puebla Panamá (PPP) en Mesoamérica y la Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en los 12 países del sur del continente, proyecto que es motivo de análisis en este trabajo.

Nuevas dinámicas, viejas lógicas

En la última década y media se han desarrollado conflictos ambientales en toda América Latina como resultado de la vorágine del capital por subsumir lo común y avanzar hacia la completa mercantilización del territorio y sus recursos.

Desde su génesis la historia del capitalismo ha estado atravesada por la violencia y el despojo sobre la naturaleza, los seres humanos y sus formas de vida. Marx expresaba en el tomo I de *El capital* que “la producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica, socavando al mismo tiempo las dos fuentes originarias de toda riqueza: la tierra y el hombre”. Desde los inicios del siglo XXI en la nueva dinámica capitalista marcada por la constante innovación y la relación indisoluble entre ciencia, tecnología y producción, cobran particular preeminencia como objeto de mercantilización los saberes ancestrales de las comunidades originarias y campesinas, los bienes ambientales y la biodiversidad en general, reposicionando a la región como proveedora de recursos estratégicos para la realización global del capital.

Estos procesos son denominados como neo-extractivistas, dado que constituyen una de las renovadas formas de dependencia y dominación que posibilita la articulación de los recursos naturales de América Latina con los centros de producción global a través de un complejo entramado de corredores y redes de comunicación, transporte y energía. Esta nueva expresión del extractivismo no contempla solamente actividades típicamente

de extracción como la minería y el petróleo (principales rubros de exportación en el siglo pasado), sino también otras, como los agronegocios, los biocombustibles, la extracción de hidrocarburos no convencionales (shale oil y shale gas) y los denominados “minerales raros” (niobio, molibdeno, coltan, litio, etc)¹, que abonan una lógica extractivista a través de la consolidación de un modelo monoproducción, que destruye la biodiversidad, conlleva la concentración de tierras y la reconfiguración de vastos territorios, además de generar múltiples efectos negativos sobre la salud humana. (Svampa, 2011).

En su artículo “Extractivismo y neoextractivismo dos caras de la misma maldición”, Alberto Acosta (2011) define los actuales proyectos de la siguiente manera:

El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años. Con la conquista y la colonización de América, África y Asia empezó a estructurarse la economía mundial: el sistema capitalista. Esta modalidad de acumulación extractivista estuvo determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, es decir de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan Naturaleza, las segundas la importan.

Para intentar una definición comprensible utilizaremos el término de extractivismo cuando nos referimos a aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación. El extractivismo no se limita a los minerales o al petróleo. Hay también extractivismo agrario, forestal e inclusive pesquero (Acosta, 2005: 83).

Es pertinente destacar entonces que América Latina ha sido, es y será, una zona de vital importancia para la acumulación global del capital. Su importancia está dada por poseer bienes ambientales escasos, o al menos en disputa, que son considerados por la actual dinámica productivas como

1 Una veintena de minerales son considerados “raros”, elementos que se encuentran difícilmente en la corteza terrestre y cuya extracción es complicada y arriesgada (con altos costos). Algunos son indispensables en la fabricación de todo tipo de productos electrónicos y de alta tecnología razón por la cual son codiciados por las más importantes multinacionales del mundo.

estratégicos en la realización del capital. Delgado Ramos aporta precisión sobre algunos de los recursos de la región:

América Latina cuenta con minerales de gran uso e importancia en y para la economía mundial. Por ejemplo, el 46% de las reservas mundiales de bauxita (estimadas entre 55 y 75 mil millones de toneladas métricas) se localizan en Sudamérica (24%) y el Caribe (22%). Entre las más importantes de cobre están las chilenas con cerca de 360 millones de toneladas métricas o el 35-40% de las reservas base en el mundo. Otras son las peruanas con 120 millones y las mexicanas con unos 40 millones de toneladas métricas. En cuanto al zinc, el 35% de las reservas base mundiales 0 168 millones de toneladas métricas, corresponden al continente Americano. Y en lo que respecta al níquel, vale señalar que las mayores reservas base en el continente y del mundo están en Cuba con unos 23 millones de toneladas métricas. Le sigue Canadá con 15 millones de toneladas y, aún más lejos, Brasil con 8,3 millones y Colombia con 2,7 millones de toneladas métricas. Ante tal riqueza natural, denota una creciente transferencia hacia EUA, pero también hacia otros países ricos y hacia emergentes como China cuyas importaciones, tanto de petróleo como de minerales, han aumentado con creces (Delgado Ramos, 2012: 72)

Para completar esta caracterización de Delgado Ramos es oportuno agregar, entre muchos minerales estratégicos uno de particular relevancia para los actuales procesos tecnológicos, el litio. En el libro “Geopolítica del litio” coordinado por Bruno Fornillo (2015) se pone el acento sobre la importancia de este recurso y el peso de las reservas latinoamericanas. “En los salares Andinos de Argentina, Bolivia y Chile se encuentran el 80% de las reservas probadas de químicos que animan la movilidad de los dispositivos electrónicos en todo el mundo, el litio” (Fornillo, 2015:11). Este recurso es esencial para el desarrollo tecnológico y foco de disputa de las grandes empresas en el continente.

Pero es sobre todo el destino de la inversión extranjera directa (IED) quien confirma la tendencia de las grandes corporaciones transnacionales a enfocarse en actividades extractivas en la región. En la última década casi un cuarto de lo invertido por las economías centrales en América Latina tuvo como objetivo principal los bienes ambientales. La desaceleración de la economía internacional y la crisis recesiva en los principales países de la región, sumado a la caída de los precios de las materias primas, ha hecho declinar la tasa de inversión en los últimos años, lo cual demuestra la voracidad del capital y su volatilidad con una propensión a moverse rá-

pidamente de rubro a rubro de acuerdo a la tasa de ganancias lo que es un factor de desestabilización permanente de las economías periféricas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe 2015 demuestra que entre 2003 y 2013 la IED aumentó en la región desde 46.937 millones de dólares a un récord de 189.951 millones en términos nominales y advierte que la caída del año 2014 se explica por la desaceleración económica de la región y los menores precios de los productos básicos de exportación. A nivel mundial, la IED cayó 7% en 2014 respecto del año anterior.

La participación de América Latina y el Caribe en estos flujos mundiales alcanzó un 13 % en 2015. Según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, los países de la región no deberían orientarse a recuperar los montos de IED de la última década, sino a atraer una inversión que contribuya a la diversificación productiva y la sostenibilidad ambiental. Pero las políticas de infraestructura, que se abordan en este artículo, no parecen caminar en esa dirección.

Tanto Lenin como Rosa Luxemburg analizarían, ya a fines del siglo XIX y principios del XX, esta política de expansión de los grandes capitales sobre los recursos de los países periféricos como una genuina expresión del imperialismo que necesita hacer del mundo su mercado para garantizar la reproducción ampliada del capital. El geógrafo inglés David Harvey actualiza ese pensamiento denominando a la actual dinámica de desarrollo del capitalismo como de “acumulación por desposesión” (2005).

Los procesos de desposesión son “la otra cara” de la reproducción ampliada del capital, son inherentes a la lógica de acumulación que en tiempos de estabilidad y crecimiento se muestra como un proceso eminente y exclusivamente económico y en momentos de crisis asume una dinámica de despojo expresada en procesos extra-económicos de tipo predatorios y violentos dejando al descubierto un sesgo expansionista sobre nuevos territorios, relaciones sociales y mercados que permite la realización del capital. En este sentido Rosa Luxemburgo platea que:

[...] la acumulación capitalista tiene, como todo proceso histórico concreto, dos aspectos distintos. De un lado, tiene lugar en los sitios de producción de la plusvalía –en la fábrica, en la mina, en el fundo agrícola y en el mercado de mercancías. Considerada así, la acumulación es un proceso puramente económico, cuya fase más importante se realiza entre los capitalistas y los trabajadores asalariados, pero que en ambas partes, en la fábrica como en el mercado, se mueve exclusivamente dentro de los límites del cambio de mer-

cancias, del cambio de equivalencias. Paz, propiedad e igualdad reinan aquí como formas, y era menester la dialéctica afilada de un análisis científico para descubrir, cómo en la acumulación, el derecho de propiedad se convierte en apropiación de propiedad ajena, el cambio de mercancías en explotación, la igualdad en dominio de clases. El otro aspecto de la acumulación del capital se realiza entre el capital y las formas de producción no capitalistas. Este proceso se desarrolla en la escena mundial. Aquí reinan como métodos, la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados, la guerra. Aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión, la rapiña. (Luxemburg, 1968: 224).

En *La acumulación del capital*, obra que Rosa Luxemburgo escribió en 1913, se puede apreciar un estudio de esta dinámica dual del capitalismo (reproducción y despojo) que un siglo después aparece reactualizada en los actuales patrones de producción e intercambio. La reproducción ampliada se desarrolla en los centros industrializados, en un contexto de estabilidad, y el despojo en las periferias subdesarrolladas que se insertan en la economía mundial como proveedoras de recursos estratégicos. Este complejo reproducción ampliada/despojo (Composto y Navarro, 2014) subsume todas las formas de trabajo, de subjetividad, de la cultura y de la producción de conocimiento en función de la acumulación del capital.

Composto y Navarro (2014) observan que es notorio que la interpretación sobre la acumulación originaria que marcó los debates de la época de Luxemburgo y Lenin, no haya despertado demasiada atención hasta los años '70 con la emergencia de un nuevo modo de acumulación frente a la crisis del fordismo. Las autoras consideran que esto está relacionado con el aparente éxito del equilibrio entre capital y trabajo durante el Estado de Bienestar Keynesiano, así como con la hegemonía y la preponderancia de las formas "legales" de la acumulación del capital por encima de las formas "sanguinarias" propias del despojo.

Es David Harvey (2004) quien recupera las reflexiones de Luxemburgo con respecto al carácter dual del capitalismo. Utilizando la metáfora del "ajuste espacio -temporal" Harvey demuestra que la acumulación por despojo es omnipresente y que se acelera cuando existen crisis de sobreacumulación, planteando que hoy el motor de esa dinámica son las empresas transnacionales que hacen del mundo su mercado y un reservorio de recursos estratégicos y mano de obra (hiperprecarizada).

Este desplazamiento temporal y espacial de las inversiones requiere de determinadas pre- condiciones: reformas legales que garanticen me-

jores condiciones de lucro; inversión en fuentes de energía, para poner en marcha el motor de la extracción y la producción; e infraestructura en transporte y comunicaciones, que son corredores por donde circulan las mercancías y los recursos.

Infraestructura para la des – integración regional

La pretensión siempre presente de construir un Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) puesta de manifiesto por los Estados Unidos en repetidas ocasiones e implementada parcialmente a partir de acuerdos bilaterales o subregionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (acuerdo suscrito entre EEUU, Canadá y México) va acompañada de un complejo de proyectos y mega obras que buscan reactualizar la infraestructura continental.

Fue el entonces presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, quien en la Cumbre de Presidentes de Brasilia en el año 2000, propuso una Plan de Acción para una agenda consensuada de proyectos de infraestructura que fue designada con el nombre de Iniciativa de Integración en Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). La IIRSA fue puesta en marcha ese mismo año con una cartera de más de 300 proyectos de infraestructura en las áreas de energía, transporte y comunicaciones buscando interconectar el sub-continente en una serie de corredores que permitan una ágil y más barata movilidad de recursos.

La IIRSA es coordinada por un Comité Técnico integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Este comité no es solo el principal asesor y promotor de las obras sino también uno de los principales financiadores, a través de sus integrantes, de la iniciativa.

La IIRSA no estuvo exenta a los vaivenes políticos de la región. En el año 2005 los pueblos de América Latina le pusieron un freno al ALCA en la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata, pero la IIRSA como columna vertebral del regionalismo abierto y el libre comercio continuó su marcha en lo que se ha denominado un proceso de “integración silenciosa”. En el año 2009, como producto de intentos de coordinación política más autónomos, marcados por la presencia de gobiernos progresistas, la IIRSA se suma al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la UNASUR (Unión Suramericana de Naciones) iniciado una nueva etapa en la integración física que garantizó continuidad al proceso iniciado a principios de siglo XXI.

Cuatro variables de análisis son abordadas en este artículo: 1- los ejes de integración y desarrollo, 2- los aspectos más importantes en la integración física denominados procesos sectoriales, 3- el financiamiento de las obras de infraestructura, 4- el rol protagónico de Brasil:

1. Los ejes de integración y desarrollo

América Latina ha sido reconfigurada en los proyectos contemplados en la IIRSA en función de los flujos comerciales actuales y potenciales, es decir, a partir de una mirada geo-económica del continente y sobre todo atendiendo a su inserción en la economía internacional. El espacio suramericano fue organizado en torno a franjas multinacionales buscando construir el soporte de infraestructura adecuado a las necesidades productivas de cada región.

Estos ejes de integración buscan sobre todo edificar corredores interoceánicos que atraviesen el continente de Este a Oeste, y corredores verticales articuladores Norte - Sur. Es decir, redes de infraestructura y vías de comunicación acordes a los requerimientos del transporte multimodal sustentado en las necesidades del gran capital transnacional de mover los recursos con el menor impedimento posible. Esto es conocido como la “revolución de los contenedores”, proceso tecnológico que permite a una misma carga ser transportada por distintos medios hasta llegar a destino abaratando costos y reduciendo tiempos. Como plantea Andrés Barreda (2005):

A lo largo del siglo XX, vemos pues que el capital ha ido tejiendo redes de redes, y no solo esas redes informativas, de las que se nos habla, como la red de cables de fibra óptica de la empresa Global Crossing (redes físicas de fibra óptica) o las redes de satélites que rodean en tres capas el planeta. Es un tejido físico de redes, que no tienen nada que ver con toda la fantasía que se ha montado con la desmaterialización de la economía: la terciarización de toda una economía que se vuelve de servicios y que se desmaterializa, y luego se empiezan a montar una serie de fantasías hegelianas. El capitalismo se está haciendo todo menos inmaterial. Todo lo contrario: tenemos un capitalismo hipermaterializado que teje redes de redes de redes.

Y estas redes han llevado a dos hechos fundamentales: uno, como el mundo está integrando todas las redes como si fuera un organismo vivo (donde se entretejen la red nerviosa, la red hormonal, la circulatoria, etc.), las redes tienden a centralizarse, del mismo modo que el tejido sanguíneo tiene una

vena cava o una arteria central y el sistema nervioso tiene la médula espinal, igual estas redes tienden a organizarse en corredores: ejes centrales que coordinan las grandes regiones del mundo (Barreda, 2005: 8).

La iniciativa tiene en desarrollo 10 ejes de infraestructura con distintos niveles de avance: 1 – Eje Andino, 2- Eje Andino del Sur, 3- Eje de Capricornio, 4- Eje Hidrovía Paraguay-Paraná, 5- Eje del Amazonas, 6- Eje del Escudo Guayanés, 7- Eje del Sur, 8- Eje Inter-oceánico Central, 9- Eje del Mercosur-Chile, 10- Eje Perú-Brasil-Bolivia.

Estos ejes o corredores fueron diagramados atendiendo a criterios explícitos en los programas de la IIRSA. El primer criterio está vinculado a la cobertura geográfica de países y regiones, ocupando principalmente las zonas de interés económico, que son aquellas en las cuales se encuentran los principales bienes ambientales. El segundo criterio fue atender a los flujos existentes e incrementarlos a través del mejoramiento de las vías de circulación (carreteras, hidrovías, ferrocarriles) y de salida (aeropuertos, puertos). En tercer lugar, se pensó estratégicamente en los flujos potenciales, sobre todo ponderando el acceso a bienes inexplorados aun o que su explotación es mínima con respecto a sus posibilidades. El cuarto aspecto incorporado como criterio es el volumen de inversiones recientes, en ejecución y proyectadas en el corto plazo, en las áreas de influencia de los ejes. Lo que incrementará las obras de infraestructura en estas zonas y marginará otras que hasta el momento no hayan recibido inversiones dejando en claro un desarrollo desigual de las áreas geográficas continentales. En quinto lugar, y en estrecha relación con lo anterior, se ha observado en el diseño de los ejes el interés y grado de participación del sector privado. Lo que priorizará la integración de las zonas codiciadas por las grandes empresas y marginará la integración de zonas de interés nacional o de poco interés desde el punto de vista económico. Por último, el grado de sustentabilidad ambiental y social de los proyectos buscando atenuar las resistencias sociales en marcha y potenciales por la destrucción de ecosistemas y el desplazamiento de las comunidades locales por las mega obras de infraestructura. (Achkar y Domínguez, 2006).

2. Las áreas estratégicas y procesos sectoriales

Un mecanismo fundamental implementado por la IIRSA es la creación de ocho Procesos Sectoriales de Integración (PSI) con el objetivo de lograr un mejor abordaje conjunto a partir de la armonización de los mar-

cos institucionales y regulatorios y la promoción de infraestructura regional. Estos PSI son:

- Transporte de carga y logística:

La pretensión de desarrollar la multimodalidad como forma de circulación de las mercancías pone especial atención a la logística que es el proceso que permite a una misma carga cambiar de transporte con facilidad y reducir costos.

En los últimos años, en forma cada vez más creciente, se viene dando mayor importancia al análisis de la infraestructura y los servicios de transporte de manera integral, con una óptica multimodal, prestando atención a los puntos de transferencia intermodal, utilizando la logística como el componente articulador.

El desempeño de la logística tiene impactos directos sobre la competitividad de los países, integra mercados nacionales e internacionales y permite explotar ventajas comparativas locales y economías de escala sectoriales. En este sentido, el COSIPLAN se enfoca en fijar el tema logístico como eje estratégico para avanzar en una visión sistémica de la infraestructura y el transporte. (COSIPLAN-IIRSA, iirsa.org, acceso mayo de 2016).

La multimodalidad es un componente esencial del desarrollo extractivo. La logística articulará los puertos y los aeropuertos con las hidrovías, los ferrocarriles o las carreteras. De aquí se desprenden otros PSI.

- La integración aérea:

El Comité Técnico de la IIRSA parte del diagnóstico de que transporte aéreo de carga ha aumentado su volumen de manera constante en los últimos años y se espera que el dinamismo de la actividad del sector en la región continúe en los próximos años. Para lo cual se prevé, a octubre de 2015, veinticinco proyectos de la cartera de la IIRSA por una inversión estimada de cerca de 7.000 millones de dólares. (COSIPLAN-IIRSA, iirsa.org, acceso mayo de 2016).

- La Integración a través de Puertos e Hidrovías:

El transporte fluvial es una de las áreas más destacadas de la iniciativa, su peso se debe a que América Latina posee las vías navegables más importantes del planeta (como la hidrovía Paraguay - Paraná) y según los documentos oficiales de la IIRSA aún tienen mucho potencial abaratando costos y tiempos de transporte.

La importancia de la integración a través de puertos e hidrovías, se pone de manifiesto en la actualidad con la cartera de proyectos más grande de la iniciativa: 113 dentro del sector transporte, en los sub-sectores fluvial y marítimo, con una inversión estimada cercana a los 14.000 millones de dólares. (COSIPLAN-IIRSA, iirsa.org, acceso mayo de 2016).

- La integración ferroviaria:

La reactivación del transporte ferroviario, sobre todo en lo que respecta al transporte de cargas contenerizadas es fundamental en el propósito de la integración multimodal dado que el ferrocarril es un excelente medio para abaratar costos. El Grupo de Trabajo sobre Integración Ferroviaria fue creado por los Ministros en la Segunda Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN (Brasilia, noviembre de 2011). Su creación responde al compromiso de los países para fomentar la integralidad y la complementariedad de las políticas y proyectos del sector ferroviario con una cartera de 67 proyectos por una inversión estimada de más de 47.000 millones de dólares. (COSIPLAN-IIRSA, iirsa.org, acceso mayo de 2016).

- Las TICS, la facilitación de frontera, los envíos postales y los mecanismos de financiamiento:

Estos cuatro últimos PSI están vinculados a los mecanismos de armonización normativa, facilitación comercial y liberalización del comercio intra-regional. Buscan generar compatibilidad en las normativas y trámites así como una serie de mecanismos técnicos y tecnológicos comunes a los países de la región. Por ejemplo: estudiar y proponer alternativas para impulsar la interconexión de las diferentes estructuras y redes de fibra óptica en América del Sur y la conformación del Anillo Óptico Suramericano, apuntando al uso intensivo de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) con el fin de superar barreras geográficas y operativas. O la promoción de procesos de simplificación de exportación/importación por envíos postales mediante plataformas logísticas.

3. El financiamiento de la infraestructura

Para alcanzar los objetivos propuestos por la IIRSA se requieren inevitablemente de inversiones externas atendiendo al alto costo que demanda la infraestructura y su impacto en las economías de los Estados periféricos. Es por esto que una triada de organismos multilaterales se han encargado de su financiación, mediante el otorgamiento de préstamos (los cuales irán aumentando la deuda externa de los países receptores de los mismos): el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y agentes privados son también una importante vía de financiamiento para las obras en marcha, sobre todo en las áreas estratégicas que despiertan un importante interés económico. Lo más notable es la expansión que tuvo la cartera de proyectos en los últimos años: de 335 en 2004 con 37.425 millones de dólares de inversión a 593 proyectos con 182.435 millones de dólares en 2016. La cartera de proyectos se amplió casi un 75% y aumentó más de cuatro veces la inversión total estimada. Más de 70% del financiamiento de las obras es público (casi el 90% de los proyectos en marcha o ejecutados pertenecen al área de transporte) y una parte importante corresponde al brasileño BNDES. Este dato pone en primer plano la discusión sobre el rol de Brasil en la integración latinoamericana.

4. El lugar de Brasil en la geopolítica latinoamericana

Brasil es un promotor de la integración física del continente y ha asumido un rol protagónico. Para posicionarse como potencia dentro del grupo de los BRICS la infraestructura, la expansión de sus empresas y la ampliación de sus mercados son factores fundamentales.

Con el gobierno Lula, a partir del año 2003, Suramérica se convierte en “un nuevo espacio de afirmación geopolítica” que coincide con la crisis hegemónica de Estados Unidos. El resultado es una América del Sur como espacio en el que se expanden las grandes empresas brasileñas financiadas por el BNDES para la realización de Brasil como potencia regional y global, mientras se acepta de hecho la hegemonía estadounidense en América Central y el Caribe (Zibechi, 2015).

Esta idea que sostiene Zibechi, entre otros analistas, nos lleva a reflotar la tesis del subimperialismo brasileño que había desarrollado entre los años ‘50 y ‘70 Ruy Mauro Marini.

La existencia de centros medios de acumulación que mantienen una cooperación antagónica con la potencia imperial es uno de los núcleos centrales de los planteos de Marini. Para el autor existe una tendencia en Brasil a desarrollar una política de subpotencia, ya que estando plenamente integrado al sistema económico internacional mantiene un proyecto político propio y expansionista sobre la región.

Hemos definido, en otra oportunidad, al subimperialismo como la forma que asume la economía dependiente al llegar a la etapa de los monopolios y el capital financiero. El subimperialismo implica dos componentes básicos: por un lado, una composición orgánica media en la escala mundial de los aparatos productivos nacionales y, por otro lado, el ejercicio de una política expansionista relativamente autónoma, que no sólo se acompaña de una mayor integración al sistema productivo imperialista sino que se mantiene en el marco de la hegemonía ejercida por el imperialismo a escala internacional.

Planteado en esos términos, nos parece que, independientemente de los esfuerzos de Argentina y otros países por acceder a un rango subimperialista, sólo Brasil expresa plenamente, en Latinoamérica, un fenómeno de esa naturaleza. (Marini, 1977: 18)

Si bien Marini deja claro que el subimperialismo brasileño no es sólo la expresión de un fenómeno económico sino que resulta en una amplia medida del proceso de lucha de clases del país y del proyecto político, definido por el equipo técnico militar que asume el poder en el año 64, aunados a condiciones coyunturales en la economía y en la política mundial (Marini, 1977). Es posible identificar hoy rasgos subimperiales, bajo nuevas formas, que se expresan por ejemplo en la internacionalización de las grandes empresas brasileñas que se apropian de la plusvalía producida en las naciones suramericanas y de sus bienes ambientales, así como también en la promoción de un complejo articulado de redes de infraestructura que hacen posible esta expansión y facilitan la circulación de la producción del Brasil sobre todo hacia el mercado asiático. Las transnacionales del Brasil compiten de igual a igual con las grandes empresas extra-continenciales por el reparto de los bienes de América Latina y es el Estado garante y promotor de esta expansión.

La llegada de Lula al gobierno, como referente del Partido de los Trabajadores (PT), es el correlato político de esta expansión económica pues puso en marcha el Núcleo de Asuntos Estratégicos de la presidencia que se convertiría, en el año 2008, en la Secretaría de Asuntos Estratégicos. El Núcleo impulsó el proyecto “Brasil 3 tiempos”, un programa de planificación a largo plazo, que quedaría plasmado en el Proyecto “Brasil 2022”². El proyecto buscó recuperar la planificación estratégica como sustento de

2 Ver: Secretaria de Assuntos Estratégicos, (2010) “Brasil 2022. Relações Exteriores. Importância estratégica”, en <http://www.sae.gov.br/brasil2022/?p=52>

la política de Estado y posicionar a Brasil políticamente en el continente a través de nuevas organizaciones como la UNASUR y la CELAC.

Pero en el año 2016 afloran los límites y las debilidades del proyecto político desarrollado por casi 15 años en Brasil y las fuerzas conservadoras ponen en jaque las aspiraciones del PT de consolidar al país como potencia continental y profundizar las relaciones comerciales sur-sur. Las preguntas que afloran frente a esta coyuntura están vinculadas a cuál será el rumbo de la proyección de Brasil 2022, cómo seguirá la integración física en el continente ante un cambio en la correlación de fuerzas y vinculado a esto qué pasará con las empresas brasileñas y su internacionalización.

A modo de cierre

Los cambios en la correlación de fuerzas en América Latina, en los últimos meses, otra vez vuelcan las miradas sobre los procesos de integración regional. La crisis institucional en Brasil, profundizada por un golpe parlamentario al gobierno de Dilma Rousseff, junto al triunfo de Mauricio Macri en la Argentina reabren el debate sobre el rol del Estado, el peso del mercado y las transnacionales, y la inserción de las economías latinoamericanas en el sistema internacional.

El nuevo escenario latinoamericano no significará cambios en las lógicas de inserción de las economías nacionales en la economía internacional, marcadas por el extractivismo, ni virajes de importancia en las obras de infraestructura regionales planificadas en el marco de la IIRSA-COSIPLAN, por el contrario América Latina parece sumergirse en un camino de profundización del saqueo y la violencia como anticipaba Roxa Luxemburgo hace un siglo aproximadamente y que Harvey reconceptualizó como “acumulación por desposesión”.

La IIRSA fue planteada como un proyecto de integración a 30 años que se encuentra a mitad de camino. Pero, como bien plantea Raúl Zibechi, la reorganización territorial del continente, encarnada en esta iniciativa, en los últimos 15 años generó mayor interconexión que integración. Los corredores han servido para articular los bienes ambientales del continente con los centros de producción internacional más que como integradores de las economías regionales y los mercados de Suramérica. Lo cual no solo no redujo las debilidades de la región sino que rearticuló, en una reorganización territorial del saqueo, un modelo de inserción en la economía internacional re-primarizado, dependiente y extranjerizado, a medida del capital transnacional y en contra de los pueblos, que en los últimos tiempos acelera y profundiza su marcha.

Bibliografía

- Achkar Marcelo / Domínguez Ana, *IIRSA. Otro paso en la explotación de los pueblos y territorios sudamericanos* (coordinadores). 2005. disponible en: <http://www.redes.org.uy/2006/04/28/iirsa-otro-paso-en-la-explotacion-de-los-pueblos-y-territorios-sudamericanos/> (último acceso: 25/3/2016).
- Acosta Alberto, “Extractivismo y Neoextractivismo. Dos caras de la misma maldición”. En: Lang, Miriam / Mokrani, Dunia (comps.), *Más allá del desarrollo*. Buenos Aires. Fundación Rosa Luxemburg. 2012, pp. 83-118.
- Barreda, Andrés, *Geopolítica, recursos estratégicos y multinacionales*, 2005. Disponible en: <http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article311> (último acceso: 10/3/2016).
- CEPAL-UNASUR; *infraestructura para la Integración Regional*, 2011. Disponible en: <http://www.eclac.cl> (último acceso: 22/2/2016).
- Composto, Claudia / Navarro Mina, “Claves de lectura para comprender el despojo y las luchas por los bienes comunes naturales en América Latina”. En: – / – (comps), *Territorios en Disputa*. México: Bajo Tierra Ediciones, 2014, pp. 33-75.
- Delgado Ramos Gian Carlo, “Extractivismo minero, conflicto y resistencia social”. En: *Revista Realidad Económica* 26 (enero-febrero de 2012).
- Fornillo Bruno, *Geopolítica del Litio. Industria, ciencias y energía en Argentina*. Buenos Aires: El Colectivo / CLACSO, 2015.
- Harvey David, “El nuevo Imperialismo. La acumulación por desposesión”. En: *Socialist Register* (Buenos Aires, CLACSO, 2005). Disponible en: <http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf> (último acceso: 2/2/2016)
- Luxemburg Rosa, *La acumulación del capital*, Edicions Internacionals Sedov. 1968, Disponible en: <http://grupgerminal.org/?q=system/files/LA+ACUMULACI%C3%93N+DEL+CAPITAL.pdf> (último acceso: 25/3/2016)
- Marini Ruy Mauro, *La acumulación capitalista mundial y el subimperialismo*. Cuadernos Políticos 12. México: Era, 1977.
- Marx Karl, *El capital*. Trad. de Pedro Scaron. Vol. I. Buenos Aires: Siglo XXI, 2012.
- Secretaría de Asuntos Estratégicos, *Brasil 2022*, 2010. Disponible en: <http://www.sae.gov.br/?s=Brasil+2022> (25/3/2016)

Svampa Maristella, *Pensar el desarrollo desde América Latina*, 2011. Disponible en: maristellasvampa.net/archivos/ensayo56.pdf (último acceso: 2/4/2016)

Zibechi Raúl, *Brasil Potencia. Entre la Integración Regional y un nuevo imperialismo*. Málaga: Baladre, 2013 .

–, *Interconexión sin integración: 15 años de IIRSA*, 2015. Disponible en: <http://www.cipamericas.org/es/archives/16490> (4/4/2016).

Argentina, de la crisis neoliberal a la crisis del neodesarrollo, de Kirchner a Macri. Hipótesis sobre el tiempo que nos toca

Mariano Félix

Absurdo suponer que el paraíso
es sólo la igualdad, las buenas leyes.
El sueño se hace a mano y sin permiso,
arando el porvenir con viejos bueyes.
Silvio Rodríguez, *Llover sobre mojado*.

Introducción

La caída del proyecto neoliberal en la Argentina, allá por el año 2001, abrió el camino a una crisis transicional violenta e incierta. Las clases dominantes en Argentina se vieron forzadas a abandonar el llamado Plan de Convertibilidad, la táctica que articuló la etapa superior del neoliberalismo en Argentina. Nacido de la crisis anterior –la crisis hiperinflacionaria de 1989/1990– el Plan de Convertibilidad vino a consolidar el proceso de ‘reestructuración regresiva’ capitalista que la Argentina venía atravesando con claridad desde mediados de los años setenta (1975/1976). La Convertibilidad supuso la apertura de nuevos campos para la inversión del gran capital transnacionalizado (privatización de empresas públicas, adquisición de capitales privados locales, apertura de nuevos espacios de valorización), la conformación de un marco monetario rígido (convertibilidad del peso al dólar, tipo de cambio fijo) y la desregulación de los mercados de trabajo y del conjunto de las relaciones económicas (apertura unilateral comercial, productiva y financiera de la economía). En esta etapa se crearon las

condiciones materiales, simbólicas y legales para consolidar una nueva estructura política, social y técnica del capital (tanto en su forma de capital variable –fuerza de trabajo– como forma de capital constante) apoyada en un nuevo patrón de saqueo de las riquezas naturales y bienes comunes, de superexplotación de la fuerza de trabajo y de apropiación del cuerpo de las mujeres. Estas serían las bases del nuevo proyecto de neodesarrollo en Argentina.

Neolib-exit

Las contradicciones del proyecto neoliberal vernáculo, las luchas sociales y políticas, y la crisis neoliberal en el sur global, condujeron a las fracciones dominantes del capital a dar un salto al vacío. En ese salto debió crear nuevas condiciones para que (a) la nueva estructura del capital pudiera valorizarse y (b) para que las contradicciones sociales pudieran canalizarse productivamente para el capital. Esa estrategia debía además tender a desplazar en tiempo y espacio las contradicciones inmanentes al proceso de valorización del capital.

La crisis del proyecto neoliberal en Argentina fue atravesada en 2002 con un programa de transición impulsado por el gobierno del peronista Eduardo L. Duhalde. Un ajuste macroeconómico brutal acompañado de una nueva generación de políticas sociales masivas y la represión del movimiento popular, consiguieron recuperar la hegemonía social del capital y crear el marco para la recuperación económica. Sin embargo, la muerte en junio de 2002 de dos activistas, integrantes del movimiento piquetero, y la movilización popular que sucedió a ese hecho crearon el clima social para acelerar la sucesión política. A comienzos de 2003 era elegido como presidente un integrante del mismo movimiento político que Duhalde (y que el presidente neoliberal entre 1989 y 1998, Carlos S. Menem), C. Néstor Kirchner, con sólo el 23% de los votos en la primera vuelta electoral. En un marco económico ya expansivo (entre el primer trimestre de 2002 y el primer trimestre de 2003 el PBI creció un 5,4%), el gobierno de Kirchner se puso en marcha para consolidar la hegemonía de un nuevo proyecto de desarrollo capitalista posible en la periferia. El kirchnerismo (tendencia política liderada por Kirchner en el interior del peronismo) nombraría este intento como “capitalismo en serio”.

Kirchnerismo, neodesarrollismo y ‘capitalismo en serio’

Ese proyecto de capitalismo local autónomo (‘nacional’) pretendió recuperar la experiencia histórica del desarrollismo que en los años 1950 y

1960 fue preeminente en el ideario de las clases dominantes y –a través de él– sería el discurso hegemónico en el Estado (Marini, 1994). La burguesía *dit* nacional sería convocada a convertirse en actor dinámico del proceso de acumulación de capital y los sectores populares organizados serían invitados a compartir los frutos del ‘crecimiento con inclusión social’ (Fé-liz, 2012).

Esa invitación se tradujo en una combinación variable de políticas laborales y sociales que en paralelo permitieron canalizar la conflictividad social de las fracciones más radicalizadas del movimiento obrero organizado, por un lado, y del movimiento piquetero, por el otro. Dentro del movimiento obrero, las presiones por debajo para conseguir recuperar las condiciones de trabajo y salario, fueron transmitidas por la vía de los tradicionales sindicatos y las instituciones históricas de la legislación laboral argentina (comisiones internas de fábrica, convenios colectivos de trabajo, salario mínimo, etc.). Por su parte, el movimiento piquetero, reacio a la institucionalización, fue interpelado a través de una generación de nuevas políticas sociales, que eran promovidas por los organismos internacionales de crédito en la región.

El uso discrecional de los recursos e instrumentos de la política social y laboral y la utilización de una política de represión de baja intensidad de la protesta social, permitieron al kirchnerismo ganar aliados y desarticular a los sectores más ‘resistentes’, llevando adelante un exitoso proceso de ‘normalización conflictiva’ de las organizaciones y sus demandas (Dinertstein, Contartese y Deledicque, 2008).

La combinación de un programa de políticas laborales ‘clásicas’ y de políticas sociales basadas en el paradigma de las transferencias de ingreso condicionadas (TIC) convergen de manera tal que reproducen el sesgo de género de la articulación de capitalismo y patriarcado (Anzorena, 2013). En efecto, las políticas laborales actuaron para consolidar la masculinización del empleo formal mientras que las políticas sociales tendieron a fortalecer el papel ‘cuidador’ de las mujeres en los hogares de sectores populares y su empleo mercantilizado en trabajos de servicios precarizados.

Estas políticas sociales y laborales permitieron encauzar el control de la fuerza de trabajo disponible (tanto en el mercado –en la esfera de la ‘producción’– como en los hogares y el espacio público –en la esfera de la ‘reproducción’–) a los fines de garantizar la producción, apropiación y uso capitalista del valor creado en los principales núcleos de acumulación en la argentina en la era neodesarrollista: el extractivismo minero e hidrocarburoso (Voces de Alerta, 2011), el extractivismo vinculado al agronegocio

y la sojización (Svampa y Sola, 2010), el ‘extractivismo’ urbano (Svampa y Viale, 2014) y la industrialización dependiente (Félicz, 2014b). El extractivismo en sus diversas modalidades ha creado formas de producción y reproducción social que conforma espacios sociales como ‘zonas de sacrificio’ (Svampa y Viale, 2014) donde las vidas, la naturaleza y las prácticas comunitarias devienen descartables, con el cercamiento de territorios y la expulsión de las poblaciones, con el saqueo de los bienes comunes (o riquezas naturales) y la destrucción de los comunes en tanto formas de cooperación comunitaria. En estas modalidades de saqueo, la mujeres tienden a llevar la peor parte, pues la combinación de capitalismo y patriarcado en la etapa posneoliberal exagera las formas de la violencia, expropiación y explotación del cuerpo de las mujeres (Segato, 2014; Falquet, 2016). Por otra parte, la industrialización periférica en la era actual es incapaz de superar los límites del desarrollismo clásico. Reproduciendo los patrones de desarrollo dependiente, el dominio del capital transnacional apoyado en la apropiación de renta del suelo y ganancias extraordinarias provenientes del saqueo de los bienes comunes y de la superexplotación de la fuerza de trabajo precarizada, respectivamente, subordinan la industrialización a la nueva posición (global y regionalmente dependiente) del territorio argentino en la división internacional del trabajo.

Este proyecto de neodesarrollo transnacionalizado se construye a partir de un Estado que –como forma del capital– asume nuevas modalidades. En el neoliberalismo, el Estado nación expresaba la violencia del capital avanzando sobre las condiciones materiales de vida de la población, en el marco del ajuste estructural y la reestructuración regresiva. Era un Estado ‘fuerte’ (Bonnet y Piva, 2013) capaz de disciplinar al conjunto de la sociedad (incluidas a fracciones del empresariado) dentro del plan general de las fracciones devenidas hegemónicas en la clase capitalista. Caído el programa neoliberal en el país, la necesidad de construir una nueva legitimidad social y de consolidar un nuevo patrón de acumulación de capital exitoso (en términos de los objetivos del capital), el Estado pretende constituirse como expresión general de las demandas colectivas de estabilidad y crecimiento. Nace un Estado ‘débil’ que intenta componer esas demandas bajo la forma de un pacto policlasista. En el neoliberalismo, el Estado era expresión general de la necesidad de construir una nueva hegemonía social del capital tendencialmente transnacionalizado. El neodesarrollo se constituye, por el contrario, con un Estado que asume el rol de contener y componer los intereses múltiples de las clases sociales en disputa, en for-

mas de mediación más o menos institucionalizadas. El kirchnerismo surge como la forma más eficaz de canalizar esas necesidades, pues proviene de la tradición nacional–popular del peronismo histórico; así, hereda sus virtudes y limitaciones.

Las fuerzas sociales en la gestión del Estado articuladas en torno del kirchnerismo, proyectan esa necesidad a través de un discurso del orden ‘nacional y popular’ (Félicz, 2012). La conformación de un ‘capitalismo en serio’ que supere al ‘ajuste permanente’ neoliberal debe colocar al Estado en una nueva posición ‘por encima de la sociedad’ con una autonomía política relativa pero, sobre todo, con capacidad para canalizar las demandas de las distintas fracciones del capital y el trabajo en un proyecto ‘nacional’. El kirchnerismo, como fuerza política, utiliza esa ‘necesidad sistémica’ para construir simultáneamente su propia legitimidad social y política. En un contexto internacional expansivo (hasta 2008) y una situación regional que favorece ese corrimiento discursivo hacia la ‘izquierda’ (con la radicalización en 2003 de la revolución bolivariana liderada por Hugo R. Chávez Frías), el kirchnerismo consolida un proyecto de neodesarrollo y se consolida a sí mismo como fuerza política hegemónica por más de una década (2003-2015). De un 22% de los votos totales en 2003, logra 45% en la elección presidencial de 2007 y 54% en la de 2011. No sin dificultades logra desplazar en el tiempo y espacio las contradicciones sociales, políticas y económicas que el desarrollo del capitalismo en Argentina van acumulando desde el comienzo de la nueva etapa.

Una nueva victoria electoral del kirchnerismo en 2011 lleva a la presidencia, por segunda vez, a Cristina Fernández de Kirchner (esposa del ex–presidente). Esa elección inaugura a su vez un proceso de crisis transicional en el proyecto hegemónico neodesarrollista (Félicz, 2015).

En rigor, el punto de quiebre se había iniciado años antes. Entre 2008 y 2009 (en medio del inicio de la crisis global en el capitalismo) el kirchnerismo sufre su primera gran derrota electoral, y se hace evidente la constitución de fuerzas sociales y políticas nuevas en la Argentina. Si la crisis del neoliberalismo desplazó el discurso del ajuste estructural de la escena, el auge y luego estancamiento de la primera etapa del neodesarrollo contribuyeron a consolidar progresivamente fuerzas sociales con voluntad de radicalizar ese proyecto desarrollo de las relaciones capitalistas de producción. Esas fuerzas sociales se articulaban en torno a las fracciones hegemónicas de las clases dominantes (el gran capital transnacional), aquellas fracciones sociales no hegemónicas beneficiadas por el nuevo patrón de acumulación (significativamente, propietarios que alquilan sus campos y actúan

como rentistas) y aquellas fracciones sociales de los sectores populares perjudicados por el impacto de la crisis transicional. Ese amplio abanico de fuerzas sociales heterogéneas socavarán, por un lado, la base social del kirchnerismo y, por otra parte, aportará los fundamentos de nuevas fuerzas políticas que lo superarán a finales de 2015.

El propio proyecto hegemónico va construyendo barreras que se expresan a través del Estado en tensiones crecientes en la política económica y desequilibrios en la reproducción social del capital (Félicz, 2015). En su primera fase histórica, el proyecto de neodesarrollo enfrentará la imposibilidad de neutralizar las contradicciones materiales inherentes al capitalismo en Argentina: entre fracciones rentistas y no rentistas del capital, entre fracciones financieras y productivas del capital, entre capitales transnacionales y capitales ‘mercado internistas’, entre capital y la-clase-que-vive-del-trabajo. Sobre esas contradicciones, el proyecto hegemónico enfrentará además las presiones de la crisis global del capital que situarán al capitalismo argentino en un sendero de nulo o bajo crecimiento a partir de 2008.

Desde lo político, el proyecto social del capital en Argentina deberá absorber el peso de la muerte de Néstor C. Kirchner (en 2010) y posteriormente la muerte de Hugo Chávez. Mientras la primera supone la pérdida del principal articulador de la fuerza política dominante de la etapa, la desaparición física de Chávez presagia el fin de la primera era de avanzada del proceso bolivariano, con sus proyecciones radicales en la región. En el caso de la Argentina, si bien el proyecto de neodesarrollo se encuentra muy lejos del Socialismo del siglo XXI de la Revolución Bolivariana, el aura popular que lo impregna sirve localmente para apuntalar un proyecto societal que pretende construir el mito del capitalismo incluyente.

La crisis transicional que se configura a partir de fines de 2011 construye las bases materiales y simbólicas para un proceso que se avizora como de radicalización neodesarrollista. Esa radicalización supone –por un lado– la desarticulación parcial y temporal de las barreras construidas a lo largo de la década, y –por otra parte– la reconfiguración de las fuerzas políticas y sociales en el poder del Estado. El objetivo de la radicalización neodesarrollista es dar un salto cualitativo en las condiciones de valorización de sus bases estructurales y no desplazarlo por otro proyecto hegemónico.

El kirchnerismo desarrolla una estrategia de ajuste heterodoxo que desplaza las expresiones de las barreras constituyéndose en límites (desequilibrios crecientes), pero no logra evitar la derrota electoral que lo des-

plaza de los espacios claves del Estado en Argentina (la Presidencia y el Congreso). Su derrota electoral (por poco margen) es producto del fracaso de una estrategia que pretendió ‘suspender’ el desarrollo de las contradicciones del proyecto hegemónico hasta pasadas las elecciones presidenciales de 2015 por la vía de una intensificación neodesarrollista progresiva a través del ‘ajuste heterodoxo’ o ‘sintonía fina’.

En el ocaso de la (¿primera?) era kirchnerista, en diciembre de 2015 llega al gobierno nacional la novedosa alianza política ‘Cambiemos’, expresión de una derecha empresarial y hegemónica por el PRO del presidente Mauricio Macri (y secundado por la histórica Unión Cívica Radical y otras fuerzas menores). Esta fuerza política no ha venido a desarmar el proyecto neodesarrollista –apuntalado por el kirchnerismo– sino a radicalizarlo, transformando sus límites en barreras superables dialécticamente, pero sin alterar sus fundamentos estructurales. La aceleración del ajuste macroeconómico es el primer paso en un programa integral que buscará intensificar la extranjerización y el extractivismo, con miras a proyectar un proceso de acumulación de capital liderado por la exportaciones, la inversión transnacional y el endeudamiento externo.

Cambiemos nació desde las entrañas del kirchnerismo

Cambiemos (pero más específicamente el macrismo, la fuerza política dominante en su seno) nació de las entrañas del kirchnerismo. Sin el discurso del ‘capitalismo en serio’ y su fracaso, la oposición por derecha difícilmente habría podido canalizar el descontento de fracciones importantes de las bases del kirchnerismo, desilusionadas con el estancamiento económico del último lustro de la ‘sintonía fina’. Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015, el empleo formal (medido en forma parcial por la Encuesta de Indicadores Laborales, EIL, del Ministerio de Trabajo) sólo creció un 0,8%; según el INDEC, entre el segundo trimestre de 2012 y el segundo trimestre de 2015 el consumo total de los hogares creció sólo 5,9%. El ajuste heterodoxo del kirchnerismo operó como respuesta insuficiente para recuperar los equilibrios del ‘modelo canónico’ neodesarrollista (Curia, 2007) pues fue combatido por el pueblo trabajador, neutralizando los principales efectos de ese ajuste. Frente al estancamiento económico (en condiciones de precariedad laboral) y la inflación creciente, la lucha social evitó que se tradujeran en un mayor deterioro de las condiciones de vida. Sin embargo, la capacidad organizativa del pueblo no alcanzó la fuerza necesaria para poner en práctica una alternativa política.

Construyendo la posibilidad (ficticia al fin) de un capitalismo viable y parcialmente incluyente en la periferia, el kirchnerismo trabajó –en los hechos– para crear su propia alternativa por derecha. El desarrollo pensado como consumo a crédito, trabajo superexplotado (precario y mal pago) y ‘universalismo básico’ de las políticas sociales (con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID–) tiene patas cortas como proyecto de sociedad. Al no alterar los fundamentos del capitalismo dependiente, más temprano que tarde el mito se revela como ficción. Si el desarrollo es construido sólo bajo la forma de “consumir más” (pero entonces, también, trabajar más y más), la derecha siempre podrá capitalizar el descontento. Bajo la ilusión del elogio al mérito y el esfuerzo individual como camino al éxito económico, la derecha podrá acumular apoyos, aún si ese relato niega la realidad de un sistema social que para permitir que algunos pocos afortunados lleguen al éxito, deja en el camino y condena a millones a la mera supervivencia.

Obviamente, en este tiempo, el campo popular tenemos la responsabilidad histórica de no haber sabido desmarcarse del relato de la “vuelta del Estado” y del crecimiento con inclusión social como horizontes, y no haber sabido aportar a la construcción de una alternativa que supere los límites del desarrollo en el capitalismo. Doce años de kirchnerismo desarticularon o integraron una parte importante de la resistencia social nacida de las luchas de finales de los noventa. En parte, esto fue producto del peso histórico que todavía tiene el reformismo, bajo la forma nacional y popular, entre las organizaciones populares. Por otra parte, es consecuencia de la complejidad de recuperar un ideario de radical transformación social para “el mundo que el neoliberalismo nos dejó”, con mayores niveles de fragmentación social. Enfrentamos aún la dificultad enorme de conformar una cultura popular capaz de enfrentar con eficacia a los grandes medios de comunicación en la producción de discursos, de sentidos y horizontes. Esto se expresó en nuestras dificultades para construir un proyecto político propio de las y los de abajo, que privilegie la construcción de poder popular y busque superar el capitalismo, y no simplemente enfrentar el programa neoliberal o neodesarrollista, ambas formas de la ‘economía política del capital’ (Lebowitz, 2005; Félix, 2015b).

Cambiamos o el gobierno de CEOs sin democracia

Cambiamos ha construido un equipo de gobierno articulado en torno a un conjunto de ex–directivos de grandes capitales transnacionales. Conformó un gobierno que pretende organizarse sobre la base de un saber–hacer

(*know-how*) capitalista, empresarial. Ministerios pensados como empresas, ministros que se creen propietarios de ‘su cuota–parte’ del Estado con derecho de gestionar, es decir, en la creencia de poder decidir unilateralmente qué hacer, cómo hacerlo, sin considerar los derechos laborales y los derechos adquiridos, como acostumbraban actuar en las empresas que manejaron. El imperialismo del derecho privado capitalista (y de la autocracia del capital) se abre camino en el Estado a paso cada vez más acelerado.

El aparato estatal pretende ser manejado como si fuera una articulación de feudos empresariales, cuyo accionar se coordinaría a posteriori (*post festum*, sin planificación central previa, sin participación popular) de manera eficaz y eficiente.

La metáfora smithiana de la mano invisible que prevalece en esa concepción de la política es evidente y tan falaz como el relato original. El mercado y la competencia son pésimos organizadores de expectativas, acciones, políticas, proyectos y programas. Sólo sirven para crear un marco adecuado para dar más poder al poderoso, para valorizar al capital, para garantizar la explotación.

De ninguna forma el mercado certifica la construcción de una política coherente, como el macrismo a poco de andar comienza a percibir. Con limitado poder real, frente a la necesidad de acordar, conseguir aliados, y tender puentes para construir hegemonía, el gobierno de Macri comienza a chocar contra el abismo de su propia fragilidad. Nacido endeble en lo formal (con limitado apoyo electoral e institucional), el macrismo enfrenta la inminente necesidad de conformar una fuerza con capacidad de gestión dentro de un Estado débil, que todavía es atravesado por los efectos del ‘Que se vayan todos’ del 2001.

Una alianza política dominada por el PRO del presidente Macri, busca construir un gobierno que parece el ‘comité de gestión de la burguesía’ (la democracia de los CEO o CEOcracia; Mazzeo, 2015), pero difícilmente pueda consolidar una nueva hegemonía que simplemente colocando en las posiciones estratégicas a ex–empresarios o representantes directos de las clases dominantes (à *la* Miliband, 1970), como ha hecho por la mayor parte en una primera instancia. Los ministerios se llenan de CEOs y cada cual atiende su juego. La conducción es difusa porque prima el ‘sentido común’ empresarial. La ‘eficiencia’, la ‘competitividad’, y otros términos similares impregnan un discurso filo–empresarial en los diversos espacios institucionales. Esa forma de gobierno pretende no requerir conducción unificada ni tanta verticalidad. El peronismo es un movimiento sin doctrina ni ideología, por ello funciona con rígida conducción. Es la única forma de

garantizar cierta coherencia de acción. El kirchnerismo operó en ese marco. El macrismo, por el contrario, intenta ser más coherente en la práctica, apoyándose en el ‘saber hacer’ del capital y sus gestores. El pragmatismo prima, pero la coherencia viene del marco conceptual que se destila de la sociedad hegemónizada por el capital.

El macrismo sabe que la posibilidad de consolidarse dependerá de la construcción hegemónica que pueda conformar, incluyendo en la alianza gobernante (aunque no necesariamente ‘en el gobierno’) a sectores sociales y políticos que sean expresión de fuerzas sociales reales (partidos del sistema, sindicatos, organizaciones sociales, ONGs). El Estado es más bien –à la Poulantzas– condensación de las relaciones sociales de fuerza (Poulantzas, 1979), y el macrismo buscará erigir puentes pero también marcar límites (buscando anular disidencias radicales), que le permitan avanzar en su programa intentando construir un nuevo bloque en el poder bajo su liderazgo. Nada certifica que lo logre. La convocatoria al ‘pacto social’ y la Ley de Emergencia Social de fines de 2016, intentaban ser un primer paso en ese sentido. La represión selectiva y control de la protesta social es un paso en la misma dirección. Ambos intentos de componer y contener parecen haber fracasado en una primera etapa.

El gobierno de Cambiemos es un gobierno débil en lo político en un Estado débil. Una fuerza política sin base social organizada, en un Estado todavía atravesado por las demandas de las distintas fracciones de clase, todavía impregnado por el ‘fantasma del 2001’. Ciertamente es que a través de los años del kirchnerismo, se desarticuló mucha de la oposición radical antisistémica; la normalización conflictiva de las demandas populares fue parcialmente exitosa. Por lo tanto, la resistencia social a la radicalización neodesarrollista tiene dificultades para articularse. Esto es especialmente cierto porque la integración de actores sociales relevantes en la lógica política institucional del movimiento peronista juega a favor de una estrategia de conflictividad de baja intensidad, con visos de legitimación sistémica a la construcción de ‘governabilidad’. El macrismo en Cambiemos apunta a aprovechar los primeros meses de gobierno para intentar tomar ventaja de este terreno de desorganización, buscando desarticular la oposición social y política y crear condiciones que permitan legitimar su rol como fuerza política en el Estado. Espera lograrlo a través de la creación de condiciones de reproducción ampliada de las reglas básicas del ‘capitalismo en serio’: inserción por la vía del empleo más o menos precarizado, consumo por la vía del salario y el crédito.

Lo dicho no exime al kirchnerismo de haber contribuido a la conformación de una forma de ser del Estado que reproduce las modalidades burocráticas, autoritarias, patriarcales y precarizantes del capital. Los contratos violatorios de los derechos laborales (desde contratos temporarios hasta falsas cooperativas), programas por fuera de la estructura del Estado, las políticas que tienden a reproducir los estereotipos de género (y una posición subordinada para las mujeres), y prácticas verticalistas y no participativas para la producción, la planificación (o falta de ella) y la gestión de lo público/estatal se multiplicaron en la etapa del kirchnerismo, reproduciendo a escala ampliada la forma del Estado construida a lo largo del neoliberalismo.

La política entendida como gestión, la participación como apoyo pasivo al gobierno de turno y la crítica como ‘traición’ o ‘hacerle el juego de la derecha’, continuaron vaciando la política de contenido radicalmente transformador, de potencialidad de transfigurar lo dado y de formas de protagonismo popular en la construcción de lo común. Sobre esas prácticas de la política sin Pueblo, Cambiemos ha llegado para intentar radicalizar la idea de la política como administración de *statu quo*.

Poco cambia con Cambiemos

Como señalamos, en ese marco el programa del macrismo intenta ser superación dialéctica del neodesarrollismo kirchnerista. El tímido ajuste heterodoxo de la sintonía fina iniciado en 2011 por el último gobierno kirchnerista, e intensificado a fines de 2013 (recordemos la violenta devaluación del peso en el verano de 2013/2014), es acelerado ahora para construir condiciones para la producción y apropiación de valor ‘más justas para el capital’. El ajuste kirchnerista alienó su base electoral, que no pudo conciliar el discurso de las bondades del capitalismo en serio con la realidad del ‘estancamiento con inflación’. El kirchnerismo no logró a partir de allí ni siquiera recomponer un entorno favorable a la mejor versión del ‘crecimiento con inclusión social’. El proyecto de neodesarrollo, superexplotación laboral, extractivismo (saqueo de la naturaleza) y precarización feminizada del trabajo de cuidado, enfrentó sus límites y el kirchnerismo no pudo (en rigor, no quiso) transformarlos en barreras, superándolos.

En la nueva era que comienza el gobierno de Macri busca primero desactivar esas barreras y construir un nuevo *status quo* que permita al capital recuperar su capacidad de acumulación. El gran capital hace años comenzó a desplazar en el tiempo sus contradicciones, frenando inversiones en la economía local y aumentando la salida de capitales, buscando

acelerar la ‘corrección y sinceramiento de las variables’. Dando cuenta de la ‘huelga de inversiones’ (Kalecki, 1943), entre el segundo trimestre de 2012 y el segundo trimestre de 2015, según datos del INDEC, la formación bruta de capital físico (inversión) sólo subió un 7,7% mientras que la inversión en equipo durable de producción (capital constante fijo) sólo aumentó 0,48% en total en igual período.

Una nueva política económica ‘más justa’ para el capital

El nuevo gobierno de Cambiemos busca crear condiciones macroeconómicas ‘más justas’ para el capital para arrancar un ciclo inversor liderado por las transnacionales. Las barreras a desactivar eran esencialmente tres (Féiz, 2015). Primero, mitigar la llamada restricción externa (es decir, insuficiencia de dólares en el ciclo local del capital) que se había convertido en una limitante a la capacidad de acumulación de capital. Segundo, contener la inflación, que se ha convertido en un mecanismo que conspira contra la competitividad del capital local (pues hace caer el tipo de cambio real, abaratando el dólar y con él las importaciones) y tensiona –a la vez que expresa– el conflicto distributivo entre capital y trabajo; por último, la barrera fiscal que –por un lado– alimenta (no causa) la escalada inflacionaria por vía de la emisión monetaria excesiva, como la nafta al fuego, y –por otro– condiciona la posibilidad de recomponer la capacidad de endeudamiento externo (componente fundamental de la estrategia hegemónica de flexibilización de la restricción externa).

En este sentido, las primeras medidas tomadas buscaron desmontar las restricciones a la entrada y salida de capitales (generando como consecuencia instantánea la devaluación del peso superior al 60%) y eliminar y reducir los impuestos a las exportaciones. Se buscó incentivar las exportaciones primarias que son la principal fuente de dólares (en una economía que exporta *commodities* agro-minero-industriales e importa manufacturas; Féiz, 2014) mientras se crean condiciones para acelerar el ingreso de capitales eliminando los límites a su salida, promoviendo incentivos especulativos a su ingreso (por ejemplo, vía el instrumento de las Letras del Banco Central y la venta de dólar futuro) y se recupera la capacidad de endeudamiento externo. Estas medidas han reasignado una enorme masa de recursos desde los sectores populares hacia el conjunto del capital (y sus administradores y propietarios) y en especial hacia las grandes corporaciones transnacionales que controlan todas las ramas de la economía y el comercio exterior.

El anticipo de esas medidas en la campaña electoral (por parte del macrismo pero también del kirchnerismo en la candidatura presidencial de D. Scioli) ya había comenzado a construir ese desplazamiento por la vía de una aceleración inflacionaria anticipada. A partir de la realidad de las nuevas medidas económicas, la inflación ha aumentado aún más. El índice de precios al consumidor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (provisto por la Dirección General de Estadística y Censos de la misma) aumentó más de 40% entre el primer semestre de 2016 y el mismo período del año anterior, y la tendencia para todo 2016 fue superior aún.

El programa económico del nuevo gobierno busca conformar un nuevo ‘clima de negocios’ favorable al gran capital y resolver las barreras que el kirchnerismo acumuló a lo largo de su estrategia de ajuste heterodoxo sin cambio estructural. Por defecto, las respuestas han sido (y serán invariablemente) en favor del capital más concentrado y sus costos serán pagados por los mismos de siempre (el pueblo trabajador):

- a. Elevación de las tarifas de energía y transporte con menos subsidios (la declaración de la ‘emergencia energética es un paso en ese sentido) a fin de promover la inversión por parte de las empresas privadas/privatizadas;
- b. Cierre de las negociaciones con los fondos ‘buitres’ (pagando lo reclamado en efectivo, financiado con nuevo endeudamiento) para facilitar un renovado acceso al financiamiento internacional; esto permitiría desplazar en el tiempo la restricción externa aportando recursos para intentar sostener la política de dólar caro (‘competitivo’) pero bajo control; es decir, sostener el dólar en ‘flotación sucia’ (con la intervención del Banco Central) a los fines de intentar abrir al menos en los próximos años un nuevo sendero de crecimiento;
- c. Apuntalar este proceso profundizando las inversiones en infraestructura ‘económica’ (camino, ferrocarriles, generación y distribución de energía, etc.) previstas ya en el proyecto de la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana). Esto, a partir del financiamiento de los organismos internacionales de crédito (algo que ya venía ocurriendo en el ciclo kirchnerista); un reciente crédito con el Banco Mundial por más de 6000 millones de dólares, negociado por el gobierno anterior, fue el primer paso en este sendero;
- d. Llevar hasta el final la apertura e internacionalización de la economía, buscando cerrar el acuerdo de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea (que hace tiempo es discutido bajo siete llaves) y

- profundizando los vínculos con la alianza del Pacífico (y más allá, con China e India como ejes), consolidando una inserción internacional dependiente, de matriz extractivista y super-explotadora de la fuerza de trabajo;
- e. Avanzar en una reducción progresiva del gasto público (sobre todo a través de una política de aumento del gasto por debajo de la inflación, la reducción de subsidios a los servicios públicos y la caída de contratos precarios de trabajadorxs en el Estado en diversos niveles y estructuras) a los fines de cerrar la brecha fiscal (déficit) y comenzar a limitar la emisión monetaria;
 - f. Contener las negociaciones salariales dentro de un sendero por debajo de la inflación real; junto con una política monetaria y fiscal más restrictivas, esto podría bajar la inflación (como ocurrió en 2014) y apalancar a mediano plazo la inversión privada en una nueva ecuación distributiva más favorable al capital. La caída en la inflación para fines de 2016 fue un hecho, pagado y logrado por la vía de una reducción salarial real significativa (no inferior al 5% real a lo largo del año).

Ese programa sintetiza la economía política del capital en los tiempos de la crisis. Con un sesgo de clase evidente, se propone concluir la etapa de crisis transicional y recuperar el crecimiento por un tiempo, que es lo único que el capitalismo puede ofrecer aun si puede hacerlo a un costo creciente para el pueblo y la naturaleza.

El macrismo enfrenta el mismo dilema que el kirchnerismo en su última etapa. ¿Podrá recomponer a tiempo las condiciones para que el saqueo de las riquezas naturales y la superexplotación de la fuerza de trabajo puedan volver a ser la base de un proceso de crecimiento, aunque sea dependiente y estructuralmente excluyente? La ‘liberación’ del dólar, la eliminación integral de las retenciones a la exportación, el ‘arreglo’ con los acreedores internacionales y un mayor ajuste fiscal en el Estado, se presentan como otros tantos medios para tal fin. ¿Alcanzará todo esto para crear las condiciones para reiniciar un ciclo inversor liderado –nuevamente– por las transnacionales? El gobierno de Cambiemos carga las tintas en el futuro, deseando que el capitalismo argentino pueda salir de su inercia.

El macrismo/PRO avanza con pies de plomo, sabiendo que su gobierno nació con legitimidad formal pero poca legitimidad política. Obtuvo sólo 24% en la interna abierta de Agosto de 2015 y luego como fuerza colectiva (Cambiemos) 34,9% en la primera vuelta electoral en octubre de 2015. Habiendo ganado por escaso margen en la segunda vuelta electoral

(apenas 1,5 puntos porcentuales, en noviembre de 2015), carece de peso institucional significativo en gobernaciones, diputados y senadores, con algo más de peso entre intendentes y concejales (en especial, los aportados por el radicalismo). Por ello, arrancó con mano de hierro, llevando al límite (y más allá) todos los poderes formales de una Constitución hiperpresidencialista y delegativa (p. ej., Decretos de Necesidad y Urgencia). El gobierno de Cambiemos decidió que debía condicionar lo más posible las luchas populares. Sabiéndose débil en lo político, salió a mostrar fortaleza golpeando primero. Las instituciones de la Constitución social liberal de la Argentina son flexibles, siempre dentro del campo del derecho del capital. La legalidad de las urnas es tomada por las fuerzas políticas de los partidos del orden como derecho a la gobernabilidad. Los ‘primeros 100 días’ son vistos como cheque en blanco; aunque, a más de un año de gobierno, el ‘crédito blando’ parece comenzar a agotarse.

El gobierno de Macri intenta desviar la atención hacia adelante, en la expectativa de que las exportaciones y el consumo suntuario de las fracciones sociales beneficiadas por la redistribución del ingreso podrán reimpulsar la demanda y el crecimiento económico. Sin embargo, el contexto internacional y regional continúa siendo desfavorable al comercio argentino, lo cual parece inhabilitar al menos en el corto plazo una recuperación fuerte de las ventas externas. La crisis económica y política en Brasil condiciona fuertemente las posibilidades de que la industria automotriz, clave en Argentina en cualquier proceso de crecimiento, se recupere. En paralelo, la economía en los países ‘centrales’ crece lentamente y China se ralentiza, lo cual tiende a mantener relativamente bajos los precios de las principales *commodities* de exportación.

En ese contexto contradictorio, en el gobierno estiman que en el mediano plazo la inversión podrá subir en función de una mayor tasa de ganancia y el aumento de esos componentes de la demanda. La expectativa oficial es que este año sea como el 2002 para el kirchnerismo, pero más parece que será como el año 1999. Entre 1997 y 1999 (año de inicio de la crisis neoliberal) los precios de los productos de exportación cayeron 20%, mientras que ahora, entre 2013 y 2015 esos precios cayeron un 17,3%, según estadísticas del INDEC; por el contrario, entre 2002 y 2004 ese indicador subió un 28,3%. La consolidación del kirchnerismo se dio en un contexto favorable, mientras que el macrismo podría enfrentar un mundo que mundo ‘patea’ abiertamente en contra. Con Brasil sumido en el estancamiento (-3,8% de caída en el PBI en 2015, similar en 2016), los países centrales a marcha lenta (1,9%) y China en desaceleración (de 7,3% en

2014 a 6,9% en 2015), si los precios internacionales no se recuperan, Argentina parece enfrentar un mundo similar al que enfrentó la Alianza (en la presidencia de Fernando de la Rúa) en 1999–2001. En el ámbito local, se encuentra abierta e indeterminada aun la batalla por la redefinición de los términos de la explotación y las relaciones de valor (poder de compra de los salarios, tasas de ganancia, nivel de precios y tipo de cambio real, nivel de empleo, etc.).

Cambios tiene a su favor el giro regional hacia el centro–derecha. Por un lado, el faro de los proyectos de cambio más avanzados, Venezuela, atraviesa una crisis política y económica sin precedentes desde el ascenso del Chavismo, causada por la prevalencia del extractivismo petrolero, por el avance del imperialismo y la radicalización de la derecha, y por el bloqueo al proceso de construcción del Estado Comunal. Por otra parte, con la salida (aun si temporal) del PT del gobierno en Brasil, el hegemon regional seguramente intente acelerar el avance del proyecto subimperialista de la burguesía brasileña (que el propio Partido de los Trabajadores ha consolidado). Sobre esta coyuntura regional, se montan los viejos y nuevos imperialismos. Buscando cosechar en este ‘río revuelto’ las potencias de los países hegemónicos (esencialmente, EE.UU. y la Unión Europea) y los nuevos centros de acumulación de capital en la periferia (como China e India) despliegan todo su arsenal político, económico y –llegado el caso– militar, a fin de poder ampliar los espacios para apropiarse de las riquezas naturales y el trabajo de nuestros pueblos. Esto ocurre en un marco en que los movimientos populares en la región todavía están intentando salir de la modorra construida por una década de gobiernos ‘progresistas’ o gobiernos populares que no lograron superar los límites de sus capitalismo vernáculos. La región se ha convertido en área de pruebas de la radicalización por derecha de las experiencias de neodesarrollo y el macrismo intentará no quedar atrás en ese respecto.

Para el gobierno entrante, la pregunta es si el rebote que espera alcanzará para ganar legitimidad social y política para ampliar su capacidad hegemónica. Con ese objetivo en mente, las políticas sociales universalistas pero básicas están siendo ampliadas (como viene ocurriendo desde hace años, con el apoyo del Banco Mundial y el BID) para que garanticen niveles mínimos de ingresos pero obliguen al pueblo trabajador a seguir concurriendo masivamente a un mercado de trabajo precarizado. El mencionado crédito del Banco Mundial es en parte para financiar la ampliación ya anunciada de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) a los monotributistas. La reforma en el seguro social para la vejez (jubilaciones

y pensiones) ya fue puesto en la agenda futura, incluyendo la propuesta de aumento en la edad de retiro junto con la universalización de beneficios mínimos. El universalismo básico (Molina, 2006) parece consolidarse como forma de integración social para el universo de los/as ‘excluidos/as’.

Desde el punto de vista del núcleo del proceso de valorización del capital, el gobierno proyecta medidas que buscan promover la inversión en los sectores estratégicos ya consolidados, dando carnadura a la veta desarrollista que lo constituye. No será meramente un gobierno neoliberal (es decir, destinado a la reestructuración general de la sociedad) sino un gobierno que buscará crear las condiciones normativas e institucionales que permitan, con el apoyo fundamental del Estado, relanzar el crecimiento en un marco capitalista. El ajuste macroeconómico (en su etapa heterodoxa kirchnerista y ortodoxa macrista) es sólo el primer momento en ese proceso, de la misma forma que la salida de la Convertibilidad y las ‘reformas’ del duhaldismo crearon las bases para el programa del kirchnerismo. No asistimos al ajuste estructural neoliberal sino a la intensificación del neodesarrollismo.

Desde el proyecto Belgrano (un proyecto de infraestructura de transporte y energía, enmarcado en la IIRSA), hasta la política de comunicaciones (que pretende abrir a las transnacionales un campo fértil para inversiones en tecnologías de la comunicación y la información); desde la continuidad en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (con la permanencia del ex ministro kirchnerista Lino Barañao) en favor de las asociaciones público–privadas con fondos y recursos públicos, hasta la creación del Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Energía y Minería para apuntalar el desarrollo del saqueo de las riquezas naturales, pasando por una nueva política de precios en los servicios públicos privatizados que elevará las tarifas y quitará regulaciones para inducir la inversión; todas estas iniciativas pretenden alimentar un shock de inversiones que propulsen el crecimiento.

Como dijimos, en cualquier caso, mucho depende de lo que ocurra a escala global pues la herencia neoliberal pone a la Argentina en un lugar dependiente y subordinado: el capital transnacional invertirá en el país sólo si las condiciones son ‘objetivamente’ suficientes y si –además, y prioritariamente– encajan en el marco de sus estrategias globales de valorización. Reclamará entonces, no sólo tasas de ganancia potencialmente elevadas sino condiciones sociales y políticas adecuadas (‘governabilidad’ y baja conflictividad). En tal sentido, el crecimiento de la resistencia social que comienza a converger en movilizaciones unitarias de las centrales sindi-

cales, organizaciones sociales y políticas son para Cambiemos una luz de alarma.

La recuperación del crecimiento (aunque fuera leve) y una caída en la inflación (aunque moderada) son los objetivos de política económica del macrismo a cortísimo plazo. El costo de esta estrategia son enormes por la caída del empleo, los salarios y el gasto público (que crecerán por debajo de la inflación), por el ingreso en la pobreza y la indigencia de miles de personas a corto plazo.

Hacia fines de 2016, el macrismo espera, la economía podrá crecer un poco y la inflación bajar, creando un mejor clima social. Luego de años de estancamiento en los últimos años del kirchnerismo, una leve mejoría podría recrear la confianza en el ‘capitalismo en serio’, que es el mito que constituye la principal herencia del kirchnerismo en términos societales. Si el acuerdo de la deuda abre el grifo del crédito internacional, algunas fracciones de los sectores medios, más formalizados y mejor pagos, podrían llegar a ampliar su apoyo al gobierno si el resultado de las nuevas políticas facilita el acceso al crédito, al dólar y el consumo de bienes importados (Cantamutto y Schorr, 2016). Una situación similar a la de 1991 (boom de consumo por baja en la inflación, consumo en cuotas y crecimiento económico; después del ajuste violento de 1989-1990) es el ideal de Cambiemos.

Ni revolución ni alegría: sólo el pueblo salvará al pueblo (y terminará con Cambiemos)

Ese combate abierto nos pone frente a la pregunta por el futuro de la ‘revolución de la alegría’, como se autodenominaba Cambiemos en medio de la campaña electoral de 2015. Esa disputa opera todavía en el filo de un debate entre las necesidades de la gobernabilidad de la institucionalidad burguesa, y la necesidad del pueblo trabajador de evitar un deterioro aún mayor en sus condiciones de vida. En este plano operan las batallas legislativas que conforman alianzas flexibles que van entre el campo del gobierno y el de la oposición parlamentaria; también en ese nivel circulan la mayor parte de las luchas de orden defensivo contra despidos arbitrarios en masa y por aumentos salariales.

El problema es que la gobernabilidad burguesa como exigencia se opone siempre a las demandas populares por mejores condiciones de vida. Las presiones del ‘ajuste’ en tiempos de crisis y las demandas de ‘moderación’ en tiempos de auge se colocan como un límite sistémico a las exigencias del pueblo trabajador. La gobernabilidad y la defensa de las instituciones estatales operan como un intento de restringir esas demandas

dentro de las posibilidades formales de la reproducción de una sociedad dominada por las necesidades del capital, en especial de los intereses del gran capital transnacionalizado.

Nuevas condiciones de distribución ‘más justas para el capital’ serán el objetivo de las clases dominantes, pero ello sólo es posible aplastando la resistencia social. La articulación de las luchas del pueblo serán la clave para frenar este proceso. Una articulación que se sustente en la organización de la subjetividad popular en torno a las luchas concretas como punto de partida para la disputa por el desarrollo. El enfrentamiento contra el capital (y su poder en el Estado y los partidos del orden) en las calles, los lugares de trabajo, en los barrios y el territorio, será (está siendo) la base del surgimiento de un nuevo ciclo de lucha. Ese nuevo comienzo podrá poner en pie el proyecto del 2001, el proyecto de radical transformación de la sociedad. Un proyecto de cambio social que se proponga destruir los límites del neodesarrollo a través de la superación dialéctica de sus presupuestos, a través de la desarticulación de su modelo productivo, político y social. Nuestra batalla será hoy por enfrentar el ajuste capitalista, el ajuste del neodesarrollo que busca su intensificación. La disputa de hoy será el punto de partida para superar el fetichismo del Estado social (y el desarrollo a través suyo) como únicas alternativas posibles. En este sentido, la lucha será también para evitar que la táctica subordine a la estrategia: que la articulación de la resistencia a la fase ortodoxa del ajuste no subsuma el proceso de lucha radical en el proyecto restaurador de las fuerzas políticas de los partidos del orden que aspiran a suceder –tarde o temprano– al marxismo. El socialismo latinoamericano, bajo la forma del buen vivir y la democracia con protagonismo popular, deberá volver al frente de batalla.

“Darle tiempo al gobierno” o “Esperar hasta la próxima elección” son algunas de las formas que asume la exigencia de resignación, que reduce el gobierno del pueblo (es decir, la democracia) al voto periódico y pretenden neutralizar su demanda de protagonismo. Si cedemos la iniciativa, si negamos nuestra capacidad de transformar la realidad y de desestabilizar el proyecto del capital, abandonamos la posibilidad de soñar nuestro futuro y construirlo. Por eso, como señalaba el poeta Bertolt Brecht, no podemos aceptar “lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar”.

Bibliografía

- Anzorena, Claudia, *Mujeres en la trama del Estado Una lectura feminista de las políticas públicas*. Mendoza: Ediunc, Universidad Nacional de Cuyo, 2013.
- Bonnet, Alaberto y Piva, Adrián, “Un análisis de los cambios en la forma de Estado en la posconvertibilidad”. En: Grigera, J. (comp.), *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*. Buenos Aires: Imago Mundi, 2013, pp. 3-32.
- Cantamutto, Francisco / Schorr, Martín, “Frentes abiertos”. En: *Página/12* (25 de abril de 2016).
- Curia, Eduardo, *Teoría del modelo de desarrollo de la Argentina: las condiciones para su continuidad*. Buenos Aires: Galerna, 2007.
- Dinerstein, Ana Cecilia / Contartese Daniel / Deledicque, Melina, “Notas de investigación sobre la innovación organizacional en entidades de trabajadores desocupados en la Argentina”. En: *Revista Realidad Económica* 234 (2008).
- Falquet, Jules “Hacia un análisis feminista y dialéctico de la globalización neoliberal. El peso del complejo militar-industrial sobre las mujeres globales”. En: *Cuadernillo Boltreano*. Material de Cátedra Libre Virginia Bolten, La Plata (2016)
- Félicz, Mariano, “Sin clase. Neodesarrollismo y neoestructuralismo en Argentina (2002-2011)”. En: *Século XXI: Revista de Ciências Sociais* [Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais do Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria (Brasil)] 2/2 (2012), pp. 9-43.
- , “Neo-developmentalism, Accumulation by Dispossession and International Rent - Argentina, 2003-2013”. En: *International Critical Thought* 4 /4 (2014a), pp. 499-509.
- , “Economía política para la transición. Más allá del neodesarrollismo”. En: *Revista Herramienta* 54 (2014b)
- , “¿Neodesarrollismo a la deriva en Argentina? Hegemonía, proyecto de desarrollo y crisis transicional”. En: *Márgenes. Revista de economía política* 1/1 (2015a), pp. 95-118.
- , “Limits and barriers of neodevelopmentalism: Lessons from Argentina’s experience, 2003-2011”. En: *Review of Radical Political Economics* 47/1 (2015), pp. 70-89.

- , “¿Qué hacer... con el desarrollo? Neodesarrollismos, buenvivir y alternativas populares”. En: *Sociedad y Economía* [Universidad del Valle] 28 (2015b), pp. 29-49.
- Kalecki, Michal, “Capítulo 12: Aspectos políticos de la plena ocupación (1943)”. En: –, *Ensayos escogidos sobre dinámica de la economía capitalista 1933-1970*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1977, pp. 159-166.
- Lebowitz, Michael, *Más allá de El Capital. La economía política de la clase trabajadora en Marx*. Madrid: Akal, 2005
- Marini, Ruy Mauro, “La crisis del desarrollismo” borrador, archivo de Ruy Mauro Marini (2014) (http://www.marini-escritos.unam.mx/085_crisis_desarrollismo.html) (último acceso: 20/5/2017).
- Mazzeo, Miguel, “Argentina: la CEOcracia, la añorada mediocridad burguesa y lo inédito viable” (10 de diciembre de 2015). En: *Contrahegemoniaweb.org.ar* (<http://contrahegemoniaweb.com.ar/argentina-la-ceocracia-la-anorada-mediocridad-burguesa-y-lo-inedito-viable/>) (último acceso: 20/5/2017)
- Miliband, Ralph, *El Estado en la sociedad capitalista*. México: Siglo XXI, 1970.
- Molina, Carlos Gerardo (ed.), *Universalismo básico. Una nueva política social para América Latina*. México: Editorial Planeta Mexicana, Banco Interamericano de Desarrollo, 2006.
- Poulantzas, Nicos, *Estado, Poder y Socialismo*. México: Siglo XXI, 1979.
- Segato, Rita L., *Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres*. Puebla: Pez en el árbol, 2014.
- Svampa, Maristella / Viale, Enrique, *Maldesarrollo. La Argentina extractivismo y el despojo*. Buenos Aires: Katz, 2014.
- / Sola Álvarez, Marian, “Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo: Los marcos de la discusión en la Argentina”. En: *Ecuador Debate* 79 (2010).
- Voces de Alerta, *15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina*. Buenos Aires: El Colectivo/Herramienta, 2011.

Economía política del Uruguay progresista (2005-2015)

Gabriel Oyhantçabal Benelli

Entre 2005 y 2015 Uruguay atravesó una novedosa etapa en su historia reciente, al menos desde la desarticulación del llamado modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que entró en crisis hacia finales de 1950. Lo novedoso de la nueva etapa tuvo que ver con dos elementos. Por un lado, el arribo a la gestión del Estado por primera vez en la historia del Frente Amplio (FA), una fuerza política forjada al calor de la lucha de clases de la década del 60 y comienzos de los 70 que unificó a prácticamente a la totalidad de la izquierda marxista y a sectores reformistas de los partidos tradicionales (Colorado y Nacional) expresando una coalición poli-clasista con eje en el movimiento de los trabajadores. Por otro lado, el “disfrute” de un período de bonanza económica marcado por los altos precios de las bienes exportados desde Uruguay y por un flujo creciente de inversión extranjera directa (IED) que dinamizó niveles de crecimiento del producto bruto interno (PBI) inéditos en los últimos 50 años, a caballo de los cuales se elevó el salario real y se desplegaron una serie de políticas focalizadas que elevaron los ingresos de los sectores más pauperizados de la clase trabajadora.

Este artículo busca aportar a la comprensión de este período histórico a partir del análisis de sus características principales y de las determinaciones que hicieron posible esta década progresista con principal foco en la economía política del período. Para eso repasamos brevemente los elementos centrales del período inmediatamente anterior, conocido en Uruguay y la región

como etapa neoliberal (1973-2004), para abordar a continuación la etapa progresista. La hipótesis principal que guía este ensayo es que la división internacional del trabajo es el determinante principal de los ciclos económicos y políticos del Uruguay, pero que las particularidades que adopta en nuestro país la forma de valorizar capital resultan de la dinámica específica de la lucha de clases que configura etapas o períodos diferenciados.

Cabe aclarar que dada la brevedad del artículo y su foco en la economía política, quedan sin un tratamiento exhaustivo aspectos cruciales como las particularidades del proceso político, las formas de expresión de las clases y los procesos de construcción de hegemonía, los que deberán ser abordados en otra oportunidad.

1. Preludio 1973-2004: el Uruguay frente a la desvalorización de la fuerza de trabajo

La etapa de ISI se sustentó en Uruguay y en la región en un período de alza en el precio de las materias primas y los bienes salarios exportados que permitían una apropiación extraordinaria de plusvalía bajo la forma de renta de la tierra. Con esta renta se impulsó la reproducción de capitales manufactureros menos productivos que en los países centrales desarrollando un sector industrial que varió en su grado de complejidad y diversificación de país a país, pero que sustituyó parte de las mercancías que se importaban desde el resto del mundo. La mediación del Estado apropiando y redistribuyendo ganancias extraordinarias, posibilitó como tendencia el crecimiento numérico (absoluto y relativo) de la clase trabajadora industrial así como la elevación de sus salarios directos e indirectos.

Sin embargo hacia 1955 las condiciones materiales que hacían posible el “Uruguay de las vacas gordas y de la tacita de plata” se esfumaron, iniciándose un período de crisis marcado por reducción de las exportaciones (en precio y en volumen), déficit en la balanza de pagos, caída en las reservas e incremento de la deuda externa (Finch, 2005). En este contexto se ingresó en una etapa de agudización de la lucha de clases que sólo se resolvió *manu militari* en 1973. El programa para relanzar la acumulación de capital comenzó a implementarse en 1968 durante el gobierno de Pacheco Areco (1968-1971) con la congelación de precios y salarios que inició la desvalorización de la fuerza de trabajo. Sin embargo, no era posible aplicar el ajuste dada la fortaleza de las organizaciones de los trabajadores, por lo

que la dictadura militar fue para las clases propietarias el único medio para implementar su programa¹.

1.1 El período militar (1973-1984)

Con los sectores más dinámicos de la burguesía (agro-exportadora y financiera) como sostén del “partido militar”, sumado al visto bueno y la activa colaboración del gobierno de los Estados Unidos como expresión del capital global, se impulsaron una serie de políticas que desregularon el sector financiero y desarmaron los mecanismos de protección social (salario indirecto y regulación del conflicto capital-trabajo) que caracterizaron a las políticas del período anterior, al tiempo que se desplegó un mecanismo sistemático de represión de las libertades de organización de los trabajadores (no así de las patronales), recurriendo al encarcelamiento, la tortura, el asesinato y la desaparición de militantes².

La nueva modalidad que va asumiendo la acumulación de capital desde 1973 se puede resumir en tres ejes principales: (1) desvalorización de la fuerza de trabajo, (2) apertura al mercado de capitales (inversión directa o en cartera) y (3) la reorientación exportadora.

El período militar se caracterizará por un agudo proceso de expropiación del fondo de consumo de la clase trabajadora que combinó al menos extensión de la jornada laboral familiar por el incremento de la participación femenina en el mercado de trabajo (reforzando una tendencia iniciada al menos desde la década del 50) y desvalorización de la fuerza de trabajo, la cual redujo su poder de compra un 60% entre 1971 y 1984. Esta agresiva reducción del salario real puede conceptualizarse, a modo de hipótesis, por la articulación de los siguientes factores: pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, descalificación del conjunto de la fuerza de trabajo vinculada con la desarticulación del tejido industrial, y liberalización comercial que abarató parcialmente el costo de la canasta de consumo obrero. Estos mecanismos provocaron que la participación de los salarios en el PBI cayera de 42% a 30% entre 1974 y 1979. Las condiciones de pauperización salarial movilizaron el ejército industrial de reserva a través de la expansión absoluta y relativa

1 Para más detalle del período 1955-1973 ver Finch (2005, cap. 7) e Instituto de Economía (1969, partes II y III).

2 Para un análisis exhaustivo del período militar ver Notaro (2011) y Finch (2005, cap. 8).

de la fuerza de trabajo femenina³ como mecanismo compensador ante la depreciación del salario familiar, y de la proletarianización de productores mercantiles agropecuarios que, ante la desprotección del sector, pasaron a vender su capacidad de trabajo⁴ como estrategia principal de reproducción social.

Un segundo componente distintivo de la nueva forma de valorizar capital se relacionó con la generación de condiciones “atractivas” para la inversión de plusvalía acumulada interna y externamente, en un contexto de alta liquidez de capital a nivel internacional. A la ya mencionada desvalorización de la fuerza de trabajo local que elevó los niveles de rentabilidad del capital, se le sumó el estímulo a la IED con la aprobación en 1974 de la Ley de inversiones extranjeras y la expansión del endeudamiento externo bruto (tanto público como privado) que pasó de 478 millones a 3.919 millones de dólares entre 1973 y 1985 (MOxLAD, 2016).

El último elemento a destacar tiene que ver con la reorientación netamente exportadora que adquirió la valorización del capital. No es que durante la ISI el sector exportador no fuera importante, en tanto los ingresos extraordinarios para impulsar el mercado interno y las políticas industriales provenían fundamentalmente de la renta ganadera. Sin embargo, el agotamiento de la etapa industrializadora junto con la aguda retracción del mercado interno provocada por la desvalorización de la fuerza de trabajo, orientó la economía a producción de mercancías exportables aprovechando los altos precios internacionales y los bajos salarios que elevaron la rentabilidad del capital y posibilitaron una expansión sostenida de las exportaciones entre 1973 y 1981. Esta orientación combinó el impulso de sectores tradicionales (carne y lana) junto con el desarrollo de nuevos sectores exportadores que aprovecharon condiciones naturales extraordinarias (pesca, lechería, arroz). Un caso particular de expansión en estos años fue el sector textil que aprovechó el abaratamiento de la fuerza de trabajo para colocar su producción en el mercado regional (Argentina fundamentalmente) en el marco de políticas de cooperación entre las dictaduras del conosur. Así entre 1973 y 1981 el volumen de exportaciones creció un 154% mientras que su valor unitario creció un 89% (MOxLAD, 2016).

3 Entre 1973 y 1985 la cantidad de mujeres activas pasó de 293.961 a 382.113 mientras que en términos relativos su participación en la PEA pasó de 27 a 32% (Fleitas y Roman, 2010).

4 Entre 1970 y 1990 desaparecieron 22.428 establecimientos de menos de 100 hectáreas, el 29,1% del total (DIEA, 2003).

1.2. La transición a la democracia (1985-2004)

A pesar del “éxito” inicial de la reestructuración capitalista impulsada por los militares, la acumulación encontrará diversos obstáculos en su despliegue. Podemos destacar tres elementos principales. En el plano político 1980 marcó el inicio de un nuevo período de resistencia a la dictadura con la derrota de la reforma constitucional impulsada por los militares. En el plano económico el inicio de una crisis de larga duración (“la década perdida”) cuyo epicentro se dio en 1982 con la mega devaluación del peso en un contexto de fuerte endeudamiento y retracción en las exportaciones. Y en el plano internacional las crecientes presiones que clamaban por el fin de las dictaduras en la región las que, para la estrategia de Estados Unidos, ya habían cumplido su cometido de derrotar a los sectores populares. Así, en noviembre de 1984 en el conocido como “el pacto del Club Naval” se negocia entre militares y partidos políticos la transición “armónica” y “sin revanchas” del régimen militar con elecciones “abiertas” (con candidatos y partidos proscriptos).

En las dos décadas posteriores, los cuatro gobiernos pos-dictadura (1985-2005) no harán sino profundizar la agenda programática iniciada durante la dictadura. Las ofensivas más importantes se producirán en la década del 90 de la mano del “Consenso de Washington”. Esta ofensiva implicó la no convocatoria a los consejos de salario entre 1990 y 2005, la apertura comercial con la firma del MERCOSUR, la reforma y privatización parcial de la seguridad social con la creación en 1996 de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs) y sendos ajustes fiscales en 1990, 1995 y 2000-2002 que elevaron los impuestos al consumo y a los sueldos. Asimismo se intentaron privatizar las empresas públicas y eliminar monopolios estatales (luz, agua, refinación de petróleo, telefonía), iniciativas frenadas por la resistencia popular a través de plebiscitos, no obstante lo cual se privatizó parcialmente la aerolínea de bandera y se desregularon sectores como los correos y los seguros (Olesker, 2001). Estas políticas mantuvieron condiciones para la acumulación de capital hasta 1998 y, una vez llegada la crisis del período 1999-2002, descargaron el mayor peso del ajuste sobre los trabajadores.

Este período se caracterizó por la primacía de la inversión privada, y dentro de esta de la inversión extranjera indirecta ligada al ingreso de importantes flujos de capital especulativo al sector financiero (inversión en cartera) y en menor medida de inversión directa focalizada en sectores como la forestación y el transporte. Por el contrario la inversión privada interna se vio afectada por el proceso de apertura y desregulación comercial que, sumado al atraso cambiario (tasas de devaluación del peso inferiores a las tasas de

inflación), redujeron la rentabilidad de los capitales vinculados al mercado interno. La llegada del capital especulativo se favoreció con políticas públicas como el secreto bancario y la elevación de las tasas de interés, y la del capital productivo con leyes como la Ley Forestal (1987) que estableció subsidios y exoneraciones tributarias a las plantaciones forestales; la Ley de Zonas Francas (1987) que promovió inversiones y exportaciones a través de un régimen de exoneración tributaria total; la Ley N° 16.223 de 1991 que redujo el plazo mínimo para el arrendamiento de tierras a un año; la Ley de Puertos (1992) que estableció el régimen de puertos libres; la ley de Seguridad Social (1996) que creó un sistema previsional mixto (público y privado) con una importante participación de capitales privados a través de las AFAPs; la Ley del “Marco Regulatorio de la Energía” (1997) que generó un mercado para la producción privada de energía eléctrica; y la Ley de Promoción y Protección de Inversiones (1998) que otorgó beneficios fiscales a las inversiones privadas.

La recuperación democrática detuvo la caída del salario real registrada en la dictadura pero mantuvo los niveles de desvalorización de la fuerza de trabajo. A pesar de un leve crecimiento del salario real entre 1985 y 1989 que recuperó lo perdido por la crisis de 1982, durante la década del 90 la desregulación del mercado laboral junto con la destrucción de parte del aparato productivo generarán condiciones sumamente adversas para los trabajadores. El período 1990 – 2003 se caracterizará por el incremento de la población obrera sobrante, la precariedad laboral y la informalidad, incrementando el ejército industrial de reserva necesario para mantener los salarios deprimidos y llevando la afiliación sindical a niveles mínimos (cerca del 10%). Estos fenómenos se tradujeron en un importante flujo de emigrantes económicos (hacia España y Estados Unidos), estimado en términos netos en 207.000 personas para el período 1985-2004 (Pelegriño y Vigorito, 2003), así como en el incremento en los niveles de pobreza⁵ y desempleo con un pico de 17% en 2002 equivalente a 211.300 personas (INE, 2016).

En el período pos-dictadura se profundizó aún más la especialización productiva agroexportadora, en un contexto de crecimiento económico hasta 1998 con recomposición interna del PBI. Durante estos años cayó la participación del sector agropecuario e industrial en el producto y crecieron los

5 Según la metodología de la CEPAL mientras en la década del 90 la población bajo la línea de pobreza osciló alrededor del 10%, en 2004 alcanzó el 21,2 de la población (CEPALSTAT, 2016). Por su parte según la metodología 2006 del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, la población bajo la línea de pobreza alcanzó un pico de 39,9% en 2004 (INE, 2016).

servicios vinculados a la intermediación productiva regional (transporte, comunicaciones y la banca). Se consolidaron los sectores exportadores no tradicionales impulsados en la dictadura como la lechería, la citricultura y el arroz, la ganadería superó un estancamiento en los índices de productividad de casi 80 años, y se expandió el sector forestal de la mano de capital extranjero estimulado por la política de exoneraciones tributarias y subsidios. Por el contrario, sectores orientados al mercado interno o regional como el textil sufrieron una fuerte retracción, profundizando la desestructuración del entramado industrial no vinculado con las cadenas agro-exportadoras (Olesker, 2001).

2. 2005-2015: la década progresista⁶

La época progresista es hija de dos procesos concatenados. El primero fue la severa crisis económica del período 1998-2002 que reconfiguró el mapa político con el que Uruguay ingresó al siglo XXI. En esos años el PBI cayó un 15%, las exportaciones se redujeron un 33% en dólares corrientes y el salario real se retrajo un 22% si tomamos el período 1998-2004, año en que el salario real alcanzó su segundo peor nivel en el período 1973-2015. Este descalabro socio-económico aceleró la victoria electoral del Frente Amplio en octubre de 2004 con el 50,5% de los votos obteniendo mayoría simple en ambas cámaras del Parlamento. En simultáneo, se hundió electoralmente el Partido Colorado, el partido tradicional que gobernó con escasas interrupciones desde que Uruguay se independizó en 1830, al tiempo que la derecha política en su conjunto quedó profundamente desacreditada.

El segundo proceso fue el escenario económico extraordinario a nivel internacional que, de la mano de altos precios de las *commodities* que incrementaron la masa de renta de la tierra apropiada nacionalmente y de alta liquidez internacional de capital que llegó a valorizarse a Uruguay, posibilitó un ciclo de altas tasas de crecimiento del PBI junto con una significativa elevación del salario real, caída de la pobreza y del desempleo.

En este sentido el “progresismo oriental” expresó un nuevo pacto distributivo entre las clases sociales que modificó parcialmente la distribución del valor entre capital y trabajo con respecto a los años precedentes, generando de forma simultánea condiciones para la acumulación de capital y para la mejora de los ingresos de la clase trabajadora. El progresismo combinó así conservación y cambio. Conservación del “núcleo duro” de la forma de

6 Salvo que se aclare, las cifras surgen del Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central del Uruguay (BCU, 2016) y de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2016).

valorizar capital caracterizada por una inserción en la división internacional del trabajo como proveedores de materias primas y alimentos bajo propiedad exclusiva del capital privado, y reversión de la tendencia a la desvalorización de la fuerza de trabajo elevando los ingresos de los trabajadores.

La bonanza económica se expresó en tasas de crecimiento del PBI de 5% promedio anual, con niveles siempre por encima del 3% anual con excepción de 2015 cuando el PBI creció apenas un 1%, tasas que contrastan con el 2,1% promedio de crecimiento de la economía en el período 1973-2004.

Este crecimiento estuvo asociado al incremento en las tasas de inversión anual y al incremento en el flujo de renta de la tierra apropiada nacionalmente. La inversión, medida a través del peso en el PBI de la formación bruta de capital fijo, pasó de un promedio de 16,6% en el período 1973-2004 a un promedio de 20,3% en el período 2005-2015. El componente que marcó la diferencia en términos históricos fue el salto en nivel de IED⁷. De 2005 a 2014 la IED creció de 847 a 2.187 millones de dólares con un pico de 3.032 millones en 2013. Del total invertido en ese rango de años, 19.853 millones de dólares, 61,4% correspondió a aportes de capital, 26,5% a reinversión de utilidades y 12,1% a préstamos netos, lo que da cuenta de la relevancia de la plusvalía acumulada fuera del Uruguay en la inversión total. Para tener una idea de la magnitud de la IED, baste señalar que en el período 1983-2004 su peso en el PBI fue de un 0,8%, mientras que en el período 2005-2014 ascendió a casi el 6%, cifra que prácticamente duplica el promedio para América Latina en igual período (CEPAL, 2015).

En el caso de la renta de la tierra agraria, Oyhantçabal y Sanguinetti (2016) estimaron que de 2000 a 2014 la masa de renta apropiada por los terratenientes (dueños del suelo sean o no capitalistas agrarios) se multiplicó por 4 pasando en moneda constante de 5.520 a 21.820 millones de pesos de 2005. Estas cifras no incluyen la masa de renta apropiada a través de la sobrevaluación del tipo de cambio, por lo que la magnitud absoluta es mayor aún.

Importa mencionar también el rol de la deuda en el período. Entre 2005 y 2015 la deuda bruta del sector público pasó de 14.787 a 31.390 millones de dólares, incremento absoluto que no obstante redujo su peso relativo en el PBI de 85,2% a 58,7% dado el mayor crecimiento del producto. Asimismo-

7 El resto fue inversión privada interna en un contexto de mejores condiciones para la acumulación privada y de mayor prioridad dada a la inversión pública que pasó de 3,6% del PBI en el período 1994-2004 a 4,2% del PBI durante la década progresista.

mo, cambió parcialmente su perfil en tanto se incrementó la participación del endeudamiento en moneda nacional por sobre el endeudamiento en dólares, se incrementaron los plazos promedio de vencimiento de la deuda y se sustituyeron acreedores internacionales por acreedores privados. El incremento del endeudamiento se utilizó fundamentalmente para pagar intereses y amortizar deuda pasada en tanto el superávit primario anual siempre fue insuficiente para cumplir con las obligaciones contraídas (Alonso, 2014).

Este dinamismo económico fue impulsado por un conjunto de políticas que aprovecharon el contexto externo para relanzar la acumulación de capital. Destacan en particular la orientación general de las políticas macroeconómicas y la construcción de un andamiaje legislativo en parte heredado del período 1985-2005 y en parte impulsado por el Frente Amplio. En el primer grupo se encuentran las políticas centradas en la contención de la inflación (hasta fines de 2015 siempre se mantuvo en un dígito); la administración de un tipo de cambio flexible; la reducción del déficit fiscal posibilitado por la simplificación del sistema tributario, la reducción de la evasión impositiva y el incremento de la recaudación en contexto de crecimiento económico; y una gestión de la deuda orientada por las pautas antes mencionadas que permitió el acceso casi sin restricciones al endeudamiento externo e interno.

Por su parte, en materia legislativa el FA prácticamente no eliminó ninguna de las leyes señeras del período neoliberal, más bien estas fueron palanca de la acumulación de capital registrada en el período, como son el caso de la Ley Forestal, la Ley de Zonas Francas, la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, la Ley del “Marco Regulatorio de la Energía” y la ley que creó las AFAPs. Asimismo, durante sus primeras dos administraciones, el Frente Amplio aprobó leyes orientadas a atraer a los inversores. Destaca la reducción en el impuesto a las ganancias empresariales de 30% a 25% en 2007 en el contexto de la reforma tributaria aprobada ese año, la ley de Participación Público Privada (PPP) de 2011 que promueve los contratos entre el Estado y el sector privado para obras de infraestructura y prestación de servicios⁸, y la ley de Minería de Gran Porte de 2013 que regula y orienta los emprendimientos de mega-minería metálica a cielo abierto.

8 Los primeros proyectos impulsados bajo esta modalidad fueron la construcción de la Unidad Personas Privadas de Libertad (cárcel) número 1 y los corredores viales en las rutas 21 y 24. En 2015, la tercera administración del FA anunció una inversión en infraestructura en el período 2015-2019 de unos 12.000 millones de dólares, de los cuales un tercio se financiaría por agentes privados a través entre otros del mecanismo PPP (Castillo, 2016).

Sin embargo como mencionamos el FA también expresó rupturas. El elemento descollante de la década fue la reversión de la tendencia a la desvalorización de la fuerza de trabajo que se evidencia en el incremento del salario real en un 53,9% de 2004 a 2015, y en un 18,3% con respecto a 1999, año del comienzo de la crisis. A esto se sumó la reducción del desempleo a un mínimo de 6,3% en 2011 (en 2002 llegó a 17%); la reducción del subempleo de 17% a 7% y de la informalidad de 38% a 28%, siendo que los puestos cotizantes a la seguridad social pasaron de 1 millón a 1,48 millones entre 2006 y 2015 (BPS, 2016). Por su parte, en 2014 el porcentaje de población bajo la línea de pobreza medida por la CEPAL llegó a 4,5%, y medida por la metodología 2006 del INE llegó al 10,1%, implicando una reducción de 16 puntos en el primer caso y de 29 puntos en el segundo (CEPALSTAT, 2016; INE, 2016).

A la mejora salarial se le sumó el incremento del gasto público social, fundamentalmente salario indirecto provisto por el Estado, que se elevó un 91% en términos reales entre 2004 y 2012, pasando de representar del 22,8% al 25,2% del PBI y del 65,7% al 75,4% del presupuesto nacional total (lo que se conoce como las prioridades macroeconómica y fiscal)⁹. Si se analiza la distribución del gasto público social en 2012, se observa que 50% se destina a seguridad social, 24% a salud, 18% a educación, 6% a vivienda y 2% a otros usos (MIDES, 2014).

Estas mejoras fueron posibles por los altos niveles de crecimiento económico propiciados por el contexto externo. Sin embargo, también hay que destacar las políticas que desde el Estado incrementaron la regulación del conflicto capital-trabajo y atenuaron los niveles de pauperización de la población obrera sobrante. En materia laboral se convocó a los consejos de salario (no convocados desde 1990) estableciendo pautas orientadas a recuperar la pérdida salarial del período 1999-2002 y a mejorar las condiciones de trabajo; se incrementó el salario mínimo nacional de 2.050 a 11.500 pesos uruguayos de 2005 a 2016 (una mejora real del 140,5%); se aprobaron leyes para proteger a los trabajadores del sector privado más sumergidos (trabajadoras domésticas y los asalariados rurales); se aprobaron la Ley de Libertad Sindical (2005) que incrementó la protección de la actividad sindical, una nueva Ley de Negociación Colectiva (2009) que estableció la convocatoria

9 Este incremento estuvo asociado a la suba en la presión tributaria de 21,6% en el 2000 a 27% en el 2014, bastante por encima del promedio de Latinoamérica que en 2014 se ubicaba en 21,7%, pero por detrás de Argentina (30,6%) y Brasil (33,6%) (OCDE, 2016).

obligatoria a los consejos de salarios, y la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial (2014) que penaliza hasta con prisión a aquellos empresarios que incumplen las normativas de seguridad laboral. Todas estas medidas colaboraron en elevar la tasa de afiliación sindical a un 40% del total de asalariados (400.000 trabajadores), cuatro veces más que a comienzos del 2000.

En materia de protección social y políticas de transferencia de ingreso, en 2005 se crearon el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social (PANES) y el Programa de Ingreso Ciudadano a través de los cuales implementaron políticas focalizadas en la reducción de la pobreza y la indigencia. Entre ellas destaca el Ingreso Ciudadano (transferencia monetaria directa), la Tarjeta Alimentaria, el proyecto Uruguay Trabaja, la creación por ley de las cooperativas sociales, y la expansión del gasto en el programa de Asignaciones Familiares para niños y adolescentes que se multiplicó por 1,8 entre 2005 y 2014 en moneda constante (BPS, 2016).

3. Balance y perspectiva: ¿paréntesis o superación?

Es significativo que durante la década progresista no se alteró en lo más mínimo la tendencia al incremento de la propiedad privada de una producción cada vez más socializada, dejando intactos los principales resortes del poder económico. Se acentuó la extranjerización de los principales medios de producción, fundamentalmente en el sector agroindustrial, incrementando el flujo de ganancias remitidas hacia el exterior que pasaron de 494 a 2.124 millones de dólares entre 2005 y 2015. A esto se sumó que el pago de intereses de la deuda (interna y externa) siguió operando como mecanismo de transferencia de excedentes hacia sus acreedores limitando el espacio fiscal.

El control de la tierra, medio de producción por excelencia del proceso económico nacional, no se desprivatizó, al tiempo que entre 2000 y 2011 las personas jurídicas (fundamentalmente sociedades anónimas) pasaron de controlar del 1% al 43% de la superficie productiva, apropiándose de 7 millones de hectáreas (DIEA, 2014). Asimismo el proceso de desnacionalización puede observarse en varios sectores agroindustriales como la agricultura de secano, el complejo forestal, el cárnico, el arrocero y el de la cebada. Esto se expresa en la fuerte extranjerización de la estructura exportadora, a lo que se suma la propiedad extranjera de la totalidad de la banca privada, lo que debe complementarse con el hecho de que en 2010 la banca extranjera era propietaria del 50% de los activos de la industria (Santos et al., 2013).

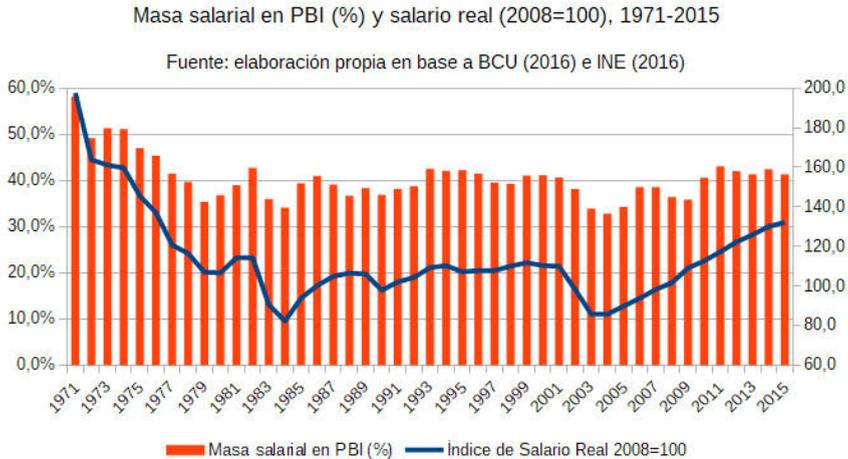
La modalidad predominante de acumulación acentuó una estructura económica primarizada especializada en la producción de bienes agroindustriales de bajo valor agregado que se realizan en el mercado mundial. El perfil de las exportaciones muestra que cerca del 70% de los productos son *commodities* de origen agropecuario o agroindustrial, encabezados por la soja, la carne bovina, el arroz, el trigo, derivados de la leche y pasta de celulosa, al tiempo que en materia comercial, la principal novedad del período fue la aparición de China que pasó a ser el principal socio comercial del país en 2013. Por su parte, las importaciones tienen un claro sesgo hacia bienes industriales de media a alta tecnología: autos y autopartes, teléfonos, insecticidas y máquinas automáticas. Al dinamismo del sector externo, se la suman otros volcados al mercado interno como las telecomunicaciones, el transporte y la construcción, esta última dinamizada tanto por sectores productivos (plantas de celulosa) como por la construcción inmobiliaria que canaliza capitales argentinos y ahorro interno. En ambos casos es muy factible que buena parte de estos capitales sean renta de la tierra agraria que se atesora en edificios.

En materia de distribución funcional del ingreso el resultado es ambiguo. Si bien es cierto que la suba del salario real junto con el incremento del nivel de actividad elevaron la participación de los salarios en el PBI (en moneda corriente) de 34% en 2005 a un máximo de 43% en 2014¹⁰, si se analiza el peso de la masa salarial en el producto por grandes períodos se observa que de 1973 a 1984 (dictadura) fue de 37,2%, de 1985 a 2004 (democracias neoliberales) de 35,6% y de 2005 a 2015 (progresismo) de 39,8%, es decir que a pesar de la mejora relativa no se está ante una subversión radical en la distribución del producto entre las clases¹¹. Al mismo

10 Las cifras incluyen las contribuciones sociales de los empleadores (aportes patronales). Hasta 2005 se cuenta con datos de las Cuentas Nacionales (BCU, 2016). De 2006 a 2011 hay una serie estimada por Burdin et al. (2014) y de 2012 a 2015 es una estimación propia realizada a partir de la serie de Burdin ajustada por índice medio de salarios y nivel de actividad (INE, 2016).

11 Desde una conceptualización que discrimina categorías ocupacionales, Giometti (2015) obtiene que los sectores populares activos e inactivos pasaron de controlar del 25,5% al 30,8% del PBI entre 2004 y 2013, pero aún se encontraban por debajo del 32,3% alcanzado en 2001. Incluyendo a los trabajadores en posiciones de clase contradictorias (gerentes, pequeña burguesía, profesionales liberales), se eleva el nivel en unos 6 puntos porcentuales pero la tendencia es la misma.

tiempo hay que notar que el poder de compra de los salarios en 2015 aún estaba 33% por debajo de su nivel en 1971 (el nivel más alto desde que comenzó a implementarse la Encuesta de Hogares en 1968) (Gráfica 1).



Otra forma de aproximarse a la distribución del ingreso generado anualmente es mediante el índice de Gini. Este muestra una tendencia decreciente desde 2006 pasando de 0,455 a 0,386, evidenciando una disminución en la desigualdad de ingresos. Sin embargo, como ha señalado Notaro (2011), en tanto el indicador se construye a partir de la encuesta de hogares contiene entre otros problemas la no declaración de ingresos de los no-residentes y la subdeclaración de los sectores de altos ingresos. Burdin et al. (2014) corrigen parcialmente esta deficiencia trabajando en base a microdatos de la oficina tributaria (DGI) obteniendo para los años 2009, 2010 y 2011 que el índice aumenta casi 10 puntos con respecto al del INE y que para esos años prácticamente no se modifica la distribución. Estos mismos autores también calcularon la proporción del ingreso captada por el 1% más rico, obteniendo que en 2014 apropiaban 14,1% del ingreso total y 65,9% del ingreso del capital, mientras el decil más pobre apropiaba solamente el 0,6% del ingreso total.

En definitiva, del análisis realizado no se desprende que la etapa progresista haya alterado sustancialmente las bases de la forma de valorizar capital con la cual Uruguay se inserta en la acumulación mundial de capital. Ni el tipo de mercancías que produce para el mercado mundial, ni la propiedad de los grandes medios de producción ni la distribución del in-

greso entre las clases sociales sufrieron modificaciones significativas. Más bien, lo que de forma bastante ambigua llamamos progresismo, sería una forma *sui generis* y transitoria de valorizar capital en la periferia que nace de la crisis de los gobiernos neoliberales y cuyo rasgo distintivo es que permitió incrementar el valor de la fuerza de trabajo, pero que se sustenta en bases materiales sumamente endeble en la medida que depende de condiciones externas al proceso económico nacional.

Este diagnóstico no desconoce la mejora objetiva en las condiciones de reproducción de clase trabajadora acaecida durante la última década, ni tampoco pretende que una economía diminuta y periférica en el orden global pueda por simple voluntad de sus gobernantes modificar su inserción en la economía mundial y obtener los niveles de productividad del capitalismo central.

Por el contrario, implica ser conscientes que las transformaciones ocurridas fueron hijas de un escenario económico extraordinario (altos niveles de renta de la tierra y de capital sobreacumulado) que empieza a retirarse a pasos acelerados en el continente socavando las premisas que hicieron posible la bonanza progresista que permitió elevar salarios y tasas de ganancia. El descenso en el precio de las *commodities*, la desaceleración y/o recesión económica de los principales socios comerciales de Uruguay (China, Argentina y Brasil) y la reducción del flujo de IED vinculada a la elevación en las tasas de interés se están haciendo sentir. En 2015 la economía uruguaya creció apenas un 1%, se detuvo el crecimiento del salario real y las pautas del gobierno en los consejos de salario ni siquiera garantizan el mantenimiento del poder de compra, el desempleo trepó de 6% a 8% y por primera vez en 10 años creció levemente la población bajo la línea de pobreza (de 10,1% a 10,4%). Todo esto no hace sino afectar la estabilidad, y la legitimidad, del pacto distributivo progresista incrementando la presión del capital para desvalorizar la fuerza de trabajo y congelar el gasto público.

Por eso, más que llorar sobre la leche derramada y lamentarse por las oportunidades desaprovechadas por un progresismo que nunca pensó en la posibilidad de alterar el pacto de clases a favor de los trabajadores, por ejemplo avanzando en la apropiación de renta de la tierra o modificando su política de endeudamiento, de lo que se trata es de idear alternativas políticas que pongan sobre la mesa un programa que enfrente la ofensiva del capital. Se trata, ni más ni menos, de reconfigurar el bloque en el poder para avanzar, sin prisa pero sin pausa, hacia un orden social regido por la pública felicidad.

Bibliografía

- Alonso, R. Documento de trabajo: apuntes para pensar la deuda pública en Uruguay. Foz do Iguazú. Inédito, 2014.
- BCU (Banco Central del Uruguay). 2016. Estadísticas y estudios: inversión extranjera directa. Consulta 9/5/16. Disponible en <http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Default.aspx> (último acceso: 1/6/2017).
- BPS (Banco de Previsión Social). 2016. Prestaciones de actividad 2015. Montevideo, BPS. Disponible en: <http://www.bps.gub.uy/bps/file/9910/1/prestaciones-de-actividad-2015.pdf> (último acceso: 11/5/2016).
- Burdín, G. / Esponda, F. / Vigorito, A. Desigualdad y altos ingresos en Uruguay: un análisis en base a registros tributarios y encuestas de hogares para el período 2009-2011. Informe final. Montevideo: IECON-CEPAL-CEF-AECID, 2014.
- Castillo, J. “¿Recursos frescos o privatización encubierta?”. En: *Brecha* (31/3/2016).
- CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Disponible en: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp (último acceso: 6/5/2016).
- CEPAL. *La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: CEPAL, 2015.
- DIEA (Dirección de Estadística Agropecuaria). Censo General Agropecuario 2000. Resultados definitivos Tomo II. Montevideo: DIEA-Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 2003.
- DIEA (Dirección de Estadística Agropecuaria). Censo General Agropecuario 2011. Resultados definitivos. Montevideo, DIEA-Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 2014.
- INE (Instituto Nacional de Estadística). Serie de estadísticas. Disponible en: <http://www.ine.gub.uy/> (último acceso: 1/5/2016).
- Instituto de Economía, *El proceso económico del Uruguay*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1969.
- Finch, H, *La economía política del Uruguay contemporáneo. 1870-2000*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2005.
- Fleitas S. / Román C., “Evolución de la población económicamente activa en el siglo XX: un análisis de la estructura por sexo, edad y generaciones”. En: *Boletín de Historia económica* VIII/9 (2010).

- Giometti, G., “Evolución de los ingresos de los sectores populares entre 2001 y 2013”. Montevideo, Jornada de Economía Crítica de Uruguay, 2015.
- MIDES (Ministerio de Desarrollo Social). Identificación y análisis del Gasto Público Social en Uruguay 1989-2012. Montevideo: MIDES. Presentación 59 diapositivas. Disponible en: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/27003/1/presentacion-gps_30-junio-2014.pdf (último acceso: 10/5/2016).
- MOxLAD. Base de Datos de Historia Económica de América Latina Montevideo-Oxford. Series para Uruguay. Disponible en: <http://moxlad-staging.herokuapp.com/home/es#> (último acceso: 6/5/2016).
- Notaro, J., “Estrategia de desarrollo, política económica y actores sociales. Uruguay 1968-1984”. En: *Boletín de Historia económica* VIII/9 (2010), pp. 31-40.
- , *La distribución social del ingreso y la riqueza en el Uruguay. Diagnóstico y propuestas*. Montevideo, Instituto de Economía-FCEA. Serie Avances de Investigación, 2011.
- OCDE. Estadísticas tributaria en América Latina y el Caribe. Disponible en: <http://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean-24104736.htm> (último acceso: 10/5/2016).
- Olesker, D., *Crecimiento y exclusión: nacimiento, consolidación y crisis del modelo de acumulación capitalista en Uruguay (1968-2000)*. Montevideo: Trilce, 2001.
- Oyhantçabal, G. /Sanguinetti, M., *Distribución del valor agropecuario en el Uruguay 2000 – 2015 (en preparación)*, 2016.
- Pellegrino A. / Vigorito A., *La emigración uruguaya durante la crisis de 2002*. Montevideo: Instituto de Economía-Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Serie Documento de Trabajo 03/05. Disponible en: <http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-03-05-la-emigracion-uruguay-durante-la-crisis-de-2002/publicacion/83/es/bs/> (último acceso: 6/5/2016).
- Santos, C. / Oyhantçabal G. / Narbondo I. /Gutiérrez, R., “Seis tesis sobre el neodesarrollismo en Uruguay”. En: *Contrapunto* 2 (2013)

El gobierno de Fernando Lugo y el golpe de Estado de 2012: luchas, cambios, continuidades y aprendizajes

Cecilia Vuyk

La victoria popular del 2008 y el ascenso de Fernando Lugo al gobierno nacional constituyó un hito en la historia paraguaya, representando la derrota del Partido Colorado¹ tras 61 años de gobierno ininterrumpido, el primer cambio de signo político por vía electoral y el primer gobierno con participación protagónica de sectores populares.

Ese hito es producto de la acumulación de fuerzas de la clase trabajadora, de un desgaste del Partido Colorado por la crisis política y económica -acrecentada por su disputa interna-, un ambiente internacional favorable, y una alianza política entre fuerzas de los sectores populares y organizaciones políticas y sociales de facciones de la burguesía terrateniente, comercial y financiera, cuyos intereses se encontraban amenazados por la continuidad del Partido Colorado.

El descontento generalizado con el Partido Colorado se consolidó en una alternativa unitaria con la acción de varias fuerzas políticas y la emergencia del liderazgo articulador del ex obispo Fernando Lugo. La Alianza Patriótica para el Cambio, integrada por el Partido Liberal Radical Autén-

1 La Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, es un partido latifundista fundado tras la Guerra Grande (1865-1870) por un sector de la burguesía nacional aliada al Brasil, en el marco del proceso de recolonización nacional. El Partido cuenta con una amplia base popular, y desde 1947 se encontraba ininterrumpidamente en el poder, como partido de gobierno y responsable tanto de la dictadura militar (1954-1989) como de la transición democrática tras el autogolpe de Estado realizado en 1989 por los mismos socios del dictador Alfredo Stroessner para preservar sus intereses de clase ante un inminente levantamiento popular.

tico² y un amplio espectro de partidos políticos y organizaciones políticas y sociales –articuladas en su mayoría hoy, en 2015, en el Frente Guasu³-, logró una amplia victoria electoral el 20 de abril del 2008, iniciando el gobierno que terminaría con el golpe de Estado.

La disputa en torno a la dirección del gobierno

El gobierno de Lugo estuvo marcado por la disputa de la dirección. Por un lado, estaban los sectores de la burguesía –encabezados por los gremios de la producción vinculados a la ganadería y la soja-, el gobernante Partido Liberal y los partidos latifundistas a través de su mayoría en el Congreso Nacional (ANR, PLRA, UNACE y PPQ⁴); por otro, la clase trabajadora y –principalmente- el movimiento campesino, actor protagónico del movimiento popular paraguayo. El primer año de gobierno ambos sectores realizaron una serie de medidas de fuerza como marchas, amenazas de juicio político y tractorazos por parte de los gremios de la producción; y ocupaciones de tierra y masivas movilizaciones por parte del campesinado.

Tras un año de tensiones y disputas, se consolidaron los bloques de poder dentro del gobierno, con las principales carteras de Estado dirigidas

2 PLRA, conocido como Partido Liberal, es un partido latifundista fundado por la influencia argentina –vinculada al imperialismo inglés- tras la Guerra Grande luego de la fundación del Partido Colorado, en el marco de la disputa inter burguesa por la repartija de las tierras públicas en el país.

3 “Frente Guasu” en guaraní, significa Frente Amplio o Frente Grande, es una articulación de partidos de izquierda que se encontraban en su mayoría en la Alianza Patriótica para el Cambio y que en marzo 2010 lanzan la concertación política como espacio de unidad. Articuló en sus inicios a 20 partidos y movimientos. Tras el desprendimiento de un sector luego del golpe de Estado –consolidado hoy en la concertación Avanza País-, el Frente Guasu articula a 10 partidos y movimientos políticos y es la tercera fuerza electoral a nivel país.

4 La Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) es un desprendimiento de la ANR creado en 1999 vinculado a sectores militares, terratenientes y grandes comerciantes, dirigido por el Gral. Lino Oviedo (hoy fallecido en circunstancias aún no aclaradas en el periodo de la campaña electoral donde éste disputada la presidencia a Horacio Cartes). El Partido Patria Querida (PPQ) es un partido creado en el 2003 por un sector de la burguesía terrateniente, industrial y financiera con un proyecto de modernización nacional, que actualmente no cuenta con representación parlamentaria.

por los partidos latifundistas y de la burguesía (Hacienda, Agricultura, Industria, Interior, Obras Públicas, Justicia y Trabajo, Educación, entre otros) y otra importante parte de las mismas por los sectores vinculados a las clases populares, articulados principalmente en el Frente Guasu (Salud, Relaciones Exteriores, Defensa, Acción Social, Niñez, Vivienda y Hábitat, Juventud, Comunicaciones, Emergencia Nacional).

La burguesía logra durante ese primer año frenar medidas planteadas por el gobierno Lugo –en su mayoría, impulsadas a partir de la presión de las organizaciones populares- que marcaban una transferencia de poder al pueblo y tocaban intereses de los terratenientes: el inicio de la Reforma Agraria con protagonismo campesino vinculante (CEPRA⁵), el acopio de sésamo por parte de las propias organizaciones campesinas con apoyo del Estado, la reglamentación y control del uso de agroquímicos⁶, la instalación de mecanismos de participación vinculante de las organizaciones comunitarias en las políticas sociales⁷, la compra de tierras para la reforma agraria, el freno a las mafias de las industrias farmacéuticas⁸, el nombramiento de una cacique indígena de izquierda al frente de la cartera indígena⁹, entre otros.

Por otro lado, el gobierno de Lugo impulsó otras medidas más favorables a un proyecto soberano y a los sectores populares que sí lograron prevalecer: la no ampliación de la deuda externa, el cese de los ejercicios militares norteamericanos en territorio paraguayo, el fomento a la integra-

5 La Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria fue una conquista de la movilización campesina al inicio del gobierno de Lugo en agosto 2008. A través del Decreto 838/2008 se creó un órgano gubernamental con participación de organizaciones campesinas de manera vinculante para el desarrollo de la reforma agraria, con regularización de tierras, fomento a la producción y mejora de la calidad de vida en las comunidades campesinas.

6 Decreto 1937/2009, posteriormente derogado en julio de dicho año.

7 Mesas de Participación Social del Programa Tekoporã de la Secretaría de Acción Social, posteriormente eliminadas y reemplazadas por Mesas de Participación Ciudadanas no vinculantes.

8 Proceso iniciado por la nueva Directora de la II Región Sanitaria, la Dra. Raquel Rodríguez, con apoyo de las organizaciones sociales de la zona. Tras la presión de los intendentes de la zona y de un grupo de médicos vinculados, el gobierno destituye a la Directora.

9 Destitución de Margarita Mbywangi, líder ache, de la Presidencia del Instituto Nacional del Indígena (INDI) en diciembre de 2008.

ción latinoamericana y la ampliación de las políticas sociales a nivel nacional. Asimismo, los sectores populares lograron, a partir de la presión, que el gobierno frene el proyecto de privatización del aeropuerto, inicialmente impulsado por Lugo con la cartera de Obras Públicas dirigida por un referente del partido latifundista de co-gobierno PLRA.

Con las acciones arriba descritas, se asentó una gobernabilidad que no tocó en gran medida el esquema de poder de los intereses de los sectores conservadores, que frenaron procesos claves como el de la Reforma Agraria, no sin disputas y tensiones a lo largo del gobierno. Estas disputas se acrecentaron con importantes movilizaciones populares en el último período. Esas movilizaciones no fueron contenidas por el gobierno de Lugo, lo cual llevó eventualmente al golpe de Estado perpetrado por la burguesía y el imperialismo, como se analizará más adelante.

La gestión del gobierno de Lugo, marcada por distintas líneas políticas y de gestión acorde al sector que dirigía cada cartera de Estado, consolida un discurso y una práctica que podemos caracterizar de neodesarrollista¹⁰, en el marco de los gobiernos progresistas de la región. Analizaremos a continuación los principales ejes del gobierno, en un esfuerzo de síntesis de los puntos principales, analizando en un apartado especial la relación del mismo con el subimperialismo brasileño, expresión éste del límite del neodesarrollismo tanto en Paraguay como en Brasil y América Latina.

Los ejes centrales del gobierno de Fernando Lugo

Políticas sociales redistributivas y gratuidad de la salud y educación

Uno de los ejes centrales del gobierno de Fernando Lugo fue la ampliación de las políticas sociales, con el planteo de “revertir la deuda social histórica con los sectores excluidos”.

10 Caracterizo al neodesarrollismo como la expresión del reformismo en la actualidad: una política que sostiene la posibilidad de un desarrollo capitalista pleno en la periferia, con una cierta autonomía de los centros, a partir de la asociación del Estado con los capitales extranjeros fortaleciendo el desarrollo de los capitales y monopolios nacionales y extranjeros asentados en el país, tanto para el mercado interno como principalmente para el externo, generando una burguesía local asociada al capital internacional. Son acompañadas de políticas sociales redistributivas que permiten generar adhesión de las masas y mitigar los efectos de la profundización de la dependencia. Conciben al Estado como mediador y gestor del pacto social.

Tekoporã (“vivir bien”) fue uno de los programas principales. El mismo consiste en la política propiciada por el Banco Mundial de transferencia monetaria condicionada (TMC). La misma fue iniciada en el gobierno anterior, y pasó de 13.000 familias beneficiarias a más de 100.000 a nivel país. Asimismo, el gobierno instituyó las pensiones a los adultos de tercera edad en situación de pobreza, y amplió la cobertura de programas de atención a la niñez, la juventud y los pueblos indígenas.

En diciembre 2009, el gobierno de Lugo aprueba la gratuidad de la salud, eliminando los aranceles a las consultas, los servicios y una gran mayoría de los medicamentos en las instalaciones de salud pública con un ahorro de 8.000 millones de guaraníes a la ciudadanía. Expandió la estrategia de Atención Primaria a la Salud pasando de 13 Unidades de Salud de Familia (USF) a más de 700. Y en agosto del 2010 logra la aprobación de la Ley 4088/10 que declara gratuita y obligatoria la educación inicial y de la educación media, en las escuelas públicas.

Reforma del Estado

La “necesidad de recuperar al Estado del predominio y lógica del mercado” (Lugo, 2011) fue otro de los ejes del gobierno. Esto promovió cambios dentro de la estructura del Estado apuntando a su institucionalización y fortalecimiento.

Junto con un discurso de recuperación y reivindicación de lo público como un patrimonio de toda la ciudadanía y no la propiedad privada de los gestores del gobierno de turno, fomentó el ingreso a puestos dentro al gobierno a través de concursos de mérito y una política de profesionalización de la burocracia estatal.

Integración latinoamericana

El posicionamiento del Paraguay en el escenario internacional como un actor político y la priorización de los bloques de integración latinoamericana fue otro de los ejes claves. En el marco de un escenario regional marcado por el avance de gobiernos progresistas¹¹, Lugo asume el gobierno con una política regional que buscaba mayor autonomía del imperialismo nortea-

11 Hugo Chávez en Venezuela (1999), Lula Da Silva (2003) y Dilma Rousseff (2010) en Brasil, Néstor (2003) y Cristina Kirchner (2008) en Argentina, Tabaré Vázquez (2005) y Pepe Mujica (2010) en Uruguay, Evo Morales en Bolivia (2006) y Rafael Correa en Ecuador (2007).

americano a partir del fortalecimiento del bloque regional latinoamericano¹², con el impulso a la UNASUR y la creación de la CELAC.

Paraguay participó activamente de los distintos bloques regionales, así como en el rol de apoyo a la democracia, en especial, dentro de la UNASUR, durante la crisis de Bolivia de 2008 y en Ecuador en 2010. Ejerció la Presidencia Pro Témpace de MERCOSUR (2010-2011) y de UNASUR (2011-2012), impulsó el ingreso de Bolivia y Venezuela como socios plenos al MERCOSUR, fue fundador de la CELAC y promovió posiciones conjuntas en las instancias multilaterales en torno a reivindicaciones regionales históricas como la recuperación de las Islas Malvinas por parte de Argentina y el fin del bloqueo a Cuba.

Continuidad de la estructura económica

Con las acciones arriba descritas y las frenadas por los gremios de la producción vinculados principalmente a la ganadería y la soja, el gobierno de Lugo no logró desarrollar cambios en la estructura económica principalmente agrario-ganadera. La misma se expandió y fortaleció, en el marco de un escenario favorable a la exportación de *commodities*, principalmente la carne vacuna y la soja.

2010 marcó un crecimiento récord del PIB con un 14,5%, principalmente debido al importante avance de la frontera agrícola y el crecimiento de la producción y exportación agro-ganadera. La superficie cultivada de soja pasó de 2.463.510 has en el año 2007/2008 con 3.855.000 toneladas producidas a 3.080.000 has en 2012/2013 con 9.086.000 toneladas producidas, representando un crecimiento de 125% en términos de superficie y 235,7% en términos de volumen (DCEA/MAG, 2014)

En función a las necesidades del mercado externo, el gobierno de Lugo –a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ambas carteras dirigidas por el sectores de la burguesía vinculada al PLRA- promovió e impulsó la industria de la maquila y de las empresas electrointensivas (Vuyk, 2014b), así como la actividad minera (Vuyk, 2014a). De 2008 a 2012 el número de empresas maquiladoras creció de 19 a 51, en su mayoría de origen extranjero, con $\frac{3}{4}$ de sus exportaciones destinadas a Brasil y Argentina. Asimismo, con el Decreto 7406/11 que provee de energía barata a las empresas electrointensivas,

12 Sin embargo, en este marco de disputa contra el imperialismo norteamericano, diversos países del bloque latinoamericano desarrollaron alianzas con otros imperialismos como el ruso y el chino.

se instalaron 4 empresas extranjeras en el país -2 argentinas y 2 brasileñas- para el usufructo de la misma en la producción de carbonato de silicio a ser exportado para la industria aeronaval (principalmente brasileña).

El fomento a la actividad minera -oro, uranio y titanio principalmente- vino principalmente por parte de la oposición en el Congreso Nacional con el cambio de la Ley de Minería en el año 2011, y por el MOPC a través de los permisos de exploración. No hubo un gran debate o atención nacional a esta temática, sin embargo, los avances en la misma han sido importantes, profundizándose -aún más tras el golpe Estado- junto con el avance de la prospección de hidrocarburos (Vuyk, 2014a).

Cuadro. Síntesis de los ejes principales del gobierno de Lugo

Concepción de dependencia	Situación de dependencia histórica del Paraguay desde la colonización. Necesidad de superar dicha dependencia a partir de la consolidación de la integración regional latinoamericana.
Concepción del Estado	Estado como generador del pacto social entre clases y promotor de la igualdad de oportunidades, priorizando a los más excluidos.
Propuesta económica	Mantenimiento de la estructura agro-ganadera. Fomento a la industria maquiladora, electro intensiva y a la explotación minera en función a las necesidades del mercado externo.
Posición ante la lucha de clases	Intentos de propuestas de participación protagónica de las clases oprimidas frenadas por la presión de la burguesía. Mitigación de los conflictos sociales a partir de la masificación de las políticas sociales redistributivas y del pacto social con la clase dominante para gobernar.

Fuente: cuadro elaborado por la autora.

La movilización de masas, la crisis del capital financiero y el golpe de Estado del 2012

El gobierno de Lugo marcó un nuevo escenario político, en el marco del cual se desarrolló un proceso de importante politización en el sector popular y la ciudadanía en general.

En un primer momento luego de la victoria del 2008 y tras la consolidación de la gobernabilidad conservadora, la mayoría de las organizaciones populares concentraron esfuerzos en la gestión institucional y en las

elecciones de los gobiernos locales del 2010 (municipales), lo que no llevó a los resultados esperados.

El reconocimiento del límite de la gestión institucional llevó a un nuevo auge de la movilización popular, que inicia con fuerza en el 2011 con masivas ocupaciones de tierra. En octubre del 2011, tras la constitución de un espacio unitario amplio denominado Coordinadora por la Recuperación de las Tierras Malhabidas –integrada por movimientos campesinos, urbanos, de la periferia, sin techo, estudiantiles, partidos políticos y sindicatos- y una masiva movilización de la misma en Asunción, se logra la aprobación de la reglamentación de la Ley 2532/05 de Seguridad Fronteriza¹³, y se inicia la mensura¹⁴ para la recuperación de tierras ocupadas por terratenientes brasileños en la frontera Este, iniciándose en el distrito de Ñacunday, departamento de Alto Paraná.

Este auge de la movilización popular amenazaba los intereses de la burguesía latifundista aliada al imperialismo al tocar la estructura de la concentración de tierra en el país. La movilización, junto a la necesidad por parte del capital financiero internacional de ampliar políticas de despojo en el país –algunas de ellas frenadas en el gobierno de Lugo, como el caso de la privatización y el endeudamiento analizadas anteriormente-, llevaron a la burguesía local aliada al imperialismo norteamericano y al subimperialismo brasileño a perpetrar un golpe de Estado. El mismo fue gestado a partir del montaje de la masacre sobre la Resistencia de Curuguaty el 15 de junio del 2012. Ese proceso llevó a la destitución del gobierno constitucional de Fernando Lugo el 22 de junio con un juicio político que violó todo debido proceso; el golpe fue consumado con las elecciones generales del 21 de abril del 2013.

El objetivo del golpe fue frenar el proceso de ascenso de la lucha del movimiento popular en el país y fortalecer las políticas de despojo, principalmente el endeudamiento del Estado paraguayo con los capitales financieros internacionales y la concesión de los bienes públicos a los monopolios privados internacionales.

13 La Ley establece una franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional como zona de seguridad, y prohíbe la venta de dichas tierras a extranjeros.

14 La mensura es el procedimiento de medición de una propiedad que permite verificar que sus dimensiones reales coincidan con las que aparecen en el título, y, a partir de ello, identificar excedentes fiscales.

Las acciones desarrolladas tras el golpe de Estado tanto por el gobierno de Federico Franco (PLRA, 22 de junio 2012 – 15 de agosto 2013) como de Horacio Cartes (ANR, 15 de agosto 2013 a la actualidad) lo corroboran.

Los mismo han avanzado en la entrega de soberanía a los monopolios transnacionales a través de la ampliación del latifundio sin control de la propiedad de la tierra¹⁵, el endeudamiento del Estado a través de los llamados bonos soberanos¹⁶, el mantenimiento intacto de los tratados de Itaipú y Yacyreta que conceden el control de la energía paraguaya a Brasil y Argentina, respectivamente, la aprobación de la ley de alianza pública-privada para la concesión de infraestructura y servicios públicos¹⁷, la criminalización y represión del movimiento popular, la violación sistemática de los derechos humanos, el despido de trabajadores del Estado y de dirigente sindicales, la censura de medios públicos y comunitarios, la re privatización de la salud pública, la no aplicación de la gratuidad en la educación media, el avance de la privatización de la educación universitaria, el avance de la industria maquiladora, la explotación minera y de hidrocarburos, y la violación de los derechos laborales, como puntos principales.

15 De la campaña 2011/2012 con 2.920.000 has cultivadas, la producción de soja pasó en la campaña 2013/2014 a 3.500.000 has cultivadas, 120% más. Contemplando los demás commodities como el trigo, girasol, maíz, yerba mate, etc., el crecimiento entre el 2013 y 2015 fue de 5,2%, pasando de 26.004.870 toneladas en la campaña agrícola 2014/2015, frente a 24.715.121 de la campaña 2013/2014, con 5.854.400 hectáreas cultivadas en la campaña 2014/2015 frente a 5.554.400 de la campaña anterior (MAG, en Campo Agropecuario, 2016).

16 Se han realizado a marzo del 2016 cuatro emisiones de bonos soberanos por valor de 2.380 millones de dólares. Detalle (Ministerio de Hacienda, 2016):

Nº	Emisión	Bonos	Ley	Monto
1	1ra Emisión	Bonos 2023	Ley 4.848/13	500 millones USD
2	2da Emisión	Bonos 2044	Ley 5.142/14 y Ley 5.251/14	1.000 millones USD
3	Reapertura	Bonos 2023	Ley 5.386/15	280 millones USD
4	3ra Emisión	Bonos 2026	Ley 5.554/16	600 millones USD
			Total	2.380 millones USD

17 Ley Nº 5.102/13 y Ley Nº 5.567/16, disponibles en: <http://webmail.stp.gov.py/archivos/APP/Ley5.102.pdf> y http://www.stp.gov.py/v1/?wpfb_dl=381.

El caso del subimperialismo brasileño: expresión del límite del neodesarrollismo

En ese marco, un punto que merece una especial atención dentro del estudio del caso paraguayo y latinoamericano es el subimperialismo brasileño. El mismo, como característica propia del desarrollo capitalista del Brasil, expresa la limitación de los proyectos neodesarrollistas que plantean congeniar una política social de búsqueda de superación de los efectos del atraso y la dependencia con la estructura económica capitalista. La necesidad de los capitales subimperialistas de expandirse –y su acción en el marco del golpe de Estado en Paraguay– demuestran la imposibilidad de congeniar ambas propuestas.

Asimismo, la posición de subordinación del Estado paraguayo al subimperialismo brasileño, como se apreció en el gobierno de Lugo, demuestra asimismo esta imposibilidad. El subimperialismo como expresión del límite del neodesarrollismo demuestra la necesidad de la superación de las relaciones de producción capitalistas como único camino real de superación de la dependencia y la subordinación entre nuestros países, y, por ende, la posibilidad de la construcción de una integración regional basada en el desarrollo, la soberanía y la independencia.

Brasil, como economía dependiente, llega a la fase del capital financiero y los monopolios en la década de los '60 (Marini, 1977), siendo Paraguay su primer ejercicio de expansión. Sus principales ejes fueron el endeudamiento de Paraguay con los monopolios financieros –brasileños y de otras potencias extranjeras– y el control de la tierra y la energía paraguaya para la producción de los monopolios brasileños y de otros países asentados en Brasil.

Como consolidación del pacto de las dictaduras militares en la década del 70, se firma en 1973 el Tratado de Itaipú, que sintetiza los tres elementos de la dependencia mencionados: el endeudamiento y el control de la tierra y la energía. El Tratado, entre otros puntos, concreta que: (a) Paraguay no pueda utilizar libremente la energía que le corresponde (50%), sino que deba ceder la energía no utilizada al Brasil, recibiendo a cambio una compensación monetaria basada en criterios arbitrarios; (b) una primacía de funcionarios brasileiros en la estructura administrativa de la entidad; (c) la entrega de territorio nacional paraguayo –hasta la fecha, no delimitado– a Brasil, y (d) la autorización de una invasión militar del territorio paraguayo en caso de cualquier peligro que amenace la seguridad de la entidad binacional. En el marco de dicho pacto, capitales brasile-

ños avanzaron en el control de la tierra con el proceso de colonización –la Marcha al Este en Paraguay, impulsada por la dictadura stronista, y la Marcha al Oeste impulsada por el gobierno brasileño y posteriormente por la dictadura brasileña. Las tierras ocupadas por los colonos brasileños en el control de la tierra fueron en una gran parte tierras fiscales, muchas de ellas hasta hoy día usurpadas ilegalmente, siendo en la actualidad por lo menos 11,78% del territorio nacional paraguayo controlado por capitales brasileños (Glauser, 2009).¹⁸

En el siglo XXI, la expansión subimperialista se amplía hacia el control y la desnacionalización de sectores de la producción en el país –como la industria cárnica-, ampliando la extracción de fuerza de trabajo nacional a través de los monopolios y el régimen de maquila principalmente, a la par de profundizar y ampliar su control de la tierra y los recursos naturales.

El gobierno de Fernando Lugo inició con una posición firme de renegociar el Tratado de Itaipú y desarrollar una Reforma Agraria, lo que tocaría los principales intereses de los grandes monopolios brasileños en el país. Sin embargo, tras intentos iniciales de renegociar Itaipú, ello fue frenado a causa de las presiones brasileñas, y cuando se iniciaron las mensuras para recuperación de tierras ilegales usurpadas por colonos brasileños, se llevó a cabo el golpe de Estado y el proceso fue frenado.

En la campaña electoral de Lugo se instala con fuerza la bandera alzada por los sectores populares de renegociar el Tratado de Itaipú, con

18 Este 11,78% es la tierra registrada a nombre de propietarios de nacionalidad brasileña en el Censo Agropecuario Nacional de 2008. Sin embargo, la cantidad real de tierra controlada por el capital brasilero es mayor, pero no existen datos oficiales ni registros publicados que permitan calcularlo en su totalidad. Se deben contemplar las tierras usufructuadas por colonos brasileños nacionalizados paraguayos (los llamados “brasiguayos”), que figuran como propietarios paraguayos en el CAN pero trabajan con capitales brasileros, y las tierras propiedad de agricultores paraguayos que son arrendadas a brasileños y brasiguayos para el usufructo de las mismas, principalmente para el monocultivo extensivo. Con estos datos, el porcentaje real de tierras bajo control del capital brasilero aumenta exponencialmente.

énfasis en lograr disponer libremente de la energía paraguaya¹⁹, y auditar y terminar el pago de la deuda espuria²⁰.

Tras ser electo, el gobierno nacional presenta seis puntos de negociación en torno al Tratado vigente: (1) libre disponibilidad de la energía, (2) precio justo para la energía exportada al Brasil, (3) revisión de la deuda y eliminación de porción ilegítima, (4) paridad en el manejo del Ente, (5) control y transparencia, y (6) terminación de obras faltantes (subestación seccionadora y obras de navegación).

Tras varias negociaciones y presiones –diplomática, política y de amedrentamiento militar en la frontera e incluso de invasión en territorio paraguayo-, se concreta la firma del Acuerdo “Construyendo una nueva etapa en la relación bilateral Paraguay – Brasil” el 25 de julio de 2009, conocido como Acuerdo Lugo-Lula, en el cual se concreta el punto 4 y 6 de lo solicitado por Paraguay, y pasa de la exigencia de la libre disponibilidad de energía, precio justo, transparencia y revisión y eliminación de la deuda (punto 1, 2, 3 y 5) a solamente la triplicación del pago por la cesión de energía paraguaya a Brasil, sobre la misma fórmula arbitraria establecida en el Anexo C del Tratado, pasando de 120 millones de dólares por año a 360 millones de dólares por año.

El Estado brasileño aprovechó el acuerdo y avanzó en su agenda, plasmando en el mismo puntos como el fomento a la infraestructura en el marco del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), la integración productiva, la regularización de los migrantes brasileños y sus títulos de propiedad, la ampliación de la exportación de energía paraguaya a Brasil y la expansión de capitales brasileiros a través de la financiación del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) a obras en el país (Vuyk, 2014b). El gobierno de Horacio

19 Esto significa modificar el punto del Tratado que establece que la parte del 50% de la energía que no es utilizada por una de las partes (Brasil o Paraguay) debe ser cedida a la otra parte, a cambio de un pago de compensación basado en criterios arbitrarios establecidos en el Anexo C del Tratado. Dada la asimetría de ambos países, este punto significa la cesión de la energía paraguaya no utilizada en el país (41% del 50% que le corresponde) al Brasil.

20 Por “deuda espuria de Itaipú” se conoce a la deuda del Estado paraguayo con la agencia estatal brasileña Electrobrás y otras empresas, adquirida en la década del '70 para la construcción de la represa de Itaipú, agrandada y sobrefacturada posteriormente.

Cartes, tras consumir el golpe de Estado en el 2013 sostuvo que dicho Acuerdo era la “hoja de ruta a seguir con el Brasil” (ABC Color, 2013).

El gobierno de Lugo siguió pagando la deuda espuria de Itaipú y, cediendo a la presión brasileña, no volvió a colocar el tema en agenda. En febrero del 2012, la Contraloría General de la República publica su informe de auditoría de la deuda, corroborando la sobrefacturación de la misma (CGR, 2012), pero pese a ello, las negociaciones no avanzaron.

En el 2013, tras el golpe de Estado, se publica el Informe Sachs²¹, demostrando que Paraguay ya había cancelado su deuda con Brasil y que éste debía 5.000 millones de dólares a Paraguay por la deuda ya saldada y que, en consecuencia, Paraguay ya podría disponer libremente de su energía. Pese a ello, el gobierno de Cartes continuó pagando 2.000 millones USD anuales a Brasil en el marco de la deuda espuria, sosteniendo que lo continuará haciendo regularmente hasta el 2023, fecha en que la deuda espuria se cancela y, acorde a lo establecido en el Tratado, el Anexo C del mismo debe ser revisado (Última Hora, 2015)..

En relación a las tierras ocupadas por brasileños, el gobierno de Lugo, tras el freno inicial a la Reforma Agraria, no avanzó en una posición en torno a las mismas, hasta que el auge de la movilización campesina lo forzó a hacerlo. El gobierno brasileño ofreció al Paraguay apoyar un catastro de tierras, lo que fue rechazado por el país para evitar injerencia extranjera en el mismo. El gobierno de Lugo se mostró a favor de transparentar la tenencia de la tierra y realizar una mensura en la frontera, iniciándola tras la reglamentación de la Ley de Frontera en la tierra ocupada por campesinos y reclamada por un colono brasileño –Tranquilo Favero- como propiedad suya –la finca 4036 de Ñacunday.

Pese a las presiones diplomáticas por parte de Itamaraty y la misma presidencia del Brasil, y al pedido de intervención en el tema realizado

21 Tras el golpe de Estado en junio de 2012, bajo el gobierno de facto de Federico Franco, el tema de la deuda de Itaipú volvió a ser retomado en el marco de la alianza del gobierno de facto con el imperialismo norteamericano, pero no pasó del discurso. El gobierno de facto invitó al Earth Institute de la Universidad Columbia, cuyo director es Jeffrey Sachs, un economista norteamericano que ha intervenido en varios países para el desarrollo de políticas neoliberales, a realizar un estudio sobre el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica del país para el desarrollo económico sustentable, cuyos resultados fueron publicados en el 2013 y se encuentran disponibles en: <http://ccsi.columbia.edu/work/projects/leveraging-paraguays-hydropower-for-sustainable-economic-development/>

por los colonos brasileños y el Congreso brasileño, el gobierno de Lugo continuó con las mensuras.

Cables filtrados por Wikileaks demostraron que agentes contratados por la empresa Stratfor, contratada por el Ministerio de Defensa de Brasil para espiar ocupaciones de tierra en Paraguay, mencionaban la preocupación del gobierno brasileño en torno a la incapacidad del gobierno paraguayo para controlar las ocupaciones de tierra. En ese sentido, la agencia sostuvo en sus informes entre julio 2011 y marzo 2012 que Brasil estaría dispuesto a intervenir militarmente Paraguay para defender los intereses brasiguayos, pero que estaría analizando “otras medidas no militares” que permitan controlar el conflicto de tierras (O’Donell, 2012).

Tras el golpe de Estado en junio del 2012, la mensura fue frenada y el auge de las ocupaciones campesinas mermó con la represión y persecución. La problemática de las tierras ocupadas por brasileños y extranjeros no fue tocada de nuevo, y el gobierno de Cartes sostuvo tras consumar el golpe que respetaría “la propiedad privada” de los brasileños en el país. Asimismo, la deuda espuria se siguió pagando hasta hoy, el Tratado de Itaipú no volvió a ser debatido y los monopolios brasileños avanzaron en la desnacionalización de sectores productivos –principalmente el cárnico- y en el control de la energía paraguaya dentro del territorio nacional a través de las empresas electrointensivas, las maquilas y los monopolios instalados en el país.

El caso del subimperialismo brasileño y su vinculación con la limitación de un proyecto de desarrollo independiente y soberano, por un lado, y el golpe de Estado en Paraguay –vinculado a este límite- por otro, no es más que la expresión del límite mismo del neodesarrollismo como falso proyecto de desarrollo nacional y regional. El subimperialismo como fase del capitalismo brasilero y necesidad de sus capitales y monopolios de expandirse para evitar la pérdida de su tasa de ganancia marca el escenario regional en el cual nos encontramos y, a la par de expresar este límite del neodesarrollismo como propuesta, demuestra a su vez la necesidad de la superación de las relaciones capitalistas de producción como proceso y vía para el desarrollo nacional y regional de nuestros países.

Conclusiones

El gobierno de Fernando Lugo marcó un hito en la historia del Paraguay, derrocando al Partido Colorado del poder y teniendo a los sectores populares como actores protagónicos en el gobierno. Desarrolló una política social redistributiva y de fomento a la integración regional, sin lograr tocar la

estructura económica sino profundizándola en función a los requerimientos del mercado externo, con las características propias de los gobiernos neodesarrollistas en auge en dicho periodo.

La disputa por la dirección del gobierno entre los sectores de la burguesía y los sectores populares se consolidó en una gobernabilidad conservadora controlada por la burguesía, que al empezar a ser amenazada desde la movilización popular, con grandes posibilidades de tocar sus principales intereses –el control de la tierra (latifundio)- derivó en el golpe de Estado, el cual tuvo como objetivo principal buscar frenar el auge de la movilización popular y avanzar en políticas de despojo que habían sido frenadas dentro del gobierno de Lugo, principalmente el endeudamiento del Estado con el capital financiero y la privatización de los bienes públicos.

El rol del subimperialismo brasileño en el apoyo a la burguesía local y al golpe de Estado en Paraguay –junto con el imperialismo norteamericano- es un elemento de suma importancia a destacar. Ello tanto en términos de la comprensión del límite que el mismo expresa en relación al proyecto neodesarrollista, como en cuanto a los desafíos de la superación del mismo para una integración regional basada en la soberanía y la independencia de nuestros países.

Por su parte, la movilización popular como mecanismo de conquista de cambios desde el gobierno en el periodo de la administración Lugo, el consecuente golpe de Estado como intento de freno al auge de la movilización popular y la posterior instalación de políticas de despojo y persecución tras el golpe de Estado llevaron a unos de los principales aprendizajes del periodo del gobierno de Lugo por parte del pueblo paraguayo: la necesidad de conquistar el gobierno pero no limitarse a la gestión del mismo, sino avanzar en la construcción del poder popular que, desde la movilización, tenga la fuerza suficiente para impulsar y concretar las transformaciones sociales, políticas y económicas que superen las trabas al desarrollo nacional contra los intereses de la clase latifundista local y aliada al imperialismo que se beneficia de los mismos.

Bibliografía

- ABC Color, “Acuerdo Lula-Lugo es la hoja de ruta en Itaipú hasta 2023, según Leila”. En: *ABC Color* (7 de octubre de 2013).
- Campo Agropecuario, “El agro 2014/2015. En positivo, pero encadenado”. Disponible en: <http://www.campoagropecuario.com.py/el-agro-2014-2015-en-positivo-pero-encadenado/612/> (último acceso: 24/5/2016).

- Contraloría General de la República, *Segundo Informe Avance de Auditoría Examen Especial Deuda de la Entidad Binacional Itaipú*. Asunción: CGR, 2012.
- Creydt, Oscar, *Formación Histórica de la Nación Paraguaya. Pensamiento y vida del autor*. 3ª ed. revisada y ampliada. Asunción: Servilibro, 2007.
- Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias/Ministerio de Agricultura y Ganadería, *Síntesis estadísticas producción agropecuaria 2013/2014*. Asunción: MAG, 2014.
- Guasu, Frente, *Gobierno para Todos y Todas. Ñamombe' u jagueroguata akue*. Asunción: Frente Guasu, 2013
- Glauser, Marcos, *Extranjerización del territorio paraguayo*. Asunción: Base IS, 2009.
- Mandelik, Manuel, *Formaciones económicas del Paraguay I*. Asunción: Servilibro, 2014.
- , *Formaciones económicas del Paraguay II*. Asunción: Servilibro, 2015.
- Marini, Ruy Mauro, “La acumulación capitalista y el subimperialismo”. En: *Cuadernos Políticos* 12 (abril-junio de 1977).
- Lugo, Fernando, *Discurso Presidencial ante la XXI Cumbre Iberoamericana*. Asunción: Presidencia, 2011
- O'Donnell, Santiago, “Tensión fronteriza por la cuestión brasiguaya”. En: *Página/12* (marzo de 2012)
- Última Hora, “Itaipú pagará unos U\$S 2.000 millones”. En: *Última Hora* (10/1/2015).
- Vuyk, Cecilia, *Recursos minerales, hidrocarburos e hídricos en Paraguay: escenario presente y posible escenario futuro*. Asunción: CEPAG, 2014a.
- , *Subimperialismo brasileño y dependencia del Paraguay: los intereses económicos detrás del golpe de Estado de 2012*. Asunción: Cultura y Participación, 2014b.

El equívoco venezolano

Guillermo Cieza

1. Introducción

El proceso bolivariano ha sido asociado, por derecha y por izquierda, a los gobiernos neodesarrollistas de Brasil y la Argentina, experiencias políticas con quienes solo comparte su contemporaneidad y alianzas geopolíticas.

A partir de este equívoco, sostenido en conclusiones y formulaciones correspondientes a contextos históricos y sociales ajenos y en preconceptos y prejuicios, se ha construido una gran confusión que no solo sabotea la comprensión de ese proceso político, sino que, peor aún, impide que puedan realizarse aportes críticos.

Tratar de aportar a desbrozar este equívoco, impone reconocer la particularidad del proceso bolivariano e intentar despojarse de esquemas y asociaciones previas, para sumergirse en primer lugar en lo que son rasgos originarios de esa experiencia de movilización popular y de gobierno, para después intentar precisar las contradicciones efectivamente existentes.

Intentando recorrer ese camino en el artículo “Repensando Venezuela” (Cieza, 2015), he planteado que para abordar los rasgos originarios hay algunos temas a los que me parece necesario prestarles atención:

- El escaso poder popular acumulado en los años previos a la llegada de Hugo Rafael Chávez al gobierno.
- Los problemas generados a partir de la matriz rentista petrolera que encontró el proceso bolivariano, construida a lo largo de 100 años y consolidada en los tiempos de la IV República.
- El mundo en que debió insertarse el proceso bolivariano.

Con respecto a las contradicciones mas actuales propongo centrar atención en:

- Las dificultades de pasar de una sociedad capitalista dependiente de matriz rentista a una sociedad en transición al socialismo:
- Los problemas de la transición del viejo Estado al nuevo Estado.
- La sucesión de Chávez.
- El problema de la vanguardia dispersa.
- La cuestión del protagonismo popular.

2. Una revolución inesperada

Quienes militamos en los años 70 caracterizábamos la excepcionalidad de Venezuela en América del Sur, por la ausencia de posibilidades revolucionarias. Las opiniones de la época quedan reflejados en distintos trabajos teóricos, como “El desarrollo desigual” (1970) de Samir Amin, que calificaban a Venezuela como “territorio colonial”.

El hecho de que en Venezuela, a diferencia de otros países de América del Sur como Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador y Argentina, no se haya producido un golpe sangriento para reprimir el ascenso popular e instalar un proyecto neoliberal, confirma esta excepcionalidad.

La inexistencia de una ruptura institucional no permite suponer que los gobiernos constitucionales que surgieron a partir del Pacto de Punto Fijo, fueron una excepción en lo que hace a la persecución y asesinato de militantes populares. Algunos autores afirman que fue Venezuela el primer lugar de América Latina donde se ensayó el procedimiento de hacer desaparecer a los opositores políticos, y los gobiernos de la IV República ostentan la no despreciable cifra de 3000 militantes populares asesinados.

Cuando hacemos referencia a las escasas posibilidades revolucionaria no desconocemos la existencia de una izquierda y aun de frentes guerrilleros que tuvieron importante actividad en los años 60, tampoco desvalorizamos a lúcidos intelectuales como Alfredo Maneiro a quien Chávez conoció en sus primeros pasos de conspiración desde los cuarteles. Pero es evidente que derrotadas las guerrillas a fines de los 60, una iniciativa donde se habían puesto los mayores esfuerzos, esa caída contribuyó a la marginalización de la izquierda, debilitando su inserción territorial e incidencia política en un país donde la lucha de clases parecía haberse tomado vacaciones.

La irrupción del Caracazo, el 27 de febrero de 1989, una rebelión popular de carácter espontáneo donde se combinaron saqueos con enfrentamientos con las fuerzas represivas, con un saldo de más de tres mil muer-

tos, tuvo consecuencias que no se expresaron en la superficie, sino en el subsuelo, muy distante de la mirada de los cenáculos informados de la izquierda latinoamericana y mundial, y probablemente allí empieza el primer desencuentro.

Mientras buena parte de la izquierda supuestamente informada, extranjera o local, calificaba al Caracazo como el ejemplo más ilustrativo de las consecuencias luctuosas de una explosión popular sin dirección política revolucionaria; en los cuarteles, pequeñas células revolucionarias se reproducían aceleradamente y en los territorios empezaba a expresarse por la negativa, un movimiento de ruptura con la politiquería de la IV República. La lucha de clases empezaba a animarse con un aumento de las invasiones (ocupaciones de tierras o viviendas), huelgas y trancas de rutas. Esa animación no era demasiado importante si la comparábamos con lo que sucedía en otros países mucho más movilizados como Bolivia y Argentina, sin embargo en el proceso particular de Venezuela significaba un deshielo.

Y fue entonces que apareció Chávez, con el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992.

Quienes no habían podido caracterizar la potencialidad del Caracazo, mucho menos iban a poder reconocer a Chávez su heredero. Encima, para hacer todo más complicado el nuevo líder popular era militar.

Tuve el privilegio de asistir a una expresión superestructural de ese desencuentro, en el desarrollo del Foro de San Pablo realizado en La Habana en 1993, evento que en aquellos años de confusión e incertidumbre reunía a la casi totalidad de las expresiones de la izquierda y centroizquierda latinoamericana. Estuvo allí el MBR 200 por invitación de los cubanos, y rodeado por la desconfianza y los prejuicios, que se agitaban desde la misma representación venezolana. Pablo Medina, en representación de Causa R., despotricaba contra Chávez, a quien calificaba como un aventurero destinado a impedir el avance de la izquierda venezolana, que ya había conquistado la Alcaldía de Caracas y “se preparaba para ser gobierno”.¹

La posición de Causa R no era la única que criticaba la emergencia del nuevo liderazgo popular. Como bien recuerda Chávez, cuando salió de la cárcel, el Secretario General de Partido Comunista de Venezuela afirmó “la presencia del caudillo Chávez le hace daño al movimiento popular” (Ramonet, 2013)

1 El candidato presidencial de Causa R, Andrés Velázquez, fue despojado del triunfo electoral en diciembre de 1993 por un fraude en beneficio del dirigente socialcristiano Rafael Caldera. Chávez propuso la abstención, que superó el 40%.

Podría decirse que hasta diciembre de 1994 cuando Fidel Castro en persona acudió al Aeropuerto de la Habana a recibir al recién liberado Hugo Chávez, este y su movimiento eran considerados como parias políticos en la izquierda latinoamericana.

La crisis política de la IV República y el rechazo masivo a la dirigencia de los partidos tradicionales que no pudo aprovechar Causa R, la capitalizó la audacia política de Chávez y su reducido grupo revolucionario, que llegó al gobierno en 1999, contando con un escasísimo poder popular acumulado.

Esta última cuestión, los pisos de conciencia política y organización masiva desde la que se llegó al gobierno, no son un detalle menor. Porque todas las valoraciones políticas de lo sucedido en adelante deben reconocer ese punto de partida.

Esta perspectiva es importante porque más que calificar el “derroche de oportunidades”, como suele hacer cierta izquierda, lo que provoca como motivo de análisis e investigación es preguntarse cómo fue posible que con tan poco, se pudieran avanzar tanto y en tan poco tiempo.

3. La maldición del petróleo

Desde los tiempos de la invasión española en los cuales el actual territorio venezolano se constituyó como una Capitanía General que era parte del imperio colonial, pasando por las guerras de la independencia y la posterior Revolución Federal; a lo largo de 400 años, puede resumirse la historia de Venezuela como la historia de la lucha por la tierra. Ese destino empezó a torcerse durante la dictadura (1908-1935) de Juan Vicente Gómez, conocido como el General Petróleo, porque la riqueza pasó del suelo al subsuelo.

A partir de ese momento se conformó un país donde la explotación petrolera y minera, se completó con una producción agropecuaria abandonada y sumida en el atraso, y un desarrollo industrial tardío, de composición de capital mayoritariamente extranjera y fuertemente vinculada al sector externo, con alta tecnología y escasa ocupación de mano de obra.

Mientras la bendición del petróleo proporcionó ingentes recursos al Estado y a una reducida elite blanca empresarial, profesional y política que se desempeñó como administradora y gerente del saqueo imperial, las grandes mayorías que se habían trasladado a las ciudades sobrevivieron consumiendo las migajas de esa fiesta, vendiendo servicios personales y de la buhonería (venta ambulante).

En términos políticos Venezuela es un país donde la pobreza de la lucha de clases fomentó el descuido de una burguesía lumpen y un im-

perio distraído que fueron sorprendidos por un avatar de la historia que se expresó en el liderazgo de Chávez. En términos sociales la revolución bolivariana es la revolución de las “doñas” territoriales, jefas de hogar que sostienen a sus hijos trabajando en lo que se puede y de los buhoneros, que desde hace generaciones vienen asociando el trabajo a comprar barato, para vender un poco más caro a sus propios compañeros de infortunio.

Que integrantes de las fuerzas armadas con nociones básicas de planificación, administración e ingeniería, correspondientes a su capacitación profesional, se hayan convertido en los cuadros de extracción y sensibilidad popular más formados es coherente con la lumpenización de una sociedad, provocada por la maldición del petróleo.

No se puede discutir la formación de la burocracia chavista sin considerar las premisas anteriores, ni tampoco entender las enormes dificultades que ha tenido el Estado y el propio pueblo para hacer producir tierras y empresas expropiadas por la Revolución.

4. La soledad de un experimento revolucionario

Haciendo un abuso de la geopolítica se suele asociar al proceso bolivariano a otros gobiernos latinoamericanos que en algunas decisiones, han tomado distancia del poder imperial de Estados Unidos. Por el mismo procedimiento se lo asocia al BRICS y otros alineamientos internacionales que tienen algunas contradicciones con las potencias occidentales.

El propio gobierno bolivariano por cuestiones comerciales y políticas ha fomentado estas alineaciones y ha trabajado para promover acuerdos como UNASUR y la CELAC.

Sin dudas esas alianzas tácticas entre gobiernos hacen a la defensa de sus proyectos. En ese sentido me parece importante apuntar que en la región se ha tomado nota de las consecuencias funestas que tuvo el aislamiento del experimento revolucionario del Paraguay en el siglo XIX. Pero ello no debería llevarnos a la confusión de suponer que estos gobiernos comparten proyectos, ni de exagerar las solidaridades existentes.

A modo de ejemplo, China ha salido al mundo a buscar materias primas para alimentar su poderosa maquinaria industrial y alimentar a su numerosa población. Para ello, compra petróleo y otros minerales en Venezuela, reforzando allí las políticas extractivistas y su matriz petrolera importadora. A cambio les vende automóviles, material ferroviario, electrodomésticos, vestimenta, etc. Incluso puede instalar alguna fabrica de ensamble, pero reservándose siempre la alta tecnología. Así, China puede venderle taladros de perforación a PDVSA, pero se va a reservar una caja

de controles que es el corazón electrónico de la máquina, para que el país comprador no pueda producirlos, y en caso de reparación deba recurrir a ella.

Cuando Venezuela se conectó comercialmente con sus socios del MERCOSUR y sus gobiernos amigos, quienes aparecerían como vendedores eran las empresas multinacionales que controlan los alimentos en esos países. Los pollos brasileños son de la multinacional Sadia, la leche en polvo argentina, es de las multinacionales Sancor y La Serenísima, al trigo argentino lo exporta Cargill, Bunge o Dreyfus, al aceite de Soja es de Aceitera Dehesa., la carne vacuna es de las multinacionales de origen brasileño, las semillas son de Monsanto, Nidera, o Barenbrug Palaversich.

La transferencia de tecnología entre países supuestamente aliados ha estado efectivamente intermediada por las multinacionales y han sido ellas quienes han asesorado compras de tecnología que terminaron en estruendosos fracasos. Todos en el país recuerdan los tractores rusos producidos en Siberia que no funcionaban con las temperaturas tropicales y el ganado lechero Holando Argentino que no pudo adaptarse a las condiciones ambientales.

Desde el punto de vista de la construcción de una economía soberana que permita sustentar el experimento de transición al socialismo, Venezuela ha estado en la más completa soledad, con excepción de los aportes que pudieran hacerle los países del Alba, con quienes comparte similares carencias. De ellos solo Cuba les ha podido hacer un aporte sustancial en las áreas de salud, farmacéutica, y algunas producciones agropecuarias.

En el último año, el aislamiento político del experimento revolucionario venezolano se ha profundizado con la llegada de Macri al gobierno en la Argentina, el acorralamiento político al que está siendo sometido el gobierno de Dilma Roussef, a pesar de sus concesiones a la derecha, el papel que ha venido asumiendo el frenteamplista Luís Almagro, Secretario General de la OEA, como ariete de las políticas estadounidenses contra Venezuela, y el cada vez más activo apoyo de los gobiernos de Chile y Uruguay a las demandas de la MUD.

La mayor solidaridad que ha recibido el proyecto bolivariano ha sido en el plano de la seguridad, donde hay un valioso aporte de los cubanos que le han ayudado a detectar tempranamente numerosos operativos de desestabilización y prevenir acciones terroristas. También en el plano militar las maniobras realizadas por las fuerzas marítimas de Rusia y China en costas venezolanas han desalentado los planes estadounidenses de invasión.

5. Las dificultades de pasar de una sociedad capitalista dependiente de matriz rentista a una sociedad en transición al socialismo

Algunos analistas simplifican el proceso venezolano, responsabilizando de sus debilidades únicamente a las decisiones políticas tomadas por el gobierno, o sugiriendo que se deben a su vocación de negociar con la burguesía. Debería precisarse al menos que:

- Desde el inicio del proceso bolivariano se desarrolló un proceso creciente de desinversión y fuga de capitales por parte de la burguesía. Miles de empresas fueron vaciadas y abandonadas, la mayoría de las cuales fueron retomadas por el Estado para garantizar los puestos de trabajo. Esas empresas puestas en funcionamiento por el propio Estado, con control obrero o cooperativizadas, y en manos de los trabajadores tuvieron un rendimiento desigual. Algunas han sido recuperadas y han mejorado la calidad y cantidad de su producción. Otras apenas pueden sostenerse con subsidios estatales y en muchas de ellas se han instalado mafias corporativas que exigen aumentos de sueldos y beneficios, pero no garantizan una producción que pague sus propios costos operativos. Ejemplo de estas empresas deficitarias, son las llamadas empresas estratégicas (acero, aluminio) en el Estado de Bolívar.
- En Venezuela fueron expropiados 4 millones de ha., que no han sido totalmente ocupadas productivamente, hay parcelas enteras o porciones de parcelas abandonadas en manos del Estado, y lo que es más grave, en manos de pequeños productores o comunas.
- Estas afirmaciones pueden ser sorprendentes si se desconoce el contexto previo en que se desempeña la experiencia bolivariana

No resulta fácil pasar de una sociedad capitalista dependiente de matriz rentista a una sociedad de transición al socialismo. Una sociedad inserta en un país que durante un siglo se dedicó a exportar petróleo y, hacia adentro, producir masas de abandonados y miserables.

No es fácil pasar de culturas de subsistencia donde la venta ambulante y el trabajo ocasional eran las profesiones más extendidas a una cultura socialista asentada en una base productiva autosustentable, articulada en una economía soberana. Quienes suponen que esto se trata de un trámite para el que solo se necesitan decisiones políticas desde arriba, seguramente no han trabajado nunca en emprendimientos productivos que padecen la precariedad de trabajar sin cuadros técnicos y políticos o con personas que han perdido la cultura de trabajo.

El Estado recibió muchas empresas quebradas que no pudieron ser recuperadas desde la administración estatal, porque los niveles de obsolescencia productiva las hacían inviables, pero también por responsabilidad de administraciones burocráticas.

La Misión Vuelvan Caras que se propuso incluir en la producción y el mercado económico a más de un millón de egresados de las Misiones Robinson, Ribas y Sucre, como cooperativistas, intentando desarrollar empresas en los sectores agrícolas, industrial textil, turístico, industrias básicas, transportes, etc. y que fue acompañado por inversiones en plantas de enlatados de atún y sardina, centrales azucareras, torrefactoras, cultivos estratégicos, producción avícola y ganados de doble propósito, representó un esfuerzo donde se invirtieron miles de millones de dólares con magros resultados.

La mayoría de las cooperativas fracasaron, los recursos se esfumaron, se generaron experiencias negativas que promovieron divisiones en las comunidades. Resulta fácil calificar años después a ese intento como voluntarista y criticar la apuesta por no haber considerado imprescindible la formación política y en conceptos básicos de administración económica y planificación a los futuros cooperativistas. Sin embargo, hubo algunas experiencias que sobrevivieron, y hoy constituyen un piso productivo bajo pero existente, sobre el que se puede formular nuevos desafíos.

Como bien dice un amigo, el militante popular de la Comuna Socialista de Ataroa, Gerardo Rojas: “Si nos vamos a equivocar, equivoquémonos con los comuneros, porque podemos aprender. Los burócratas no aprenden nunca”. Haciendo un inmejorable ejercicio de la síntesis el compañero pone sobre la mesa uno de los debates centrales del proceso bolivariano.

El atajo de enfrentar al desabastecimiento y la inflación provocada por la burguesía con las políticas importadoras se ha revelado como una insensatez. Pero lo que se dejaba atrás no era una economía comunal potente o una producción nacional autosuficiente y con vocación soberana.

La producción nacional realmente existente estaba mayoritariamente en manos de la burguesía que, desplazada de los negocios de PDVSA, había centrado su atención en sus inversiones productivas y su control de la distribución y comercialización de productos básicos, tomando iniciativas para caotizar el mercado y provocar daños irreparables al proceso bolivariano. Como un reducido aporte había que contemplar algunas experiencias sobrevivientes de la Misión Vuelvan Caras e incipientes y esforzados proyectos comunales que a duras penas producían sus primeros excedentes.

Es verdad que en quince años de revolución, Venezuela no fue capaz de modificar la matriz productiva heredada hace cien años. No faltaron

esfuerzos, pero fueron insuficientes. Es verdad que estos esfuerzos fueron saboteados desde enquistamientos burocráticos y “boliburgueses” dentro del propio gobierno. Es verdad que se generaron hechos de corrupción que permitieron a empresas de maletín capturar dólares baratos que fueron evadidos o alimentaron el mercado negro cambiario; pero reducir las dificultades de cambios de matriz productiva al accionar de la burocracia y de los sectores no-socialistas que anidan en el chavismo resulta, como mínimo, una simplificación.

Desde las efectivas contradicciones del proceso bolivariano, debe valorarse que la idea de “sembrar el petróleo” que fue originalmente planteada por Uslar Pietri en el año 1936, y retomada por el Comandante Chávez, a partir de la crisis de desabastecimiento y alza artificial de precios, se ha convertido en una convicción que se ha encarnado en el pueblo. Es de esperar que el proceso bolivariano disponga del tiempo suficiente para que puedan evidenciarse los resultados, generados por la revolución productiva desde las bases.

6. Los problemas de la transición entre Viejo Estado y Nuevo Estado

Si en los procesos neodesarrollistas la discusión política ha estado centrada en recuperar funciones del Estado para poner límites a los intereses de las multinacionales, en el proceso bolivariano se ha instalado la discusión entre viejo y nuevo Estado. La advertencia que en el plano teórico realizan intelectuales en otros países sobre las limitaciones de utilizar una herramienta diseñada para la dominación del capitalismo en tareas revolucionarias, se convierte en el proceso bolivariano en discusiones urgentes, encarnadas en la realidad política cotidiana.

El viejo Estado no sirve para hacer una revolución y quienes mejor lo saben son aquellos que sin abandonar su vocación revolucionaria han transitado los pasillos institucionales o han podido acceder a algún poder de decisión en la órbita estatal. El propio Chávez se calificaba a sí mismo como un infiltrado en el Estado. Como sucede con otros temas: Ecosocialismo, Feminismo, Educación Liberadora, etc. todo lo dicho y escrito por Chávez se convierte en un problema para quienes pretenden desandar el camino revolucionario. Desde la ortodoxia chavista, el viejo Estado ha sido anatemizado y condenado a desaparecer.

Tener un diagnóstico claro no resuelve el problema pero ayuda a precisar cuál es la tarea. Se trata de gestionar el Estado existente mientras se crea una nueva institucionalidad.

La gestión del Estado existente requiere cuadros con formación política, administrativa y técnica, científica o metodológica según el área a la que va a ser asignado. Pero ese requerimiento de militantes para gestionar el Estado entra en contradicción con las urgencias de militantes necesarios para apuntalar la organización de base. Que un país ingrese a un proceso revolucionario con muy escaso poder popular acumulado significa que cuenta con una escasísima cantidad de militantes formados y que los vacíos que deja esa militancia en el Estado serán inexorablemente ocupada por personas menos formadas políticamente, pero también menos capacitadas para ocupar las responsabilidades asumidas y, en algunos casos, por personas con escasa voluntad de trabajar y aprender, o menos honestas.

Al chavismo, un movimiento que se creó aluvionalmente, no solo se integraron patriotas sinceros y revolucionarios esclarecidos. Los que no tenían esas condiciones, cuando llegaron al Estado se asociaron a castas de empleados públicos formados en la IV República, que resistían desde un terreno conocido al cambio revolucionario.

También las estructuras del Estado han sido playas de estacionamiento donde se han añejado y descascarado antiguas credenciales revolucionarias. Para advertir el ocaso de estas trayectorias basta pegar una releída a las *Memorias del Arañero*, o a *Mi Primera Vida*, donde Chávez da cuenta del pasado glorioso de muchos de sus camaradas de armas, y compararlo con su presente de apoltronados gobernadores, más preocupados y temerosos del cambio permanente inherente a una revolución, que por las políticas desestabilizadores de sus antiguos enemigos.

No es casualidad entonces que en el viejo Estado anide la burocracia no solo por función, sino por mentalidad.

La nueva institucionalidad ha contado desde un principio con el aporte de una extendida conciencia popular de participar y hacer suyo el proyecto bolivariano, con el impulso de Chávez y una legalidad de avanzada consagrada en las leyes comunales. En contra, como se corresponde a una revolución inesperada, hay falta de experiencia organizativa, limitaciones en el aporte sistemático a la formación política tanto desde el Estado como desde los movimientos populares, y la precariedad de las bases económicas para sustentar la construcción político social de manera autogestiva. Los Consejos Comunales se organizaron a partir de las entusiasmadas bases chavistas y fueron protegidos por las leyes, pero también se crearon para recibir y administrar abundantes recursos que aportaba el Estado.

El crecimiento de la nueva institucionalidad que fue, como era de esperar, contradictorio, con luces y sombras, generó preocupación en capas

blandas de la burocracia que se ofrecieron tutelarlos para evitar desvíos; pero también produjo desconfianza en autoridades del viejo Estado como Gobernadores y Alcaldes que caracterizaron a las comunas primero como una restricción y después como una competencia abierta a su poder. Además, la resistencia feroz en sectores burocráticos comprometidos con la corrupción, no tardaron en calificar a las Comunas como un enemigo directo.

La derrota del 6 de diciembre de 2015 en las elecciones legislativas representó un duro golpe a la política clientelar gestionada desde el viejo Estado y a sus ejecutores directos, con la consecuencia que se perdió la Asamblea Nacional y que muchas de sus caras más visibles no pudieron renovar sus cargos.

Las asambleas y reuniones populares posteriores a la derrota, permitieron al presidente Maduro zanjar algunas internas de palacio, pero no mejoraron la vinculación de su gabinete con el pueblo organizado. Si alguna esperanza le quedaba a los sectores burocráticos de salvar al gobierno, renunciando al proyecto revolucionario, después de la derrota electoral quedó en evidencia que la MUD y el Imperio venían por todo.

La respuesta ha sido cerrar filas y dar la batalla, construyendo un nuevo pacto cupular que incluye algunos desplazamientos, pero también nuevas incorporaciones, cuyo dato más saliente es la incorporación del empresario Miguel Pérez Abad como Ministro de Economía.

Estos movimientos cupulares han extremado el pesimismo de algunos analistas que parecen olvidarse que el proceso es mucho más complejo. Quizás el hecho más saliente después de la derrota del 6D es que se han bifurcado las respuestas a la guerra económica. Por un lado las que da el gobierno y por otro las que da el propio pueblo. El sostenimiento del apoyo popular al Presidente, una decisión que revela la madurez estratégica del pueblo bolivariano, le ha permitido jugar un rol de referencia común para los dos procesos. Desde esa lectura se puede entender su propuesta del Congreso de los Pueblos como un intento de articular los distintos caminos de resistencia y unificar agendas. ¿Si existe el gobierno, el PSUV y el Polo Patriótico, para qué se quiere un Congreso de los Pueblos? Es muy probable, que como ha ocurrido en otras oportunidades, el impulso creativo de las buenas ideas propuestas desde arriba, naufrague en las mediaciones mediocres.

7. La sucesión de Chávez

La decisión del presidente Chávez de elegir como sucesor a Nicolás Maduro, fue comunicada al alto mando del gobierno, pero se había acordado que se mantendría en secreto hasta después de su eventual fallecimiento.

El gesto de Chávez de hacerla pública ratifica que siempre puso su máxima confianza en el pueblo y en el acto de hacer conocer su voluntad, lo transformó en garante de que fuera respetada.

La forma particular en que Chávez manejó la cuestión de su propia sucesión, contribuyó a aminorar las disputas sucesorias, pero no resolvió el problema.

Maduro no era él único sucesor posible, quizás en su círculo íntimo siquiera haya sido el candidato con mayores posibilidades, y seguramente no lo era para los analistas políticos y encuestólogos. Pero Chávez tenía su propia mirada.

Si el propio Chávez en su etapa inicial fue desafiado en su autoridad como líder del proceso bolivariano, recordar por ejemplo que el militar Francisco Arias Cárdenas lo enfrentó en las presidenciales del 2000, Maduro con mucho menos espaldas políticas, no iba a correr mejor suerte.

Si era aceptable que un ministro obedeciera al presidente que era un líder que fue tomando enorme dimensión nacional e internacional, no ocurrió lo mismo cuando su reemplazante era considerado un par, o menos que eso. No fue casualidad entonces que las primeras discrepancias aparecieran con Jorge Giordani, un veterano economista que siempre se consideró a sí mismo como padre de la nueva economía venezolana y con Rafael Ramírez, otro veterano dirigente que durante muchos años fue considerado el dueño de PDVSA, la mayor caja del Estado venezolano.

Más allá de que las diferencias con Giordani y Ramírez fueran alimentadas por cuestiones políticas y egos personales, los conflictos, se desencadenaron por problemas más concretos. La nueva economía venezolana proyectada por Giordani desde su ministerio, estaba empanzanada y cuestionada por sus magros resultados y en PDVSA se asentaban nichos de corrupción que el propio Ramírez se declaraba impotente para desarticular.

El desplazamiento de Giordani y de Ramírez fue posible gracias al ejercicio de un ajedrez político por parte del Presidente, donde otras figuras y sectores cobraron fuerzas. Hubo un ostensible crecimiento del sector militar cuyas figuras más prominentes fueron el General Rodolfo Marcos Torres que empezó a tomar poder en el área económica y el Coronel Miguel Rodríguez Torres que fue Ministro de Interior y Defensa y que tenía aspiraciones sucesorias.

En los últimos tiempos hubo un desplazamiento de ese sector a partir del relevo de Rodríguez Torres y la pérdida por parte de Marcos Torres del Ministerio de Economía, quedando relegado a la cartera de Alimentación.

Mas allá de los juegos de poder, resulta evidente que el sector militar que posteriormente al desplazamiento de Giordano había llegado a controlar el área económica quedó políticamente muy expuesto, dado el fracaso de sus políticas de promoción de las importaciones como fuente de abastecimiento interno. Estas políticas quedaron desnudas al caerse los ingresos petroleros y tener que enfrentarse la realidad de un país con muy escasa producción nacional y sin dólares para comprar afuera.

En el retroceso del sector militar en el gabinete, se expresa también la caída de la influencia de Diosdado Cabello, que en los años 2014 - 2015 como presidente de la Asamblea Nacional, funcionó como una figura de casi tanto peso político como el Presidente y se perfilaba como su relevo inevitable en caso de dimisión.

La pérdida de peso del sector militar, y en particular del sector militar vinculado a los negociados, ha sido fomentada desde el propio gobierno de Maduro con medidas como el combate al contrabando y la decisión de cuantificar las reservas mineras y crear empresas mixtas para su explotación. El blanqueo de la minería, que ha sido cuestionado desde banderas ambientalistas, no siempre desinteresadas, expone y posibilita un control del Estado sobre una actividad que venía realizándose en forma clandestina, sin ingresos fiscales y sin ninguna prevención de los costos sociales y ambientales

Haciendo un balance a tres años de la desaparición física del Presidente Chávez, puede afirmarse que el presidente Maduro ha podido mantenerse como presidente, superando desde su asunción pujas y presiones internas, negociando diferentes alianzas con sectores de la burocracia, empresarios y militares, que hoy le permiten gobernar con limitaciones, y no sabotean abiertamente su gestión.

Desde una mirada amable podríamos decir que el nuevo equilibrio de fuerzas consagrados en el gabinete parece más útil para ganar tiempo y sostenerse en el gobierno mientras pase la coyuntura adversa, que como orientación de largo plazo. Desde una mirada menos amable se dirá que la decisión de hacer concesiones para sobrevivir coloca al gobierno bolivariano en la delgada frontera entre un andar zigzagueante impuesto por los tiempos duros y un desandar de la orientación estratégica inicial.

En países de modelos neodesarrollistas estos logros serían totalmente insuficientes para sostener la gobernabilidad pero, como está dicho, la salud del proceso bolivariano descansa mucho más en el pueblo que en el gobierno.

La necesidad de ganar tiempo es importante porque hacia delante se avizoran mejoras condiciones, porque empezaran a hacerse visible los re-

sultados del contragolpe productivo desde las bases, los precios del petróleo han empezado a recuperarse y los pronósticos climáticos aseguran el fin de un período seco, de fuerte impacto negativo sobre la producción agropecuaria y la generación energética, que ya lleva tres años.

8. El problema de la vanguardia dispersa

En los primeros tiempos en que me acerque al proceso bolivariano, en un par de visitas ocasionales, y trasladando esquemas de otras realidades, sacaba conclusiones apresuradas concluyendo que el problema de la vanguardia del proceso bolivariano y, en consecuencia, la sucesión de Chávez iba a reducirse a la confrontación entre una estructura partidaria burocrática (el PSUV) y movimientos populares que expresaban la vocación revolucionaria de las bases.

Viviendo en Venezuela en los años 2013 y 2014 y con estadías periódicas durante 2015 y el verano de 2016, conociendo casi toda la geografía nacional desarrollando experiencias de formación política muy intensas que incluían encerronas que durante 10 ó 12 días nos permitían convivir con servidores públicos, comuneros e integrantes de movimientos sociales; intentando aportar desde espacios institucionales como el Ministerio de Comunas, la Misión Cultura o la Misión Saber y Trabajo; compartiendo actividades con movimientos populares, Comunas y otros espacios autogestionados, conversando con lúcidos intelectuales y militantes populares venezolanos; fui concluyendo que el asunto de la vanguardia era mucho más complejo.

Creo haber podido entender que así como en Venezuela hubo una revolución inesperada, también existió en sus momentos iniciales una vanguardia inesperada que no provino de los lugares tradicionales (las organizaciones y partidos de izquierda), sino de los cuarteles, con el agregado de un puñado de militantes de izquierda que vieron en Chávez un liderazgo con posibilidades revolucionarias. En ese “agregado civil” a la vanguardia podemos reconocer, entre otros, al actual presidente Maduro y al veterano dirigente Fernando Soto Rojas, provenientes de la Liga Socialista; al actual diputado Elías Jaua, de la organización Bandera Roja; a Kleber Ramírez Rojas (que fallece en 1998) y Adán Chávez del Partido de la Revolución Venezolana, a Jorge Giordani del Movimiento al Socialismo (MAS) y a Ali Rodríguez Araque de Causa R. Algunos intelectuales como Reinaldo Iturriza han destacado la influencia que tuvieron desde los primeros tiempos algunos de estos cuadros políticos, en particular Kleber Ramírez que es el redactor de la “Acta constitutiva del Gobierno de Emergencia Nacional”

que sintetiza los principales puntos programáticos de los alzados del 4 de febrero de 1992. “En el “Programa” pueden identificarse unas cuantas claves para descifrar el enigma de nuestra economía dependiente, así como verificarse la importancia estratégica que, desde el inicio, los bolivarianos le atribuían a lo comunal” (Iturriza, 2016).

Podría asegurarse que la irrupción de esa novedosa vanguardia, integrada por militares poco conocidos y por militantes de izquierda que mayoritariamente rompían con sus estructuras y dirigentes históricos sorprendió a buena parte de la izquierda, que debió elegir sumarse a lo inesperado, o tirar piedras desde lejos a quienes consideraban que había arrebatado la conducción de las masas bolivarianas.

Quince años después distintos acontecimientos, que incluyen el fallecimiento de Chávez, desde haber padecido un proceso de estatización, y hasta el desgaste estratégico que afectó a aquellos que asumen la tarea de gobernar, me parece evidente que ese destacamento de vanguardia ya no existe.

Pensando en su reemplazo, cuando intentamos identificar los elementos más avanzados del proceso bolivariano nuestra primera comprobación fue que estaban dispersos. Los pudimos encontrar en figuras del alto gobierno, en las Comunas, en los movimientos populares, también en el PSUV y los grupos políticos del Polo Patriótico.

Donde seguro no encontramos vanguardia fue en cierta izquierda con más vocación de asesoría que de transformación de la realidad, que parece haber retrocedido al período prechavista con la decisión de escudar detrás de su pesimismo y derrotismo, la renuncia a toda incidencia política. Caracterizando que la revolución está perdida, o que nunca hubo revolución, no escatiman gestos que los congraden con los que suponen regresarán inexorablemente al gobierno.

El problema de una vanguardia dispersa es que pierde efectividad política, diluye sus posibilidades de conducción y queda en desventaja para enfrentar a la infiltración burguesa, a la mezquindad burocrática y a la manipulación de todos aquellos que habiendo renunciado al horizonte socialista cuentan a su favor las facilidades y contención que le brinda el viejo Estado. Todo ello en un contexto internacional donde la idea del anticapitalismo está en la más absoluta soledad.

Reconstruir una vanguardia, o más precisamente un movimiento popular con capacidad de liderar la salida del atolladero impuesto por circunstancias complejas y conducir al proceso revolucionario en la transición al socialismo hasta un punto de no retorno, parece ser una tarea prioritaria. Planteando apenas el problema, a la distancia y sin poder vivir las dificul-

tades de esa apuesta, me animo a ser optimista. El movimiento popular se conoce y se reconoce. Es cuestión de empezar a juntarse, desechando personalismos y mezquindades sectarias o corporativas.

9. La cuestión del protagonismo popular

Si las condiciones de base para el desarrollo de un proceso de transformación en Venezuela eran extremadamente precarias, si el punto de partida estaba mucho más atrás que el que ofrecían otros países como la Argentina y Brasil, la gran diferencia entre estos procesos está determinado por el papel asignado al pueblo trabajador desde la conducción política en su etapa inicial y las consecuencias políticas de esa apuesta.

Chávez tenía una enorme confianza en aquello que llamó Aquiles Nazona “los poderes creadores del pueblo”, y ha sido el protagonismo del pueblo bolivariano quien ha sustentado el proceso revolucionario, sosteniéndolo en condiciones muy adversas y presionando para dar saltos adelante en coyunturas críticas.

Desde la consultora “independiente” Interlaces, frecuentemente mencionada por el chavismo ya que no se la considera opositora, su director Oscar Schemel, ha propinado recientemente al presidente Maduro un diagnóstico demoledor “está atrapado en un enredo ideológico, una trampa cognitiva, parece que está viviendo una fantasiosa épica revolucionaria y no aterriza en los problemas de la gente”.

Creo que esta es una caracterización similar a a la que se adjudicaba a Chávez desde la óptica burguesa, incluso desde sus variantes progresistas. Pero el líder veía al pueblo en movimiento, desde otra sintonía. Cuando los encuestadores caracterizaban que a la mayoría del pueblo venezolano le interesaba solo lo que iba a comer al día siguiente, Chávez empezó a hablarles de la Patria, de Bolívar, del pasado glorioso, de la posibilidad de concretar la revolución interrumpida.

Cuando se ganó el gobierno y se recuperó PDVSA, pero aún las medidas revolucionarias no se habían traducido en un impacto en las mejora de las condiciones de indigencia, pobreza y empleo, y las encuestadoras caracterizaban una situación de equilibrio inestable del gobierno, fuertemente asediado por la oposición, el pueblo bolivariano salió a enfrentar el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y después se mantuvo firme pese a las condiciones de extrema precariedad a las que fue sometido como consecuencia del paro petrolero

Cuando por resultado de la distribución de la renta petrolera las barriegas se empezaron a llenar y se pudo financiar a las Misiones que contri-

buyeron a mejorar las condiciones de vida de la población, Chávez no se limitó a capitalizar los beneficios evidentes de su política, sino que fue por más. Propuso la construcción de un socialismo comunal y puso en la mesa de discusión temas muy fuertes como los del feminismo, la unidad de los pueblos latinoamericanos, el Eco Socialismo, el desarrollo endógeno y la soberanía alimentaria.

La muerte de Chávez, fue un golpe duro para el pueblo bolivariano y abrió la lucha sucesoria en la alta dirigencia chavista, pero también, en ese momento crítico, el pronóstico de caída y disolución del proceso bolivariano, de encuestólogos e informados analistas no se cumplieron.

El pueblo bolivariano hizo posible la sobrevivencia del proceso bolivariano, pese a la ausencia de Chávez y el asedio de las guarimbas.

Cuando se produjo la derrota electoral que provocó la pérdida de la Asamblea Nacional, otra vez los pronósticos pesimistas arreciaron al punto de enfervorizar a la oposición que pronosticó la caída de Maduro en un plazo de seis meses (que se cumplen el 6 de julio de 2016).

Al redactar este artículo se están por cumplir los primeros tres meses de este pronóstico y se observa que la oposición no ha podido tumbar al Presidente, que está demorada en los trámites del revocatorio y que no ha podido recuperar la calle, donde el chavismo sigue siendo abrumadora mayoría. Continúa la guerra económica, la escasez, el desabastecimiento y la alta inflación, y a pesar de los esfuerzos del gobierno por aminorar los costos sociales el pueblo no la está pasando bien, pero hay un “aguante popular” que ha hecho fracasar sucesivos pronósticos de la derecha de que la explosión social era eminente. Y lo más importante, desde el subsuelo, desde lo que no pueden ver los encuestadores y opinólogos, se está produciendo un contragolpe productivo protagonizado por el pueblo que ha empezado a sembrar hasta en las macetas y que se ha puesto a producir con todos los recursos que dispone. Este fenómeno de resistencia popular, que todavía no se hace visible, ni ha podido desarrollar toda su potencialidad porque no supera lo local, tiene su propio curso, pero ha podido empalmar con el aliento discursivo del Presidente Maduro y la orientación de revitalizar los Consejos Comunales, a quien asigna la tarea de crear los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Los CLAP), para repartir casa por casa los alimentos a precio subsidiado.

No sucede lo mismo con la gran mayoría de los altos funcionarios de gobierno chavista que, salvo excepciones, tienen una óptica conservadora sobre las posibilidades de “los poderes creadores del pueblo” y no promue-

ven su protagonismo. Sin embargo, estas limitaciones no son definitorias porque desde hace bastante tiempo, y la crisis del 6D lo confirmó, el destino del proceso revolucionario ha dejado de ser un problema exclusivo del gobierno. El gobierno no tiene posibilidad alguna de enfrentar la guerra económica por sí solo porque el Estado venezolano, desfinanciado por la baja de los precios del petróleo, carece de recursos y porque buena parte de la dirigencia chavista ha quedado deslegitimada. Pero lo más importante es que en el pueblo se ha extendido la conciencia de que “gobiernos no hacen revoluciones” y “solo el pueblo salvará al pueblo”. Conclusiones que harían muy feliz a Chávez.

La asociación del proceso bolivariano a los gobiernos neodesarrollistas, lo condenan a compartir la debacle irremediable de estos últimos. Debe advertirse en primer lugar que se trata de procesos diferentes desde su punto de partida, en su orientación estratégica, y también desde la actualidad de sus debates. Compartir un mismo tiempo histórico, y parecidas presiones internacionales, no determinan un resultado inexorable. No olvidar que el Caracazo y el alzamiento militar de 1992 se hicieron durante la hora más oscura de la izquierda en Latinoamérica y en el mundo. De distintos árboles se obtendrán distintos frutos. Por eso el proceso bolivariano, por ahora, sigue teniendo un final abierto, y donde el pueblo no será un simple testigo o alguien que alienta desde las tribunas a uno u otro bando. Por lo contrario, el pueblo venezolano que desde el Caracazo empezó a emerger como sujeto protagónico, no ha dicho su última palabra.

La Plata, 5 de abril de 2016

Referencias bibliográficas

- Cieza, Guillermo, “Repensando Venezuela”. En: —, *Crónicas Venezolanas*. Caracas: Fundación Editorial El Perro y la Rana, 2015, p. 209.
- Iturriza, Reinaldo, “Rebelarnos, ser mejores. A Kleber Ramírez, veinticuatro años después del 4F”. 4 de febrero de 2016. Disponible en: <https://elotrosaberypoder.wordpress.com/2016/02/04/rebelarnos-ser-mejores-a-kleber-ramirez-veinticuatro-anos-despues-del-4f/> (último acceso: 21/5/2017).
- Ramonet, Ignacio, *Hugo Chávez: Mi primera vida*. Barcelona: Debate, 2013.

Neoliberalismo y neodesarrollismo en Centroamérica: ¿proyectos diferentes?*

**María Gabriela Guillén Carías
Judite Stronzake**

La profundización deliberada de la desigualdad social y la creciente mercantilización y destrucción de la naturaleza en Centroamérica son expresiones del actual estadio histórico de desarrollo, pautado por las premisas irracionales y contradictorias de reproducción del sistema sociometabólico del capital en crisis. Sea en la variante neoliberal o neodesarrollista, desde la década de 1970, la crisis estructural en los países centrales viene promoviendo la transferencia de capitales altamente volátiles cuyo modelo de acumulación está basado en el extractivismo y en la especialización productiva. El resultado ha sido el arraigo de formas precarias de trabajo y de desempleo estructural, que produjeron una ininterrumpida expulsión de centroamericanos y el aumento de las muertes violentas, con índices superiores a los de la época de los conflictos armados en la región. Junto con ello vino una brutal expansión del tráfico de drogas, armas y personas, y la consiguiente represión del Estado que, bajo el pretexto de combatir la delincuencia y el crimen organizado, se encarniza contra las clases subalternas de forma generalizada, despuntando la barbarie social.

* “Neoliberalismo e neodesenvolvimentismo na América Central: projetos diferentes?”. Trad. de Esteban Ruiz.

Integrados de forma subordinada al sistema capitalista mundial desde la colonización, los países de Centroamérica atravesaron bruscas convulsiones sociales a lo largo de todo el siglo XX. La crisis económica de 1929 llevó a la sublevación de miles de campesinos en El Salvador, que culminó en una de las mayores masacres perpetradas por el Estado en Latinoamérica. No fue diferente cuando se agotó el modelo desarrollista de acumulación basado en la industrialización para sustituir importaciones y durante la “revolución verde” en la década de 1960. Sin superar el paradigma agroexportador, el Mercado Común Centroamericano, proyectado para colocar las mercaderías de la industrialización y homogeneizar el territorio al facilitar la circulación de capitales, colapsó y llevó a una crisis social y política sin precedentes que dio comienzo a la historia de las grandes movilizaciones populares en toda la región. Cada país centroamericano manifestó sus particularidades en cuanto a la lucha de clases, pero lo general fue el surgimiento de organizaciones masivas de trabajadores rurales que luchaban por las condiciones de vida que la industrialización sin reforma agraria les negara. Particularmente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, la organización creciente de los trabajadores rurales proletarizados por la expansión del monocultivo del algodón para la exportación generó una violenta respuesta de las dictaduras cívicomilitares que provocó el ascenso de movimientos guerrilleros encabezados por sectores medios urbanos radicalizados y enraizados en la población de origen indígena y campesina. En Nicaragua, el estadio avanzado de la articulación de la lucha armada popular tuvo como resultado la toma del poder en 1979 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Honduras y Costa Rica pasaron también por un proceso de lucha campesina en los años 70, pero el imperialismo norteamericano en el auge de la Alianza para el Progreso financió una serie de programas de distribución de tierra, creando así la ilusión de la inexistencia de conflicto agrario en ambos países. En el caso de Honduras, el Estado aplacó la ocupación masiva de tierras a través de un proceso de colonización en la región de Valle de Aguán¹, transformándose el país en un polo de apaciguamiento regional y base para los contrarrevolucionarios nicaragüenses que se oponían al gobierno sandinista. En Costa Rica, un proceso de carácter “modernizador” de las instituciones, también financiado por los EE.UU., dio una apariencia

1 El auge de la distribución de tierras fue en los años 70, cuando 120.000 hectáreas, el 12,3% de las tierras del país, se repartieron entre 60.000 familias campesinas que fundaron cooperativas de pequeños productores en la región.

de estabilidad política y social al país, a pesar de la resistencia de algunos sectores de las clases trabajadoras urbanas y rurales. Mientras las guerrillas estaban en auge en El Salvador y Guatemala, Costa Rica se transformó en la “vitrina democrática y desarrollada” de Centroamérica. A pesar de ello fue el primer país en instaurar el programa neoliberal (1982), hecho que originó una contradictoria política estatal que al mismo tiempo expropiaba y distribuía tierras a los pequeños productores, lo que permitió cierto grado de control social y la continuidad de la estructura agraria tradicional. En Nicaragua, el gobierno sandinista era desestabilizado por un grupo armado de contrarrevolucionarios financiado por los EE.UU. y el conflicto armado en Guatemala y El Salvador se dilataba sin culminar en una resolución por la vía militar.

En el apogeo de la guerra, los Estados centroamericanos bajo presiones de EE.UU. comenzaron un proceso de negociaciones entre las cúpulas tendientes a la estabilización regional. El gobierno nicaragüense fue forzado a negociar con los contrarrevolucionarios y a realizar elecciones que no estaban previstas, en las que el FSLN fue derrotado en 1990 por la neoliberal Violeta Chamorro. De la misma forma, otros Acuerdos de Paz fueron negociados en El Salvador (1992) y Guatemala (1996) entre las comandancias de las organizaciones guerrilleras, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) respectivamente, y las cúpulas gubernamentales.

Los Acuerdos de Paz cerraron un ciclo de movilizaciones populares y marcaron el pasaje de un modelo de acumulación capitalista a otro; este periodo es aclamado ideológicamente por los apologistas del capital como el camino hacia la “transición democrática” de los países centroamericanos. Nada más lejos de la realidad puesto que la estabilización coincidió con la reestructuración productiva mundial en curso y con la necesidad de financierización de la economía para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa a los acreedores internacionales. Fracciones de las clases dominantes centroamericanas aprovecharon el nuevo espacio político y abrazaron el Consenso de Washington, reconstituyendo la subordinación del istmo en nuevos términos. Los Acuerdos tuvieron la función de desmovilizar las luchas populares, al integrar sus comandancias y escalafones intermedios al orden establecido. Tuvieron un efecto legitimador de la democracia formal, limitada a la alternancia del poder y a la institucionalidad burguesa, como la alternativa posible al desenlace de las guerras, lo que terminó por imprimir en la consciencia de clase de los subalternos la

ilusión del progreso social a través del desarrollo capitalista en un tiempo histórico en el cual el capital ya no tenía potencial civilizatorio.

Los Acuerdos de Paz crearon las condiciones de estabilidad social requeridas para los objetivos de acumulación capitalista de las clases dominantes nativas y extranjeras. Mediante las contrarreformas política y económica, que lejos de ser contradictorias se complementaron entre sí, fueron instaurados el Programa de Ajuste Estructural (PAE) y el Programa de Estabilización Económica (PEE). Ambos se justificaron en la necesidad de modernizar las instituciones para ampliar la gobernabilidad, la transparencia y la participación ciudadana. No obstante, una vez mutilada la maquinaria estatal con el recorte y la focalización de los gastos públicos a expensas de las crónicamente exiguas áreas de acción social del periodo desarrollista, la irracionalidad del mercado pasó a ser el único paradigma de distribución de recursos y de desarrollo económico y social.

La desregulación económica, la apertura comercial y la privatización de empresas públicas de sectores estratégicos fueron acaparadas por el capital transnacional que pasó a controlarlas de forma monopólica. En todos los países centroamericanos, las antiguas relaciones de producción que predominaban en las haciendas de café, sobre todo en Guatemala y El Salvador, fueron destruidas por la decadencia del sector en los años 90. La exención de impuestos a la importación de *commodities*, especialmente de granos básicos oriundos de EE.UU., dio el golpe final a la ya deteriorada situación alimentaria de la población centroamericana. En el plano de las industrias nacionales, Centroamérica se transformó en una gran área de *maquilas*, fábricas del sector textil con escasa tecnología que realizan el montaje de indumentaria que es exportada principalmente a los EE.UU. Tales empresas en su mayoría de capital extranjero, gozan de grandes incentivos fiscales y sobreexplotan la fuerza de trabajo, eminentemente femenina y con baja calificación. Las *maquilas* predominan en Honduras, El Salvador y Guatemala, donde miles de mujeres jóvenes trabajan largas jornadas con ritmos intensificados en condiciones de extrema precarización laboral. En forma concomitante, el ataque frontal a los sindicatos mediante contrarreformas jurídicas de fuerte corte antisindical dio como resultado el ajuste salarial durante muchos años.

El escenario de liberalización comercial y financiera no logró resolver los problemas crónicos de desempleo estructural heredados del periodo desarrollista anterior a las guerras civiles. No solo no fue posible mitigarlos, sino que se agravaron. El déficit fiscal y el endeudamiento se hicieron

crónicos, y ello aumentó la subordinación estructural de los países centroamericanos sin el ansiado desarrollo económico y social.

Una segunda fase de la subordinación del territorio centroamericano al capitalismo mundial fue la ola de Tratados de libre comercio (TLC), impulsada en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Fundamentados también en la desregulación total de los capitales, los tratados son verdaderos instrumentos de subyugación de los países que los suscribieron, más allá de su contenido económico, ya que configuran un marco jurídico de protección a las corporaciones transnacionales que pasa por encima de los Estados nacionales y su legislación. Raúl Moreno, economista salvadoreño, explica la esencia de los TLC:

De acuerdo al marco constitucional de muchos países periféricos, *los acuerdos internacionales se convierten en ley al ser ratificados*; esta condición posibilita que las disposiciones contenidas en el amplio abanico de los acuerdos emanados de la OMC, que por sus principios y contenidos coinciden plenamente con los PAE-PEE, *se conviertan en ley de nuestras repúblicas, subordinando automáticamente a todo el marco jurídico secundario –leyes laborales, ambientales, o de inversiones, entre otras–*. (Moreno, 2004: 39. Las bastardillas son nuestras)

El TLC entre Centroamérica y los EE.UU. (TLC CA-EU) fue el que más negativamente impactó en la región. Vigente desde 2006, este tratado profundizó la liberalización económica para facilitar el acceso total e irrestricto de las corporaciones transnacionales a los recursos naturales y servicios públicos de los países centroamericanos e “implicó, entre otras problemáticas, la erradicación de los aranceles a las importaciones de granos básicos procedentes de Estados Unidos”. (Alonso-Fradejas, 2014:108)

Desde entonces, las iniciativas del periodo desarrollista dirigidas a asegurar un mínimo de distribución de semillas y granos básicos se perdieron por completo en toda Centroamérica. Los mecanismos del mercado comenzaron a imperar y crearon una dependencia de granos importados cuyos precios bajos, menores que los producidos nacionalmente a partir de la práctica del *dumping*, terminaron por desarticular las comunidades campesinas y sus modos de vida y de producción tradicional. La lógica irracional del TLC profundizó los mecanismos de los PAE de los años 90, pero con una absoluta hegemonía de los EE.UU. sobre la región y con mayores restricciones a los países que se le subordinaron. Una de las cuestiones más controvertidas del TCL es la cláusula no negociable inversor-Estado que confiere poder total a las corporaciones transnacionales. Los Estados na-

cionales pueden ser procesados judicialmente si obstaculizan las inversiones realizadas o futuras ganancias, las que no pueden sufrir la interferencia de decisiones gubernamentales o de políticas públicas.²

Los TLC resuelven por la vía pacífica y de forma unilateral lo que Mézáros llama “contradicción de difícil solución entre la tendencia de desarrollo económico de las corporaciones transnacionales y las restricciones impuestas a ellas por los Estados nacionales” (Mézáros, 2011: 227) De hecho, las grandes transnacionales no tendrían el poder ni la penetración que tienen, si no fueran sustentadas por los Estados de las naciones capitalistas dominantes donde se originan. Su impacto en los países periféricos se traduce en barbarie social. El Estado disminuye sus funciones en las áreas sociales al mismo tiempo que se vuelve inexorable a la hora de resguardar los privilegios e intereses del gran capital, en especial cuando se trata de la violencia estatal al momento de reprimir grandes contingentes de trabajadores que se vuelven superfluos y son arrojados al desempleo estructural por los efectos del propio TLC. De hecho, el desempleo estructural, producto de la completa apertura comercial, es la gran herida social del periodo en cuestión, lo que pone en el horizonte la imposibilidad de realizar mejoras para las clases trabajadoras en el ámbito del desarrollo capitalista. Los TLC legitiman judicialmente la actuación ilegal e irracional del capital y reafirman los parámetros jerárquicos y contradictorios de funcionamiento del sistema, al transformar los privilegios de un puñado de accionistas de las corporaciones transnacionales en derechos irrevocables en detrimento de la vida de poblaciones y países enteros.

A los TLC habría que agregar otros mecanismos de dominación imperialista como la Cuenta y la Corporación del Desafío del Milenio (CCDM), específicas para países centroamericanos.³ Ambas han sido eficientes en

2 Esta situación se perfiló en 2009 a través del proceso judicial interpuesto por la transnacional de minería Pacific Rim contra el Estado salvadoreño por la prohibición de iniciar la explotación de minas de oro. La no concesión de las licencias generó el “descontento” de la transnacional que procesó al Estado bajo el marco del TLC en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por \$ 314 millones, debido a “pérdida de futuras ganancias” y violación del contrato. En caso de haber explotado las minas de oro, la transnacional se hubiera llevado el 98% de las ganancias, dejando el 2% restante para el Estado salvadoreño.

3 En el caso de El Salvador también habría que agregar la dolarización y la Asociación para el Crecimiento firmado con EE.UU.

impulsar el agronegocio y la construcción de infraestructura en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala a través de desembolsos de dinero hechos por EE.UU. A pesar de priorizar la autonomía de los Estados a la hora de identificar sus “prioridades de desarrollo” y de poder elegir dónde aplicar esos recursos, los desembolsos de las CCDM han sido direccionados a las mismas áreas en todos los países: “*fortalecimiento de los emprendimientos rurales, agronegocio e infraestructura de transporte*” (Mawdsley, 2007: 498. La traducción y las bastardillas son nuestras) Las CCDM también promovieron la aprobación de leyes de asociación público privadas en la región con la intención de mejorar las condiciones de inversión para que las empresas transnacionales de apropiaran de ciertos sectores de servicios públicos sin involucrarse en grandes inversiones o asumir los riesgos que asumen los Estados centroamericanos.

Todos estos mecanismos consolidan la dominación imperialista en Centroamérica y forman parte de un plan mayor integrado a la estrategia geopolítica de control de mercados, fuerza de trabajo, territorios y recursos naturales como agua, biodiversidad y minería. Para ello, se hace necesaria la construcción de infraestructura de transporte y generación de energía que interconecte la región. Esta estrategia llamada “Iniciativa Mesoamericana” prevé la integración de toda la región, desde Panamá hasta el sur de México, a través de megaproyectos de infraestructura –como rutas, puertos, redes de comunicación, centrales hidroeléctricas, gasoductos– construidos justamente en zonas geográficas que poseen preciosos recursos naturales.⁴

Ante el panorama de insatisfacción por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y de graves conflictos sociales, en la primera década de los años 2000, los gobiernos neoliberales dejan su lugar a gobiernos “progresistas” en Honduras, Nicaragua y El Salvador.⁵ En el caso de Honduras, el gobierno de Manuel Zelaya (2006) comenzaba a atender algunas demandas de los trabajadores urbanos y rurales cuando sufrió un golpe de Estado que marca la continuidad de las oligarquías tradicionales en el poder. Sin revertir el neoliberalismo, Zelaya se acercó al gobierno de Venezuela, a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y a Pe-

4 La Iniciativa Mesoamericana, anteriormente Plan Puebla Panamá, es un plan de “integración” homólogo a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

5 En 2014 fue electo en Costa Rica un gobierno de centroizquierda a través de un Frente Amplio, fruto de las luchas populares antineoliberales de la década de 1990.

trocaribe. Aumentó el salario mínimo en 65% y abrió un canal de diálogo con el Movimiento Unificado Campesino de Aguán (MUCA), que venía luchando desde los años 90 por la pérdida de las tierras distribuidas durante la dictadura. La reestructuración y la especialización productivas expulsaron a los campesinos de las tierras fértiles de la región norte de Honduras, al sustituir sus cooperativas de producción agrícola por el monocultivo de palma africana en función de las necesidades de agrocombustibles para el mercado externo.⁶

En Guatemala, después de los Acuerdos de Paz, la oligarquía latifundista y la alta burguesía industrial y financiera tomaron las riendas del país, sin dejar la menor oportunidad a un gobierno “progresista” de dirigir la nación. En los años 90 instauraron una serie de agronegocios que liquidó el sistema de haciendas cafeteras y provocó el deterioro alimentario de la población con la importación de granos baratos de EE.UU. A pesar de que un importante movimiento indígena y campesino venía acumulando fuerzas desde el fin de la guerra y se fortaleció con el proceso de los Acuerdos de Paz, este pasó de la “protesta a la propuesta” en el ámbito institucional del Estado. (Alonso-Fradejas, 2014:121) Así, en 2007, comenzó un proceso de remilitarización de Guatemala en las áreas rurales donde hubo grandes masacres indígenas durante el periodo de la guerra y que coinciden con las zonas de implantación de proyectos de minería, hidroeléctricos y de cultivo de palma africana.

En Nicaragua y El Salvador, los partidos políticos que ganaron las elecciones presidenciales en 2006 y 2009, respectivamente, fueron producto de frentes populares que se armaron en los años 70. Una vez en el gobierno, estos no abandonaron los pilares macroeconómicos neoliberales y avanzaron en dirección al fortalecimiento de los imperativos del capital, al hacer concesiones a la línea de menor resistencia según sus intereses económicos. En El Salvador, el FMLN se apresuró en calmar los mercados financieros y buscó apoyo en la oligarquía cafetera, que otrora combatiera, y en fracciones de la burguesía desencantadas con las prácticas de las clases dominantes tradicionales. Esto significó la continuidad de la lógica neoliberal, a lo que se sumó la aprobación del Acuerdo de Cooperación con la Unión Europea (otro TLC ratificado en bloque por todos los países centroamericanos) y la Ley de asociaciones público privadas que actualmente favorece a la cúpula del partido en cuanto a la constitución de empresas

6 La alimentación de los hondureños se vio seriamente perjudicada en 2010, a partir de entonces el país importa el 50% de los granos básicos.

aglutinadas en torno a ALBA petróleo. A pesar de la tendencia socialista de esta asociación, lo que se vislumbra es un nuevo bloque empresarial configurado por los ex comandantes guerrilleros que administran empresas ligadas a la comercialización de derivados del petróleo proveniente de Venezuela. Según el modelo de gobierno de Lula en Brasil, sin alcanzar los mismos resultados, el FMLN instauró una serie de políticas públicas que proyectan la administración de los conflictos sociales a través de la creación de empleo y la dinamización de la economía por la transferencia de recursos a pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos que son proveedores de los programas de asistencialismo estatal.

A pesar de atender algunas demandas sociales históricas de la población, el FMLN no pudo contener los impactos negativos sobre la clase trabajadora, vinculados con la continuidad de la apertura comercial y financiera y la no revocación del TLC. Sin obviar las particularidades de cada país, el cuadro de crisis social agravado en El Salvador es similar al de Guatemala y Honduras, sobre todo en lo que se refiere al ciclo de desempleo-inmigración-violencia que afecta a un gran número de niños, mujeres y hombres jóvenes a raíz de un proceso de desintegración social que parece no tener solución en el corto o medio plazo. Estos tres países centroamericanos son los que presentan mayores problemas con el aumento de las pandillas y altos índices de muertes violentas tanto por la intensificación de la represión estatal como por actividades del tráfico de drogas, armas y personas, estas últimas articuladas con los carteles mexicanos que incrementaron sus operaciones en territorio centroamericano en el último decenio. Esta situación ha generado una grave crisis humanitaria que afecta a niños y adolescentes en estos países. El informe “Mujeres en fuga” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) confirma que la ola de violencia se propaga y que el número de mujeres que huyen de sus países por culpa de la represión estatal y del crimen organizado sigue en aumento. Aun más alarmante es el aumento de los menores de edad que llegan a la frontera de México con EE.UU. sin sus padres o separados de ellos; en 2014, se alcanzó la marca de 66.000 niños y adolescentes en estas condiciones. (Guterres, 2015:2)

Desde el punto de vista del capital, Nicaragua presenta el mayor crecimiento económico de Centroamérica. Sin embargo, este se basa en el aumento de la pobreza rural y la consiguiente vulnerabilidad alimentaria, vinculados con uno de los mayores índices de explotación del trabajo: el país ostenta uno de los peores salarios del mundo y una creciente precarización e intensificación de la jornada laboral. La cooptación y la persecución del

movimiento sindical crítico al FSLN se encuentran entre las causas políticas del estancamiento salarial. El sandinista Daniel Ortega, que volvió al gobierno en 2006, mantiene un control férreo sobre los trabajadores y movimientos sociales a través de la coacción y de una serie de políticas sociales copiadas de Lula como *Hambre Cero*, *Programa Nacional de Semillas* y el *Fondo de Crédito Rural*. El pacto conciliador es sustentado a través de una maraña de alianzas que van desde el movimiento sindical aferrado al sandinismo, pasando por el gran capital del agronegocio, del sector minero, comercial y financiero y por los sectores más recalcitrantes de la Iglesia católica –lo que significó un agravamiento de la penalización contra aborto– hasta llegar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y la integración con ALBA y Petrocaribe.

A pesar de oponerse a la ratificación del TLC CA-EU, Ortega dio continuidad a la política económica neoliberal y profundizó la apertura comercial a través de concesiones territoriales y de recursos naturales al capital corporativo nacional y extranjero de carácter extractivista. La máxima expresión de esto es la reciente concesión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua a la corporación china HKND que pretende sustituir el Canal de Panamá. Este megaproyecto de infraestructura, que entrega prácticamente la totalidad del país y concede la administración del canal durante 100 años a los chinos, fue aprobado en 2013 por el parlamento nicaragüense en apenas 3 horas de debate. La inconstitucional Ley del Canal también otorga al concesionario la prerrogativa de solicitar la expropiación de cualquier territorio cuando fuera necesario.

Justificado en la imposibilidad del Canal de Panamá de soportar el volumen actual del comercio marítimo en la zona –hecho negado por expertos en el tema que encuentran innecesario el emprendimiento– el Gran Canal de Nicaragua generará una destrucción ambiental incalculable. La construcción comprenderá enormes franjas territoriales, sobre todo tierras húmedas de al menos siete áreas de reserva natural, el río San Juan y el lago de Managua. La construcción del canal también prevé una zona franca de servicios comerciales y financieros que poco o nada tienen que ver con los sectores productivos del país y que promete atraer capital altamente especulativo.

Existen dudas acerca de la utilidad real del Canal y del inicio de su construcción. El problema es que, incluso sin iniciar los trabajos, la concesión seguirá vigente y la corporación HNDC –fachada de una serie de conglomerados internacionales que actúan en la oscuridad– podría revender los derechos sobre la tierra. El Gran Canal parece ser en verdad una justifi-

cación para la “entrega de los recursos naturales más valiosos que existen en la región, [lo cual] tendrá consecuencias para la soberanía nacional, para la defensa de las tierras y territorios tradicionales y sus actividades campesinas y para la defensa del gran lago Cocibolca”, alerta la activista Mónica Baltodano.⁷

Las manifestaciones populares contra el canal están en efervescencia debido a la inminente pérdida de tierras –se calcula que 100.000 personas serán desalojadas– y la alteración de los ecosistemas en una enorme franja territorial donde comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos ejercen su modo de vida tradicional. Desde el anuncio del proyecto, se vienen desarrollando muchas marchas hacia la capital para protestar contra el Canal y contra el desvío del río San Juan, todas ellas recibidas con una dura represión por parte del gobierno sandinista.

¿A qué intereses sirve el Gran Canal de Nicaragua? Hay muchos factores en juego que inducen el establecimiento de una ruta marítima. Más allá de la nueva configuración geopolítica, con China irrumpiendo como potencia en la región junto con Rusia y Venezuela que apoyan la construcción del Canal, el gran capital corporativo tiene en la mira el control total y sin límites de los territorios nicaragüenses ricos en biodiversidad, agua dulce y minería. Recientemente, las actividades de extracción de oro y plata han aumentado extraordinariamente en el país y también hay perspectivas de encontrar petróleo en la costa nicaragüense del pacífico, lo cual atrajo a las empresas transnacionales del sector, que comienzan a realizar exploraciones en el océano. El Gran Canal de Nicaragua parece abrir una oportuna brecha para que el capital especulativo pueda salir y entrar sin obstáculos y sin asumir responsabilidades por los desequilibrios ecológicos que la mega construcción generará. Mónica López Baltodano afirma que “no existe documento alguno sobre la constitución societaria de las empresas, que son 15 en total en cinco países, esto dificultaría un even-

7 El lago Cocibolca o Gran Lago de Managua tiene un área de 8.624 km² y es el mayor de Centroamérica. Posee una rica biodiversidad, como el tiburón de agua dulce, entre otras especies. Se proyecta la excavación de una franja de tierra que comunique el lago con el Océano Pacífico para el paso de barcos. Los ambientalistas denuncian la destrucción total de ecosistemas en Nicaragua con la entrada de agua salada al lago.

tual proceso judicial por parte del Estado en caso de ocurrir un desastre ambiental masivo”.⁸

Las políticas sociales y económicas puestas en práctica por los gobiernos “progresistas” de la región, en este caso El Salvador y Nicaragua, se encuentran muy distantes del neodesarrollismo sudamericano encabezado poco tiempo atrás por Argentina y Brasil. Con todo, las semejanzas radican en la falta de ruptura con los pilares no solo del neoliberalismo, sino también del capital. La superación de los graves problemas sociales de la actualidad no depende de soluciones parciales, sino de la ruptura radical con los defectos estructurales del sistema sociometabólico del capital en su totalidad, comenzando por su control sobre el trabajo. La reflexión sobre los límites históricos de los llamados espacios democráticos creados con los Acuerdos de Paz en Centroamérica, que incluye también el fin de las dictaduras cívicomilitares en toda Latinoamérica, se hace necesaria frente a un sistema que está llevando a la humanidad como un todo hacia la barbarie social.

La novedad de este periodo histórico es que la expropiación de los recursos naturales, de la tierra y del trabajo se realiza con una voracidad predatoria que se condice con la necesidad de acelerar la acumulación de capital, lo cual ha generado violentos ciclos de desalojo para centenas de miles de centroamericanos. Junto con el desempleo crónico y masivo, se trata del fenómeno social que produce las contradicciones y los antagonismos más explosivos. La imposibilidad de reproducción mínimamente positiva de la clase trabajadora muestra que el sistema sociometabólico del capital ha llegado a sus límites más absolutos en toda Latinoamérica y, como nos recuerda Mézsáros, al espectro de la “incontrolable destructividad”, lo que hace necesaria la recuperación de un proyecto enraizado en las clases populares.

Junio de 2016

Bibliografía

Alonso-Fradejas, Alberto, “Guatemala: capitalismo, poder y tierra”. En: *Capitalismo: tierra y poder en América Latina. (1982 – 2012)*. Vol. 3. México: UAM/CLACSO/ Ediciones Continente, 2014, pp. 93-146.

⁸ Agradecemos la valiosa información concedida en entrevista por Mónica Baltodano y Mónica López Baltodano sobre el Canal de Nicaragua.

- Guterres, António, “Women on the run: first-hand account of refugees fleeing El Salvador, Guatemala, Honduras and México”. UNHCR, 2015. Disponible en: <<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/10228>> (último acceso: 3/3/2016).
- Mawdsley, Emma, “The millennium challenge account: Neo-liberalism, poverty and security”. En: *Review of International Political Economy* 14/3 (2007), p. 487.
- Mészáros, István, *Para além do capital: rumo a uma teoria da transição*. Trad. de Paulo César Castanheira y Sérgio Lessa. San Pablo: Boitempo, 2011.
- Moreno, Raúl, *La globalización neoliberal en El Salvador. Un análisis de sus impactos e implicaciones*. Barcelona: Fundación Món-3, 2004.

Ocupación, cólera y negocios: las virtuosas actuaciones de la MINUSTAH*

Franck Seguy

El día 1 de junio de 2016, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), conducida por Brasil, cumple doce años de ocupación militar del suelo haitiano. Instituida para sustituir a la fuerza militar internacional –EE.UU., Canadá y Francia– que había ocupado Haití durante la caótica situación que produjo el exilio del entonces presidente Jean Bertrand Aristide, el 29 de febrero de 2004, la MINUSTAH fue publicitada, en su inicio, como una misión de paz, humanitaria, de ayuda o hasta de promoción del desarrollo. Hoy, se presenta como un generador de tristezas, de cuya filiación nadie se enorgullece.

Con excepción del papel de la MINUSTAH en el caso de la Operación Bagdad¹ entre diciembre de 2004 y junio de 2006, la misión de las

* “Ocupação, cólera e negócios: as virtuosas realizações da MINUSTAH”. Trad. de Emiliano Orlante.

¹ Se trata de las bandas que, a partir de septiembre de 2004, se formaron en Puerto Príncipe. Sus principales actividades han consistido en secuestrar personas para negociar su rescate a cambio de considerables sumas de dinero. Arrojada en política, la Operación Bagdad no demoró en revelarse como la realidad de un negocio bastante rentable. El comerciante de la alta burguesía Clifford Brandt, encarcelado por las autoridades, es considerado el mayor jefe de este tipo de bandas. Su familia,

Naciones Unidas no contribuyó mucho a establecer el clima de seguridad tan deseado en el país. Los fondos utilizados para el sustento y consolidación de la reforma judicial han permitido a los peritos extranjeros beneficiarse con un muy buen dinero en detrimento de los peritos haitianos. El Centro de Procesamiento de Residuos Sólidos de Carrefour-Feuilles,² que sirve para hacer briquetas de cocina, surgido de la cooperación entre Brasil, India y Sudáfrica, es el único proyecto que introdujo esta misión desde que pisó el país. Doce años después, esa misión no sirve de nada en Haití (Bonneau, 2016).

El lector no haitiano puede pensar que este examen proviene de algún lunático de izquierda o nacionalista que no soporta más ver a su país ocupado y, por eso, milita a favor de su soberanía. En verdad, se trata de un editorial del único diario que le quedó, hoy en día, a la burguesía haitiana: el más que centenario diario *Le Nouvelliste*, fundado en 1898, el cual no es conocido por oponerse a la presencia de la MINUSTAH. Es decir, si fuésemos a buscar del lado de los hechos para encontrar argumentos reales y objetivos, digamos, la *razón-de-ser* de esta fuerza militar en Haití, el ejercicio sería más difícil que enhebrar un cabello en una aguja. En este sentido, la reflexión aquí propuesta analizará brevemente los empeños de esta misión internacional para, a la luz de lo que será considerado, intentar develar sus filiaciones con otras misiones militares de ocupación que ya actuaron en el pasado en Haití. Pues, no tendría sentido considerar a todos los esfuerzos –tanto humanos como materiales– permitidos desde más de una década para tener la misión en funcionamiento, no obstante, las denuncias, como leve ceguera de gobiernos tontos, cuyas embajadas y misiones diplomáticas se manifestarían incapaces de avalar la realidad política haitiana.

Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió, en marzo de 2004, por la resolución 1542, implementar la MINUSTAH en Haití, las actuaciones de estabilización de esta misión debían comprenderse desde tres aspectos fundamentales: seguridad pública, gobernabilidad política y Derechos Humanos. En estos tres dominios, la falencia de la MINUSTAH es evidente a los ojos de los haitianos.

originaria de Alemania, posee la concesión de la marca de autos Mazda y figura entre las siete más ricas de Haití.

2 Barrio popular al Sudeste de Puerto Príncipe.

Breve balance de la misión de la ONU

En términos de seguridad pública, lo que más viene llamando la atención en Haití, desde 2004 hasta la actualidad, es el fenómeno del secuestro de personas por motivos meramente económicos. Las bandas que entonces se armaron y secuestraron personas para exigir de inmediato a su familia centenas de miles de dólares a cambio de sus vidas fueron cuantiosas. Lo llamativo es que el fenómeno se inició en Haití sólo a partir de 2004, cuatro meses después de la instalación de la MINUSTAH. En un artículo, publicado el 1 de junio de 2005 en el diario *Le Nouvelliste*, intitulado “Minustah, quelle mission, quelle stabilisation?” (MINUSTAH, ¿cuál misión, cuál estabilización?), se destacó que solamente a cuatro meses después de la “[...] llegada de los cascos azules de la ONU, la capital haitiana se sumerge en la violencia. Los primeros 365 días de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití³ coinciden con una creciente inseguridad, oleada de secuestros, asaltos [...]” (Le Nouvelliste, 2005). ¿Debe entenderse en este caso que la MINUSTAH, al no encontrar razones para justificar su presencia, se empeñó en idear algunos argumentos propios para eso?

Vale la pena destacar también que, en materia de orden y seguridad pública, uno de los componentes de la ejecución del mandato de la MINUSTAH consiste en facilitarle apoyo a la policía haitiana. O sea, no es por falta de recursos que la fuerza de la ONU es tan criticada y su ineficiencia tan denunciada. Por ejemplo, entre julio de 2010 y junio de 2011, esto es después del terremoto, el presupuesto de la MINUSTAH, destinado a poco más de ocho mil miembros (militares, civiles y policías), alcanzó la cifra de US\$ 853.827.400. Cabe mencionar que, en este presupuesto, no están contemplados los pagos a los países proveedores de soldados de la misión. Ante este escenario, no resulta extraño que un comandante de la policía haitiana, Léon Charles, haya afirmado: “Denme un cuarto de los recursos de la MINUSTAH y restableceré la seguridad del país” (Ibid.).

A la hora de cualquier balance de la MINUSTAH, no hay manera de huir de la delicada cuestión del cólera y de la inseguridad pública que de ella se desprende. El día 19 de octubre de 2010, diez meses después del terremoto de enero, fue anunciado de modo oficial el descubrimiento de la bacteria del cólera, que, en poco tiempo, se propagó por todo Haití. Las estadísticas oficiales actuales estiman más de 900.000 personas infectadas, de las que alrededor de 10 000 perderán la vida.

3 La actuación de La MINUSTAH se inició el 1 de junio de 2004.

Entre el 7 y el 25 de noviembre de 2010, un mes después del descubrimiento del primer caso de cólera en la ciudad de Mirebalais (Centro),⁴ el epidemiólogo francés Renaud Piarroux, especialista en la enfermedad, condujo una investigación en Haití. Tras varios análisis, el profesor Piarroux concluyó que la bacteria provenía de una estirpe importada. Además, sus investigaciones arrojaron mayor precisión sobre el caso: la bacteria se expandió desde la base nepalesa de la MINUSTAH, cuyo grupo de soldados había arribado al país cuatro días antes del hallazgo del primer caso de la enfermedad. También, se supo que este batallón nepalés había abandonado Katmandú, la capital de Nepal, dos semanas después de la eclosión de una epidemia de cólera en este país asiático. Las conclusiones del estudio de Renaud Piarroux fueron confirmadas por otros estudios posteriores que, hasta hoy, no han podido cuestionar aquellos resultados.⁵ Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas siempre ha rechazado cualquier responsabilidad, aun moral, en la introducción de la epidemia en el país.

A pesar de la obstinada negación de cualquier tipo de responsabilidad por parte de la ONU, lo que verdaderamente choca es la manera en que trataron el problema del cólera. En su nota sobre Haití, publicada el 19 de noviembre de 2012 en el periódico *The Nation*, las periodistas Kathie Klarreich y Linda Polman (2012) observaron que:

[...] de los US\$ 175 millones solicitados por las Naciones Unidas para ayudar a reducir la epidemia, menos de la mitad fue otorgado. Por su parte, varias ONG (entre ellas: UNICEF, la Cruz Roja y la Fundación William J. Clinton) lucharon contra la epidemia con campañas destinadas a informar al público sobre la importancia de la higiene y, en seguida, realojaron a los haitianos en áreas que no tenían baños ni lavabos para lavarse las manos. En agosto de 2011, casi un año después de la introducción del cólera, apenas el 12% de las tiendas colocadas por las ONG poseían lavabos. Y solamente el 7% de los campamentos tenía acceso a agua limpia [...], comparado con el 48% que sí lo tenía en marzo del año anterior [2010]. De las 12.000 letrinas necesarias, hay apenas 4.579; o sea, sólo el 30% de ellas quedó en funcionamiento.

4 Este primer caso de cólera fue descubierto por la brigada médica cubana el 14 de octubre de 2010.

5 Las conclusiones de la investigación del Profesor Perraux están disponibles en el sitio virtual del diario *Le Monde*: <<http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-01-12-Haiti>>.

Las intervenciones, como las de la MINUSTAH, cargan en sí todos los gérmenes que, tarde o temprano, acaban pervirtiendo sus posibles y tan escasas actuaciones. A nuestro humilde juicio, el escritor Lyonel Trouillot (2010) acertó cuando percibió que

[...] la acción humanitaria lleva consigo esa tradición que, al declarar querer atender problemas sanitarios de urgencia, termina justificando, al mismo tiempo, su propia existencia. La acción humanitaria no viene solamente para ayudar, también llega para comprobar su necesidad. De este modo, se torna imposible pensar la extinción del carácter humanitario.

Si la falencia de la misión de la ONU salta a la vista en cuestión de seguridad pública, la evidencia se muestra más evidente aún en materia de Derechos Humanos. Los casos de estupro, de acoso sexual y de asesinatos cometidos por agentes de esta misión desbordan por las calles. En varios informes, constan casos de personas muertas durante intervenciones de la MINUSTAH. De hecho, un informe de la Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH)⁶ lamenta la muerte de 74 haitianos a manos de los soldados de la ONU, sólo en Puerto Príncipe. De modo general, como destaca un informe de la Plataforma de las Organizaciones Haitianas por los Derechos Humanos (POHDH) (2012: 9): “[...] la presentación de los actos cometidos por la Misión de las Naciones Unidas en Haití muestra una flagrante contradicción entre la misión de la MINUSTAH y las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por esta en ese país”.

Tanto el sexo transaccional como los estupros, sobre todo al involucrar menores, constituyen otra mancha en la reputación de la MINUSTAH. Otro informe más reciente reconoce que, en ese aspecto, la escalada de los incidentes silenciados es mucho mayor y más preocupante que el de los incidentes informados. Sobre todo, los casos de abuso y explotación sexuales de menores o de adultos no consentidos.⁷

En verdad, los casos que más conmueven a los haitianos son, por lo general, las violaciones y los estupros sobre personas de sexo masculino. Es el caso, por ejemplo, del estupro del joven Johnny Jean, de 17 años, perpetrado por cuatro soldados uruguayos en el pequeño municipio de Port-Salut, Sur de Haití, en julio de 2011. El estupro sufrido por ese joven ejemplifica la inutilidad de la MINUSTAH, desde la perspectiva del pueblo

6 (Francés): Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.

7 Cf. Naciones Unidas, 2015.

haitiano. Port-Salut, pequeña ciudad costera, se destaca por sus atractivas playas y por su impactante paisaje, digno de tarjeta postal. Como ya destacamos en otro artículo (Desrosiers / Seguy, 2011), en 1995, por ejemplo, la ciudad contaba con apenas 40 policías. Mientras el personal de la policía nacional no dejó de aumentar, la ciudad no tenía más que 7 policías en 2004. Pues, allí, no se registraban incidentes graves que hicieran necesaria mayor presencia policial. Aún así, paradójicamente, desde 2004, hay un equipo de la MINUSTAH para “estabilizar” Port-Salut. Dado que la naturaleza tiene horror al vacío y que, como es sabido, el ocio es la madre de todos los vicios, los militares debían encontrar algo para justificar su presencia en el municipio. Poco a poco introducirían la prostitución de menores y el intercambio de comida por alucinógenos, como el tabaco, el alcohol y la marihuana.

Es necesario destacar que el estupro colectivo del joven Johnny no fue un hecho accidental. De hecho, a menos de un año del desembarque de la MINUSTAH en Haití, más concretamente el 18 de febrero de 2005, tres cascos azules paquistaníes estupraron a Nadège Nicolas, una jovencita de la ciudad de Gonaïves.⁸ No obstante, a pesar de que se trató de un acto criminal que causó la ira popular, sobre todo de las organizaciones feministas, el caso se archivó: continúa impune.

En todas sus acciones, la ocupación dirigida por la ONU apunta de forma sistemática contra el pueblo empobrecido. Sus violaciones y sus asesinatos ocurren en los barrios más vulnerables, como Cité-Soleil, contra las mujeres y los jóvenes indefensos. Al respecto, la RNDDH informa del conocido caso del ahorcamiento de un menor de 16 años, Gérald Gilles, en una base militar de los cascos azules nepaleses en Carénage, Cap-Haitien. La MINUSTAH intentó hacer pasar el crimen como un suicidio. Así, como Johnny Jean, Gérald Gilles hacía intercambio con los soldados de la ONU, o sea, les prestaba sus servicios a cambio de comida. De esta manera, como una verdadera fuerza de ocupación, la MINUSTAH hace uso de la violación como arma de guerra. Humilla, explota, somete a los más vulnerables que apenas entran en contacto con ella para garantizar su supervivencia, o simplemente porque son pobres: aquellos y aquellas cuya piel es más oscura porque se ha quemado bajo el sol caliente de Haití; aquellos y aquellas que tuvieron la desdicha de vivir en Cité-Soleil y demás zonas sin derechos, donde las matanzas permanecen impunes.

⁸ Ciudad histórica donde se proclamó la independencia de Haití.

En relación con ello, el mismo informe de la RNDDH señala otro caso ocurrido el 12 de mayo de 2011. Géna Winderson, un estudiante de séptimo año del Colegio Centro de Formación Clásica de Verrettes de 14 años de edad, fue alcanzado por dos proyectiles disparados por soldados de la MINUSTAH. Este incidente ocurrió cuando alumnos del Colegio Jacques Stephen Alexis organizaban una manifestación en contra de la renuncia de un profesor. En rigor, toda resistencia popular y de clase es sistemáticamente reprimida por la misión de la ONU. Amordazar, humillar, violar, prostituir: el credo de la MINUSTAH.

A continuación, seleccionamos nueve casos de violaciones, torturas, asesinatos y detenciones ilegales y arbitrarias. Todos ellos, perpetrados por la MINUSTAH. Los casos fueron extraídos de un informe de la RNDDH, elaborado en 2011.⁹

1. El 18 de febrero de 2005, tres soldados paquistaníes del grupo de la MINUSTAH, ubicados en Gonaïves, estupraron a Nadeige Nicolas.
2. El 20 de marzo de 2005, Robenson Laraque, periodista de Radio TV Contact, fue herido de muerte por proyectiles disparados por soldados de la MINUSTAH, que repelieron a los antiguos militares de la policía de Petit-Goave.
3. El 26 de noviembre de 2005, Marie Rose Précéus fue sodomizada y violentada por un soldado jordano sobre la entrada del aeropuerto, en Carrefour Trois-Mains.
4. El 20 de diciembre de 2006, Stephane Durogène, estudiante de tercer año del Centro de Formación Clásica y Económica (CFCE), recibió dos disparos en el ojo izquierdo, por parte de dos soldados de la MINUSTAH, cuando pasaba cerca de la comisaría de Delmas 62.
5. El 3 de noviembre de 2007, 111 cascos azules de Sri Lanka estuvieron involucrados en un caso de abuso y explotación, cuyas víctimas eran todas menores.
6. El 29 de mayo de 2008, el agente policial haitiano Lucknis Jacques, de la comisaría de Cité-Soleil, fue perseguido por soldados de la MINUSTAH.
7. El 6 de agosto de 2008, soldados de la MINUSTAH maltrataron a dos policías haitianos, Donson Bien-Aimé y Ronald Denis, de la comisaría de Cité-Soleil. Esos hechos fueron perpetrados a pesar de que las víctimas se hubieron identificado claramente.

⁹ Cf. Réseau National de Défense des Droits Humains, 2011.

8. El 18 de agosto de 2010, un menor huérfano de 16 años, que respondía al nombre de Gérald Jean Gilles, fue encontrado colgado en un almendro de la base de los soldados nepaleses de la MINUSTAH, situada en Carénage, Cap-Haitien. El menor frecuentaba la base y les prestaba servicios a los soldados.
9. A mediados de octubre de 2010, cascos azules nepaleses de la MINUSTAH, con base en Mirebalais, son acusados de provocar y propagar el cólera en Haití por el derramamiento de residuos humanos en los ríos Boukan Kanni y Jenba. Este hecho produjo la infección de cerca de 900.000 habitantes, además de causar la muerte a más de 9.000 haitianos.

Gobernabilidad política: las elecciones

Cualquier intento de analizar las actuaciones de la MINUSTAH tiene que examinar obligatoriamente la contribución de las fuerzas de paz en la promoción de la democracia y de los principios de gobernabilidad democrática, del Estado de derecho y del desarrollo institucional. Estos elementos son, pues, parte de los componentes de su mandato. En este sentido, una de sus tareas debe consistir en ayudar al gobierno haitiano a realizar elecciones libres y justas a través de la prestación de asistencia técnica, logística y administrativa, garantizando la manutención de la seguridad y el apoyo adecuado al proceso electoral. En esta cuestión también, el fracaso tiende a mostrarse pavoroso.

Desde que la MINUSTAH llegó a Haití, el país organizó tres elecciones presidenciales. Después de dos años de transición al golpe que hizo dimitir al presidente Jean-Bertrand Aristide en 2004, las elecciones se realizaron en 2006. La presión de las manifestaciones en las calles hizo que las autoridades proclamaran vencedor al candidato René Préval en primera vuelta. En verdad, Préval llegó con ventaja en primer lugar, pero no ganó las elecciones en la primera vuelta. Sin embargo, ante la demora del organismo electoral en publicar los resultados, los manifestantes comenzaron a sospechar de las posibles manipulaciones que podían tramarse y forzaron su publicación. El organismo electoral se aprovechó de esta confusión para no efectuar la segunda vuelta. Así, el país conoció un presidente que, a pesar de tener buena aceptación en el padrón electoral, vio su legitimidad opacada; lo que lo dejó más propenso a relacionarse con aquellos que garantizaron su elección.

En la segunda vuelta electoral de 2010-2011, las maniobras fraudulentas fueron manifiestas y denunciadas con clamor. El candidato que ter-

minó tercero fue posteriormente dado como vencedor y descaradamente instalado en el poder. Con ayuda de la MINUSTAH, dirigió sin rumbo el país durante cinco años. Al finalizar 2011, el entonces presidente declaró ante un periodista que quería su evaluación de las manifestaciones callejeras que exigían la salida de la fuerza de ocupación después del estupro colectivo al joven Johnny:¹⁰ “Lo que queríamos en 2009, ¿no eran los buenos augurios de la MINUSTAH?” Lo que el lector precisa saber es lo siguiente: en 2009, hubo grandes manifestaciones en las calles en contra del ajuste del salario mínimo. En prácticamente todas ellas, la MINUSTAH no vaciló en reprimir a los operarios. En otras palabras, la pregunta retórica del presidente no hace sólo una apología a los métodos de la MINUSTAH, sino también reafirma el papel represivo de la fuerza de la ONU para mantener a las clases populares explotadas y dominadas del modo más inhumano.

En 2011, con la ayuda de la MINUSTAH, el gobierno impuso una pausa en el funcionamiento de la democracia. Es decir, el gobierno tenía que realizar tres elecciones (2011, 2013 y 2015) para renovar, en cada término, un tercio del senado y de la cámara de diputados. Ninguna se hizo, hasta que se convocó a elecciones generales para octubre de 2015. La primera consideración a ser hecha es que el gobierno se sustentó del apoyo de la MINUSTAH para debilitar, quebrar y hasta aniquilar las instituciones estatales. Por ejemplo, el mandato de todos los alcaldes venció en 2011. En vez de llamar a elecciones, el gobierno aprovechó para nombrar en cada municipio una alianza de tres agentes interinos. Esto le permitió, obviamente, al partido en el gobierno de Puerto Príncipe extender su control por todo el país.

Otra consecuencia a destacar es la siguiente: con el mandato de los diputados vencido en enero de 2015, el país vivió todo ese año sin cámara de diputados y con apenas dos senadores simbólicamente en función —el mandato de los otros dos tercios también había finalizado sin que fueran realizadas nuevas elecciones—. Mientras tanto, el presidente pasaba a gobernar por decreto, como en los buenos y viejos tiempos de la dictadura.

Finalmente, las elecciones generales fueron organizadas en octubre de 2015 con la participación apenas del 18% del padrón electoral, según las estimaciones más que generosas del organismo electoral. No obstante, hubo tantas denuncias de fraude que el gobierno salió el 7 de febrero de 2016 sin haber esperado completar el segundo turno del proceso electoral, señalado anteriormente para diciembre de 2015. De modo que, desde el 7

10 Cf. *supra*.

de febrero, Haití retomó la costumbre del gobierno provisorio. Una comisión de evaluación de las elecciones acabó por crearse y no se sabe si el proceso será completado o si todo recomenzará desde cero. Obviamente, nadie puede indicar cuándo el país volverá a tener un nuevo gobierno electo a través de las urnas.

Es difícil negar o esconder que el apoyo de la MINUSTAH contribuyó más en debilitar las instituciones estatales de Haití que en promover la democracia, el Estado de derecho y el desarrollo institucional. Hoy, la MINUSTAH desgasta más de lo que apoya cualquier proceso constitucional o político que involucre los principios de gobernabilidad democrática.

Algunas consideraciones históricas

A estas alturas, cabe destacar que Haití está experimentando su tercera ocupación militar. En los intervalos, la presencia de tropas extranjeras ha alternado siempre con la de dictaduras de más o menos largos períodos.¹¹ La primera ocupación militar, que tuvo lugar entre 1915 y 1934, ocurrió tras un episodio de disputas entre las potencias decididas a ocupar el país. De acuerdo con los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, consultados por la historiadora Gusti-Klara Gaillard (1990: 107), cuando el gobierno francés, que disputaba con Alemania la hegemonía en Haití, fue notificado de las veleidades de los Estados Unidos, prefirió “pedir una participación ‘a una eventual reorganización de Haití’”. Sin embargo, EE.UU. no precisaba de la opinión de nadie para ejecutar sus planes. El 17 de diciembre de 1914, seis meses antes del inicio oficial de la ocupación, los marines desembarcaron y se apoderaron de la reserva del Banco Nacional de la República de Haití, para trasladarla luego al National City Bank of New York. Desde 1912, el personal de la dirección del Banco Nacional de la República de Haití estaba compuesto esencialmente de ciudadanos estadounidenses. La cuestión es que la curva del pago de la deuda a Francia, para reconocer la independencia de Haití, había generado, durante todo el siglo XIX, un caos administrativo que dejó al gobierno haitiano sin salida. Gaillard afirma que “en 1914 [...], más del 44% de los

11 Desde 1993 hasta hoy, Haití recibió cinco misiones de apoyo, de manutención de la paz o de estabilización: la Misión de las Naciones Unidas en Haití (MINUAH); la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (MANUH); la Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití (MITNUH); la Misión de Policía Civil en Haití (MIPONUH); y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que cumplió 12 años el 1 de junio de 2016.

recursos haitianos en dinero estaban destinados a financiar el servicio de la deuda externa” (ibíd.: 108).

Luego de proclamar su independencia, Haití se tornó objeto de codicia y rivalidad entre las cuatro grandes potencias de la llamada “comunidad internacional”: Francia, Alemania, Gran Bretaña y EE.UU. El historiador Leslie Manigat (2004: 244), en un análisis de la coyuntura de 1910-1911, señala que un dignatario haitiano sospechaba de que Alemania y Francia “actuaban en un plan conjunto para ocupar el país de forma disimulada”. Con ello, estos dos países, obstinados adversarios desde 1870, no tuvieron dificultad en asociarse, ya que se trataba de Haití. Del mismo modo, el gobierno inglés había decidido poner entre paréntesis su rivalidad con los EE.UU. para alinearse a la política norteamericana en Haití. La siguiente nota, enviada por el gobierno inglés, confirma el casamiento perfecto: “Inglaterra no enviará más buques de guerra a las aguas haitianas, excepto para proteger los intereses americanos” (ibíd.: 246).

Manigat cita otro documento de 1909, firmado por el embajador francés en Haití, en el cual el interesado se dirige al *Quai d’Orsay*¹² de la siguiente forma: “Los verdaderos adversarios de los EE.UU. en Haití no son los franceses, sino los alemanes” (ibíd.: 245). No se trataba de una simple declaración entre beligerantes. Fueron los propios estadounidenses los que habían llegado a esa conclusión, retomada luego por el embajador francés.

Una estimación oficial del Departamento de Estado Americano, hecha en 1914, mostraba que [la colonia alemana] controlaba el 80% del comercio haitiano. Este control comprendía la posesión de filiales de empresas alemanas y la administración de servicios públicos, como la electricidad en Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, líneas de trenes en Puerto Príncipe y la Sociedad de Ferrovías de Cabo Haitiano, sin mencionar el monopolio del muelle de Puerto Príncipe (Bernard, 2011: 42).

Es decir, Haití nunca perteneció a los haitianos. Peor aún, en su propio territorio, los haitianos nunca fueron considerados verdaderos interlocutores. Haití no es más que un campo de juego de intereses de las grandes potencias del mundo moderno/colonial, que se disputan entre sí el control del planeta. Entre las diferentes razones por las cuales Haití ha sido objeto de tantas ambiciones, podemos destacar, con Manigat (ibíd.: 246-247), las siguientes:

12 Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.

1. Su posición geoestratégica: camino al canal de Panamá. De hecho, Môle Saint-Nicolas¹³ es considerado “el Gibraltar del nuevo mundo”.
2. El control del comercio exterior.
3. Su deuda externa.
4. La necesidad de comprobar al mundo entero que una república negra es incapaz de gobernarse.

Este último punto parece ser la regla transversal para tratar con Haití. En 1917, en ocasión de una visita a Haití, ya militarmente ocupado por los EE.UU., el Subsecretario de Estado de la Marina, Franklin Delano Roosevelt, registró en su diario íntimo un comentario de su compañero de viaje, el cual, tiempo después, llegó a ser el principal responsable civil de las fuerzas invasoras. Fascinado por el Ministro de Agricultura haitiano, su compañero le dijo lo siguiente: “[...] no consigo dejar de decirme que este hombre podría ser vendido por US\$1500 en una subasta de Nueva Orleans en 1860, para ser usado como semental” (Chomsky, 1993). Chomsky, citando al historiador norteamericano Schmidt, añade: “Parece que a Roosevelt le gustó la historia y se la contó de nuevo al ministro americano Norman Armour, cuando visitó Haití como presidente en 1934” (ibíd.).

No podemos dejar de insistir en el hecho de que, tras la invasión a Haití en julio de 1915 por parte de la Marina de los Estados Unidos, la administración norteamericana impuso al pequeño país un documento unilateral llamado “tratado”, por el cual se pretendía que los invasores mantuviesen la ocupación. En ese ínterin, el presidente de los EE.UU. se enorgullecía de haber escrito solo una nueva Constitución para Haití en 1918. Ella anulaba todas las leyes haitianas que impedían a los extranjeros ser propietarios de tierras en la isla.¹⁴ En otros términos, Roosevelt reformó

13 Ubicada al noroeste de la costa haitiana, es la capital del distrito Arrondissement de Môle-Saint-Nicolas, departamento de Nord-Quest. A sus playas, arribó Cristóbal Colón el 6 de diciembre de 1492. Su nombre actual lo recibió en 1697, luego de que Francia tomara el control de la isla.

14 No era raro considerar a los haitianos como un pueblo, cuyo sentimiento nacional era su segunda naturaleza. Un subsecretario de Estado norteamericano, Elihu Root, describió ese sentimiento como “la principal dificultad en las relaciones con ese país”. El nacionalismo haitiano era tal que, inmediatamente después de la independencia, fue establecido un tipo de blindaje jurídico que impedía que los extranjeros poseyeran bienes y gozaran de facilidades comerciales (cf. Constitución

el derecho y la justicia de Haití para sustraer todo lo que, hasta entonces, simbolizaban las ideas de soberanía nacional y autodeterminación de Haití. A partir de ese momento, las sociedades norteamericanas podían apoderarse de todo lo que querían. La recolonización de aquí en más tenía acceso libre. Así, la Haytian American Sugar Company (HASCO) no demoró en adquirir 7.532 hectáreas de tierras; la Haytian Products Company, 3.166 hectáreas; HADC, 4.410 hectáreas; etc. En 1943, la Sociedad Haitiana de Desarrollo Agrícola (SHADA) se apoderó de 12.403 hectáreas de tierras cultivadas con plantas de pita. Por ello, la SHADA tuvo que expropiar a 40.000 familias campesinas. Janil Lwijijs (1993:51) señala que “[...] esas tierras están ubicadas en Cabo Haitiano, Bayeux, Cayes, Grand’Anse, Saint Marc y Genoïves”. O sea, en los polos económicos más estratégicos para la supervivencia del país.

Una parte de las consecuencias de las medidas de Roosevelt y de la intervención del imperialismo norteamericano, por la utilización de las tierras fértiles en los campos haitianos, fue sintetizada por Gérald Brisson (1968: 24) de la siguiente forma:

2308 jefes controlan una superficie de 66,62% de las tierras adecuadas para el cultivo, usando apenas 6,73%. [...] El escándalo más grave ocurrió cuando, en agosto de 1942, la Rubber Reserve Corporation decidió dedicar, a la producción de caucho, el 20% de las tierras cultivables de la época. Esa decisión atendía únicamente a las necesidades de la economía de guerra de los EE.UU. Nuestro país era escogido para pagar la pérdida de las plantaciones norteamericanas de caucho de Malasia e Indonesia aprehendidas por los imperialistas japoneses.

Otra de las consecuencias de las medidas de Roosevelt merece ser destacada por su semejanza con lo que está aconteciendo ahora en Haití, debido a la política de zonas libres:

Con respecto a los habitantes que cultivan esas tierras, fueron obligados a transformarse en cortadores de caña en las plantaciones norteamericanas de República Dominicana o Cuba (es la primera gran migración política organizada directamente por los gobiernos) o a permanecer para trabajar como operarios agrícolas en sus propias tierras, de las cuales acababan de ser expulsados (Lwijijs, 1993: 51).

de 1805). Esas mismas leyes obstaculizaban las actividades de las empresas privadas extranjeras con el fin de impedir su intrusión en los asuntos internos del país.

El éxodo rural resultante de esas medidas explica buena parte de los barrios vulnerables de Puerto Príncipe y del terrible espectáculo de 300.000 muertos por el terremoto. Una vez concluido ese desmantelamiento, Haití se tornará “*a marvelous opportunity for american investment*” [“una maravillosa oportunidad para inversiones norteamericanas”]. Como manifiesta un diario, citado por Chomsky (Ibíd.): “El haitiano medio es hábil con las manos, se lo dirige fácilmente y produce una dura jornada de trabajo por 20 centavos; en cambio, en Panamá, el mismo trabajo cuesta tres dólares por día”. Esas ventajas ganaron tanto relieve que, ya en la década de 1960, los inversores estadounidenses destruían progresivamente lo que sobraba de la agricultura haitiana para poder realizar sus inversiones en el país. Cuando, en 1966, tenían apenas 13 empresas en la isla; en 1981, poseían 154, debido justamente a la disponibilidad de fuerza de trabajo que esperaba ser explotada. Se trata de la famosa industria de terciarización [sous-traitance] propulsada por el liberalismo económico, promovido por la llegada de Jimmy Carter al poder.

Las otras ocupaciones militares se inscriben en los mismos marcos que la primera. En octubre de 1994, después de tres años consecutivos de exilio por el golpe de 1991, el entonces presidente Jean-Bertrand Aristide regresó a Haití para terminar su mandato de 5 años. Pero su regreso no fue antes de haber aceptado la privatización de las principales empresas estatales del país. Rápidamente, fue promulgada la Ley de Modernización de las Empresas Públicas que permitió que empresarios norteamericanos controlasen todo el movimiento de la economía haitiana. Fue el gran hecho de la segunda ocupación militar.

Luego de la instalación de la MINUSTAH, el 109º Congreso de los EE.UU., en diciembre de 2006, adoptó la Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act¹⁵ (HOPE I), cuyas reglas ofrecen acceso preferencial, al mercado de los EE.UU., a la producción industrial textil realizada en Haití. La intención declarada era promover inversiones en la industria textil como elemento llave de una simple expresión de crecimiento económico y desarrollo de Haití. De hecho, HOPE I permitió la exención de derechos de importación para ropas específicas fabricadas en Haití a partir de insumos más baratos de terceros países (por ejemplo, hilos no regionales, tejidos y componentes). La condición era que Haití satisficiera las reglas de origen y criterios de elegibilidad, que exigían progresos

15 (Inglés): Ley de Oportunidad Hemisférica para Haití a través del Incentivo de Sociedades.

en las cuestiones de derechos del trabajador, como reducción de la pobreza y medidas anticorrupción. Las evaluaciones iniciales sobre la eficacia de HOPE I, no obstante, fueron decepcionantes. Así, Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act of 2008 (HOPE II) fue adoptado por el 110° Congreso como respuestas, debiendo corregir las fallas identificadas en HOPE I. De este modo, la célebre HOPE II extendió las preferencias, arriba mencionadas, por 10 años; amplió la cobertura de la exención de derechos para más productos textiles; y simplificó las reglas, volviéndolas más sencillas.

Dicho en palabras menos sofisticadas, las leyes HOPE I y HOPE II promueven: economía de mercado, Estado de derecho, ninguna barrera para los inversores y comerciantes de los EE.UU., políticas de reducción de la pobreza, políticas para combatir la corrupción, protección de los derechos laborales. Sin embargo, al trabajador operario haitiano no le llevó mucho tiempo descubrir la única ecuación que condice con la realidad empírica: Ley HOPE = ninguna barrera para la inversión y el comercio de los EE.UU., pues, todo el resto no sobrepasa el plano discursivo, no guarda correspondencia con la realidad objetiva.

El ejemplo más reciente: en enero de 2009, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas destinó a Haití un emisario con el fin de estudiar las posibilidades de “lanzar el desarrollo económico” del país, “atropellado” por el paso de cuatro huracanes en 2008. El informe de este estudio es conocido en Haití como “Rapport Callier”,¹⁶ el nombre proviene de su autor, Paul Callier, profesor de Economía de la Universidad de Oxford. Dentro de las estrategias propuestas, por el informe Collier, para garantizar la seguridad económica de Haití, se encuentra “la reconstrucción de la infraestructura y la expansión de zonas libres” (Collier, 2009: 9). Pero la “reconstrucción” referida en este informe apunta hacia “una estrategia realista” (ibíd.: 8). Este realismo, a su vez, se expresa de la siguiente manera:

[...] no es económicamente racional intentar desarmar las regiones montañosas de Haití para construir una infraestructura que una las esparcidas poblaciones de estas regiones. Además de caro desde el punto de vista del mantenimiento, el país no tendría la capacidad de asumir una carga tan pesada (ibíd.: 10).

16 (Inglés): “El informe Callier”.

O sea, la reconstrucción de la infraestructura que concibe Collier no va más allá de la infraestructura imprescindible para la expansión de las zonas libres. Lo que él vislumbra es, pues, apenas lo siguiente:

1. [Desde] 2007, Haití está sumergido en un clima de seguridad, de democracia y de oportunidades económicas (ibíd.: 3).
2. La producción mundial se organiza hoy en zonas de concentración de empresas [... que así] reducen mutuamente sus costos (ibíd.: 11).
3. La producción de textiles requiere poco por parte del Estado (ibíd.: 12).
4. Es mucho más fácil y rápido establecer las infraestructuras y servicios que precisa la industria creando polos de excelencia, en vez de intentar mejorar esas infraestructuras en el conjunto del país (ibíd.).

Puede observarse que Paul Collier no desperdicia su tiempo con preocupaciones relativas a las condiciones más o menos humanas del trabajo y otras comodidades parecidas. La regla, al final, puede resumirse así: cuanto más barata esté la mano de obra y menos regulado esté el mercado de trabajo, mejor. Ya que “en el sector textil, el factor de producción más caro es la mano de obra, el segundo sería la energía”. La única exigencia a ser cumplida por el Estado haitiano al final es “que los puertos y aduanas funcionen bien” (ibíd.: 12) para facilitar la exportación de la producción y la importación de los factores de producción. Con ese panorama, es difícil resistir la comparación entre el Haití del siglo XXI, diseñado por el emisorio de la ONU, y el del siglo XVII, regido por el colbertismo. En efecto, la nueva política económica mercantil planeada y centralizada por Colbert (Ministro de Hacienda de Francia colonial) a partir de 1661, considera a las colonias “un factor importante”:

Son ellas las que deben suplir la falta de productos en la metrópoli, proveerlos a precios muy bajos y abastecer especialmente de aquellos que el metropolitano es incapaz de producir. Como contrapartida, deben absorber las mercaderías de la Metrópoli, los productos de la industria metropolitana, para que el balance se mantenga favorablemente. Las colonias participan, por tanto, directa y estrechamente del movimiento industrial de la metrópoli. En esta perspectiva, el comercio no puede ser dejado a los caprichos de las voluntades individuales [de] colonos o comerciantes metropolitanos (Hector / Moïse, 1990: 33).

La MINUSTAH es nada más ni nada menos que el brazo armado de este proyecto que continúa hasta hoy. Sus razones no son la seguridad pública, la gobernabilidad democrática ni los Derechos Humanos. Las mayores represiones ejercidas hasta hoy sirven para mantener al pueblo callado

y forzado a aceptar los salarios de 200 gurdas –menos de US\$4 diarios—. Por eso, el trabajador haitiano percibe la emigración como la única esperanza de escapar del infierno en que se ha convertido su país en la actualidad. “Antes ser devorado por un tiburón, que morir enterrado por una nube de polvo”, dice la letra de una conocida canción, cuya correspondencia puede notarse en la avalancha de haitianos que han cruzado, con o sin documentos, las fronteras de Chile, Ecuador y Brasil en esta última década.

Bibliografía

- Bernard, Joseph jr., *Histoire de la colonie allemande d’Haïti*. Puerto Príncipe: Henri Deschamps, 2011.
- Bonneau, Lemoine, “Quand le Canada veut prendre le relai du Brésil”. En: *Le Nouvelliste* (11 de marzo de 2016). También disponible en: <<http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/156576/Quand-le-Canada-veut-prendre-le-relais-du-Bresil>> (último acceso: 21 de mayo de 2016).
- Brisson, Gerald, *Les relations Agraires dans l’Haïti contemporaine*. Puerto Príncipe: Edición de Brisson, 1968.
- Chomsky, Noam, *Year 501: The Conquest Continues*. Boston: South End Press, 1993.
- Collier, Paul, “Haïti: des catastrophes naturelles à la sécurité économique”, 2009. Reporte de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Disponible en: <http://www.haitimonde.com/capsules/IMG/pdf/Collier_Rapport_sur_Haiti.pdf> (último acceso: 21 de mayo de 2016).
- Desrosiers, Michaëlle / Seguy, Franck, “Haïti: nouveau cas de viol collectif de la MINUSTAH”, 2011. Disponible en: <<http://alencontre.org/ameriques/amelat/haiti/haiti-nouveau-cas-de-viol-collectif-de-la-minustah.html>> (último acceso: 21 de mayo de 2016).
- Gaillard, Gusti-Klara, *L’expérience haïtienne de la dette extérieure*. Puerto Príncipe: Henri Deschamps, 1990.
- Hector, Michel / Moïse, Claude, *Colonisation et Esclavage en Haïti: Le régime colonial français à Saint-Domingue (1625-1789)*. Puerto Príncipe / Montreal: Ediciones Deschamps / CIDIHCA, 1990.
- Klarreich, Kathie / Pollman, Linda, “The NGO Republic of Haiti”, 2012. Disponible en: <<http://www.thenation.com/article/170929/ngo-republic-haiti#>> (último acceso: 29 noviembre de 2012).
- Le Nouvelliste, “MINUSTAH, quelle mission, quelle stabilisation?”. En: *Le Nouvelliste* (1° de junio de 2005). También disponible en: <[151](http://le-</p></div><div data-bbox=)

- nouvelliste.com/lenouvelliste/article/18277/MINUSTAH-quelle-mission-quelle-stabilisation> (último acceso: 21 de mayo de 2016).
- Lwijis, Janil, *Entè /OPD: Kalfou Pwojè*. Puerto Príncipe: Imprimeur II, 1993.
- Manigat, Leslie, “Da hegemonia francesa ao imperialismo americano”. En: Ferro, Marc (comp.), *O livro negro do colonialismo*. Río de Janeiro: Ediouro, 2004, pp. 243-253.
- Naciones Unidas, “Activities of the Office of Internal Oversight Services on peace operations for the period from 1 January to 31 December 2014”, 2015. Disponible en: <<https://oios.un.org/resources/2015/04/EbJWIHQJ.pdf>> (último acceso: 21 de mayo de 2016).
- Plataforma de las Organizaciones Haitianas por los Derechos Humanos (POHDH), “La MINUSTAH y la violación de los derechos humanos en Haití”, 2012. Trad. de Susana Merino. Disponible en: <<http://www.rebellion.org/docs/145413.pdf>> (último acceso: 21 de mayo de 2016).
- Réseau National de Défense des Droits Humains, “Rapport du RNDDH sur le viol de l’adolescent de Port-Salut”, 2011. Disponible en: <<http://radiokiskeya.com/spip.php?article8040>> (último acceso: 21 de mayo de 2016).
- Seguy, Franck, *A catástrofe de janeiro de 2010, a “Internacional Comunitária” e a recolonização do Haiti*. Campinas: Unicamp, 2014.
- Trouillot, Lyonel, “Haïti: ‘le Bien et le Mal...’”, 2010. Disponible en: <<http://humanitaire.revues.org/881>> (último acceso: 31 de enero de 2014).

Neodesarrollismo: una parábola de ricos para pobres*

Maria Orlanda Pinassi

I

En los *Manuscritos de 1844*, Marx decía ya que los trabajadores, independientemente de las condiciones, ya sean buenas o malas, del desarrollo del capital, siempre sufren. Si las condiciones son buenas, les imponen más trabajo, más producción. Si los tiempos son malos, les recortan salarios y derechos, caen en la zanja del desempleo, decae su calidad de vida.

La alienación del trabajador en su objeto se expresa, de acuerdo con las leyes de la economía política, de tal modo que, cuanto más produce el trabajador, tanto menos tiene para consumir; cuantos más valores crea, tanto más desprovisto de valor, tanto más indigno se torna; cuanto más formado se encuentra su producto, tanto más deforme el trabajador; cuanto más civilizado su objeto, tanto más bárbaro el trabajador; cuanto más poderoso el trabajo, tanto más impotente el trabajador, cuanto más ingenioso el trabajo, tanto más desprovisto de ingenio el trabajador, tanto más se convierte este en siervo de la naturaleza (Marx, 2015: 108).

Lo mismo ocurre con América Latina incorregiblemente subordinada a la dinámica más general de expansión y acumulación de capital. En tiem-

* Este texto contó con la colaboración de Felipe Augusto Duarte, profesor, economista y miembro del Coletivo Canudos de Araraquara. Traducción de María Belén Castano.

pos favorables para el desarrollo, aumentan los saqueos de sus recursos naturales, los genocidios de la población originaria y la explotación de la clase trabajadora. En tiempos de crecimiento negativo, se producen inestabilidad económica y supresión de la libertad política. Es decir, si en cualquier momento del desarrollo del capital, explotación, saqueos y crisis son estructurales para los trabajadores en general, tales condiciones son aún más intensas en la particularidad de los trabajadores y los otros segmentos vulnerables latinoamericanos.

En nombre de la civilización occidental moderna, la tradición impuesta a América Latina viene siendo la de abastecer a la acumulación del centro con los recursos naturales y el trabajo gratuito, en el mejor de los casos, muy barato. Destrucción, sangría y violentos saqueos se enraizaron en el suelo latino en más de 300 años de subordinación legal a las metrópolis portuguesa y española. Con la conclusión del pacto colonial y la universalización de los principios liberales, el capitalismo sellaba el compromiso con la igualdad formal para los individuos y las nacionalidades recientemente reconocidas como tales. El Brasil de entonces se aprovecha del *plus large liberalisme*, un eclecticismo creado para atender la diversidad histórica, material y cultural de las naciones desigual y contradictoriamente dispuestas en la dinámica del sistema, para mantener e intensificar, hasta 1888, la práctica de la esclavitud en la producción de las riquezas requeridas por Europa. Dentro de este cuadro de relaciones internacionales jerárquicas, una élite intelectual interna forja, a la luz de las teorías y el entusiasmo europeos por el progreso, los modos de pertenecer a la lógica del desarrollo, cuya desigualdad será entonces medida por la competencia en el gran mercado mundial.

Una cultura desarrollista se consolida y se mantiene como mimesis hasta la década de 1940, cuando las teorías de América Latina, sin prejuicio del evolucionismo que caracterizará a la mayoría de ellas, destacarán las particularidades históricas y geográficas de la región. Desde los campos de la economía y de la sociología, nacionaldesarrollistas, teóricos de la modernización y de la interdependencia, disputarán el realismo interpretativo de la integración centro-periferia. Casi todos tratan de encontrar algún tipo de salida práctica e ideológica para nuestro “atraso” crónico.

Después de dos siglos de avances y de retrocesos, los apologistas de un supuesto neodesarrollismo brasileño celebraron las cifras resultantes del último período. De acuerdo con una encuesta realizada por el historiador Moniz Bandeira, al comparar la situación del país en el año 2002

con la situación entre 2012-2014, había motivos para creer que finalmente realizábamos la utopía de progreso. Veamos:

1. Producto Bruto Interno: 2002 – R\$ 1,48 trillones; 2013 – R\$ 4,84 trillones
2. PBI per cápita: 2002 – R\$ 7,6 mil; 2013 – R\$ 24,1 mil
3. Deuda neta del sector público: 2002 – 60% del PBI; 2013 – 34% del PBI
4. Ganancia de BNDES: 2002 – R\$ 550 millones; 2013 – R\$ 8,15 billones
5. Ganancia del Banco do Brasil: 2002 – R\$ 2 billones; 2013 – R\$ 15,8 billones
6. Ganancia de CEF: 2002 – R\$ 1,1 billones; 2013 – R\$ 6,7 billones
7. Producción de vehículos: 2002 – 1,8 millones; 2013 – 3,7 millones
8. Cultivo agrícola: 2002 – 97 millones de ton.; 2013 – 188 millones de ton.
9. Inversión extranjera directa: 2002 – US\$ 16,6 billones; 2013 – US\$ 64 billones
10. Reservas internacionales: 2002 – US\$ 37 billones; 2013 – US\$ 375,8 billones
11. Índice Bovespa: 2002 – 11.268 puntos; 2013 – 51.507 puntos
12. Empleos generados: Fernando Henrique Cardoso– 627 mil/año; Lula y Dilma – 1,79 millones/por año
13. Tasa de desempleo: 2002 – 12,2%; 2013 – 5,4%
14. Valor de mercado de Petrobras: 2002 – R\$ 15,5 billones; 2014 – R\$ 104,9 billones
15. Ganancia media da Petrobras: Fernando Henrique Cardoso – R\$ 4,2 billones/año; Lula y Dilma – R\$ 25,6 billones/año
16. Solicitudes de quiebras en promedio/año (o promedio por año): Fernando Henrique Cardoso – 25.587; Lula y Dilma – 5.795
17. Salario mínimo: 2002 – R\$ 200 (1,42 canastas básicas); 2014 – R\$ 724 (2,24 canastas básicas)
18. Deuda externa en relación con las reservas: 2002 – 557%; 2014 – 81%
19. Posición entre las economías del mundo: 2002: 13ª; 2014: 7ª
20. PROUNI (Programa Universidad para Todos)– 1,2 millones de becas
21. Salario mínimo convertido en dólares: 2002 – 86,21; 2014 – 305,00
22. Pasajes aéreos vendidos: 2002 – 33 millones; 2013 – 100 millones
23. Exportaciones: 2002 – 60,3 billones de dólares; 2013 – 242 billones de dólares

24. Inflación anual media: Fernando Henrique Cardoso – 9,1%; Gobiernos de Lula y Dilma – 5,8%
25. PRONATEC (Programa Nacional de acceso a la Educación Técnica y Empleo) – 6 millones de personas
26. Tasa Selic (Sistema Especial de Liquidación y Custodia): 2002 – 18,9%; 2012 – 8,5%
27. FIES (Financiamiento estudiantil) – 1,3 millones de personas con financiamiento universitario
28. Minha Casa Minha Vida (Mi Casa Mi Vida) – 1,5 millones de familias beneficiadas
29. Luz Para Todos – 9,5 millones de personas beneficiadas
30. Capacidad energética: 2001: 74.800 MW; 2013: 122.900 MW
31. Creación de 6.427 guarderías
32. Ciência Sem Fronteiras (Ciencia sin Fronteras) – 100 mil beneficiados
33. Mais Médicos (Más Médicos) (aproximadamente 14 mil nuevos profesionales): 50 millones de beneficiados
34. Brasil Sem Miséria (Brasil sin Miseria) – Se retiró a 22 millones de la extrema pobreza
35. Creación de Universidades Federales: Fernando Henrique Cardoso: cero; Lula y Dilma: 18
36. Creación de Escuelas Técnicas: Fernando Henrique Cardoso: 11; Lula y Dilma: 214
37. Desigualdad social: Fernando Henrique Cardoso: caída en un 2,2%; Lula y Dilma: caída del 11,4%
38. Productividad: Fernando Henrique Cardoso: aumento de 0,3%; Lula y Dilma: aumento de 13,2%
39. Tasa de pobreza: 2002: 34%; 2012: 15%
40. Tasa de extrema pobreza: 2003: 15%; 2012: 5,2%
41. IDH (Índice de Desarrollo Humano): 2000: 0,669; 2005: 0,699; 2012: 0,730
42. Mortalidad infantil: 2002: 25,3 en 1000 nacidos vivos; 2012: 12,9 en 1000 nacidos vivos
43. Gastos públicos en salud: 2002: R\$ 28 billones; 2013: R\$ 106 billones
44. Gastos públicos en educación: 2002: R\$ 17 billones; 2013: R\$ 94 billones
45. Estudiantes de educación superior: 2003: 583.800; 2012: 1.087.400
46. Riesgo Brasil (IPEA-Instituto de Investigaciones de Economía Aplicada): 2002: 1.446; 2013: 224

47. Operaciones de la Policía Federal: Fernando Henrique Cardoso: 48; Lula y Dilma: 1.273 (15 mil presos)
48. Juzgados de la Justicia Federal: 2003 – 100; 2010: 513
49. 38 millones de personas ascendieron a la Nueva Clase Media (Clase C)
50. 42 millones de personas salieron de la miseria¹

A partir de junio de 2013 el entusiasmo se enfría, incluso antes de asumir su segundo mandato, Dilma Rousseff abandona el izquierdismo ensayado durante la campaña presidencial y con el argumento de un necesario y severo ajuste fiscal, anuncia medidas absolutamente impopulares². Hubo varios retrocesos, pero dos de ellos al menos llaman la atención, porque se han producido en medio del proceso de *impeachment*: el veto en enero de 2016, para llevar a cabo con urgencia una auditoría de la deuda pública brasileña³, entre las más altas del mundo y uno de los peores perfiles⁴ propuesta por el PSOL (Partido socialismo y Libertad), y la aprobación en marzo de la Ley Antiterrorista⁵. Todo indicaba que la transición antisocial impuesta por los capitales monopólicos transnacionalizados al Estado brasileño, sería conducida con la articulación del propio PT y su práctica aliancista. No obstante, un golpe político protagonizado por los propios aliados elimina al PT del gobierno, y alza al vice Michel Temer, de PMDB (El Partido de Movimiento Democrático Brasileño), a la presidencia de la

1 Moniz Bandeira. *O Brasil real de 2002 a 2013*. Fuente: Pátria Latina.

2 Ver MP 665 sobre el seguro de desempleo.

3 Conforme al Tesoro, la deuda pública brasileña podría haber llegado en 2016, al monto de R\$ 3,3 trillones. Disponible en: < <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/divida-publica-sobe-248-em-2015-para-r-279-trilhoes-maior-da-serie.html>>.

4 Disponible en: < <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/divida-publica-sobe-248-em-2015-para-r-279-trilhoes-maior-da-serie.html> >.

5 Ley 13.260/2016 presentada por el poder ejecutivo en julio de 2015 y aprobada en el senado y en la cámara de diputados en carácter de urgente el 16 de marzo de 2016. Reglamenta lo dispuesto en el inciso XLIII del art. 5º de la Constitución Federal, disciplinando el terrorismo, tratando disposiciones de investigación y procesales y reformulando el concepto de organización terrorista. Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm> (último acceso: 1/6/2016).

República, que compone un equipo económico encabezado por Henrique Meireles, una opción que revela una competencia incluso mayor para profundizar los retrocesos. Las medidas son, obviamente, dirigidas contra los trabajadores, desfigurando con los mismos decretos los dispositivos que llevaron a la positividad de los números anteriores. El cambio repentino del cuadro comprueba, en primer lugar, que la mejora de las condiciones materiales de la población brasileña se derivaba de políticas de gobierno que no cambiaron de manera sustantiva la condición social de los beneficiarios. Por otra parte, las duras reestructuraciones económicas y políticas, una vez más urdidas del centro a la periferia, confirman nuestra condición de subalternidad que tal neodesarrollismo ni siquiera rozó. Y, además, la quiebra definitiva de las leyes de protección laboral, las desregulaciones necesarias para una nueva dinámica de producción movida por una todavía más pronunciada superexplotación de la fuerza de trabajo, revelan que el talón de Aquiles del sistema del capital no se encuentra en la lógica de la financierización, aunque sigue permaneciendo la tendencia de la tasa de ganancia. En este sentido, estamos de acuerdo con Sampaio Jr:

La depresión de las inversiones no se deriva de la punción de ganancia del capital industrial por capitales “parasitarios” que se reproducen en el mercado financiero. Es la caída en la tasa de ganancia, provocada por la propia expansión ilimitada de la producción, lo que paraliza la acumulación de capital y estimula la formación de procesos especulativos en la esfera de la circulación. Al revelar la existencia de fuerzas productivas incapaces de sobrevivir a las nuevas condiciones de la competencia, o sea, amenazadas por una violenta desvalorización, la caída en la tasa de ganancia explicita la presencia de un excedente absoluto de capital sin condiciones de volver a la esfera productiva para ampliar la extracción de plusvalía por la intensificación de la productividad del trabajo (Sampaio Jr, 2016: 2).

El resultado práctico más sensible del progreso que, nosotros los brasileños, conseguimos alcanzar trae un escenario muy diferente del que es caracterizado por la ideología neodesarrollista. Revela los aspectos oscuros y esenciales de un patrón de desarrollo destructivo que no sólo no serán revertidos, como todo indica sufrirá un incalculable empeoramiento.

1. En función de la cadena de producción que envuelve el sector minero vital del país, protagonizamos algunos de los más graves desastres sociales, humanos y ambientales del planeta. Lo más destacado es la

- rotura, en 2015, del dique de contención de residuos de Samarco⁶, en Mariana (MG), con el vertido de 62 millones de metros cúbicos de lodo mortalmente tóxico sobre ciudades, ríos, bosques y océanos.
2. El patrón tecnológico de la producción agrícola dictada por la agroindustria coloca a Brasil en la posición de líder mundial en el consumo de veneno, después de décadas de crecimiento continuo y de aceleración en los últimos 15 años. Un billón de litros de agrotóxicos son aplicados en los cultivos brasileños, algo equivalente a 5 litros por habitante. Otro dato extremadamente preocupante es el aumento progresivo de los cultivos transgénicos en todo el país. Un caso revelador es el de la soja, cuya cosecha de 2014/2015 alcanzó un índice de 93%.⁷
 3. Los mencionados sectores de producción demandan una deforestación creciente de Amazonia que sólo en los meses de febrero y marzo de este año, fue de 213 km². Apenas el 39% de la superficie total de la Amazonia Legal brasileña fue monitoreada, y aun así el número representa un aumento de 113% en relación con el mismo período de 2015 que registró un área devastada de 100 km², de los cuales 88% u 88 km² (chequear: el texto original dice 188 km²) ocurrieron en áreas de posesión privada y vacías. La mayor parte de la deforestación ocurrió en el Estado de Mato Grosso, es decir, 81%. En el mismo período la degradación forestal, fruto de la actividad maderera y de los incendios, registró un avance de 339%, saltando de 64 a 281 km².⁸
 4. La deforestación, el monocultivo y el envenenamiento de la producción agropecuaria vienen en los últimos años provocando una verdadera mortandad de varias especies de animales. Brasil tiene 627 especies en peligro de extinción, entre las cuales 160 son de aves, 142 de peces de agua dulce y 96 de insectos, sobre todo abejas. El bioma de la Mata

6 Empresa subsidiaria del consorcio formado por la australiana BHP y por Vale Internacional.

7 Ver el artículo “Sem saber, população brasileira é a que mais consome agrotóxicos no mundo”. Disponible en: <<http://revista.rebia.org.br/2016/88/849-sem-saber-populacao-brasileira-e-a-que-mais-consome-agrotoxicos-no-mundo>>.

8 Datos brindados por SAD (Sistema de Alerta de Deforestación) de Imazon – Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de Amazonia. Disponible en: http://www.imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/transparencia_florestal/amazonia_legal/SAD_fevereiromarco2016.pdf.

Atlántica lidera en esta cuestión con 269 especies en peligro de extinción y el Cerrado con 131.⁹

5. Los sectores de producción mencionados anteriormente junto con la construcción civil y textil, responden, hace décadas, por los éxitos de crecimiento económico en Brasil; son también los principales responsables por el recrudecimiento del trabajo esclavo en todo el territorio nacional. De acuerdo con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), se estima que, en promedio, se emplean 25 mil trabajadores en situación de esclavitud por año, algunos de los cuales son rescatados por el “Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho” (Grupo Móvil de Fiscalización del Trabajo). La ironía de la historia es que la práctica cada vez más recurrente, abusiva y necesaria para el progreso en Brasil y en el mundo es considerada un crimen cuya responsabilidad no es atribuida al sistema sino a “malos empresarios”.
6. Según la PNAD (Investigación Nacional por Muestra de Domicilios), entre 2013 y 2014, la incidencia del trabajo infantil, otro “crimen de malos empresarios”, aumentó en un 4,5%, una tendencia que es probable que se repita en los próximos años. Esto representa un número alarmante de 3,3 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años, trabajando, principalmente en el campo (62%). Si se tiene en cuenta que la legislación brasileña considera ilegal a un trabajador de menos de 14 años, el trabajo infantil ilegal (entre 5 y 13 años) alcanza a 554.000 niños no remunerados, muchos de ellos en situación de la esclavitud¹⁰.
7. El número de desempleados sube un 42,1% entre noviembre de 2015 y abril de 2016, alcanzando 11,4 millones de trabajadores, de acuerdo con PNAD-M de IBGE (Investigación Nacional por Muestra de Domicilios y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). Por lo tanto, la tasa de desempleo llega al nivel de 11,2%, el mayor desde 2012. En

9 Disponible en: <<http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-de-especies.html>>.

10 Disponible en: <<http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2015/11/pnad-desemprego-cresce-em-2014-mas-tendencia-de-reducao-da-desigualdade-se-mantem-4530.html>>.

- el mismo período, el sector privado “recortó” 1,5 millones de trabajadores registrados.¹¹
8. La inflación acumulada en los 12 meses de 2015, incluso según el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), fue de 10,67%; la tasa más alta desde 2002, cuando llegó a 12,53%.¹²
 9. Según Amnistía Internacional, entre 2004 y 2007 ocurrieron 192 mil muertes por asesinato en el país. Sólo en 2012, hubo 56 mil asesinados de los cuales 77% eran negros y 30 mil eran jóvenes. Esto es, Brasil eliminó 82 jóvenes por día. El Mapa de la Violencia de 2014, publicado por la UNESCO, muestra una caída del 32,3% de los homicidios entre los jóvenes blancos y un aumento del 32,4 entre los jóvenes negros.¹³
 10. El CIMI (Consejo Indigenista Misionero) señala que en el 2014, hubo 138 asesinatos de indígenas, 48 en Mato Grosso do Sul y 37 en Alto do Rio Solimões, cuyas tierras son blanco de gran codicia para la agroindustria. Además, son cotidianas las denuncias por el abuso de poder, las amenazas y las tentativas de muerte, las lesiones corporales, el racismo y la violencia sexual. También en el 2014, la omisión del poder público, la paralización, las demarcaciones y la situación de indigencia de gran parte de la población indígena fue causando la muerte de 785 niños entre 0 y 5 años.¹⁴

Lo mismo viene ocurriendo entre los campesinos, sobre todo en la región del norte del país donde, según el CPT (Comisión Pastoral de la Tierra) en

11 Disponible en <ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Mensal/Comentarios/pnac_201604_comentarios.pdf>.

12 Disponible en: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-inpc_201604_1.shtm>.

13 Disponible en: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015_adolescentes.pdf>.

14 Disponible en: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-06/cimi-alerta-que-violencia-contra-povos-indigenas-volta-crescer-em>>.

2014, 20 de ellos fueron asesinados y, en 2015, 23 siendo 11 en Pará, 10 en Rondônia y 1 en Maranhão.¹⁵

La disparidad de los datos no significa que se trate de dos lados –el positivo y el negativo– de un mismo proceso, sino que sobre él es posible realizar dos lecturas absolutamente incompatibles. Una positivista, maniquea, atrapada en conceptos e indicadores de la economía y de la sociología apologéticas, cuyo objetivo es resaltar los lados buenos y sin contradicciones para sus fines electorales. La otra lectura es dialéctica que, sin negar la positividad inmediata de sus efectos –ya que, de hecho, la pobreza absoluta que fue minimizada –pretende mostrar que la política social adoptada en los últimos trece años fue sólo un grano de arena¹⁶ en vista del compromiso que establece con la esencialidad concreta, inexorablemente destructiva, de la reproducción ampliada del capital.

II

Frente al cuadro, no hay otra alternativa que retomar los términos de una necesaria reflexión crítica y radical del desarrollismo en las condiciones brasileñas más recientes teniendo en vista las positividades problemáticas y relativas alardeadas y la realidad ineludible de las catástrofes humanas, sociales y ambientales que reproduce en el país entero. En efecto, contrariamente a los pronósticos más optimistas de las hipotéticas conquistas civilizatorias provenientes del progreso, problemas crónicos para el funcionamiento del sistema del capital, entre los cuales el más grave es, como hemos dicho, la tendencia a la baja en las tasas de ganancia impuso, a partir de 1960, una ruptura definitiva con toda forma de ascenso de las condiciones de reproducción de los trabajadores. En esta dinámica, cualquier atisbo de desarrollismo controlado por el capital, por “bien intencionado” que sea, tendrá un papel activo en la profundización de sus aspectos esencialmente destructivos. Nos referimos a la estrategia neoliberal de desarrollo en el interior del cual surge la necesidad de un neodesarrollismo; mejor aún de un pragmático socialneoliberalismo.

15 Disponible en: <<http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noticias/conflitos-no-campo/2740-cpt-registra-23-mortes-no-campo-somente-no-primeiro-semester-de-2015>>.

16 El programa Bolsa Familia contempla 14 millones de familias y equivalía, en marzo de 2015 (¿es este el año que corresponde?) al 0,5% del PBI brasileño, o un gasto anual de R\$ 27 billones. Sí, es 2015.

La estrategia neoliberal de desarrollo surge como única solución posible para la curva descendente del proceso de reproducción del capital, más tendiente a la barbarie social que al patrón clásico de desarrollo practicado por pocos, idealizado por muchos. El *welfare state*, experimentado en su plenitud por un reducido grupo de países centrales, entraba en colapso evidenciando la quiebra de la organización sociopolítico del sistema y su incapacidad para seguir transfiriendo las contradicciones más agudas del centro hacia las periferias. Lo mismo sucede con la necesidad de deshacerse de las garantías sociales conquistadas por la clase trabajadora y otras tantas regulaciones sociales mínimas. Una consecuencia directa de la caída tendencial de las tasa de ganancia que hizo insostenible a la política de pleno empleo y el pacto entre el capital y el trabajo, proviene del llamado Estado de bienestar social.

En este sentido, la crisis del *welfare state* representa el deterioro estructural de los requisitos que desde las revoluciones burguesas intentaron compatibilizar el liberalismo, el desarrollo, la democracia y los derechos humanos. No es casualidad que tal estrategia haya sido implementada en América Latina a través de dictaduras militar-empresariales, con la excepción de Colombia, Venezuela y Cuba. Según Comparato (2014), la dictadura en Brasil fue un

[...] régimen político [que] se fundó en la alianza de las Fuerzas Armadas con los terratenientes y los grandes empresarios, nacionales y extranjeros. Este consorcio político engendró dos experiencias pioneras en América Latina: el terrorismo de Estado y el neoliberalismo capitalista. A partir del ejemplo brasileño, varios otros países latinoamericanos adoptaron, en los años siguientes, con explícito apoyo de Estados Unidos, regímenes políticos semejantes al nuestro (Comparato, 2014:18).

Virgínia Fontes también aporta una argumentación importante que nos ayudan a pensar en la estrategia de desarrollo neoliberal que penetra en Brasil ya a partir de la década de 1960.

Bajo la dictadura cívico-militar de 1964, ocurrió un impactante impulso a la monopolización de la economía, al lado de la implantación de un sistema financiero. No hubo ruptura o quiebra de continuidad, en ese proceso de concentración monopólica y dependiente, desde entonces (Fontes, 2010: 304 y s.).

A principios de la década de 1980, Florestan analizó la miseria brasileña con una indagación muy actual:

La ilusión del *made in Brazil*, las inconsecuencias y las extravagancias del consumismo, la corrupción moral y mental de la persona, la interiorización plena del agente dominador, de sus intereses inhumanos, de sus corporaciones, mercados y poder, etcétera; ¿volvemos o no a la conquista, sólo que ahora de forma mucho más aterradora y disolvente? (falta la pág.)

A aquella altura de los hechos, el autor tenía ya plena conciencia de que la perspectiva desarrollista para el atraso brasileño, cuyo modelo se practicaba por aquí desde la década de 1970, no podría jamás ofrecer alguna positividad para los rumbos futuros de la clase trabajadora. Un plano poderoso e internacionalista de interacciones transnacionales, de financierización total de la economía, exigido por organismos multilaterales –Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional– penetraba en el núcleo de la sociedad brasileña. La primera disposición consistió en actuar sobre un sector crónicamente atrasado –la agricultura, foco permanente de conflicto en todo el territorio nacional– imponiéndole un nuevo y agresivo patrón de producción tecnológico. Una *Revolución Verde* provocó un violento proceso de expropiación de miles de familias campesinas, indígenas, de trabajadores rurales de sus tierras y de sus formas de vida tradicionales.¹⁷ Los convirtió en proletarios precarios –con salarios bajos y desprovistos de derechos–¹⁸ para proporcionar la demanda de fuerza de trabajo en el campo y en las industrias urbanas también en ascenso. Brasil ingresaba en el mundo del imperialismo total, donde

[...] el desarrollo capitalista asociado y dependiente creó su propio patrón de articulación política en los niveles continental y mundial: la capacidad adquirida por la dominación externa imperialista de deprimir y distorsionar el orden político se volvió única, permitiendo a las naciones capitalistas hegemónicas y a su superpotencia, gracias a y a través de varios tipos de instituciones (además de la diplomacia), maximizar intereses económicos u objetivos políticos y militares, así como controlar a distancia un amplio proceso de modernización acelerada (Fernandes, 1981: 26).

17 Este proceso ocurre aún durante la colonización portuguesa, se renueva y se intensifica en cada salto modernizador en el país, aún en nuestros días. Ejemplo de ello es la actual masacre, articulada por hacendados, contra indígenas en lucha por la autodemarcación de tierras.

18 Muchos de ellos fueron esclavizados y mantenidos en campos de concentración para trabajar en las agroindustrias creadas en el período.

La proletarización más plena de Brasil no conoció, sin embargo, las condiciones más favorables de “articulación social predominantemente productiva del capital de la época de Marx”. Ella es constitutiva de la crisis estructural del sistema de metabolismo social del capital que avanza como *causa sui*, sin que alguna necesidad humana interfiera en su dinámica permanente de expansión y acumulación. Según István Mészáros, el momento alcanza

[...] una etapa en que la *disyunción radical* entre producción genuina y autorreproducción del capital ya no es más una remota posibilidad, sino una realidad cruel con las más devastadoras implicaciones para el futuro. Es decir, las barreras para la producción capitalistas son, hoy, suplantadas por el propio capital con formas que aseguran inevitablemente su propia reproducción —en extensión ya grande y en constante crecimiento— como autorreproducción destructiva, en oposición antagónica a la *producción* genuina (Mészáros, 2002: 699).

[...] Cuanto más destraba el sistema los poderes de la productividad, más libera los poderes de destrucción; y cuanto más dilata el volumen de la producción tanto más tiene que sepultar todo bajo montañas de basura asfixiante (ibíd.: 1010).

Frente al cuadro en el que apenas se iniciaba aquel patrón de dominación incorregiblemente nefasto del capital sobre el trabajo, pautado sobre la base de una ley del valor mucho más “flexible”, Florestán no se ilusiona con las promesas de apertura política. Comprendía que, si durante los años sombríos del régimen militar-empresarial, el fuerte aparato de represión impedía la manifestación de las masas por la fuerza, garantizando de este modo la modernización conservadora del país, la transición democrática necesitaba de nuevas y aún más poderosas formas de control sobre ellas, ya que la intensificación de aquel modelo de desarrollo destructivo les reservaba adversidades todavía más problemáticas y más complejas para ser enfrentadas:

Tanto internamente, como desde afuera, el escenario está preparado para compatibilizar el crecimiento morfológico de los proletarios como clase en sí con una conciencia de clase “esterilizada” y con dinamismos de “lucha de clases” destituidos del elemento político y de un eje verdaderamente revolucionario (Fernandes, 1981: 110).

Un caso raro en la escena brasileña reciente, invadida por una ola corrosiva de relativismos teóricos que se fundan en el agotamiento del trabajo como productor del valor, del trabajo como un punto de identificación social de

los sujetos históricos, el compromiso ético de Florestan se establecía por entero con la construcción y las necesidades de revolución proletaria en un país de capitalismo dependiente y subordinado al capital central. Por eso, no ha escatimado ninguno de los dos segmentos dedicado a la misión de domesticar e “incluir” los ímpetus de clase. Ni el socialismo reformista, con sus tácticas de apoyo y alianza con la burguesía nacional; ni los sindicatos “modernos” y “democráticos” de resultado, influidos por el modelo norteamericano; ni los “partidos obreros socialdemocratizados” y los demás movimientos de masas que capitulan en la *línea de menor resistencia*. Fue particularmente duro con los intelectuales y las universidades, cómplices de este proceso, por el cual ellos mismos son *internacionalizados*, ‘cooptados’ y destruidos por la alienación.

Teniendo en vista la marcha acelerada del progreso destructivo en el Brasil de la década de 1970, a principios de los 80 ya era posible vislumbrar la degradación potencial que sería impuesta a la mayor parte de la sociedad brasileña. Por eso mismo Florestan se preocupaba por el *desierto ideológico* que se articulaba contra ella: “¿Qué decir de la barbarie que de ahí podrá resultar si las poblaciones pobres y las clases trabajadoras no estuvieran armadas para luchar por sí mismas y por la HUMANIDAD de explotadores y explotados?” (Fernandes, 1981: 111).

Los pasajes anteriores ayudan a comprender la situación que vivimos hoy en Brasil, situación aún más miserable que la encontrada por Florestan en 1981, ya que se cumplió lo que él temía. El espectro de barbarie se personifica plenamente en el país y frente a eso no se vislumbra siquiera un proyecto emancipatorio, ninguna salida más radical al capital, capaz de movilizar a las masas. Aquí radica la verdadera razón de la crisis brasileña, la crisis de una clase sin derechos, sin alma, sin futuro. El PT, como conductor político del molino satánico, tuvo un papel decisivo en su caída.

III

Por más de una década, los gobiernos del PT se jactaron de alzar a la población más pobre de Brasil a la categoría de una “nueva clase media”. Cumplían las promesas de sucesivas campañas electorales para la presidencia de la república en que, alejándose de las tendencias más combativas de las bases obreras y populares de sus orígenes, pasaron a considerar los difusos anhelos de aquel segmento social.

Al frente de la administración del Estado, el PT encontrará a sectores populares desgastados, empobrecidos y debilitados por los ataques sufridos por las políticas implementadas por los gobiernos anteriores, especial-

mente de Fernando Henrique Cardoso. Por eso fue también tan grande la expectativa depositada en la nueva gestión.

Las urgencias de la pobreza dieron una base al prestigio que consolidó en los resultados inmediatos obtenidos por las políticas socioeconómicas que siguieron estrictamente las recetas de las políticas sociales focalizadas desde el Banco Mundial. Por los datos que presentamos al inicio, se verificó un aumento de la renta personal de la población, la reducción de la tasa de desempleo, la expansión del consumo debido al crédito barato. Sin ninguna intención de recomponer los derechos sustraídos a la clase, de revertir el cuadro de las desregulaciones que afectaron a las gestiones de Collor, Itamar y Fernando Henrique Cardoso, se promovió tal “inclusión social” a través de programas ejemplares y contingentes como “Bolsa Família” y “Minha Casa, Minha Vida”. La educación ganaba contornos más amplios y también pragmáticos como el Prouni (Programa Universidad para Todos), el FIES (Fondo de Financiamiento Estudiantil) el Pronatec (Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo) y el programa de cupos para estudiantes negros y pobres. La reforma agraria fue reemplazada por programas para fomentar la agricultura familiar (Pronaf) y la producción de agroecológicos. Se aumentaron significativamente los gastos públicos con el fin de viabilizar el PAC I y II (Programa de Aceleración del Crecimiento)¹⁹ y el PIL (Programa de Inversiones en Logística) que, con la contribución del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo), financió obras gigantescas en todo el territorio nacional, tales como las hidroeléctricas

19 “Anunciado como un giro en la política económica, el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) fue recibido por muchos - de izquierda y de derecha - como una negación de la herencia neoliberal y la vuelta del papel regulador del Estado en la economía. Nada más lejos de la realidad. Las medidas anunciadas son sólo un poco más de lo mismo. Sus fines y sus medios se encuadran perfectamente en los parámetros del patrón de acumulación neoliberal-periférico, implantado por Collor de Mello, consolidado por Fernando Henrique Cardoso y reciclado y relegitimado por Lula da Silva. Presentada como tabla de salvación que lograría finalmente concretar el prometido ‘espectáculo del crecimiento’, la estrategia de aceleración del crecimiento se organiza en función de dos objetivos primordiales: enfrentar el estrangulamiento en la infraestructura económica en las áreas de energía, transporte y puertos; e incentivar la iniciativa privada a salir de la especulación financiera y realizar inversiones productivas” Plínio de Arruda Sampaio Jr. “Notas sobre o PAC – um passo atrás”. Disponible en: < http://www.corecon-rj.org/artigo_plinio_seminario_pac.pdf >.

—entre las más polémicas están las de Belo Monte y Jirau—, ferrocarriles, aeropuertos e instalaciones portuarias para el flujo interno y externo de la producción de *commodities*. Se edificaron complejos petrolíferos dirigidos a la explotación de la presal y también, la infraestructura pesada necesaria para la realización de grandes eventos como la Copa Mundial FIFA de 2014 y las Olimpiadas de 2016. Por mucho tiempo, el mismo y viciado grupo de empresarios venía obteniendo preferencia en los financiamientos públicos.

Entre 2002 y 2010, Brasil registró un aumento de 146% en el precio promedio (en dólares) de las exportaciones, mientras que las importaciones aumentaron un 85% en el mismo período. Los ingresos en el ritmo de los demás países miembros de BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), aumentaban un 7% por año. Estos factores estimularon la compra de productos industrializados de China, principalmente, con quien Brasil estrechó acuerdos comerciales desde cuando aquel país, en curva ascendente, se convirtió en el comprador más importante de soja y de hierro brasileños. Como algunos dicen: un “maná que viene del cielo”

La bonanza dependiente de las exportaciones de *commodities* y la lógica crediticia creó la sensación de que todos estos aspectos positivos serían definitivos. El optimismo gubernamental hizo creer que “todos” ganaban y que, con sus bases de apoyo y su fuerte alianza con las fracciones de la burguesía nacional, sería capaz de controlar internamente las sacudidas de la crisis internacional que, desde 2008, vienen ensayando un colapso generalizado.

Concretamente, el alardeado neodesarrollismo del PT que salió en defensa de la industria nacional fracasó en sus intenciones al adoptar una política de producción de *commodities* e incentivar un consumo mucho mayor al que la industria nacional podía atender. El resultado fue una brutal desindustrialización comprobada por los números: en 2010, la industria representaba el 15% del PBI, mientras que en 2014, se redujo a 10,9%, el mismo nivel registrado a principios de la década de 1940.

De acuerdo con el modelo de desarrollo abierto en la década de 1960, los programas de crecimiento de la década de 2000 continuaron ampliando enormemente el poder del capital financiero, de la agroindustria, de la minería, del sector energético y de la construcción civil. Se fortaleció el monocultivo, la producción de *commodities* y de bienes manufacturados de bajo valor agregado para la exportación. Conforme a los puntos detallados también al inicio, la ampliación y el fortalecimiento de la Revolución Verde confirma el viejo modelo agrícola basado en la gran unidad

de producción y el fuerte impacto ambiental, racionalizado mediante la amplia utilización de tecnologías basadas en maquinarias, semillas transgénicas autorreproductivas, el consumo prioritario de insumos químicos y de veneno (un billón de litros por año). Bajo el control de las grandes empresas transnacionales del sector, el modelo hegemonizado por la *comoditización* domina el país gestionando y beneficiándose del desmantelamiento de la mal sedimentada industria de bienes de producción, de la reestructuración productiva, del desempleo estructural, del debilitamiento de las entidades sindicales y de los movimientos sociales expresivos, de la incidencia generalizada del trabajo informal, precarizado, esclavizado, de la explotación del trabajo infantil y femenino.

Tal neodesarrollismo veló por las necesidades del capital destructivo, ampliando la tragedia de la clase trabajadora brasileña. La ideología de clase fue sustituida por el concepto abstracto de ciudadanía y por una amplia gama de planes, proyectos y programas de reducción de la miseria. Sin duda alguna, la obra más importante de este programa se encuentra en el manejo magistral con el que operó su relación con las masas, con los sectores populares, organizados o no²⁰. Los trajo a las huestes del Estado, los institucionalizó, los tuteló, controló su miseria, la convirtió en virtud. Calló su voz combativa, los hizo dependientes de políticas y de burocracias estatales. Los compañeros de los sindicatos, partidos y movimientos sociales son los nuevos socios; los trabajadores se convirtieron en colaboradores y emprendedores fustigados por el fetichismo de la mercancía (china) e invadidos por la lógica del enemigo. Sobre todo, se alejaron de la incómoda y peligrosa conciencia de clase.

Tal neodesarrollismo constituyó un importante vector político de la miseria ideológica brasileña y, si los militares usaron la fuerza bruta para callar a las fuerzas insurgentes contra el capital, el PT en la conducción política del país las silencia con la ilusión del ascenso social —la clase media ciudadana—, y con el valor ideológico que atribuye a su empobrecimiento en un amplio espectro. Así, como un conocido político brasileño profirió la perla “el bandido bueno es el bandido muerto”, el neodesarrollismo petista sentenció que el pobre bueno es pobre “ordenado y complaciente”.

A pesar de que los “ordenados” claman, con fecha y hora fijadas, por la vuelta del PT y su socialliberalismo en todo el país, muchos otros dejaron de creer en la benevolencia del estado, en la institucionalidad de la

20 La creación del Catastro Único viene siendo un excelente instrumento de control y mapeo de los pasos de los individuos pobres.

pequeña política, en la “conquista” negociada, en las migajas que aplacan el hambre y deprimen la conciencia. El enfrentamiento hoy es más urgente y es de otra naturaleza. No faltan causas ni luchadores dispuestos a los desafíos. Indígenas de las más variadas etnias se movilizan en la lucha por la retomada de sus tierras. Una enorme ola huelguista por la recuperación de salarios y de derechos robados incluye a trabajadores formales y precarizados, organizados o no en sindicatos. La creatividad de estudiantes secundarios entra en acción en las ocupaciones por la escuela pública que realizan en todos los estados ... Todavía existe vida más allá del orden desarrollista controlado por el capital.

Bibliografía

- Fernandes, Florestan, “Notas sobre o fascismo na América Latina”. En: —, *Poder e contrapoder na América Latina*. Río de Janeiro: Zahar Editores, 1981.
- Fontes, Virgínia, *O Brasil e o capital-imperialismo*. Río de Janeiro: Editora da UFRJ, 2010.
- Marx, Karl, *Manuscritos económico-filosóficos de 1844*. Trad. y notas Fernanda Aren, Silvina Rotemberg y Miguel Vedda. Introducción de Miguel Vedda. Buenos Aires: Colihue, 2015.
- Mészáros, István, *Para além do capital. Rumo a uma teoria da transição*. Trad. de Paulo Cezar Castanheira y Sérgio Lessa. San Pablo: Boitempo, 2002.
- Sampaio Jr, Plínio de Arruda. “A ditadura do grande capital”. En: *Corecon/RJ*, febrero 2016.

Los pueblos de los bosques y el desarrollo. Las retomadas indígenas en Brasil

Silvia Beatriz Adoue

Son tan ingenuos y generosos con lo que tienen que nunca niegan nada, cualquier cosa que tengan si se las piden, te la dan invitándole a la persona a compartirla con ellos, aún no he podido descubrir si tienen propiedad privada.

(Discurso de Cristóbal Colón en el guión de la película *También la lluvia*)

Cuando los europeos llegaron a América, encontraron un continente donde no existía propiedad privada de los medios de producción. El primer contacto fue con sociedades no escindidas que vivían en una economía de abundancia, como la que describe Marshall Sahlins (1976 y 2004). Sin producción de excedente para consumo diferido.

Demoraron algunos años para que se encontraran con grandes sociedades agrícolas, escindidas, con economías no monetarias y producción de excedente que, sin embargo, no era acumulado en forma de capital. Era el caso del Tawantinsuyu, o de la organización estatal azteca, así como de los remanentes de la organización estatal maya, que estaba desagregándose. Esas grandes sociedades agrícolas solo sobrevivían en expansión, por medio de la explotación de fuerza de trabajo de comunidades, en la forma de tributos, servidumbre y ciertas formas de esclavitud. La integración de estas comunidades a esas formaciones estatales alteraba el modo de consumo de los miembros de la comunidad. Pero si parte del excedente agrícola, o

* “Os povos da floresta e o desenvolvimento. As retomadas guarani e kaiowá no Brasil”. Trad. de Miguel Vedita.

inclusive de los servicios prestados por cada comunidad, estaban destinados al consumo del grupo dominante, erigido en casta que no realizaba trabajo manual, otra parte del excedente estaba destinado al almacenamiento para consumo diferido del conjunto de las comunidades integradas, en caso de contingencias desastrosas.

Sin embargo, esas grandes sociedades agrícolas se circunscribían a la región andina y a Mesoamérica. En el resto del continente, las sociedades resistían a escindirse. Suele decirse que vivían en una “economía de subsistencia“. Y con esta expresión los colonizadores definían las relaciones de esas sociedades con el ambiente. Antropólogos críticos, como Marshall Sahlins (1976 y 2004) y Claude Meillassoux (1977), han combatido la expresión o el sentido que ella alienta: el de una economía de miseria que deja a los pueblos que la practican en constante riesgo de extinción. Los autores contraponen a esa descripción la expresión “economía de abundancia“. En ocasiones, esos pueblos pueden producir excedente, pero entienden la desmesura de su extracción como un desequilibrio en los intercambios con el ambiente que precisa ser compensado.

No se trata de grupos humanos en “estado natural“. Los modos de punción, como prefiere llamar Sylvia Carvalho (2012), no suponen que no haya una acción transformadora sobre la naturaleza. Solo que esa acción se realiza a favor de ella. La propagación de vegetación ciliar y el plantío de árboles por esos grupos, así como el cuidado con la fauna que realiza la dispersión de las semillas, fueron prácticas que llevaron a la formación de camadas de humus que expandieron la selva amazónica, por ejemplo.

Esa presencia activa en la naturaleza no está dirigida a la obtención apocada y restringida de los recursos que serán consumidos inmediatamente. Ella genera ciclos sucesivos de bosque. Aun la agricultura de bajo impacto practicada por esos grupos se articula con los ritmos de la naturaleza renovando los bosques en decrepitud. De la misma manera, el cuidado con los cursos de agua y con los animales que se integran en las cadenas alimentarias está presente en la “ideología paleolítica“. El desplazamiento dentro del territorio, las interdicciones alimentarias y el control demográfico practicados son indicios de la aplicación de una tecnología bien compleja que parte de considerar los sistemas ecológicos en su dinámica.

Desde el punto de vista político, Pierre Clastres afirma que no se trata solo de sociedades sin Estado, sino de sociedades contra el Estado (1979 y 2011a). Es decir, se trata de grupos humanos con prácticas de carácter preventivo contra la formación del Estado, que sería condición y no consecuencia de la división social (Tible, 2013: 132-138). Así, según Clastres,

son sociedades en las que lo social y lo político determinan lo económico y no lo contrario. A propósito de eso, y refiriéndose no solo a los pueblos cazadores, sino a aquellos que tienen un modo de producción doméstico, nos dice Pierre Clastres:

Si el MPD [modo de producción doméstico] es “un sistema intrínsecamente hostil a la formación de excedente“, él no es menos hostil a dejar caer la producción abajo del límite que garante la satisfacción de las necesidades. El ideal de autarquía económica es, en realidad, un ideal de independencia política, que está asegurada cuando no se tiene necesidad de los otros. (2011b:170)¹

Por otro lado, si es verdad que las grandes sociedades agrícolas de América producían excedente, esa producción no estaba dirigida a la reproducción ampliada. Fue la llegada de los conquistadores la que desarrolló la producción de excedente hasta el paroxismo. Ellos se valieron de las formas de explotación del trabajo que ya existían en esas sociedades, pero con una intensidad nunca experimentada en el continente, ya que el excedente pasó a destinarse a la acumulación capitalista. Para conseguir la reducción casi integral de la energía humana a fuerza de trabajo, los conquistadores se valieron de una economía del terror, como consta en las crónicas de Indias y quedó registrado en la historiografía, en la mayoría de los casos de manera puramente descriptiva.

La expoliación no fue la forma de explotación predominante solo durante los ciclos extractivos o solo en el período colonial, ella perdura a lo largo de la historia de América, atravesando el período colonial y el neocolonial. Y permanece en el período imperialista hasta nuestros días. Desde la conquista, y, con excepción de Estados Unidos y Canadá, en trazos gruesos, la matriz exportadora de materias primas y semimanufacturados no fue abandonada. Las relaciones de trabajo se modificaron sin que se hayan transformado enteramente en las que rigen en los países centrales.

La introducción de tecnologías modernas en esos ramos exportadores en cierto sentido aumentó el carácter expoliador de la explotación del territorio. Es el caso de la llamada eufemísticamente “revolución verde“, que tornó casi todos los territorios en áreas aptas para la producción de *commodities* a gran escala. Así, el capital viene avanzando, desde la década

¹ Esta y las siguientes citas fueron traducidas del portugués al castellano por la autora de este capítulo.

de 1970, sobre tierras que no le habían interesado hasta entonces, y que eran espacio de aquello que Ciro Flamarión llamaba “brecha campesina” (1980) en la economía de la gran mayoría de las colonias de explotación de América. De la misma manera, el avance sobre esas tierras, así como de los territorios indígenas, *quilombolas*,² pescadores se intensificó en la medida en que esas nuevas tecnologías permitían la incorporación de las áreas.

En el caso de los pueblos de los bosques, los indígenas que habían conseguido resistir al confinamiento en reservas, al asalariamiento permanente y a la expulsión para las ciudades, enfrentan la codicia de las cadenas de producción de *commodities*. Ellos y su resistencia son una reserva de rechazo radical al desarrollo capitalista, con su carga de explotación y reducción de la energía humana a fuerza de trabajo (Meillassoux, 1977).

En Brasil, la constitución de 1988 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la demarcación de sus tierras tradicionales.

Art. 231. Son reconocidos a los indios su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, compitiendo a la unión demarcarlas, proteger y hacer respetar todos sus bienes.

§ 1º Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios las que están por ellos habitadas en carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles a la preservación de los recursos ambientales necesarios a su bienestar y las necesarias a su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones.

§ 2º Las tierra tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su posesión permanente, cabiéndoles el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos en existentes.

§ 3º El provecho de los recursos hídricos incluidos los potenciales energéticos, la exploración y la explotación de las riquezas minerales en tierras indígenas solo pueden ser efectuados con autorización del Congreso Nacional, oídas las comunidades afectadas, quedándoles asegurada participación en los resultados de la explotación, en la forma de la ley.

§ 4º Las tierras de las cuales trata este artículo son inalienables, y los derechos sobre ellas imprescriptibles.

2 Comunidades formadas por fugitivos de la esclavitud durante el período esclavista en Brasil y que permanecen hasta hoy.

§ 5º Está vedada la remoción de los grupos indígenas de sus tierras, salvo, ad referendum del Congreso Nacional, en caso de catástrofe o epidemia que ponga en riesgo su población, o en interés de la soberanía del País, posterior a la deliberación del Congreso Nacional, asegurado, en cualquier hipótesis, el retorno inmediato cuando cese el riesgo.

§ 6º Están anulados y extintos, no produciendo efectos jurídicos, los actos que tengan por objeto la ocupación, el dominio y la posesión de las tierras a las que se refiere este artículo, o la explotación de las riquezas naturales del suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes, salvo relevante interés público de la unión, según lo que disponga ley complementaria, no generando la nulidad y la extinción del derecho a indemnización o a acciones contra la unión, salvo, en la forma de la ley, con relación a las mejorías derivadas de la ocupación de buena fe.

Sin embargo, pasados 28 años de la sanción de la carta, la demarcación de tierras indígenas está paralizada y las ya demarcadas sufren procesos judiciales que pretenden su reversión. No hay ley que detenga el avance del capital, con su ideología de desarrollo sobre todos los territorios.

Los pueblos de los bosques están procediendo, apoyados en la legitimidad que la Constitución concede a sus demandas, a la “autodemarcación” de sus tierras por la práctica de lo que ellos llaman “retomadas”. Avanzan así sobre territorios que habían perdido en las sucesivas ondas de expansión de la frontera agropecuaria. Esas acciones no tienen reconocimiento legal y son realizadas en un contexto de violencia, no solo del Estado, sino también de grupos paramilitares sustentados por hacendados. Estos, a su vez, responden a determinaciones de las cadenas productivas que demandan flujos de *commodities*. El papel dominante de esas cadenas impone el control de la posesión de la tierra, no necesariamente para su utilización inmediata, sino para tornarla disponible para cultivo o especulación. La presencia indígena, sumada al marco constitucional, resulta un obstáculo para esa disponibilidad necesaria con vistas a la fluidez de las inversiones. El recurso, una vez más, a la economía del terror tiene como finalidad la inclusión de esas áreas, sin discontinuidades para la especialización productiva organizada a nivel planetario. La presencia indígena se presenta como un impedimento para la implantación de una civilización de alcance justamente planetario, basada en el ideal de productividad máxima, paradigma indiscutible del capitalismo. Cuando se lo cuestiona por sus efectos climáticos y sociales desastrosos, se levanta el fantasma

de la escasez. Según esta ideología, el aumento de la productividad estaría disputando una corrida con el aumento de la escasez, y no provocándolo.

El embate entre el paradigma de la expansión de la abundancia, propio de los pueblos de los bosques, y la corrida de la productividad para compensar la escasez creciente, propia de la ideología del capital, se da en condiciones históricas bien definidas de dominio planetario del capital. La cultura de los pueblos de los bosques no se da en las condiciones materiales de uso de la tierra, sino en las condiciones de la lucha por ella. No solo como un medio de supervivencia biológica, sino también como condición para una existencia como pueblo. En ese sentido, la lucha por la tierra, inclusive por el reconocimiento de la misma como tierra indígena, va más allá del concepto institucional de territorio como espacio limitado. Los pueblos de los bosques no conciben la tierra como espacio cercado, sino como espacio de un modo de producción y reproducción de la vida.

De otra manera, para el indígena contemporáneo, no es que esa tierra sea de uso exclusivo de un conjunto de individuos bien definidos e identificados, sino que la relación con la tierra de aquellos que la habitan es de expansión del bosque. Sus retomadas apuntan a eso, a la implantación de territorios continuos de vida y circulación. Por ese motivo vemos en sus banderas, junto con la demanda por tierra, la demanda por libertad, no menos importante que la primera. Libertad es, para los pueblos del bosque, libertad de circulación. Es decir, tierra sin cercas. No solo para los humanos, sino también para la propagación de plantas y circulación de animales; para la expansión de la abundancia.

Si esos elementos culturales, a los que muchos atribuyen carácter residual, permanecieron en estado de latencia o subordinados y funcionales a otras formas dominantes, es porque responden a una posibilidad y a una necesidad actuales. En la recreación de la tradición, las prácticas de las retomadas indígenas no son rituales del pasado, sino prefiguración de otro paradigma negador de la ideología del “desarrollo” tal como las sociedades de escasez lo conciben. No son todas las tradiciones las que se actualizan.

El caso específico de la dinámica entre expansión de las fronteras agrícolas en territorio guaraní y kaiowá es paradigmático. La inclusión de los territorios indígenas del sur del estado de Mato Grosso do Sul se dio por sucesivas oleadas. Los kaiowá, cuya designación se refiere a la condición de “pueblo del bosque”, son los que resistieron al trabajo forzado impuesto por los conquistadores y al confinamiento en las misiones, replegándose en el monte, donde la colonización no había llegado.

Después de la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, la región fue invadida por remanentes del ejército y hacendados. Esos territorios fueron destinados por el Estado brasileño a la explotación de yerba mate, así como a la pecuaria, para atender al mercado regional anteriormente abastecido por la producción paraguaya. La abertura del río Paraná fue ocasión propicia para la comercialización de esos productos en la región. Para eso, el Estado concedió a explotación vastas áreas para el emprendimiento privado. Solo restó el fondo de esas áreas para el asentamiento de los guaraní y kaiowá que habitaban la región. La forma de ocupación territorial por esos pueblos no impide la cohabitación en el mismo territorio y mucho menos el cultivo de yerba mate, pero el cultivo intensivo para el mercado ya alteraba el espacio, deteriorando las condiciones para el *ñandereko*, el modo de ser guaraní.

Las políticas de Estado apuntaban a la asimilación completa de los indígenas, por medio del asalariamiento, y a la homogeneización de las tierras para incluirlas en la producción para el mercado. La permanencia dispersa de los guaraní y kaiowá en el territorio era un impedimento para eso. Además de someter a los indígenas a desplazamientos forzados, entre 1915 y 1928 el SPI (Servicio de Protección a los Indios) creó nueve reservas para confinamiento indígena en la región (Cavalcante, 2015; Lima y Urquiza, 2015).

Con la quiebra, durante el gobierno de Getúlio Vargas, del monopolio de la explotación de la yerba mate por la Companhia Mate Laranjeiras en la región, la explotación pecuaria, de ganado de corte, con menos demanda por *changa*, servicio eventual de fuerza de trabajo indígena, se tornó más presente. Y vivió un refloreamiento junto con la introducción del plantío de soja, y, en menor proporción, maíz y arroz, con tecnologías de la “revolución verde”, a partir de las décadas de 1960 y 1970. Esto fue resultado de políticas de Estado de colonización y estímulo a esas producciones, que llevaron al estado de Mato Grosso do Sul a agricultores de los estados del sur de Brasil (Lima y Urquiza, 2015).

Por fin, y más recientemente, asistimos a la introducción del plantío de eucalipto y carbonerías que utilizan fuerza de trabajo indígena. Pero, a enorme escala, vemos el avance de la frontera de la caña de azúcar desde la década de 1980, para la producción de etanol, con implantación de usinas. La entrada de esta explotación a gran escala coincide con un desplazamiento de capitales de la pecuaria y de la industria frigorífica local al sector alcoholero, con subsidios del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social). Mientras tanto, la industria frigorífica local

pasó a quedar concentrada en manos de capitales que actúan dominando la comercialización como actores de alcance nacional y de los países de la región. Es decir, se trata de una política de Estado dentro del gran paquete de lo que se llamó “neodesarrollismo”.

Si la secuencia ganado-soja-caña tiende a repetirse en varias regiones, cabiendo a la pecuaria la “tarea sucia“ del desmonte para creación de pastizales, podemos afirmar que el sur de Mato Grosso do Sul está afectado por la explotación de caña para producción de etanol. La estructura de la propiedad agraria que sirve de base a esa economía está configurada no solo por grandes latifundios, sino también por hacendados medios que venden la producción a las usinas. Son estas últimas las que se quedan con el grueso de los subsidios y del lucro. Grandes actores transnacionales tienen presencia en la región, como la Raízen, fusión de la Shell con la Cosan, originalmente gran productora de azúcar en el estado de San Pablo (Bellentani, 2014).

La producción de caña, no enteramente mecanizada, emplea para el corte una gran proporción de fuerza de trabajo indígena, en particular de las reservas, donde los pueblos confinados no tienen condiciones ambientales para sobrevivir según el modo de vida indígena. Muchos de esos trabajadores son adolescentes y se desplazan a las plantaciones en condiciones de empleo que no respetan la legislación laboral (Rezende, 2011).³ Si los niños guaraní y kaiowá son educados para ser libres en el **ñandereko**, llegada la adolescencia son forzados al trabajo alienado en su forma más intensa, cuando no a la mendicidad en las ciudades o a la alimentación por medio de becas de alimentos distribuidas de manera errática por la FUNAI (Fundación Nacional del Indio). No debe extrañar que el índice de suicidios entre adolescentes indígenas sea mucho más alto que el de la media nacional (Cavalcante, 2015; Grubits Freire y Noriega, 2011).

A pesar de los casi 30 años de la sanción de la Constitución, la demarcación de tierras indígenas permanece paralizada, siendo los gobiernos del llamado “neodesarrollismo“, del PT (Partido de los Trabajadores) los que menos áreas demarcaron. En los últimos dos años, tierras ya demarcadas y homologadas en el estado de Mato Grosso do Sul sufren acciones judi-

3 Sugiero la lectura de la disertación de maestría de Simone Beatriz Assis de Rezende *Potencialidades de desenvolvimento local dos kaiowá e dos guarani cortadores de cana-de-açúcar da aldeia Te'yikue*, rica en detalles sobre las condiciones de trabajo de los indígenas en el corte de caña en Mato Grosso do Sul.

ciales que pretenden la reversión de su estatus legal de “tierras indígenas“. En las tierras ya declaradas, en proceso de demarcación, e inclusive ya demarcadas, los indígenas sufren ataques permanentes por parte de grupos paramilitares contratados por el sindicato de los hacendados. Considerando que solo el 2 % del área del estado está siendo reclamado como tierra indígena, podemos interpretar estos hechos en el marco de la dinámica del avance de la frontera del etanol y sus determinaciones externas⁴.

Los guaraní y kaiowá, que componen en Mato Grosso do Sul una población de 45 a 50 mil, así como otros pueblos indígenas de Brasil, hace algún tiempo que vienen lanzándose (justamente después de la detención de las demarcaciones por el Estado) a la “autodemarcación“ de las tierras ancestrales, las retomadas. Tienen como objetivo su reconocimiento por el Estado, pero responden a una lógica bastante diferente de la estatal. En primer lugar, porque la concepción de territorio guaraní y kaiowá no es la de un territorio limitado, discontinuo ni exclusivo. Es decir, no supone que los no guaraní y kaiowá no puedan habitarlo, sino que exige un uso de la tierra radicalmente diferente: es territorio para una economía de abundancia.

En el encuentro del CCNAGUA (Consejo Continental de la Nación Guaraní), realizado en el Tekoa Ka'a Kupe, en Misiones, Argentina, en septiembre de 2015, los guaraníes de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia reafirmaron el lema “Tierra, justicia y libertad“. No es solo de restitución de las tierras ancestrales lo que ellos reclaman, sino también la libertad de circulación, inclusive a través de las fronteras nacionales. El concepto guaraní de territorio incluye la posibilidad de desplazamiento y, para eso, son necesarios corredores, territorios continuos de abundancia, reservas de alimentos disponibles para la punción. Ese concepto choca frontalmente con la incorporación de tierras al monocultivo, interrumpiendo la libre circulación de las gentes y de los animales y también interrumpiendo la dispersión de semillas.

4 Debo esa reflexión a Gabriel Moraes Ferreira de Oliveira, estudiante de Ciencias Sociales de la UNESP, campus de Araraquara, y miembro del Comité de Solidaridad a los Pueblos Indígenas: diferentemente de la región amazónica, donde la demarcación de tierra indígena tiene un efecto de valorización de la tierra contigua, para efectos de especulación, en el sur de Mato Grosso do Sul, la dinámica de las inversiones en la producción de *commodities* impone la disponibilidad de la tierra para su explotación inmediata.

Esa concepción está radicalmente contra la ideología del desarrollo capitalista y la única “reproducción ampliada” que procura es la recuperación y expansión de la economía de abundancia. En ese sentido, las retomadas indígenas son reserva de un pensamiento programático que apunta a un paradigma contrapuesto a la expansión planetaria del capital. La reflexión sobre esos principios puede ayudar también a los no indígenas a pensar un giro de timón para evitar el desastre ambiental y social al cual el desarrollismo los conduce.

El sentido común responde a esa recomendación con una afirmación genérica de que no es posible girar la rueda de la historia hacia atrás. No hablamos de cualquier gesto de romanticismo retrógrado. Las retomadas indígenas no son ecos del pasado. Son respuesta a problemas del presente, y coinciden con soluciones que la ciencia, inclusive la ciencia occidental, hace rato señala, cuando recomienda la implantación de corredores ecológicos como condición para la recuperación de áreas devastadas por la explotación intensiva. Pero la lucha de los pueblos de los bosques no solo apuntala principios económicos. Restituye también una forma de sociabilidad que resiste a la escisión social, a la explotación del trabajo, al poder de unos sobre otros. Por ese motivo, los socialistas de todo el mundo encuentran en esos pueblos a aliados estratégicos y reservas de pensamiento y sentimiento superadores del capital, inclusive para la humanidad contemporánea.

Abril de 2016.

Bibliografía

- Bellentani, Natália Freire, *A territorialização dos monopólios no setor sucroenergético*. San Pablo: mimeo, 2014.
- Cardoso, Ciro Flamarion S., “As concepções acerca do ‘sistema econômico mundial’ e do ‘antigo sistema colonial’: a preocupação obsessiva com a ‘extração de excedente’”. En: Amaral Lapa, J. R. do (comp.), *Modos de produção a realidade brasileira*. Petrópolis: Vozes, 1980, pp.109-132.
- Carvalho, Sylvia M. S., *A ideologia paleolítica*. Mimeo, 2012.
- Cavalcante, Thiago Leandro Vieira, *Colonialismo, território e territorialidade: a luta pela terra dos Guarani e Kaiowá em Mato Grosso do Sul*. Dourados: mimeo, 2015.
- Clastres, Pierre, *A sociedade contra o Estado (investigações de antropologia política)*. Trad. de Bernardo Frey. Porto: Afrontamento, 1979.

- , “A questão do poder nas sociedades primitivas”. En: *Arqueologia da violência*. Trad. de Paulo Neves. San Pablo: Cosacnayfi, 2011a, pp.135-143.
- , “A economia primitiva”. En: *Arqueologia da violência*. Trad. de Paulo Neves. San Pablo: Cosacnayfi, 2011b, pp.163-184.
- Grubits, Sonia / Freire, Heloísa Bruna / Noriega, José Angel Vera, *Suicídios de jovens Guarani/Kaiowá de Mato Grosso do Sul, Brasil*. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932011000300006 (último acceso: 24/04/2016).
- Lima, Getúlio R. de / Urquiza, Antonio H. A., “Agronegócio, desenvolvimento e territórios indígenas tradicionais: os desafios dos Direitos Humanos em Mato Grosso do Sul”. En: *Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos* 3/2 (julio-diciembre de 2015), pp. 115-134.
- Meillassoux, Claude, “A exploração da comunidade doméstica: o imperialismo como modo de reprodução de mão-de-obra barata”. En: –, *Mulheres, celeiros & capitais*. Trad. de Antônio Figueiredo. Porto-Portugal: Afrontamento, 1977.
- Rezende, Simone Beatriz Assis de, *Potencialidades de desenvolvimento local dos kaiowá e dos guarani cortadores de cana-de-açúcar da aldeia Te'yikue*. Campo Grande: mimeo, 2011.
- Sahlins, Marshall, *Âge de pierre, âge d'abondance. L'économie des sociétés primitives*. Trad. de Tina Jolas. París: Gallimard, 1976.
- , *Stone age economics*. Londres: Routledge, 2004.
- Tible, Jean, *Marx selvagem*. San Pablo: Annablume, 2013.

Inédita alianza neodesarrollista en el campo: la asociación educativa entre el MST y el agronegocio en Bahía*

Arlete Ramos dos Santos

Introducción

Este artículo forma parte de una investigación de posdoctorado cuyo objetivo fue analizar algunas contradicciones encontradas en la gestión educativa de la Escuela Popular de Agroecología Egídio Brunetto, sobre todo en la función de la “asociación” que la originó. Por una parte, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra –MST, históricamente asociado a la lucha por la tierra en Brasil–, por la otra, Fíbria, una gran multinacional del negocio del agro, que tiene como meta la afirmación del sistema capitalista por medio del lucro y de la competitividad, y, por último, el Estado, por la mediación esencial en este acuerdo. En principio, todo indica que la misión de dicha empresa se contradice con los objetivos del MST, cuya ideología defiende la construcción de una sociedad sin explotación, con supremacía del trabajo por sobre el capital. Para analizar estas contradicciones, efectuamos la presente investigación según la metodología cualitativa, de naturaleza exploratoria, cuyos instrumentos de recolección de datos fueron: análisis de documentos, revisión bibliográfica y entrevistas semiestructuradas con militantes del MST, representantes de empresas del agronegocio y de los sindicatos en la región Extremo Sur de Bahía. En base a los resultados

* “Aliança neodesenvolvimentista inédita no campo: parceria educacional entre o MST e o agronegócio na Bahia”. Trad. de Esteban Ruiz.

obtenidos, consideramos que, al aceptar ser parte de la propuesta de educación en asociación con el agronegocio, con la mediación del gobierno del estado de Bahía, el MST se adecuó a los parámetros establecidos por el sistema capitalista en dicha región. De hecho, abandonó sus objetivos iniciales, entre otros, la lucha por la transformación social.

Neodesarrollismo y Educación del Campo en Brasil

Encontramos importantes estudios sobre el *desarrollismo* en Sampaio Jr. (2012), quien lo entiende como un término vago utilizado por el pensamiento crítico para tratar los dilemas y desafíos del proceso nacional en las economías latinoamericanas atrapadas en el círculo vicioso de la dependencia y el subdesarrollo. Tal paradigma económico se caracteriza por la falta de estabilización de las economías nacionales y por la superexplotación del trabajo, lo cual origina crisis cíclicas que es necesario detener mediante una reforma estructural que articule la industrialización y la organización de la economía, para liberar de la situación de dependencia interna y externa y de la desigualdad social a las sociedades nacionales. El agotamiento de este paradigma desarrollista para las condiciones de América Latina tuvo su causa en la crisis del modelo de industrialización por sustitución de las importaciones, debido a la reducción de la acumulación de capitales y la modernización de los modelos de consumo, lo que generó graves problemas económicos y sociales tanto en las décadas de 1980 y 1990 como en los inicios de los años 2000 (Íd.).

En Brasil, la estrategia para salir de esta crisis fue denominada *neodesarrollismo* por sus ideólogos y tuvo gran resonancia en la primera década del siglo XXI. El gobierno del Partido de los Trabajadores –PT– la implementó como un paradigma económico supuestamente nuevo. El programa fue ampliamente discutido en los espacios políticos, económicos y académicos, sobre todo durante el segundo mandato de Lula (2007-10), cuando se evidenciaron aumentos en las tasas de crecimiento económico y alguna mejora en los indicadores sociales. Tales aspectos también se verificaron en el primer gobierno de Dilma Rousseff, quien, en su segundo mandato, ya no pudo garantizar la continuidad de los resultados positivos de los períodos anteriores, debido a la profunda crisis en la cual se sumía el país. Para una comprensión de lo que significó el momento económico de la política neodesarrollista de los gobiernos de Lula y Dilma, compartimos el análisis de Pinassi (2013):

Sin romper con la lógica neoliberal, el “modelo” sugiere formas neokeynesianas en el modo de administrar los estragos causados por el neoliberalismo de las gestiones anteriores. Según consta, el Estado procuraría, entonces, recomponer su función (de “alivio”) social –a través de la creación de empleos (casi siempre precarios y temporarios), políticas de recuperación del salario mínimo y de redistribución de la renta ([programa] *Bolsa Família*, *Bolsa Escola*, [seguro de] desempleo, etcétera)–, mientras que la economía se renacionalizaría por medio del financiamiento del BNDES [Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social] a la reindustrialización pautada en la sustitución de importaciones.

En este período, la política económica de altos niveles de ganancia practicada por los gobiernos del PT atiende, por sobre todo, las necesidades de los capitalistas actuantes en el mercado brasileño. Al mismo tiempo, no obstante, el paquete neodesarrollista ofrece políticas asistencialistas de inclusión social que, sin contener de hecho las desigualdades sociales del país, provocan una seria paralización de las luchas de la clase trabajadora y de los movimientos sociales, principalmente de aquellos que guardan afinidades históricas con el PT. En este contexto, como política pública neodesarrollista, surge nuestro interés por la Educación del Campo, pues ella incide directamente en este proceso de “pacificación del conflicto”.

La Educación del Campo nació de las luchas de la clase trabajadora campesina organizada, principalmente en la forma de movimientos sociales que reclaman al Estado la formulación de un proyecto educativo centrado en el respeto por los intereses de los diversos sujetos colectivos que hacen del campo su territorio de vida. Tal proyecto se fue realizando formalmente a partir de la correlación de fuerzas en disputa en la sociedad, entre la clase trabajadora y el agronegocio. Entre los sujetos colectivos que representan a la clase campesiana, y que son mencionados en las políticas públicas que provienen de estas luchas, se destacan: “los pueblos indígenas, pueblos de la selva, comunidades tradicionales y campesinas, refugiados, agricultores familiares, asentados, acampados en espera de asentamiento, extractivistas, pescadores artesanales, ribereños y trabajadores asalariados rurales”. (Resolución CNE [Consejo Nacional de Educación]/CEB [Cámara de Educación Básica] N° 1)

Los movimientos sociales del campo, en particular el MST, a partir de 1980, discutieron la necesidad de una escuela diferente para el campo, y que ella fuese pensada junto con los campesinos. En el transcurso de las luchas de estos movimientos sociales y de intelectuales de la clase trabaja-

dora, la Constitución Federal de 1998 incorporó artículos que contemplan las especificidades de la educación rural. En esta ocasión, los trabajadores del campo e investigadores comprometidos con una educación humanista para los campesinos se organizaron para participar de los debates, que originaron la Ley de Directrices y Bases (9.394/96), y para garantizar que esta legislación respete las especificidades del saber campesino. Las discusiones iniciales para la consolidación de la concepción de la Educación del Campo tuvieron lugar en el I Encuentro Nacional de Educadores de la Reforma Agraria (I ENERA), realizado en 1997, y en las Conferencias Nacionales por una Educación del Campo, respectivamente de 1997, 1998, 2004, entre otras, con la participación de entidades internacionales, la sociedad civil y de órganos del gobierno. (Fernandes y Arroyo: 1999)

Desde aquellas luchas por la Educación del Campo hasta la actualidad, el saldo positivo se puede verificar en la existencia actual de una legislación que tiene por base las conquistas para la educación de los pueblos del campo, que reconoce y legitima las luchas, considerando sus especificidades. Las Directrices Operacionales para la Educación Básica en las Escuelas de Campo: Resolución CNE/CEB N° 1/2002 y Resolución CNE/CEB N° 2/2008; Resolución CNE/CEB N° 4/2010, que reconoce a la Educación del Campo como modalidad específica y define la identidad de la escuela del campo; Decreto N° 7.352, del 4 de noviembre de 2010, que regula la Política Nacional de Educación del Campo y el Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (PRONERA); y la Ley 12.960, del 27 de marzo de 2014, que incorpora restricciones en cuanto al cierre de las escuelas del campo. A pesar de ello, muchas escuelas fueron cerradas durante el gobierno neodesarrollista del PT. Según datos del Censo Escolar, en 2003 existían 103.328 escuelas rurales en Brasil, número que se redujo a 66.732 en 2015, o sea, 39.696 instituciones rurales cerradas. Solamente entre 2013 y 2014, 4.084 escuelas rurales finalizaron sus actividades, el equivalente al cierre de 340 instituciones por mes, o poco más de 11 por día. (Zinet: 2015)

Caldart (2009) nos indica que los caminos para una verdadera comprensión de la Educación del Campo pasan por el *actual estado de cosas*, o por el *movimiento real de su transformación*. Se apoya, de esta forma, en las categorías marxistas de universalidad, particularidad y singularidad, a partir de lo cual puede afirmarse que la Educación del Campo tiene su espectro de acción en la particularidad que da origen a la “experiencia de clase” de los campesinos organizados en movimientos sociales, e involucra diferentes sujetos, a veces con posiciones de clase diferenciadas. La

inserción en esta totalidad transcurre durante la lucha por el acceso de los trabajadores al conocimiento producido en la sociedad, pero esto sucede a partir de una lógica de producción y de trabajo diferente, que no es la del trabajo social productivo para el capital.

Observamos que la Educación del Campo tensiona dos territorios en disputa: 1) El territorio de la educación, que subyace a la lucha de los movimientos sociales por la superación de la hegemonía burguesa mediante una educación contrahegemónica, en la cual la escuela excede sus muros a partir de la lucha por la tierra, por la desalienación del trabajo y a favor de la democratización del acceso a la cultura y a su producción, por la participación política y por la defensa del medio ambiente (Caldart, 2009). 2) El territorio de la educación como política pública, y aquí el Estado neodesarrollista se hace presente con todas las contradicciones de un Estado burgués, representando a la hegemonía burguesa y en algunos momentos conciliando los conflictos sociales entre el agronegocio y la agricultura familiar.

A pesar de que la Educación del Campo tiene su punto de partida en una tendencia crítica y emancipadora en su concepción teórica, cuando es apropiada por el Estado liberal y se transforma en política pública, muchos sujetos colectivos, que todavía no tienen una lectura crítica, pasan a defenderla en la óptica del Estado burgués, en base al eclipse ideológico propiciado por la matriz coyuntural sustentadora de los compromisos elementales del neodesarrollismo. En este contexto, entra en la escena el agronegocio que actualmente viene absorbiendo para sí el concepto de Educación del Campo, despojándolo de su contenido crítico, para garantizar fuerza de trabajo barata con la formación exigida para actuar en la agroindustria. Por ello, el capital apoya la creación de cursos de corta duración en el espacio rural por parte del Estado, principalmente mediante Pronatec Campo, con el uso de recursos públicos destinados a la Educación del Campo.

El agronegocio y el MST en Extremo Sur de Bahía

A fines de 2011, Fíbria S.A.¹, líder mundial en celulosa, anunció la elaboración de un proyecto de asentamiento de 10 mil hectáreas en la región Extremo Sur de Bahía, destinado a 1.300 familias. El proyecto fue el resul-

1 Fíbria fue creada en Brasil a partir de la fusión en 2009 de las empresas Aracruz y Votorantim. La información sobre el origen de dicha empresa pueden ser consultados en:

<http://www.fibria.com.br/rs2011/Fibria_Relatorio_de_Sustentabilidade_2012.pdf>

tado de una asociación entre el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria –INCRA–, el gobierno de Bahía² y el MST. Dicha empresa exhibe esta información en sus informes y puede verificarse:

El gobierno de Bahía, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST), la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de la Universidad de San Pablo (ESAL/USP) y Fíbria, asociados en el proyecto “Asentamientos sustentables agroforestales y biodiversidad”. (...) propone dar a las familias del MST asentadas en la región y a algunas comunidades de los municipios del extremo sur bahiano acceso a formación técnica, educativa y organizacional para la producción de alimentos en base a los principios agroforestales y agroecológicos y a la organización social. (Fíbria, 2012: 23)

No bien fue firmada esta asociación, líderes del MST comenzaron a frecuentar reuniones estratégicas de Fíbria con el objetivo de discutirla. Para uno de sus ideólogos, Paulo Kageyama, investigador de ESALQ/USP, el proyecto redundaría en un cambio del discurso, incluso porque “se modifica la relación entre capital y trabajo”. Según el presidente del Consejo de Administración de Fíbria, José Penido, el proceso “es un marco para la convivencia del agronegocio y la agricultura familiar” cuya “estrategia es superar antagonismos y encarar los problemas históricamente agudos en el sur de Bahía”. También el dirigente nacional del MST en Bahía, Marcio Matos, afirmó: “Llegamos a un nuevo paradigma de negociación sobre pasivos, diálogo que surgió a partir de relaciones conflictivas y se repetirá junto a las demás empresas del sector”.³ Se observa aquí una coincidencia en los discursos de los sujetos involucrados, todos, independientemente del lugar social que ocupan, hablan en nombre de un mismo interés común personificado en la figura del agronegocio que representa al gran capital en el campo brasileño.

A partir de los datos recolectados en la investigación de campo se percibe que este acuerdo realizado con la mediación del gobierno de Bahía constituye una estrategia de persuasión sobre los trabajadores que, a partir de junio de 2011, no podrán volver a recurrir a la praxis histórica de ocu-

2 Sobre la relación del gobierno con las empresas de eucalipto y el MST en el Extremo Sur de Bahía, véase: <http://www.bahiaja.com.br/imprimir_noticia.php?idNoticia=37346> (22/10/2015)

3 Los pasajes citados pueden encontrarse en: <http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=189167&id_secao=8> (22/10/2015)

pación de tierras del agronegocio en la región. Deberán también respetar la propiedad privada, al llegar a la idea de que la alianza podría ser un “buen negocio”, en la medida en que las empresas capitalistas del campo no pedirán el reintegro de la posesión de las tierras ocupadas hasta aquella fecha. De allí parece surgir un nuevo modelo de reforma agraria, a partir de la negociación entre las clases antagónicas, que denominamos *Reforma Agraria de Consenso*.

Como parte del acuerdo realizado entre Estado, MST y Fíbria, se destaca la construcción de un Centro de Formación, Educación e Investigación en el Asentamiento Jaci Rocha (Prado, BA), que tiene como objeto fomentar una nueva cultura en el campo y en la sociedad brasileña como un todo, cooperando en el delineamiento de un proyecto popular de país comprometido con la sustentabilidad en todas sus dimensiones. De modo general, el acuerdo se realiza en la comprensión de que:

- Reforma agraria y sustentabilidad socioambiental son conceptos y prácticas convergentes y la agroecología y los sistemas agroforestales son caminos privilegiados para su realización;
- La sustentabilidad, en todas sus dimensiones, está directamente relacionada con la profundidad y el alcance de la acción educativa;
- Procesos educativos comprometidos con la sustentabilidad socioambiental deben ser permanentes, continuos, articulados y llegar a la totalidad de los habitantes de cada territorio;
- La gestión en busca de la sustentabilidad de paisajes y territorios rurales es una tarea de todos los actores involucrados en este proceso. (Fíbria, 2012: 54)

Lo novedoso en esta asociación es la relación del MST con Fíbria, pues esta última es una empresa multinacional de negocios agrarios que tiene como misión “desarrollar el negocio forestal renovable como fuente sustentable de vida y consolidar la plantación forestal como productora de valor económico, generar ganancia estimada, asociada a la conservación ambiental, a la inclusión social y a la mejora de la calidad de vida”. (Fíbria, 2012: 29) El MST, mundialmente reconocido como un movimiento social combativo que se enfrenta al agronegocio en el campo, contradictoriamente parece estar del lado de aquellos que combate.

Posteriormente, dicho Centro de Formación pasó a ser la Escuela Popular de Agroecología y Agroforestal Egídio Brunetto, en homenaje a un combativo militante del MST que falleció en 2011. Para los ideólogos del

proyecto, la perspectiva de esta escuela es la formación en agroecología para la constitución de asentamientos agroecológicos (Leon *et al.*, 2013). Según los informes de Fíbria, disponibles *online*, y los datos recolectados en entrevistas en Veracel, una de las empresas del consorcio, las inversiones en estos proyectos de asociación exceden los treinta millones de reales.

No es nuevo el interés demostrado por las grandes empresas en las cuestiones educativas del país. Freitas (2011), entre otros, subraya que existen acuerdos realizados entre el Estado, los entes federales y los empresarios en el sentido de institucionalizar una política educativa que atienda a las necesidades del mercado. En este sentido, el gobierno federal lanzó el programa “Compromiso Todos por la Educación”, parte estratégica del Plan de Desarrollo de la Educación –PDE–, establecido por el Decreto 6.094 del 24 de abril de 2007, durante el primer gobierno de Lula. El programa inauguró de esta manera un nuevo régimen de colaboración, al articular la actuación de los entes federales sin afectar su autonomía y al combinar principalmente la decisión política, la acción técnica y la atención de la demanda educativa y, en vista de la mejora de los indicadores educativos, lo que evidencia, así, una acción política neodesarrollista.

Semejante forma de consenso acerca del ideario neoliberal, que sujetó a la educación brasileña a los intereses privados del empresariado y de la clase hegemónica, fue materializado en la elaboración del PDE, que se convirtió “en el buque insignia del Plan de Metas Compromiso Todos por la Educación”. (Saviani, 2007) Allí están incluidas las políticas del Plan de Acciones Articuladas –PAR– que surgieron como iniciativa del gobierno federal, principalmente para atender los intereses de los empresarios en mejorar el Índice de Desarrollo de la Educación Básica –IDEB–. O sea, la preocupación es que los estudiantes de la educación básica puedan responder a las cuestiones relacionadas con la adquisición de conocimientos que confirman un perfil de “ciudadano” que sea o bien trabajador/a o bien consumidor/a “necesario/a” para el mercado.

Formación y educación todavía son para el MST términos que se interrelacionan, pues, este movimiento social dio, a lo largo de su historia, un salto en el sentido de constituirse como sujeto pedagógico que educa con las luchas cotidianas, en otras palabras, que produce y reproduce su propia conformación humana e histórica. Hay una intencionalidad, un proyecto educativo en sus acciones que no se agota tan solo en el sentido tradicionalmente atribuido a la escolarización. En el material educativo del MST (Dossier MST/Escuela, 2005), podemos encontrar la propuesta de una pedagogía alternativa a la construcción de la hegemonía y de un proyecto de

la clase trabajadora, que reafirma la necesidad de generar la consciencia de clase revolucionaria. Ciertamente, la gestión educativa del MST encontrará serios impedimentos para realizar la propuesta de educación crítica y de enfrentamiento al capital en un espacio financiado por “socios-empresarios” del agronegocio, como es el caso de la Escuela Popular de Agroecología y Agroforestal Egídio Brunetto.

Breves conclusiones

En su ensayo sobre economía política, al referirse a la relación entre burgueses y trabajadores, Rousseau definió los términos del pacto:

Puede resumirse en pocas palabras los términos del pacto social entre estos dos niveles de hombre: Precisas de mí porque soy rico y tú eres pobre. Llegaremos, pues, a un acuerdo. Yo permitiré que tengas el honor de servirme, bajo la condición de que me concedas lo poco de lo que te resta, a cambio de los esfuerzos que realizaré para mandarte. (Rousseau, 1973: 72)

En este movimiento pendular se encuentra el MST, una contradicción histórica en la cual el neodesarrollismo del PT interviene de modo decisivo sobre los movimientos sociales del campo, otrora, combativos, imponiéndoles una *praxis* desmovilizadora. Renuncian al derecho de ocupar las tierras del agronegocio, según revelaron las informaciones, y como parte del acuerdo, el agronegocio destina recursos millonarios para la implementación de un proyecto determinado por la sustentabilidad y la agroecología. En estos términos, el capital camufla la verdadera causa de dicho proyecto, relacionada con la destrucción del medio ambiente y la expropiación de los trabajadores por las empresas de eucalipto.

Entendemos que al constituir un Centro de Formación asociado al capital, para la realización de cursos de formación en asociación con el agronegocio, el MST se somete a los términos del acuerdo realizado, el cual trata, principalmente, de la reproducción del orden vigente para la consolidación y conformación de la clase dominante transnacional que explota a los trabajadores en la región Extremo Sur de Bahía. De esta forma, el MST, si de hecho pretende retomar el camino emancipador de sus orígenes, tiene la misión histórica de apropiarse críticamente de la educación formal, así como regenerar para sí el sentido de la educación no formal anclada en la riqueza cotidiana. Necesita reencontrar los caminos que promuevan un cambio cualitativo de las condiciones objetivas de producción

y de reproducción de su base, por medio de la transformación progresiva de la consciencia. Pues, según subraya Marx, el trascender efectivo de la autoalienación del trabajo es tarea ineludible de la educación, a partir de que esta educación adopte la totalidad de las prácticas políticas, educativas y culturales, en el intento de generar una contraconsciencia que efectúe la negación radical del capital y promueva la emancipación transformadora.

Bibliografía

Documentos

- Ley N° 9.394, del 20 de diciembre de 1996. Establece las directrices y bases de la educación nacional. Diario Oficial [de la] República Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasilia, DF, 23/12/1996.
- Resolución CNE/CEB N° 1, del 3 de abril de 2002. Instituye las Directrices Operacionales para la Educación Básica de las Escuelas del Campo. Diario Oficial de la Unión, Poder Legislativo, Brasilia, DF, 9/4/2002.
- Plan de Desarrollo de la Educación. Plan de Metas Compromiso Todos por la Educación. Guía de programas. Brasilia, DF, 06/2007.
- Resolución CNE/CEB N° 2/2008. Establece directrices complementarias, normas y principios para el desarrollo de políticas públicas para la Educación Básica del Campo. Diario Oficial del 28/4/2008.
- Decreto N° 7.352, del 4 de noviembre de 2010. Disposiciones sobre la política de educación del campo y el Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (PRONERA). Diario Oficial de la Unión, Poder Legislativo, Brasilia, DF, 5/12/2010.
- Decreto N° 12.960. Altera la Ley n° 9.394. Exige el pronunciamiento del órgano normativo del sistema de enseñanza para el cierre de escuelas del campo, indígenas y quilombolas. Diario Oficial de la Unión, Brasilia, 27/3/2014.
- MST, “Princípios da Educação no MST”. En: *Caderno de Educação* 8 (1996).
- , “A luta pela reforma agrária e por mudanças sociais no Brasil”. En: *Documentos básicos*. San Pablo, 2005.
- Fíbria Celulose S.A., “Relatório de sustentabilidade”, 2012. En: <http://www.fibria.com.br/rs2011/Fibria_Relatorio_de_Sustentabilidade_2012.pdf> (22/10/2015).

Bibliografía

- Caldart, Roseli S., “Educação do Campo: notas para uma análise de percurso” En: *Trab. educ. saúde* 7-1 (marzo-junio de 2009), pp. 35-64.
- Fernandes, Bernardo M. y Arroyo, Miguel G., *A educação básica e o movimento social do campo*. Coleção Por uma Educação Básica do Campo, vol. 2. Brasília: Articulação Nacional..., 1999.
- Freitas, Luís C., “Responsabilização, meritocracia e privatização: conseguiremos escapar ao neotecnicismo?”. En: *Seminário de Educação Brasileira* III (febrero de 2011).
- Leon, Daniel A., *et al.*, “Comunicação e agroecologia: A experiência da Escola Popular de Agroecologia e Agroflorestas Egídio Brunetto”. En: <<http://escolamiltonsantosdeagroecologia.blogspot.com.br/2013/07/comunicacao-e-agroecologia-experiencia.html>> (último acceso: 22/10/2015)
- Marx, Karl. *Manuscritos econômico-filosóficos*. Tradução de Jesus Raniéri. San Pablo: Boitempo, 1982.
- Pinassi, María Orlanda, “(Neo)desenvolvimentismo ou luta de classes?”, 2013. En: <<http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-13/brasil-neodesenvolvimentismo-ou-luta-de-classes>> (último acceso: 4/4/2017).
- Rousseau, J. J. *Do Contrato Social ou Princípios do Direito Político*. San Pablo: Abril Cultural, 1973.
- Sampaio Jr, Plínio A., “Desenvolvimentismo y neodesenvolvimentismo: tragédia e farsa”. En: *Serv. Soc. Soc.* 112 (octubre-diciembre de 2012), pp. 672-688.
- Saviani, Demerval, “O Plano de Desenvolvimento da Educação: análise do projeto do MEC”. En: *Educ. Soc.* 28-100 (Octubre de 2007), pp.1231-1255.
- Zinet, Caio, “Nos últimos 11 anos, 277 escolas rurais foram fechadas por mês no Brasil”, 2015. En: <<http://educacaointegral.org.br/reportagens/nos-ultimos-11-anos-277-escolas-rurais-foram-fechadas-por-mes-brasil/>> (último acceso: 4/4/2017).

Dos caras de la minería en el sudeste paraense: la extracción minera como base material del neodesarrollismo*

Celia Regina Congilio*

Introducción

En el plano teórico, el tema del neodesarrollismo nos remite a los diferentes autores que trataron la expansión capitalista a partir de las consideraciones de Trotsky, sobre el desarrollo desigual y combinado. Al tratar las condiciones de la integración de la Rusia zarista al capitalismo europeo, Trotsky enunció la teoría que aún hoy muestra actualidad, cuando reflexionamos acerca del avance del capital en los países periféricos:

La desigualdad del ritmo, que es la ley más general del proceso histórico, se manifiesta con el máximo de vigor y de complejidad en los destinos de los países atrasados. Bajo el azote de necesidades exteriores, la vida postergada es constreñida a avanzar a saltos. De esta ley universal de la desigualdad de los ritmos se deriva otra ley que, a falta de una denominación más apropiada, llamaremos ley del desarrollo combinado, en el sentido de la reaproximación de diversas etapas, de la combinación de fases distintas, de amalgama de formas arcaicas con las más modernas (Trotsky, 1980: 21).

* “Duas faces da mineração no sudeste paraense: o extrativismo minerário como base material do neodesenvolvimentismo”. Trad. de Carolina Nisman.

Hilderfing, siguiendo los pasos de Trotsky, lanzó pistas sobre la expansión de las relaciones capitalistas como corolario del imperialismo y el carácter desigual y combinado del desarrollo capitalista:

La exportación de capital, especialmente cuando se dio en forma de capital industrial y financiero, aceleró en gran medida el viraje de todas las viejas relaciones sociales y la inmersión del mundo en el capitalismo. El desarrollo capitalista no se dio de modo autóctono en cada país aisladamente; por el contrario, con el capital fueron simultáneamente importadas producción capitalista y relaciones de explotación, y esto siempre en el grado alcanzado en el país más avanzado (Hilferding, 1985: 303).

Al tratar sobre el tema de la expansión del capitalismo en territorios latinoamericanos, podemos guiarnos también con conocidas tesis propuestas por los teóricos de la dependencia, en una fase posterior a la inicial en los grupos de estudios de la Cepal, representada por Raul Prebisch en 1950. En esta, considerando solamente los elementos económicos y en una concepción etapista del progreso, la explicación para el subdesarrollo se dio a través de la “ausencia de desarrollo”: “El *atraso* de los países subdesarrollados se explicaba por los obstáculos que existían en ellos para su pleno desarrollo o modernización” (dos Santos, 2000: 8; subrayado del autor).

En los años de 1960, una versión crítica de la Teoría de la Dependencia, reforzada por el marxismo, gana aspectos más dignos con la realidad de los países subordinados. Con argumentos más o menos diferenciados, autores como André Gúnder Frank (1976), Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1977), Theotônio dos Santos (2000), Ruy Mauro Marini (2005), entre otros, tratarán la imposibilidad de que los países periféricos superen su condición de subdesarrollo al desarrollar procesos capitalistas. Ampliamente conocidos y con aspectos polémicos y divergentes que no cabe en este corto artículo detallar, esos trabajos parten de la concepción común de que el desarrollo capitalista reitera y actualiza en trayectorias históricas renovadas “la superexplotación del trabajo, el envío de excedentes y la situación de dependencia y subordinación de estos países en el interior del sistema mundial capitalista y de la división internacional del trabajo” (Filgueiras, 2014: 23). Solo por esto, el desarrollo del capitalismo en estas regiones se instaló como un fuerte ideario de carácter nacionalista, cuyas representaciones sobrepasaron gobiernos populistas y liberales, como examina Almeida (2014) al describir los procesos de construcción de la ideología nacional fundamentales al ciclo desarrollista en Brasil.

Los vientos neoliberales que asolaron el mundo a partir de la crisis capitalista de los años 1970 también redefinieron las medidas sociopolíticas dirigidas a América Latina. Una serie de *shocks económicos* fue aplicada a los países del hemisferio Sur a lo largo de la década de 1980. La *inserción* de estos países en el *nuevo orden mundial* detonó una serie de explosiones sociales que ni sus mismos defensores pudieron esconder, ni bajo los argumentos de la inexorabilidad. En paralelo a las formulaciones propicias a las políticas neoliberales, balances más fidedignos indicaban la extrema desigualdad y la indigencia a las cuales eran empujados los países de América Latina, o como los impactos sociales que resultaron de los *ajustes estructurales* exigidos por las instituciones financieras mundiales, en especial el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Datos reunidos por Petras (1995:148-150) informan que, entre 1982 y 1990, cerca de 200 billones de dólares líquidos, incluyendo envío de lucros y pago de impuestos, salieron de la región, exigiendo enormes sacrificios a los pueblos de América Latina. En el mismo período, la producción económica *per capita* cayó cerca del 10%, alcanzando la caída del 14% en la Argentina, 27% en Bolivia y 14% en Venezuela. Sobre la desigualdad de distribución de ingreso en la región, considerada la mayor del mundo, los datos presentados por Petras indican que los 20% más ricos son, en promedio, 21 veces más ricos que los 20% más pobres. En los diez años siguientes, los 25% más ricos mantuvieron o aumentaron su ingreso absoluto, mientras este cayó para los 75% restantes.

Más recientemente, Boito describe el surgimiento de un frente neodesarrollista, “base amplia y heterogénea de sustento de la política de crecimiento económico y de transferencia de ingreso iniciadas por los gobiernos Lula da Silva y Dilma Rousseff”. Boito caracteriza las políticas de estos gobiernos como “un programa de política económica y social que busca el crecimiento económico del capitalismo brasileño con alguna transferencia de ingreso, aunque lo haga sin romper con los límites dados por el modelo económico neoliberal aún vigente en el país” (Boito, 2012: 5). Entre las seis características indicadas por Boito para diferenciar el neodesarrollismo actual del desarrollismo populista, consideramos que dos son las que más impactan las políticas en la región amazónica del sudeste paraense: “Acepta las restricciones de la división internacional del trabajo, promoviendo, en condiciones históricas nuevas, una reactivación de la función primario-exportadora del capitalismo brasileño; el nuevo desarrollismo

es dirigido por una fracción burguesa que perdió toda veleidad de actuar como fuerza social nacionalista y anti-imperialista” (ibíd.: 6).

Tratándose de periferias dentro del sistema periférico, identificamos una tensión teórica entre neodesarrollismo y neoextractivismo que permea la discusión sobre los procesos económicos que ocurren en los días actuales. Aunque la cuestión sea foco de innumerables debates, los análisis sobre la diversidad y dinámica de los cambios en curso no permiten la comprensión total de la realidad social existente. Estas condiciones se agravan de acuerdo con las alianzas de clase que se hacen entre diferentes fracciones de capitales nacionales e internacionales, a los cuales se asocian los gestores de la política local; y configuran especificidades a los bloques de poder que controlan y definen las políticas generales de Estado.

Necesitaríamos un conjunto de informaciones empíricas y teóricas que hagan posible examinar las formaciones sociales impactadas y situar las relaciones establecidas entre los sujetos que históricamente las construyen. Como esto es imposible en la extensión de un artículo, nos limitaremos a algunas reflexiones. Aun cuando tratemos de una cuestión regional, nuestro punto de partida es la crítica a una sociedad estructurada a partir de la propiedad privada de los medios de producción, considerando, como Poulantzas (1973), que el modo de producción capitalista está conformado por la totalidad de las relaciones compuestas por sus estructuras económicas, jurídicas e ideológicas, que interactúan y sustentan la dominación de una clase por otra.

El modo de producción capitalista está constituido por diferentes formaciones sociales que componen territorialidades diversas, insertas, a su vez, en tiempos espaciales de producción que se modifican, conforme a la dinámica de expansión del capital. No pretendemos tratar la complejidad que el término *territorio* sugiere, sino tan solo lanzar una mirada sobre la heterogeneidad de las formas de producción y de las relaciones de trabajo practicadas en diferentes lugares. Asentado en la apropiación directa de los medios de producción y en la división social del trabajo, el modo de producción capitalista requiere un poder de dominación continuo de los que se apropian por sobre los expropiados. Se trata de un poder económico que solo puede sostenerse por la manutención, también continua, del poder político. Con el poder del Estado, la clase capitalista monta el aparato institucional de coerción/represión y consenso ideológico que le permite ejercer poder sobre toda la sociedad (Congilio, 2004).

En el tiempo real, presente y pretérito, de la expansión capitalista, el Estado se agiganta, produce ideología, asegura el orden, financia empresas

e inmensas obras de infraestructura y, además, conduce a una proletarianización inmensa de los trabajadores rurales, garantizando que el capital se adueñe de las tierras y de los recursos naturales. Saes (1998), apoyándose en Poulantzas (1973), explica las condiciones en que productores directos y propietarios de medios de producción, constituidos en clases antagónicas, son aglutinados bajo el concepto de *Nación*, representada esta por un territorio delimitado, constituido por *ciudadanos* pertenecientes a la misma *patria* y, por lo tanto, dotados de *aspiraciones comunes*. En el plano ideológico, la materialidad del Estado se establece en sus formas institucionales, que lo apartan de las relaciones de producción y atribuyen a él la “función particular de coesión de los niveles de una formación social” (Saes, 1998: 42).

En los países en los que el capital se expande por la extracción minera, el Estado ha emprendido acciones para garantizar esta dinámica de acumulación y consolidación a partir de los grandes proyectos; más específicamente, de las actividades mineras. La iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) fue un instrumento importante y surge de una propuesta presentada en agosto de 2000 en Brasilia, en el Distrito Federal, durante una reunión de jefes de Estado de América del Sur. LA IIRSA es un programa conformado por gobiernos de 12 países de América del Sur, que tiene por objetivo requerir la integración sudamericana a través de la integración física de los países citados. Las inversiones propuestas son de infraestructuras tales como transporte, telecomunicaciones y energía, y representan valores en cifras tan grandes como las del megaproyecto.

El discurso de la dictadura militar, de integración a un *orden de desarrollo nacional*, atravesó generaciones y mezcla a diferentes regímenes de acumulación articulados con los poderes locales. Al estudiar el poder local en Marabá, municipio sede de la organización administrativa del sudeste paraense, Ikeda (2013: 28) afirma que “aportar cierta noción sobre el modo en que el poder se organiza en el plano global, es de suma importancia para visualizar que la forma en que el poder político se organiza en un municipio está directamente relacionada con el modo en que se dan las relaciones comerciales entre este y los mercados nacional e internacional”. Esto nos muestra la imposibilidad de tratar de cuestiones locales sin un análisis de los movimientos globales del capital y su estrecha relación con las políticas de Estado una vez que la expansión de las empresas multinacionales ha asumido la forma dominante de internacionalización del capital y modela la división internacional del trabajo en diferentes formaciones sociales.

En territorios amazónicos, extractivismo y desarrollismo se retroalimentan con variaciones de productos que tienen las entrañas de la tierra o las corrientes de los ríos *como origen* y con tecnologías específicas en cada época, pero cuyos resultados no varían: destitución de condiciones *mínimas de supervivencia de gran parte* de su población, cuando no el exterminio, como sucede cuando territorios enteros pertenecientes a grupos indígenas, campesinos o ribereños son transformados en cráteres para la minería o inundados por los embalses que generan la energía necesaria para los emprendimientos mineros.¹

Tratándose del sudeste paraense, nos referimos a un ataque brutal y destructor que alcanza a un conjunto infinito de especies animales y vegetales (muchas aún no catalogadas por especialistas) y a un inmenso recurso hídrico. A partir de él sobreviven 13 pueblos indígenas distribuidos en diversas aldeas², más allá de comunidades ribereñas y campesinas. Discurrir sobre esta región, pequeño territorio de la inmensidad amazónica, significa comprender que en sus 54.469,20 Km², compuestos por 14 municipios, se encuentran economías distintas y pueblos caracterizados por culturas variadas, comunidades extractivistas tradicionales, pescadores artesanales, quebraderas de coco de babaçu y remanentes cimarrones, impactados por las mismas cuestiones sociopolíticas y ambientales que trajo el gran capital en arreglos contradictorios con las élites locales.

Al pueblo amazónico tradicional se suman poblaciones campesinas y trabajadores de otros Estados, seducidos por promesas de empleo desde los procesos de *colonización* cuando, a lo largo de la década de 1970, el gobierno de la dictadura intensificó la ocupación amazónica atrayendo desterrados de otras regiones hacia el trabajo ya extremadamente precario, mucho antes que el término se volviera un concepto tratado por estudios recientes de la sociología del trabajo. La oferta era de tierras para quien quisiera trabajar en ellas y de empleos en los grandes proyectos mineros y

1 En el momento en que está escribiéndose este artículo, el pueblo Munduruku, compuesto por más de 13.000 indígenas entre hombres, mujeres y niños, se arma con arcos e flechas para defender su territorio contra el poder estatal que decretó que en el margen del Río Tapajós se construirá la tercer mayor hidroeléctrica de Brasil. hace siete años el proceso de demarcación está frenado en FUNAI (*Brasil de Fato*, 2014: 10).

2 Conforme <http://www.funai.gov.br/index.php/apresentacao-baixo-tocantins>, último acceso: 09/12/2014.

madereros. Con la promesa de una reforma agraria jamás concretada en ese gobierno, o precariamente por los sucesores hasta el presente, el gobierno de la dictadura militar atrajo a un contingente inmenso de trabajadores, especialmente los expulsados por la sequía y por los conflictos agrarios en el Nordeste.

Tratándose de una región poco visitada en el período del desarrollismo brasileño hasta la década de 1950, el gobierno de la dictadura militar intensificó la ocupación amazónica con incentivos a los grandes emprendimientos madereros, mineros y de agro extensivo, iniciados por el presidente Castelo Branco entre los años de 1965 y 1968, con el lanzamiento de la Operación Amazonia y SUDAM (Superintendencia para el Desarrollo da Amazonia),³ sucesora de la fracasada SPVEA (Superintendencia del Plan de Valorización Económica de Amazonia), creada por Getúlio Vargas en 1953, en el auge del desarrollismo brasileño. Para la región del sudeste paraense, cuyo ciclo extractivista de la castaña —que siguió al del caucho— declinaba, el gran impacto vendría con el Proyecto Carajás, creado en 1980 por el Presidente Figueiredo, aunque desde la década de 1960 ya se especulara sobre los grandes yacimientos minerales existentes en la región, lo que derivó en diversas transacciones entre empresas multinacionales y gobiernos de la dictadura militar.

Fue sobre todo a partir de la dictadura militar que el Estado brasileño creó las condiciones institucionales para aquella internacionalización, a través del aprovechamiento de los recursos naturales de la Amazonia por vía de los grandes proyectos, marcando un nuevo momento en la historia de la región. Las empresas *transnacionales* allí instaladas, beneficiadas por los incentivos fiscales y otros beneficios del período de desregulación, privatización y flexibilización, organizaron la producción de materia prima a bajo costo (mano de obra barata, energía subsidiada, infraestructura ofrecida por el Estado, fiscalización ambiental incipiente, etcétera), enviándola a los países hegemónicos, en los cuales es procesada y convertida en mercancía, alimentando así, ciclo de producción y acumulación de capital. (Nascimento, 2006: 14; las bastardillas son nuestras).

Estudios críticos sobre este período nos proveen de una base fundamental para el conocimiento de la región; pero aún son incipientes las investigaciones más recientes sobre los desdoblamientos de la inundación del capitalismo en el sudeste paraense. Faltan investigaciones que deta-

3 Cuyos poderes más significativos constituían en distribuir incentivos fiscales y autorizar créditos para inversiones en la industria.

llen y profundicen en el carácter de las acciones políticas y económicas que avasallan un territorio que hoy encabeza la economía extractivista de *commodities* y se vuelve responsable por una buena porción del PBI brasileño, por la exportación del hierro y otros minerales importantes, extraídos mayoritariamente por VALE S.A., empresa de capital abierto, antigua empresa estatal *Vale do Rio Doce*, privatizada por el presidente Fernando Henrique Cardoso en 1997.

El sudeste paraense y la minería

El desarrollismo brasileño, en diferentes etapas, desplazó al margen posibilidades económicas consideradas “no competitivas”, y el neoliberalismo, en un falso llamado al progreso, profundizó la destrucción de todo lo que no fuera considerado moderno. Conforme a lo descrito por Dussel (2005: 55), “por el carácter ‘civilizatório’ de la ‘Modernidad’, se interpretan como inevitables los sufrimientos o sacrificios (los costos) de la ‘modernización’ de los otros pueblos ‘atrasados’ (imaduros), de las otras razas esclavizables, del otro sexo, por ser frágil, etc.”. En nombre del progreso y de la Modernidad, lo que se ha visto en la región, en una continuidad perversa de gobiernos militares, neoliberales y supuestamente progresistas, es una inmensa proletarización de pueblos por la destrucción de culturas tradicionales y toma violenta de sus tierras; aumento del desempleo y del trabajo precario; intensificación del uso de la fuerza de trabajo y debilitamiento de los movimientos sociales, ya sea por reclutamiento ideológico o por asesinatos y prisiones sistemáticos de líderes urbanos y rurales.

En consecuencia, a los diferentes regímenes de acumulación (extractivismo colonial, desarrollismo, neoliberalismo o neodesarrollismo) practicados por la economía dependiente del Estado nacional brasileño, se sucede la ampliación de contingentes amazónicos vulnerables ante un orden mundial accesada por los centros hegemónicos de poder. Esto ocurre en confradía con fracciones de la clase dominante local, ahora instalada en sectores diversos de la economía y del aparato de Estado. Al tener la minería, especialmente la del hierro, como base material desde los años de 1980, asoman industrias de la construcción, del negocio agrario, de servicios públicos y privados, de concesionarias e hipermercados, además de bancos privados y nacionales de los grandes representantes del sector.

Investigaciones en la región demuestran la frecuente ocurrencia de expropiaciones que ponen en acuerdo a antiguas oligarquías extractivistas con empresarios nacionales y multinacionales que actúan amparados por el aparato jurídico estatal. Se crean, así, las condiciones legales que amplían

latifundios, promueven desocupaciones de áreas indígenas y de asentamientos, legalizan tierras apropiadas por hacendados, promueven el acceso a las instancias administrativas del poder local, vacían las acciones de los órganos de gerenciamiento como la Fundación Nacional del Índio (FUNAI) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), entre otros. El saqueo constante se da por la violencia institucional abierta, como los diversos asesinatos que siguieron a la masacre de Carajás, ocurrida en la región en 1996, o por la violencia ilegal del pistolero, nunca castigada porque refuerza la desconsideración en las investigaciones o los lentos procesos del sistema judicial. El Relatorio de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) (2013: 18) indica a Pará como el campeón de asesinatos en territorios campesinos y deja claro de dónde parte la violencia:

En 2013 los movimientos sociales fueron responsables por 244 conflictos (230 Ocupaciones y 14 Acampamientos), 18,9% del total [de 847 áreas de conflicto en el campo]. Esto dice que el 81,1% de los conflictos son provocados por la acción de estancieros, acaparadores, madereros, empresarios o mineros –Poder Privado– a través de asesinatos o expulsiones, o por la acción del Poder Público, a través de las acciones del Poder Ejecutivo y del Judicial por medio de prisiones y acciones de desalojo. La violencia en el campo brasileño, los datos lo confirman, no viene de abajo.

El sudeste de Pará constituye un espacio geográfico cortado por la Ruta Transamazónica y que, a lo largo de los últimos 40 años, se tornó esencial para los procesos productivos exigidos por la expansión del capital. Ya solo la exportación del hierro responde por el 15,3% del valor total de las exportaciones brasileiras y VALE está abriendo una nueva mina y expandiendo su producción en la región, de 130 millones de toneladas actuales, a 230 millones previstas para 2016. Esto se condice con un proceso de compartimentación y fragmentación de los territorios, que pasan a ser utilizados en función de los intereses de las fuerzas hegemónicas o facciones de clase que se estructuran, se desestructuran y se recomponen a voluntad de la división internacional del trabajo y de los designios del Estado para la región. Por un largo período, el territorio pasó por ciclos alternados del extractivismo vegetal, por último el de la castaña, cuyo agotamiento coincide con el período en que la dictadura militar confiere a Brasil nuevas dinámicas de inserción en el orden económico mundial (Emmi, 1999).

El Proyecto Carajás se instala en lo que se considera la más rica área de minas del planeta. Ocupa cerca de 900 mil km² en plena Selva Amazónica, en un área cortada por los ríos Xingu, Tocantins y Araguaia. Ade-

más de explotar la mayor reserva mineral de alto porcentaje de hierro del mundo, son explotados manganeso, cobre, níquel, oro, bauxita y casiterita. Con la implantación del Proyecto Carajás, la región del sudeste paraense se tornó rápidamente un importante polo industrial, agrícola y comercial, pero, al contrario del desarrollo o modernización, tales acciones sirven al proceso de expropiación y concentración del capital, siempre mediadas por las políticas centralizadoras del Estado nacional, de forma que, como fue descrito por Almeida (2014), nación y territorio se constituyen dialécticamente en partes separadas de un todo articulado con el movimiento de expansión del capital.

Constituidas como economías de enclave, una vez agotados los ciclos en un determinado municipio, los emprendimientos se lanzan a otro, dejándole al poder público local una constelación de problemas sociales generados por el desempleo, por aumentos poblacionales estruendosos y ocupaciones urbanas irregulares. Ejemplo de esto es el municipio de *Canãa dos Carajás*, donde VALE está implantando la nueva mina, conocida como proyecto S11D. La población de *Canãa dos Carajás* en el año 2000 era de 10.922, en 2010 aumentó a 26.716, con previsiones de superar los 35.000 hasta 2016 (IBGE, 2010). Este contingente es atraído en el período de construcción de la mina, pero cuando esta comienza a funcionar, menos del 10% son asimilados, generando en el municipio una colosal masa de trabajadores desocupados. En informes institucionales, VALE afirma que cerca de 30 mil empleos serán generados en el auge de las obras do S11D, “sin embargo, en el mismo informe consta que en la fase de operación apenas dos mil seiscientos empleos serán permanentes en 2016” (Zonta, 2013). Sobre el volumen de recursos producidos, se afirma que:

Actualmente, Vale realiza, en Carajás, la operación simultánea de cinco minas de hierro a cielo abierto. El complejo es el mayor productor de minas de hierro en el planeta, además de poseer un producto con alto porcentaje de hierro (66,7%) y baja concentración de impurezas.

El S11D proveerá 90 millones de toneladas métricas de minería de hierro por año. Cuando esté en plena capacidad, el proyecto contribuirá a que la producción total de la minería de Vale en Pará alcance 230 millones de toneladas por año. En conjunto con los demás emprendimientos previstos para la región, S11D posicionará el sudeste de Pará en un nivel de importancia equivalente a la del Cuadrilátero Ferrífero, localizado en Minas Gerais (VALE S.A.):

En contraposición con un movimiento lineal, el capitalismo desarrolla una geografía espacial con articulación estrecha entre las nociones de espacio y naturaleza. En su expansión hacia nuevos territorios, elabora formas de interrelación con las poblaciones locales, ya que, entre las necesidades esenciales que mueven la empresa capitalista en dirección a otros lugares, están las de arrear fuerza de trabajo al menor costo posible, ampliar mercados de consumo y explotar materia prima, combinando, en actividades meramente lucrativas, la utilización predatoria de potenciales humanos y naturales (Congilio, 2004).

Rosa Luxemburg (1984: 285) discurre respecto de la expansión del capitalismo sobre otras formaciones sociales en los Estados Unidos y África del Sur. Son relatos aún conexos cuando se describen los procesos actuales en territorios amazónicos y la incesante lucha de la economía campesina y de los pueblos indígenas y ribereños contra la industria extractora del hierro: “El proceso de acumulación tiende siempre a sustituir, donde quiera que sea, la economía natural por la economía mercantil simple y a esta por la economía capitalista, llevando la producción capitalista –como modo único y exclusivo de producción– al dominio en todos los países y ramos productivos.

Saquet (2010: 169) deduce que “existen, cada vez más, múltiples formas de apropiación y dominación en la dinámica territorial. Es posible dominar sin estar presente. La apropiación y la dominación son cada vez más heterogéneas y complejas”. El autor entiende que el modo de producción capitalista se renueva siempre más fuerte en el movimiento de territorialización que produce la inserción de nuevas fuerzas mercantiles al proceso de reproducción ampliada del capital.

Las acciones del Estado en lo que se refiere a las dinámicas que conducen a la expansión capitalista en Brasil, y en especial en esta región amazónica, son determinadas por la división internacional del trabajo; y el lugar ocupado por los países dependientes en el mercado mundial, ante todo, como exportadores de *commodities*. Llamamos la atención sobre tres aspectos en los cuales el Estado se vuelve el principal impulsor del avance capitalista en los rincones amazónicos. En primer lugar, en cuanto a los recursos financieros destinados a impulsar procesos llamados *de desarrollo* y que son utilizados en emprendimientos de infraestructura, concesión de incentivos fiscales, financiamientos a largo plazo, concesión de tierras, entre otros. En segundo, en cuanto a la difusión del marco ideológico necesario para la implantación de las políticas (industriales, económicas, sociales etcétera) que ajustan la economía nacional a las necesidades del mercado

mundial. Este aparece travestido a través de las invocaciones del progreso, el desarrollo y la Modernidad. Por último, destacamos la práctica institucionalizada/banalizadora de la violencia y criminalización contra cualquier forma de oposición a los procesos que implantan o que se han llamado Progreso (= muerte) (Congilio, 2014).

El modelo actual de expansión del capitalismo, en esta región amazónica, combina acciones del Estado en una articulación entre neodesarrollismo (laminación del acero, grandes obras de infraestructura con PAC, alicientes para el crecimiento de grandes empresas nacionales, en especial a de la construcción civil) con reprimarización de la economía (con fuertes incentivos a la exportación de la minería bruta) en busca de superávits en la balanza comercial. Esto propicia una combinación continua de diferentes formas de explotación del trabajo basadas en formas diversificadas de contratación: pocos empleos de organización gerencial con regalías administrativas y jerarquías de cargos y funciones, y una infinidad de trabajadores en situación de precariedad, tercerizados, cuarterizados y, en muchos casos, sometidos a un trabajo análogo al de la esclavitud, sobre todo en la carbonería, cuyo producto se destina a otra actividad ligada a la extracción del hierro.

La principal actividad minera de VALE corresponde a cerca del 30% del volumen del hierro producido en Brasil; en compensación a la caída del precio en el mercado internacional desde 2010, la exportación por Brasil, en marzo de 2014, aumentó a 24,47 millones de toneladas, contra el 22,57 millones de toneladas de marzo del año anterior.⁴ El hierro tiene como producto final el acero, cuya cadena productiva inicial combina la extracción minera con actividades en carbonerías –a partir del bosque nativo o en su sustitución por plantaciones de eucalipto– en la producción de arrabio, otro sector que compone las actividades económicas del complejo Carajás, entre el sudeste paraense y municipios circunvecinos de Maranhão.

El arrabio, obtenido por la fusión de hierro bruto y carbón, es exportado principalmente a Canadá, México, Estados Unidos, Asia y Europa. Las actividades económicas de este sector neoextractivista impactan fuertemente las poblaciones amazónicas como estrategia, no solo para concentrar riquezas, sino también para crear fuerza de trabajo con las características necesarias para sus actividades productivas: por un lado, trabajadores que actúan en las carbonerías (legales e ilegales), en las plantaciones de eu-

4 Disponible en: Portal da Mineração, <http://www.odebraz.com.br/blog/mercado/min%C3%A9rio-de-ferro-exportado-brasil>, último acceso el 18/12/2014.

caliptos, en la deforestación (legal e ilegal), en las siderúrgicas de arrabio, con baja o ninguna calificación profesional y sin tradición de organización sindical. Por otro lado, la extracción de hierro combina características arcaicas y precarizadas con tecnologías de punta y trabajadores con ninguna, media y alta calificación. Se requiere, además, de un intenso apoyo de infraestructuras como red ferroviaria, puertos y carreteras, lo que significa una gran actividad de base estatal dirigida a la construcción civil, con necesidad permanente de fuerza de trabajo apta para esta actividad industrial. Estudios sobre la minería, particularmente la del hierro, bajo el comando de VALE S.A., indican impactos variados; algunos sobre los cuales nos hemos detenido en investigaciones propias y orientaciones académicas:

- *Rurales*, por la expropiación y proletarización de campesinos y comunidades indígenas y ribereñas, ocasionando la desestructuración de aldeas agrarias y de sociabilidades anteriormente establecidas, además de los graves problemas ambientales.
- *Urbanos*, con superpoblación, ocupación de espacios con emprendimientos empresariales (duplicación de las vías de VALE S.A. y especulación inmobiliaria, entre otras) y ocupaciones urbanas que constituyen barrios densamente poblados sin políticas de empleo, salud, vivienda, ocio y educación.
- *Formas de contratación* por la expansión del trabajo precario y del subempleo en varios sectores (producción de bienes y servicios públicos y privados). Del taylorismo al toyotismo (pasando por el trabajo análogo a la esclavitud), son varias las modalidades de trabajo practicadas en la extracción y fundición del hierro, materia prima de la laminación del acero.
- *Políticos*, demarcados por nuevo ordenamiento estatal y la adecuación de las antiguas oligarquías extractivistas al poder establecido por la dinámica actual de la expansión del capitalismo. Aquí también se insertan las luchas sociales y la **búsqueda** permanente de estrategias de los trabajadores en resistencia a la sociabilidad impuesta por el capital.

Sin la pretensión de que, dentro de los límites de un artículo, podamos desarrollar todos estos temas, metodológicamente, tales cuestiones nos indican al menos tres aspectos teóricos para reflexiones a ser profundizadas: primero, los fenómenos de las políticas recientes del Estado y su eficacia esencial para la expansión del capital, lo que reafirma el carácter de clase del Estado capitalista. En el Brasil dependiente, las acciones se articulan a

la dinámica mundial con incentivos a la burguesía exportadora y a sectores industriales, lo que nos indica la fuerte aproximación entre neodesarrollismo y extractivismo exportador.

Para Gudynas (2012), el neoextractivismo se presenta como un crecimiento económico que induce un desarrollo capitalista basado en la apropiación de recursos naturales. Esto se realiza a través de la mediación de un grupo cuya actividad económica se produce a través de la remoción de grandes volúmenes de recursos naturales de una región dada, cuya finalidad es la comercialización en el mercado mundial en estado bruto. El Estado incentiva financieramente, provee el apoyo logístico a través de las gigantescas obras de infraestructura y legitima los emprendimientos empresariales al *mediar* la expropiación con políticas compensatorias que aparecen como redistribución de parte de la renta generada. El carácter desarrollista se da, entonces, por el aporte que el extractivismo provee al crecimiento económico y el protagonismo que confiere al Estado en las actividades económicas y en las políticas sociales. El autor concluye que tales prácticas son propias, especialmente en América Latina, de los gobiernos que se autodesignan progresistas (Gudynas, 2012: 130).

Las reflexiones de Gudynas nos ofrecen pistas para un segundo aspecto teórico: los desdoblamientos en las relaciones sociales de producción, que inciden en la precarización y tercerización del trabajo, la destrucción ambiental y la fragmentación del territorio por los enclaves productivos. Estos argumentos ponen en cuestión las reestructuraciones del capital y la convivencia de diferentes regímenes de acumulación y de formas de explotación del trabajo, tema tratado por Congilio (2004), al discutir, a través de Brasil, la coexistencia de taylorismos, fordismos y toyotismos, en una época en que el llamado modelo japonés fue considerado el hegemónico de una “nueva” racionalidad del trabajo. En la articulación entre neodesarrollismo y reprimarización de la economía se combinan diferentes formas de contratación y explotación del trabajo prestado en servicios directos, tercerizados y análogos al de esclavo.⁵

5 En el período en que se concluye este artículo, nos llega la noticia de que el 22 de diciembre de 2014 “el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, determinó, de manera preliminar, que el Ministerio de Trabajo e Empleo se abstenga de divulgar al público la relación de empleadores descubiertos al someter trabajadores a formas degradantes de trabajo o a condiciones análogas al trabajo esclavo”. Obtenido en <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/>

La extracción de mineros envuelve, además de la poderosa VALE, una gama intensa de inversiones del capital transnacional. En esta actividad conviven procesos de alto desarrollo tecnológico (máquinas computarizadas que excavan y transportan productos mineros en cintas transportadoras aéreas guiadas por comandos electrónicos) con formas rudimentarias de excavación, lavado, carga y transporte; estos, tercerizados. Todo esto implica una gran diversidad de procesos y mantiene estrecha relación con otras áreas de trabajo; las más específicas son la metalurgia, la química, la mecánica, la construcción civil, la electrónica, la informática y el transporte. En el otro extremo de las mismas actividades están los trabajos practicados por el excedente poblacional expulsado o atraído por los emprendimientos: tala legal o clandestina de áreas forestales, carbonerías, estibadores de carga pesada en trabajos por obra, ayudantes generales sin registro en prácticamente todos los sectores mencionados, etcétera.

Por último, la minería en el sudeste paraense nos muestra otro aspecto teórico a ser profundizado, que se refiere a las condiciones y dinámicas de la lucha de clases: por un lado, las reorganizaciones de las políticas locales sometidas a la lógica del Estado nacional; y por otro, la resistencia de los trabajadores debilitada por la ideología, por la criminalización, asesinatos por bandolerismo y coacción de liderazgos, pero buscando siempre nuevas estrategias de enfrentamiento. En la región donde antes los conflictos se configuraban más intensamente en la disputa por la tierra, los embates surgen ahora liderados por el gran capital y su dinámica productiva. Desde la **década de 1980**, innumerables movimientos sociales han librado batallas de vida o muerte contra la explotación de las minas. Existe un conjunto de luchas que, en el presente, buscan articulaciones mutuas: movimientos de los afectados por la minería, de los afectados por los embalses, movimientos indígenas, por la reforma agraria, resistencias indígenas y de obreros en Altamira ante la construcción del embalse de Belo Monte, huelgas urbanas y otras que necesitan ser mejor comprendidas, pero se inscriben, ciertamente, en el escenario de la lucha de clases.

Conclusión

Si Estado burgués y relaciones sociales de producción son marcos teóricos abstractos para abarcar reflexiones sobre la dominación capitalista, se hace necesario conocer los procesos concretos que hablan acerca de las acciones

stf-proibe-ministerio-do-trabalho-de-divulgar-lista-suja-do-trabalho-escravo, última consulta: 6/1/2015.

del Estado en políticas propias que garantizan continuamente el servilismo de los expropiados de los medios de producción frente a los expropiadores.

Las relaciones capitalistas de producción se fundan en la división social del trabajo y requieren de un poder de dominación continua de los propietarios de los medios de producción sobre los no propietarios. Tal poder económico se sustenta políticamente en el aparato institucional-legal de coerción/represión y consenso ideológico, que constituye la instancia estatal. En su forma política, el capital encuentra, en las instancias ideológicas y jurídicas del Estado, las condiciones estratégicas que garantizan la expansión y consolidan la sociabilidad hegemónica del capitalismo sobre las demás formaciones sociales (Poulantzas, 1973).

La convivencia de diferentes modelos de expansión del capitalismo en el sudeste paraense, que tienen como características comunes las acciones inductoras del Estado, se presenta ya bajo un determinado discurso ideológico, ya bajo otro (libre comercio, progreso, desarrollo), y representa solo un pequeño universo del desprecio de las políticas gubernamentales hacia las formas alternativas de existencia que no se pauten por la lógica del lucro, sino que presentan fundamentos sólidos y resultados interesantes en cuanto posibilidades productivas. En consecuencia, se extienden, en el sudeste paraense, barrios inmensos sin puestos de salud, sin escuelas apropiadas, cloacas a cielo abierto con jóvenes a merced del narcotráfico y de la violencia.

Nuevas dinámicas territoriales se inscriben en el espacio regional, en la medida en que crecen el comercio y el número de empresas que se afilian al proceso de urbanización, creando y recreando relaciones de trabajo inscriptas en una correlación de fuerzas favorable a la acumulación y circulación del capital. Las dinámicas territoriales que tienen lugar en el sudeste paraense instigan investigaciones que permitan aprehender las múltiples facetas de un proceso social conflictivo y contradictorio, que está siendo reafirmado y reubicado en nuevas dimensiones para atender a las necesidades productivas actuales del saqueo capitalista.

Las modificaciones constantes en las bases de acumulación exigen caracterizar insistentemente el nexo que se establece entre las políticas en diferentes espacios territoriales, para que se comprenda cómo las relaciones de explotación se reproducen en su totalidad. Desarrollistas o liberales, pero siempre dependientes, las prácticas políticas que acompañan las acciones en el sudeste paraense imprimen el carácter de clase del Estado capitalista, en cumplimiento de su papel histórico: el de constituirse, en nombre de la nación, en el facilitador de los ajustes económicos necesarios

para los patrones de acumulación. Son aspectos que tornan indispensable que haya estudios con criterio sobre las acciones del capital, de los trabajadores, de los movimientos sociales y de sus articulaciones con el Estado.

Bibliografía

- Almeida, Lúcio Flávio R. de, *Ideologia nacional e nacionalismo*. 2ª ed. San Pablo: EDUC, 2014.
- Boito Jr., Armando, *As bases políticas do neodesenvolvimentismo*. San Pablo: Fórum Econômico da FGV, 2012. Disponible en: <http://www.eesp.fgv.br/> (último acceso: 20/5/2013).
- Brasil de Fato. 18 a 24 de diciembre de 2014.
- Cardoso, Fernando Henrique / Faletto, Enzo, *Dependência e subdesenvolvimento na América Latina*. Río de Janeiro: Jorge Zahar, 1977.
- Comissão Pastoral da Terra, *Conflictos en el Campo – Brasil 2013*. [Coord.: Antônio Canuto, Cássia Regina da Silva Luz, Flávio Lazzarini. [Goiânia]: CPT Nacional - Brasil, 2013.
- Congilio, Célia R., *Reestruturação produtiva e luta de classes: impactos político-ideológicos da difusão do modelo japonês no Brasil*. Tesis de Maestría. San Pablo: PUC, 1997.
- , “Mineração, trabalho e conflitos amazônicos no sudeste do Pará”. En: *Revista de Políticas Públicas*. Número especial (julio de 2014). San Luís: EDFUMA.
- Dussel, Enrique, “Europa, modernidade e eurocentrismo”. In: Lander, Edgardo (comp.), *A colonialidade do saber: eurocentrismo e Ciências Sociais. Perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires: CLACSO (Colección Sur Sur), 2005. pp. 55-70.
- Emmi, Marília, *A oligarquia do Tocantins e o domínio dos castanheais*. Belém: UFPA/NAEA, 1999.
- Filgueiras, Luiz, “A natureza e os limites do desenvolvimentismo no capitalismo dependente brasileiro”. En: *Margem Esquerda* 23 (2014), pp. 32-38.
- Gudynas, Eduardo, “O novo extrativismo progressista na América do Sul: teses sobre um velho problema sob as novas expressões”. En: Léna, P. / Pinheiro do Nascimento, E. (comps.), *Enfrentando os limites do crescimento: sustentabilidade, decrescimento e prosperidade*. Río de Janeiro: Garamond e IRD, 2012.
- Gunder, André, “Desenvolvimento do subdesenvolvimento Latino-Americano”. En: Pereira, Luiz (comp.), *Urbanização e subdesenvolvimento*. Río de Janeiro: Zahar Editores, 1976.

- Hilderfing, Rudolf, *O capital financeiro*. San Pablo: Nova Cultural, 1985.
- Ikeda, Joyce C.O., *Expansão do capital, luta de classes e poder local na Amazônia: um estudo sobre a composição do poder político no município de Marabá/Pará (1985-2012)*. Tesis de maestría. Pará: UFPA, 2014.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo brasileiro de 2010. Disponible en: <http://censo2010.ibge.gov.br/> (último acceso: 5/12/2014).
- Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Disponible en: <https://www.inpa.gov.br>. (último acceso: 15/12/2014).
- Luxemburg, Rosa, *A acumulação de capital*. San Pablo: Nova Cultural, 1984.
- Marini, Ruy Mauro, *Dialética da Dependência*. San Pablo: Expressão Popular, 2005.
- Nascimento, Nadia Do S. N., *A Amazônia e desenvolvimento capitalista: elementos para uma compreensão da “questão social” na região*. Tesis de doctorado presentada ante el Programa de Postgraduación de la Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.
- Petras, James, *Ensaio contra a ordem*. San Pablo: Scritta, 1995.
- Poulantzas, Nicos, *Poder político e classes sociais*. San Pablo: Martins Fontes, 1973.
- Saes, Décio, *Estado e democracia: ensaios teóricos*. Campinas: UNICAMP/IFCH, 1998.
- Santos, Theotônio dos, *A teoria da dependência*. Río de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
- , *A Teoria da Dependência: um balanço histórico e teórico*. Disponible en: <http://www.reggen.org.br/midia/documentos/ateoriadadependencia.pdf>. (último acceso: 12/11/2014).
- Saquet, Marco Aurélio, *Abordagens e concepções de território*. San Pablo: Expressão Popular, 2010.
- Trotsky, León, *História da Revolução Russa: a queda do Tzarism..* 3ª ed. Vol. 1. Río de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
- VALE S.A. *Projeto Ferro Carajás S11D: um novo impulso ao desenvolvimento sustentável do Brasil*. Disponible en : <http://www.vale.com/PT/initiatives/innovation/s11d/Documents/book-s11d-2013-pt.pdf>. (último acceso: 20/12/2013).
- Zonta, Márcio, “Impactos da mineração: Canaã dos Carajás sobreviverá?”. En: *Justiça nos Trilhos* (27/10/2013).

Fuentes digitales

<http://www.justicanostrilhos.org/Canaa-dos-Carajas-sobrevivera> (último acceso: 27/10/2014).

<http://www.funai.gov.br/index.php/apresentacao-baixo-tocantins> (último acceso: 09/12/2014).

<http://www.odebraz.com.br/blog/mercado/min%C3%A9rio-de-ferro-exportado-brasil> (último acceso: 18/12/2014).

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/stf-proibe-ministerio-do-trabalho-de-divulgar-lista-suja-do-trabalho-escravo> (último acceso: 06/01/2015).

Criminalización de la pobreza, encarcelamiento en masa y represión social en el Brasil del neodesarrollismo. ¿Qué hay de nuevo?*

Camila Marcondes Massaro

La prisión como principal forma de castigo es contemporánea del capitalismo como modo de producción hegemónico. Desde entonces, aunque la privación de la libertad haya variado a través de modelos que correspondían a las necesidades vigentes en cada período histórico, una cosa es cierta: la razón de ser de los sistemas carcelarios está significativamente conectada con el castigo de la parcela de la clase trabajadora más precarizada por el capitalismo.

En el momento actual, no es diferente. Si a partir de la implementación de las políticas neoliberales asistimos a un retroceso de las conquistas anteriores de la clase trabajadora, principalmente en lo que se refiere a las garantías sociales y laborales, el período actual —llamado neodesarrollista— no parece traer nada más que un parco y paliativo alivio —a lo sumo— a las parcelas más alcanzadas por el dismantelamiento del Estado de Bienestar Social, o por alguna sombra de él, en el caso de América Latina.

Junto al estímulo a la precarización de las condiciones de vida y trabajo de la mayor parte de la población de esos países, está el aumento de

* “Criminalização da pobreza, encarceramento em massa e repressão social no Brasil do neodesenvolvimentismo: o que há de novo?”. Trad. de Silvia Nora Labado.

la represión a través de la criminalización tanto de la pobreza cuanto de los movimientos sociales, siendo el encarcelamiento en masa una de las principales políticas públicas para millares de ciudadanas y ciudadanos expoliados de la distribución de la riqueza socialmente producida.

En este contexto, el presente artículo discute en qué medida la política de encarcelamiento en masa –que en Brasil llega junto con las políticas neoliberales en la década de 1990– permanece como la cuestión central en los gobiernos denominados neodesarrollistas comandados por el Partido de los Trabajadores desde 2003 hasta 2016.

La clave para entender el inicio de la institución carcelaria está en el proceso de acumulación originaria del capital, basado esencialmente en el doble fenómeno de transformar los medios de producción en capital y al productor directo en proletario libre; este último es el aspecto esencial para el análisis del nacimiento de la prisión moderna, pues es sobre esta parcela de la población que recaerán las medidas punitivas (Melossi/Pavarini, 2010).

El principal blanco del control estatal de la fuerza de trabajo necesaria para la demanda de las manufacturas era la parcela de la población que, de algún modo, era dependiente o estaba bajo la vigilancia del Estado: mendigos, prostitutas, huérfanos; esto es: los estratos más pobres de la sociedad.

No fue sin resistencia que esa nueva forma de ver el mundo fue acogida por los millares de trabajadores campesinos expulsados de sus tierras durante el proceso de acumulación originaria. Según Guimarães (2007: 121), a partir del establecimiento de cercos, las ciudades pasaron a contar con “[...] un ejército de desocupados que insistían en no adherirse a las nuevas normas del sistema”, obteniendo como respuesta medidas enérgicas, basadas en acciones de políticas criminales, para empeorar aún más sus ya precarias condiciones de vida.

Es en ese contexto que nacen las primeras Casas de Corrección, instituciones que dan origen al sistema carcelario moderno. La primera Casa de Corrección surge en Inglaterra a inicios de la década de 1550, y ya en el final del siglo XVI, se propagan por Europa establecimientos similares cuyo “[...] objetivo principal era transformar la fuerza de trabajo de los indeseables, tornándola socialmente útil. A través del trabajo forzado dentro de la institución, los prisioneros adquirirían los hábitos industriales y, al mismo tiempo, un entrenamiento profesional” (Rusche/Kirchheier, 2008: 69).

Dada la rentabilidad de la explotación de la fuerza de trabajo de los prisioneros, algunas penas fueron gradualmente sustituidas por la prisión,

así como las sentencias de castigo corporal empleaban el trabajo forzado u otros métodos que causaran sufrimiento sin producir heridas que comprometieran el desempeño del condenado.

Según Melossi y Pavarini (2010), en Holanda alcanza esa institución su forma más desarrollada: la *Rasphui* creada a finales de la década de 1590, un establecimiento de trabajos forzados que debería autogestionarse mediante actividades realizadas por los internos y que, de acuerdo con Fernando Salla (1991: 50), detentaba de modo incipiente los principios que van a regir las prisiones modernas: “El trabajo era obligatorio y hecho en común; las celdas individuales eran usadas solamente como castigo suplementario. Existía un sistema de obligaciones y prohibiciones, una vigilancia continua, horarios estrictos”, introyectando en los presos la disciplina exigida en el modo de producción emergente.

Las crueles condiciones dentro de esos establecimientos contribuyeron a la conformación social, en vista de que, por malas que fuesen las condiciones ofrecidas en el mercado de trabajo, eran mejores que las encontradas en las Casas de Corrección.¹

A finales del siglo XVIII, la cárcel ya es la principal forma de castigo basada en el principio de retribución equivalente, en el cual la retribución por el delito cometido, esto es, la pena debe corresponder a un *quantum* de tiempo en privación de libertad, lo que refleja, conforme analiza Michel Foucault (2007), los cambios sociales, económicos y políticos del período; principalmente: crecimiento demográfico, multiplicación de las propiedades y riquezas privadas, disminución de los crímenes de sangre y aumento de los crímenes contra la propiedad que demanda el aumento de la seguridad en relación con la propiedad privada, culminando en el aumento de la vigilancia y del control del cuerpo social en forma diferente de aquellas que se realizaban en el período anterior.

Tratándose de las funciones declaradas y de las funciones ocultas de las penas en ese momento, Guimarães (2007) infiere que, mientras el discurso oficial defendía el encarcelamiento en defensa de la propiedad individual, el fin pretendido era tratar la criminalidad de forma selectiva, con vistas a mantener la sumisión de la clase trabajadora.

1 Este entendimiento es pautado según el principio de La *less eligibility*, es decir: el principio de que las condiciones de vida dentro de las instituciones carcelarias deben ser inferiores a las condiciones de vida de las parcelas más pauperizadas de los trabajadores libres. Tal principio se configura como pilar del sistema carcelario hasta la actualidad.

Una de las propuestas penales más conocidas de este período es el *Panopticon*.² Estas instituciones servirían también para disciplinar el cuerpo, y solamente pueden ser comprendidas si se las considera parte de la organización del trabajo en el sistema capitalista en el período de la Revolución Industrial. Aquí, máquina y cuerpo son complementarios.

La propuesta original del *Panopticon*, basada en el aislamiento absoluto, iba en una dirección contraria a la de las necesidades fabriles, al abrir espacio para las propuestas reformadoras. En este sentido, al comienzo del siglo XIX, diversos países europeos buscan reformar sus sistemas carcelarios y, según ese espíritu, el debate gana un nuevo elemento: la difusión de los dos sistemas penitenciarios desarrollados en los EE.UU.: el de Filadelfia –que aplicaba el aislamiento celular– y el de Auburn –basado en el trabajo colectivo diurno en silencio y el aislamiento nocturno.

Sobre el sistema de Filadelfia, Isabella Kinkins (2013: 79) argumenta que

el sistema es un modelo de las relaciones sociales burguesas: el aislamiento del detenido explicita el deseo burgués del obrero no organizado; la disciplina y la falta de competencia ofrecen al empresario una situación ideal de disponibilidad de la fuerza de trabajo, la educación del interno apunta a su sujeción a la autoridad y la dependencia en relación con el propietario

Luego se hicieron visibles los límites del aislamiento individual, y el sistema se reveló contraproducente respecto de las necesidades de aquel momento histórico, en vista de que, en el confinamiento celular, el trabajo se restringía a las actividades que podían ser desarrolladas en las celdas, individualmente.

La primera experiencia de una organización racional del trabajo en la institución penal, capaz de superar los problemas enfrentados en el modelo Filadelfia, fue realizada a inicios de la década de 1820 en Auburn, cuyo sistema consistía en el trabajo colectivo en silencio durante el día y el aislamiento celular nocturno, permitiendo la eficiencia industrial.

2 Idealizado por el inglés Jeremy Bentham en cuanto “[...] espacio cerrado, recortado, vigilado en todos sus puntos, donde los individuos están insertos en un lugar fijo, donde los menores movimientos son controlados, donde todos los acontecimientos son registrados, donde un trabajo interrumpido de escritura liga al centro con la periferia, donde el poder es ejercido sin división, según una figura jerárquica continua, donde cada individuo es constantemente localizado, examinado y distribuido entre los vivos, los enfermos y los muertos [...]” (Foucault, 2007: 163).

Según Rusche y Kirchheimer (2008), rápidamente este sistema mostró su potencial lucrativo; primero, con la reducción de los costos de manutención de la prisión y, posteriormente, presentando un excedente financiero, es decir, ganancia. Uno de los principales cambios en términos disciplinares fue la sustitución de las amenazas de castigo por un sistema de privilegios y recompensas para estimular a los presos, lo que, según Foucault (2007), contribuyó a la formación de individuos sumisos a través del pleno empleo del tiempo.³

A fines del siglo XIX, el valor de la fuerza de trabajo era visto desde una nueva perspectiva, demandando su máxima utilización, haciendo aflorar la demanda de una reforma en la política criminal, en la que los métodos punitivos tuvieran en vista el futuro de los presos por las vías de la rehabilitación y la prevención.

Ya a comienzos del siglo XX, surgen las ideas modernas de reforma penitenciaria a partir de las cuales el énfasis está puesto en el tratamiento del crimen como una cuestión médico-psicológica, es decir, basada en la posibilidad de curar al preso o confinarlo en el aislamiento en casos considerados irrecuperables.

Sobre las propuestas resocializadoras, Rusche y Kirchheimer (2008) afirman que la visión moderna del sistema penal no ve posibilidad de éxito en la reinserción del preso después del cumplimiento de la pena, debido a su fragilidad en cuanto trabajador no preparado. Esa perspectiva atestigua el fracaso de la prisión en la tarea de reintegración, revelando una gran contradicción en el propio concepto de rehabilitación propagado por los reformadores modernos.

En la misma línea, Guimarães (2007) señala que una gran laguna, en relación con las penas con propósito resocializador, está en el hecho de que la neutralización se da de forma temporaria, devolviendo al criminal a la misma convivencia social después de haber sido sometido a todas las perturbaciones típicas de la prisión, hecho que explica los altos índices de reincidencia. Esto pone en claro que el papel del Derecho Penal está orientado hacia las consecuencias y no a las causas que llevan a cometer crímenes.

3 La rutina característica de una institución total, entendida de acuerdo con la elaboración de Erving Goffman (1974: 11): “[...] local de residencia y trabajo en la cual un gran número de individuos en situación similar, separados de la sociedad más amplia durante un considerable período de tiempo, llevan una vida cerrada y formalmente administrada”.

Además de esto, siendo el valor de los crímenes y de las penas reducido a la forma más simple del trabajo asalariado –el equivalente en tiempo–, la privación de la libertad aparece como un modelo de pena democrático, al que todos están sujetos.

No podemos aún dejar de considerar que, con la consolidación y la expansión del sistema del capital, basado en la subordinación del trabajo al capital, la realización de la igualdad sustantiva no es posible (Mészáros, 2009). No es diferente lo que sucede con el sistema penal. Según señalan Melossi y Pavarini (2010), en el plano concreto, las contradicciones entre la forma jurídica y la ejecución de la pena permanecen reflejando la contradicción central del mundo burgués. En el transcurso del siglo XX, dadas las graves consecuencias derivadas del liberalismo, el Estado fue convocado a intervenir para suavizar esos estragos, reduciendo el abismo entre la burguesía y la clase trabajadora. Este es el período del *Welfare State*, en el cual “[...] a todo ciudadano se le garantiza (en teoría) el derecho –y no la caridad– al pleno empleo, al salario mínimo, a la alimentación, a la salud, a la educación; en fin, derechos básicos que garanticen una existencia digna” (Guimarães, 2007: 192-193).

En la esfera penal, este período marca la legitimación del principio resocializador en el exacto momento en que el Estado precisa tener mecanismos de conformación social de violencia menos explícita después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La no disminución de los índices de criminalidad y reincidencia puso en jaque la eficacia de ese modelo. Con todo, los ideólogos de las propuestas resocializadoras atribuyen las fallas al modo en que tales propuestas están siendo ejecutadas en las instituciones carcelarias. Además de eso, destacan las dificultades de resocialización, dada la falta de inversión por parte del Estado y las condiciones en que los presos son recibidos después de haber cumplido las penas. Además:

Había una necesidad impostergable, más que en los períodos anteriores, de desplazar las causas de los disturbios sociales [...] en dirección a causas individuales, afectadas a las capas cuyos derechos básicos hace ya mucho tiempo que estaban siendo negados, sin que para ello se utilizaran los métodos pretéritos de represión explícita con vistas a contener las molestias (Guimarães, 2007: 210).

Se realiza, así, la sustitución de la violencia estructural –que funda y mantiene el modo de producción capitalista– por la violencia individual a ser combatida.

Teniendo como blanco público principal a los miembros pertenecientes a las capas más pauperizadas de la población, que no se insertaban ni en la esfera productiva ni en el consumo de masas, es cada vez más difícil ocultar el uso de la privación de la libertad como medio de conformación social impuesta por una clase social a otra, obligando a la clase trabajadora a aceptar las enormes diferencias sociales existentes, siendo entendido el inconformismo como un mal individual a ser tratado por el sistema penal, camuflando la estrecha vinculación entre violencia estructural y violencia criminal.

La crisis del *Welfare State* marca el inicio de una transformación más en el modo de producción capitalista y también del sistema de castigo que perdura hasta nuestros días. En términos políticos y económicos, este momento está representado por la adopción de políticas de cuño neoliberal que llegan a los países de la periferia del capitalismo en la década de 1990, después del “Consenso de Washington”.

Para que tal proyecto pudiera concretarse, además del proceso de reestructuración de la producción, fueron puestos en práctica cambios profundos en el ámbito social y también en la subjetividad de cada individuo. Una de esas transformaciones se caracteriza por reformas en la penalidad,⁴ que para adecuarse a los requisitos de control social exigidos por el neoliberalismo, culminan en el paso del Estado social al Estado Penal, es decir, a un “más Estado policial y penitenciario”, en sustitución de un “menos Estado económico y social”, bajo el cual los pobres son el blanco privilegiado.

Analizando la realidad norteamericana, “Loïc Wacquant (2001) afirma que uno de los argumentos centrales para justificar el endurecimiento del control en relación con aquellos cuyo principal crimen es ser pobre en los EE.UU., es que las políticas de bienestar social contribuían esencialmente a perpetuar las condiciones de pobreza de los más necesitados en la medida en que inducirían a la inactividad y acomodarían a sus beneficiarios.”⁵

4 Conjunto de las prácticas, instituciones y discursos relacionados con la pena y, sobre todo, con la pena criminal, según nota del traductor al portugués de Wacquant (2001: 7).

5 El mismo discurso es percibido a diario en el Brasil actual y se configura como la mayor crítica de derecha a los parcos lenitivos sociales permitidos por los gobiernos comandados por el Partido de los Trabajadores desde 2003 a la actualidad; principalmente, a través del programa Bolsa Familia.

Para el autor, a través de esa reestructuración, los EE.UU. no interfieren en el plano social para minimizar las desigualdades sociales, sino para neutralizar las consecuencias de los problemas cotidianos. Prueba de esa política es la reforma de la asistencia social llevada a cabo en 1996, con la conversión del *Welfare* en *Workfare*,⁶ en la tentativa de inculcar una ética del llamado trabajo flexible principalmente en las capas más afectadas por la reestructuración del Estado y de la producción. Sumado a esto, el endurecimiento penal trae el riesgo inminente de encarcelamiento de aquellos que no se adecuen al nuevo contexto.⁷

Para Guimarães (2007), la ideología que acompaña las políticas neoliberales opera una alteración del comportamiento del todo social, modificando incluso las formas de control, que se tornan esencialmente represivas y punitivas, representadas por la construcción de nuevas unidades carcelarias y por la imponente inversión estatal en políticas que garantizarían la “ley y el orden”; o sea: en el aparato represivo.

Generadas en los EE.UU., ambas teorías dan soporte al proceso de criminalización de la miseria: la “teoría del vidrio roto” a comienzos de la década de 1980 y la “tolerancia cero” ya en la de 1990. Según analiza Loïc Wacquant (2001: 25 y s.), la primera “[...] sostiene que luchando paso a paso contra los pequeños disturbios cotidianos se hará que retrocedan las grandes patologías criminales” y la segunda promueve la “[...] aplicación inflexible de la ley sobre delitos menores”, sirviendo como herramienta de legitimación del control de los pobres por la actuación policial y judicial. Percibimos que es a partir de los blancos de esas dos teorías que se sustenta la política del encarcelamiento en masa: diversos “disturbios cotidianos” y la “aplicación inflexible de la ley para los delitos menores” derivan en la

6 Caracterizado por la vinculación entre la participación del ciudadano en algún programa de asistencia social y la obligatoriedad de la aceptación de un puesto de trabajo, cualquiera sea el que se ofrezca, bajo pena de perder los beneficios sociales.

7 “La *Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act* [PRWORA] entró en vigor en julio de 1997, pero recién comenzó a ejercer plenamente sus efectos a partir del otoño de 2000, cuando el período límite de ayuda de cinco años fue alcanzado por los beneficiarios más carenciados, muchos de los cuales se vieron privados de todo y cualquier apoyo” (Wacquant, 2007: 167).

sanción, con privación de la libertad, impuesta a un número infinitamente mayor de individuos que en los momentos anteriores.⁸

La individualización de la culpa y del fracaso es un rasgo del sistema del capital. Jalonando la argumentación que justifica la selección del público-blanco a ser criminalizado, está la idea de que las condiciones de pobreza guardan relación con las decisiones, capacidades y desarrollos individuales; o sea: es la personalidad la que determina las posibilidades de éxito individual, cabiendo al Estado reprimir las actitudes derivadas de la situación de miseria y desamparo social, como crímenes de desviación del carácter, sin preocuparse por identificar sus causas.

Estamos de acuerdo con Wacquant (2001) en que tales cuestiones asumen contornos aún más dramáticos en países en los cuales hay una abismal desigualdad social y de distribución de la renta, como Brasil, además del factor histórico de que no hayamos experimentado las políticas del *Welfare State*. Sumado a esto, tenemos los obstáculos derivados del tráfico de armas y estupefacientes, que, además de difundir el miedo y el crimen, terminó convirtiéndose en una posibilidad de ganancia para hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos de las capas más afectadas por la crisis estructural.

Además de esos factores, no podemos dejar de lado “[...] el recorte de la jerarquía de clases y de la estratificación etnorracial y la *discriminación basada en el color* [...]” (ibid.: 9; bastardillas del autor), elementos que también están presentes en la distinción por género:⁹ en el caso de las

8 Conforme a la 11ª edición de la a 11ª edição da *World Prison Population List*, coordinada por Roy Walmsley (2016) y divulgada por el *International Centre for Prison Studies* (ICPS), en colaboración con la *University of Essex* en febrero de 2016, la población mundial en instituciones penales estaba próxima a llegar a los 11 millones, incluidas las llamadas “detenciones administrativas” existentes en China y en Corea del Norte, llegando a 144 presos por cada 100 mil habitantes del mundo.

9 Para el análisis de este complejo, tomamos como referencia las enseñanzas de Heleieth Saffioti (1976), especialmente en cuanto a entender que las cuestiones referentes a la mujer solo pueden ser entendidas junto con las cuestiones de raza y clase, formando un nudo ontológico.

prisiones, son las mujeres pobres y que se consideran negras y pardas las que componen la mayoría de la población carcelaria femenina en Brasil.¹⁰

Para el autor, el desarrollo del llamado Estado penal, a fin de responder a los desdoblamientos sociales de las políticas neoliberales –desregulación de la economía, del trabajo asalariado y pauperización de la clase trabajadora– significa entonces la imposición de una “dictadura sobre los pobres” por dos mecanismos principales: el encarcelamiento en masa y el control a través de auxilios sociales.¹¹

El símbolo de esa nueva política de control son los EE.UU. que concentran la mayor población carcelaria del mundo –con más de dos millones y 200 mil personas presas hasta 2013 (ICPS, 2016)– y cuyos presos representan las desigualdades y jerarquizaciones de clase, género y raza reproducidas en el país, pues los presos son mayoritariamente hombres negros y jóvenes, en tanto las mujeres representan la mayoría de las personas dependientes de auxilio social. Además, los costos de la política de encarcelamiento en masa son altos y, buscando eludir esa situación, los gobiernos adoptan medidas para recortar los gastos.

Los efectos de esa política no podrían ser otros: superpoblación de los establecimientos carcelarios y la consecuente precarización de las condiciones de vida durante el cumplimiento de la pena, o incluso en la espera del juicio, traducidas por la falta de espacio, deterioro en la ya precaria calidad de alimentación y salud, dificultad de acceso a la asistencia jurídica, aumento de la violencia entre los presos y hacia ellos. Situación bajo la cual, para Wacquant, ni la expansión del sistema penitenciario ni su modernización podrán disminuir la incapacidad innata de la institución carcelaria para contener la criminalidad.¹²

10 Según datos del Ministerio de Justicia, en junio de 2014 Brasil tenía 37.380 mujeres presas, de las cuales el 68% se consideraban negras (Infopen, 2015a).

11 Aunque los análisis de Wacquant (2001; 2007) se refieran a las políticas de criminalización de la pobreza y encarcelamiento en masa creadas y aplicadas en los EE.UU., el autor también afirma que ellas fueron ampliamente difundidas e incorporadas por los países europeos, como Francia e Inglaterra, y latinoamericanos, como Brasil, adaptadas a las especificidades locales. Así, entendemos que es perfectamente posible analizar este proceso como una tendencia global.

12 Sobre la expansión del sistema penitenciario en Brasil, datos del Ministerio de Justicia registran que, en junio de 2014, había 1.424 unidades carcelarias en el país

La aplicación de esas políticas aumentó exponencialmente el número de personas detenidas de manera abusiva e inútil, principalmente provenientes de la clase trabajadora de los barrios periféricos, y por infracción a las leyes de drogas. Según infiere Maria Orlanda Pinassi (2009: 93), son esos miles de seres humanos los que “[...] durante la crisis estructural, el capital expulsa por la puerta delantera y hace entrar por la trasera, bajo las peores y más precarizadas condiciones posibles”, no solo de empleo, sino también retirando a esas personas de la vista de la sociedad, aglomerándolas en las unidades carcelarias.

Vemos, pues, que bajo el imperativo del neoliberalismo, en cuanto al aspecto social y de garantía de los derechos históricamente conquistados, el Estado es mínimo. Por otro lado, tratándose de la esfera punitiva y del Derecho Penal, el Estado es máximo. Más allá de eso, para justificar y buscar la legitimación social en relación con la represión, el aparato ideológico vigente se empeña en afirmar que el origen del crimen está esencialmente en el propio criminal. Así, millares de ciudadanos son responsabilizados individualmente y encarcelados y, dentro de las prisiones, se tornan fuente de lucro en diversos sentidos: en la administración y control de las unidades, en los aparatos de seguridad, en la tercerización de actividades básicas, como cocina y vigilancia, más allá de la superexplotación del trabajo penal.

Para concretar este proceso, el estado desvía presupuestos destinados a la asistencia social y también las cantidades que servirían para programas de resocialización y reinserción de los liberados para aumentar la capacidad del sistema carcelario transformando la guerra contra la pobreza en una guerra contra los pobres, como afirma Wacquant (2007).¹³ En el caso brasileño, ese proceso asume contornos aún más preocupantes si se consideran las condiciones degradantes de las instituciones carcelarias, que se asemejan a “[...] *campos de concentración para pobres*, o a empresas públicas de depósito industrial de los desechos sociales, más que a instituciones judiciales al servicio de alguna función penalógica” (Wacquant, 2001: 11; bastardillas del autor).

(Infopen, 2015b).

13 Según datos del Ministerio de Justicia, en diciembre de 2014, el presupuesto asignado al Fondo Penitenciario (Funpen) fue de R\$335.467.599,00, de los cuales R\$272.489.000,00, más del 81%, estaban destinados a la reestructuración y modernización del sistema criminal y penitenciario (Depen, 2016).

Las crisis cíclicas componen el funcionamiento del sistema sociometabólico del capital. Las consecuencias nefastas del llamado proceso de globalización no tardan en aparecer. En poco más de una década, las políticas neoliberales profundizaron el abismo social estructurante de la sociedad brasileña, que inicia el siglo XXI con niveles agigantados de pobreza.

Es en ese contexto que el Partido de los Trabajadores vence las elecciones presidenciales en 2002, inaugurando la fase conocida como neodesarrollista, es decir, nuevamente un momento en que el Estado está llamado a intervenir en la economía. Ahora ya no busca la autonomía y el desarrollo nacional, sino fundamentalmente para garantizar el desarrollo del capitalismo global y financierizado en el momento de cierre de la *crisis estructural del capital*.¹⁴ Por la vía social, el neodesarrollismo se configura como una política que busca suavizar los prejuicios sociales derivados del neoliberalismo de forma mucho más mezquina que en el período del *Welfare State*, principalmente a través de programas de transferencia de renta y de inserción social de las capas más castigadas de la clase trabajadora, como por los programas de cuotas de acceso a la enseñanza superior y al funcionariado público.

Entretanto, por más que tales programas tengan un carácter positivo, principalmente si los consideramos en el plano individual, no podemos dejar de señalar sus límites, pues tienen en lo esencial un carácter más paliativo que de cambio efectivamente estructural.

En este contexto, sin embargo, una cosa es cierta: si los programas sociales de los gobiernos del PT contribuyen a aquietar los ánimos sociales, la intervención del Estado en la esfera penal viene mostrándose cada vez más fuerte y necesaria para la sustentación del capitalismo a medida que se agudizan las contradicciones estructurales del sistema.

Uno de los principales aspectos de ese proceso es la constatación de la hipertrofia carcelaria en Brasil. Los llamados gobiernos neodesarrollistas no cesan el proceso de encarcelamiento en masa que irrumpe en Brasil con el neoliberalismo de la década de 1990; al contrario.

14 Según es definida por István Mészáros (2009; 2011).

En diciembre de 1990,¹⁵ Brasil tenía 90 mil personas presas. En junio de 2002,¹⁶ ese número escala a 239.300 presos. En diciembre de 2006,¹⁷ el contingente llegaba a 401.200 y, en junio de 2014,¹⁸ Brasil registraba 607.731 personas presas, alcanzando el estatus del 4° lugar en la población carcelaria, quedando atrás solamente de EE.UU, China y Rusia (ICPS, 2016).

En términos estructurales, el sistema carcelario brasileño poseía, en junio de 2014, 376.669 lugares, con una tasa de ocupación superior al 160 % (Infopen, 2015b). Pensando en el encarcelamiento masivo, entendemos que la cuestión de la superpoblación es de extrema importancia, en vista de que hay una inversión ideológica en la argumentación: no se habla del exceso de personas castigadas con penas de prisión como del déficit de lugares. Así, son construidos más presidios y más personas son encarceladas, justificando la construcción de más presidios y la prisión de más personas, en un círculo creciente que parece no tener fin.

Más allá de eso, la superpoblación, sumada a la desatención del poder público en relación con la situación del creciente degradación de las unidades carcelarias, contribuye sobremano a agravar el cuadro de menosprecio de los derechos humanos y de los derechos específicos de los presos, incluso aquellos derechos ratificados por convenciones y documentos elaborados por mecanismos internacionales de los que es signatario Brasil.

Específicamente sobre el Brasil contemporáneo, Guimarães (2007) destaca que, aunque la utilización de la cárcel en la contención social no sea un fenómeno nuevo, la novedad está en la creciente apelación a la industria del control del crimen a través de la tercerización de los servicios de alimentación, salud, trabajo y educación para los presos, además de la construcción, administración y manutención de unidades carcelarias. En el límite, lo que está en juego es la privatización del sistema carcelario,

15 Este es el dato de referencia más antiguo brindado por el sistema de informaciones penitenciarias del Ministerio de Justicia (Infopen, 2015b).

16 Último año del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Los datos de diciembre no están disponibles.

17 Final del primer mandato de Lula (PT).

18 Datos más recientes disponibles.

propuesta ampliamente apoyada por los medios de comunicación y por algunos así llamados especialistas.¹⁹

En la actualidad brasileña, la privatización total de un presidio tiene sus primeras experiencias en la década actual; la primera unidad íntegramente construida y gestionada por la iniciativa privada es inaugurada en 2013 en el Estado de Minas Gerais, a través de compañías público-privadas (PPP):

En este sentido, aunque sea una política de Estado, el encarcelamiento en masa parece ocurrir independientemente de la estructura penal existente en teniendo en vista que los índices de sobrepoblación carcelaria no bajan. En relación con esta cuestión, cada localidad busca mitigar el problema con los recursos que posee. En tanto algunas ciudades norteamericanas instalan prisiones flotantes o tiendas en el desierto (Wacquant, 2007), en Brasil, más allá de las condiciones degradantes de las Cárcenes Públicas y delegaciones, tenemos casos de instalación de *containers* que sirven de alojamiento complementario en penitenciarías superpobladas (Conjur 2009).

La reciente coyuntura política nacional vuelve aún más relevante la discusión acerca de las políticas represivas principalmente en dos cuestiones: en el combate de los crímenes relacionados con las drogas ilícitas y en la represión de los movimientos sociales.

La Ley Federal n° 11.343 del 23 de agosto de 2006 (Brasil, 2006), conocida como ley de drogas, agudiza el enfrentamiento penal de las cuestiones sociales con las que se vinculan los crímenes relacionados con las drogas. Esa ley fue sancionada tres meses después de los enfrentamientos entre la facción que controla la producción y distribución de las drogas en el país, el Primer Comando de la Capital (PCC) y la policía militar del Estado de San Pablo; enfrentamiento que dejó 565 muertos entre los días 12 y 26 de mayo de 2006 (Ponte, 2015).

19 Un ejemplo de esa cuestión pudo ser visto recientemente, cuando los graves problemas ocurridos en el complejo penitenciario de Pedrinhas/MA despertaron diversas discusiones en los medios de comunicación sobre el sistema carcelario. Uno de esos debates fue realizado en el programa Canal Livre con el tema “Análisis del Sistema Presidiario” (2014), en el cual especialistas que afirmaban la ineficiencia del Estado en la gestión carcelaria mencionaron las propuestas de tercerización como posible solución.

En 2008 es implementado el proyecto de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas cariocas. Tal proyecto consiste en la ocupación de las favelas por el ejército nacional, con el propósito declarado de combatir el crimen organizado controlado por los grupos que comandaban el tráfico de drogas en Río de Janeiro. Desde entonces, más de 40 unidades fueron instaladas sin que hayamos tenido noticias de que el tráfico de drogas ha dejado de existir. Por el contrario, las informaciones señalan la instauración de milicias y la brutal represión a la población –ya tan castigada socialmente– de las favelas cariocas, cuyo desenlace emblemático fue el asesinato del albañil Amarildo en julio de 2013.

De acuerdo con los datos más recientes difundidos (Infopen, 2015b), en junio de 2014 cerca del 27 % de las personas estaban presas por infracción contra algún artículo relacionado con la ley de drogas.²⁰ Si consideramos los tipos de crímenes por género, 25 % de los varones están presos por crímenes que se relacionan con las drogas, en tanto 64 % de las mujeres lo están por ese motivo, lo que demuestra que no podemos desatar el nudo “género, raza y clase” tampoco en los análisis de la cuestión penal. También es en el Brasil del neodesarrollismo donde vuelven a producirse manifestaciones de masas en el país. Once años después del movimiento “Cara Pintada” –que en 1992 presionó al congreso nacional para votar el *impeachment* de Fernando Collor–, un movimiento formado por jóvenes se dirige a las calles para reivindicar el derecho a la ciudad por el “Pase Libre”. A medida que gana adhesión masiva y, al organizarse de un modo *sui generis*, diferente de los movimientos sociales tradicionales, en pocos días sus manifestaciones consiguen la represión que hasta entonces –en nuestra reciente democracia– solo la periferia conocía.

Las “Jornadas de Junio de 2013”,²¹ como se las conoce, inauguran un nuevo momento de la represión del Estado brasileño que se agudiza en las manifestaciones contra los grandes eventos con sede en Brasil –el mundial de fútbol en 2014 y las olimpiadas en 2016– y contra las grandes obras de los gobiernos del PT, principalmente las usinas hidroeléctricas de Belo Monte (PA) y Jirau (RO). Como ápice de la represión a las manifestaciones de junio de 2013, tenemos la prisión del joven negro Rafael Braga, el

20 Según se explicita en el informe de Infopen (2015b), varios Estados no informaron los motivos de los encarcelamientos.

21 Cf. Sampaio Jr., 2014; Gonçalves, 2014.

único condenado en esa ocasión por llevar un paquete de desinfectantes.²² Por fin, en medio del torbellino político que vive Brasil en este primer semestre de 2016, el gobierno federal sancionó la Ley n° 13.260, del 16 de marzo de 2016 (Brasil, 2016), conocida como Ley Antiterrorismo, que, aun cuando en su artículo 2°, parágrafo 2, señala que “Lo dispuesto en este artículo no se aplica a la conducta individual o colectiva de personas en manifestaciones políticas, movimientos sociales, sindicales, religiosos, de clase o de categoría profesional, direccionados por propósitos sociales o reivindicatorios, con vistas a contestar, criticar, protestar o apoyar, con el objetivo de defender derechos, garantías y libertades constitucionales, sin prejuicio de la tipificación penal contenida en ley”, deja –a nuestro modo de ver– a la mayoría de la población aún más vulnerable a las arbitrariedades del aparato represivo del Estado que puedan ser aplicadas ante la agudización de las cuestiones políticas, sociales y económicas en este momento de inestabilidad.

Campinas, abril de 2016.

Bibliografía

Brasil, *Lei* n° 13.260, de 16 de *março de 2016*. Regula o disposto no inciso XLIII do art. 5° da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis n°s 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013. Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm> (último acceso: 21/4/2016).

Brasil, *Lei* n° 1.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm> (último acceso: 21/4/2016).

Canal Livre, *Análise do sistema presidiário*. Canal Livre. San Pablo: TV Bandeirantes, 27 de janeiro de 2014. 50 min. Programa de TV. 2014.

22 Cf., entre otras, las notas de *Carta Capital* (2014) y Ponte (2016).

- Carta Capital, “O drama de Rafael Braga” (18/12/2014). Disponible en: <<http://www.cartacapital.com.br/revista/830/o-bode-na-cela-5910.html>> (último acceso: 21/4/2016).
- Conjur, Consultor Jurídico, *Presídio de contêiner ainda existe no Espírito Santo*. Texto publicado el 17/10/2009. Disponible en: <<http://www.conjur.com.br/2009-out-17/presidio-container-continua-pleno-funcionamento-espírito-santo>> (último acceso: 4/2/ 2013).
- Depen, *Fundo Penitenciário Nacional*. Funpen. Execução. Disponible en: <<http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/transparencia-institucional/funpen-execucao>> (último acceso: 25/3/2016).
- Foucault, Michel, *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. 33ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007.
- Goffman, Erving, *Manicômios, prisões e conventos*. San Pablo: Perspectiva, 1974.
- Gonçalves, Mauricio Bernardino (comp.), *As jornadas de junho – Os significados do retorno das manifestações de massa no Brasil*. Recife: Ed. do Organizador, 2014.
- Guimarães, Cláudio Alberto Gabriel, *Funções da pena privativa de liberdade no sistema penal capitalista*. Río de Janeiro: Revan, 2007.
- International Centre for Prison Studies – ICPS, *World Prison Brief*. Disponible en: <<http://www.prisonstudies.org/news/more-1035-million-people-are-prison-around-world-new-report-shows>> (último acceso: 21/4/2016).
- Infopen, *Levantamento Nacional de informações penitenciárias – Infopen Mulheres. Junho de 2014*. Disponible en: <<http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/relatorio-infopen-mulheres.pdf>> (último acceso: 19/10/2015) [2015a].
- , *Levantamento Nacional de informações penitenciárias – Infopen. Junho de 2014*. Disponible en: <<http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/relatorio-depen-versao-web.pdf>>. (último acceso: 19/10/2015) [2015b].
- Jinkings, Isabella, “Cárcere e trabalho – gênese e atualidade em suas inter-relações”. En: Antunes, Ricardo (comp.), *Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil II*. San Pablo: Boitempo, 2013, pp. 75-92.
- Melossi, Dario / Pavarini, Massimo, *Cárcere e Fábrica – As origens do sistema penitenciário (séculos XVI - XIX)*. 2ª ed. Río de Janeiro: Revan: ICC, 2010.
- Mészáros, István, *A crise estrutural do capital*. San Pablo: Boitempo, 2009.

- , *Para além do capital: rumo a uma teoria da transição*. 1ª ed. revisada. San Pablo: Boitempo, 2011.
- Pinassi, Maria Orlanda, *Da miséria ideológica à crise do capital – uma reconciliação histórica*. San Pablo: Boitempo, 2009.
- Ponte.org, *Rafael Braga é preso com novo flagrante forjado, diz advogado*. Nota publicada el 12/01/2016. Disponible en: <<http://ponte.org/rafael-braga-e-preso-com-flagrante-forjado-novamente/>> (último acceso: 21/4/2016).
- , *Crimes de Maio completam 9 anos; 564 pessoas morreram*. Nota publicada el 12/05/2015. Disponible en: <<http://ponte.org/crimes-de-maio-completam-9-anos-564-pessoas-morreram/>> (último acceso: 21/4/2016).
- Rusche, Georg / Kirchheimer, Otto, *Punição e estrutura social*. 1ª reimpressão. Río de Janeiro: Revan: ICC, 2008.
- Saffioti, Heleieth Iara Bongiovani, *A mulher na sociedade de classes: mito e realidade*. Petrópolis: Vozes, 1976.
- Salla, Fernando Afonso, *O trabalho penal: uma revisão histórica e as perspectivas frente à privatização das prisões*. 1991. 161f. Tesis de maestría en Sociología. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas, Universidade de San Pablo, 1991.
- Sampaio Jr., Plínio Arruda de (comp.), *Jornadas de Junho – A revolta popular em debate*. San Pablo: ICP, 2014.
- Wacquant, Loïc, *As prisões da miséria*. Río de Janeiro: Zahar, 2001.
- , *Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos*. 3ª ed., corregida y aumentada. Río de Janeiro: Revan, 2007.
- Walmsley, Roy, *World Prison Population List (11th edition)*. Divulgada en febrero de 2016. Disponible en: http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_population_list_11th_edition.pdf (23/3/2016).

Monetarización y financiarización de las políticas sociales: ¿expresiones del neodesarrollismo?*

Sara Granemann

En el presente artículo, se pretende ofrecer al examen un conjunto de rasgos –los que juzgamos más significativos– de las políticas sociales desarrolladas bajo los gobiernos del PT del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (01/01/2003/2007 a 01/01/2007/2011) y de la presidenta Dilma Rousseff (01/01/2011/2015 al 01/01/2015/2016).

Para el análisis de las políticas sociales que conformaron el modo de gobernar del PT (Partido de los Trabajadores), se toma como un campo clásico la política de previsión social. Esto no excluirá mencionar, siempre que resulte posible, las demás políticas sociales.

Las determinaciones para la construcción de los nuevos rasgos en las políticas sociales –casi siempre implementados por medio de contrarreformas– son las siguientes:

1. La gran crisis abierta a fines de la década de 1960 y la primera mitad de la de 1970 tornó urgente liberar parte sustantiva de la riqueza social, materializada en el Estado bajo la forma de fondo público, a fin de

* “Monetarização e financeirização das políticas sociais: expressões do neodesenvolvimentismo?”. Trad. de Miguel Vedda.

transferirla a los capitales. La crisis iniciada en 2007-2008 consolidó lo que, a fines de la década de 1970 y comienzo de la de 1980, bajo los gobiernos de Margareth Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los EE.UU., era una tendencia en necesidad incontenible en las economías centrales y en las periféricas.

2. La transferencia de esta riqueza, socialmente producida por trabajadores, determina que el Estado altere formas de su materialidad –en sus instituciones y en las políticas sociales– para realizar su contenido: ser cada vez más y más profundamente el Estado del capital.
3. El surgimiento y el mantenimiento de las nuevas formas exigen del Estado de capital que combine el uso de la fuerza represiva y la implicación ideológica y política de referencias –individuales y de organizaciones de la clase trabajadora– en el “gobernación” del Estado, a fin de efectivizar los cambios necesarios en el aparato jurídico-institucional

Estado y políticas sociales: flexibilizar la forma, radicalizar el contenido

En el presente estadio del modo de producción capitalista y, sobre todo, en sus momentos de crisis, el Estado ha movilizad políticas decididas y sistemáticas para intentar revertir la caída de la tasa de ganancia. Estas políticas, consonantes con el país, con el momento histórico y con el léxico teórico-periodístico de la moda, son propaladas como las urgentes e ineludibles salidas para las crisis económico-políticas y se presentan como necesidades, ya de reforma del Estado, ya de ajustes, ya de austeridad, ya de todas esas medidas combinadas. Sin que constituyan sinónimos y aunque no sean siempre el mismo instrumento económico-político, forman parte de una misma respuesta: liberar los recursos utilizados en la realización de los derechos de los trabajadores para socorrer a los capitales.

Suponemos que tal dislocamiento de recursos de las políticas sociales –medidas estatales para la realización de derechos–, al asumir formas nuevas, recupera el ideario liberal en la medida en que las políticas sociales tienen su excepción cada vez más en cuanto evaluación de un problema privado, en el cual la elección individual es parte constitutiva de la realización de aquella política.

Netto ya demostró de modo excelente que el proceso de luchas de los trabajadores por políticas y derechos sociales incidió sobre

el ethos individualista que es un componente indisoluble del liberalismo económico y político. Entretanto, sería un grave error suponer que el giro

en cuestión derrumbó el conjunto de representaciones sociales (y de prácticas con ellas conectadas) pertinentes al ideario liberal. Antes bien, ocurrió algo distinto: en las condiciones de edad del monopolio, el carácter público del enfrentamiento de las refracciones de la “cuestión social” incorpora el sustrato individualista de la tradición liberal, resituándolo como elemento subsidiario en el transcurso de las secuelas de la vida social burguesa (Netto, 1999: 31).

En el post 1970, los límites para la producción de las mercancías clásicas están cada vez más delimitados, ya sea porque cerca de la mitad de la población del planeta está excluida de consumirlas y, así imposibilitada de consumir mercancías que realizan en el momento de la circulación la plusvalía que contienen, ya sea por que no hay, en este momento del desarrollo histórico-social, espacios que aún no hayan sido alcanzados por la forma mercancía y que signifiquen nuevas posibilidades de conversión al capitalismo. Así, si nuevas mercancías deben ser producidas –y si este es el ADN del modo de producción capitalista–, hay que producirse para aquellas mismas parcelas de poblaciones consumidoras. Pero ¿qué mercancías?

En el presente, poco hay en la vida social que aún no haya sido alcanzado por la forma mercancía. En tal situación, con escasas alternativas para el siempre provisorio enfrentamiento de las crisis y de la recomposición de la tasa de ganancia, figuran como posibilidades prestigiosas el fondo público y la política social de los Estados del planeta. Remanejar porciones cada vez más sustantivas del fondo público para la “ponderación” de las crisis de los capitales incluye –de forma más aguda que en otros momentos– el exterminio de los pobres (sin utilizarse necesariamente guerras abiertas), franjas de la población que ni siquiera consiguen ejercer su condición de fuerza de trabajo; estos, los innecesarios, se sitúan al margen del consumo de mercancías: los excedentes humanos que sufren la guerra no declarada en cada Estado del planeta no son bienvenidos a fin de que no se gaste fondo público con este “tipo de gente”, sean nacionales o extranjeros.

Todavía, economizar fondo público a través de la sustracción, reducción, disminución de políticas sociales con los sobrantes no ha sido suficiente para suplir las exigencias de los grandes capitales: la prioridad es “expulsar en todo el planeta” el Estado de Bienestar y, con ella, los derechos *al* y los derechos *del* trabajo se tornó central dentro de las escasas alternativas “del mercado” en la resolución de las sucesivas –y cada vez más próximas entre sí– crisis del modo de producción capitalista.

Tomar las políticas sociales como parte de la “solución” de la redivisión del fondo público, ¿es lo mismo que abogar por la ausencia completa, por el fin de las políticas estatales de protección social? Es evidente que no; pero en ellas debe operarse una transformación cualitativa, mediación necesaria para su nueva configuración. Las políticas sociales, al metamorfosearse en servicios, transitan hacia una nueva condición: se tornaron valores de cambio, mercancías. Las nuevas mercancías, más allá de continuar colaborando con la reproducción de las relaciones de producción capitalistas, cumplirían dos nuevas funciones básicas:

1. constituyen espacios alternativos para la inversión de los capitales;
2. liberan porciones significativas del fondo público para la formación de superávits necesarios, por ejemplo, para el pago de la deuda pública y para el socorro perpetuo del Estado a los grandes capitales en riesgo de falencia y quiebra.

En el cuadro de esta doble imposición, alguna forma de intervención sobre la miseria –resultante de la existencia de las clases sociales y de sus luchas; de un lado, la propietaria de los medios de producción y, de otro, aquella que solo tiene sus fuerzas física y espiritual para ofrecer a la venta– tendrá que continuar existiendo.

Aun en liberales militantes, como Friedman o Hayek, hay espacios para la realización de políticas de combate a la pobreza cuyo límite no exceda el “socorro a la indigencia”, siempre por la transferencia monetaria, para que lo inaceptable –la intervención del Estado para alguna garantía de derechos– se convierta en un espacio pedagógico en la formación de “ciudadanos consumidores”, libres de elegir la mercancía más adecuada para su necesidad; pero, conviene recordar: la “política de mínimos” estatales se aplica solamente al trabajo; al capital, la política de su Estado y de los máximos.

De la lectura de Mandel parece correcto concluir: las políticas sociales se articulan, respectivamente, por medio de dos funciones del Estado dentro de las tres consideradas por el autor como las principales:

1. Crear las condiciones generales de producción que no pueden ser aseguradas por las actividades privadas de los miembros de la clase dominante.
2. Reprimir cualquier amenaza de las clases dominadas o de fracciones particulares de las clases.

3. Integrar a las clases dominadas, garantizar que la ideología de la sociedad continúe siendo la de la clase dominante y, en consecuencia, que las clases explotadas acepten su propia explotación sin el ejercicio directo de la represión contra ellas (porque creen que eso es inevitable o que es “el menor de los males” o la “voluntad suprema”, o porque ni siquiera perciben la explotación (Mandel, 1982: 333 y s.).

Las alteraciones en la forma Estado que nos interesa problematizar en este texto son las que, en los días que corren, responden a lo exigido en la función relativa a la *creación de condiciones generales de la producción*, ya que nada puede ser más urgente, en la consecución de este objetivo, que garantizar a los capitales la posibilidad de su ganancia.

Tales condiciones generales definieron dos formas de tratamiento de la “cuestión social” por la vía de las políticas sociales: una política dirigida hacia la fuerza de trabajo ocupada y otra volcada hacia la fuerza de trabajo excedente. Ambas se presentan segmentadas y focalizadas, pero lo que nos parece nuevo en las políticas sociales en el actual estadio del capitalismo está representado por los tres siguientes rasgos: la *mercantilización*, la *monetarización* y la *financierización* de las políticas sociales.

Como ya afirmamos, tal metamorfosis en las políticas sociales responde al fenómeno capitalista en el cual las ganancias, la producción y la riqueza están concentradas y centralizadas por algunos pocos capitales y en la casi imposibilidad de crecimiento y expansión de estos gigantescos capitales. Tal dificultad obliga a los capitales a realizar *inversiones*. En la búsqueda de nuevos espacios, los fondos públicos localizados en las políticas sociales son transformados en crédito puesto a disposición de las instituciones bancario-financieras. Esta es la razón por la cual las políticas sociales deben ser “objetivadas” como un monto monetario viabilizado por una institución de política social muy “típica”: ¡los bancos!

Después del agotamiento de los espacios de *inversión* para los capitales a través de la privatización del parque estatal productivo, seguida por la entrega de la parte más sustancial de los bancos estatales a los bancos privados, con la promoción de una fuerte centralización y una importante apertura del mercado al gran capital bancario nacional y extranjero, por fin, se transfiere la mal denominada área de servicios, lo suficientemente amplia para ser compuesta desde la infraestructura –camino, usinas hidroeléctricas– a los “servicios” urbanos como el abastecimiento de gas, agua y luz, y a los de servicios de comunicación.

La primera ola de privatización en el mundo entero fue –guardadas las diferencias puestas por mayor o menor presencia de las luchas obreras y de los trabajadores– un espacio excelente para la apertura de oportunidades para el capital, para realizar nuevas “inversiones” y colonizar nuevas áreas para la acumulación. “Colonizar” aquí es transferir el fondo público al gran capital en valores inferiores al que esa riqueza socialmente construida por los trabajadores efectivamente vale. Con todo, las privatizaciones no fueron suficientes para resolver y obstaculizar nuevas crisis que, cuando entran, en escena, exigen el fondo público aplicado a las políticas sociales como respuesta a su imparable movimiento.

En el ámbito de las políticas sociales, y porque realizan derechos sociales, la privatización necesariamente presenta una dinámica propia. Propongo denominarlas, aunque provisoriamente:

- Clásicas: consisten en la venta y alienación del fondo público definitiva o provisoriamente (en el caso de las concesiones) con entrega de patrimonio.
- No clásicas: implican la venta y/o entrega de recursos patrimoniales y monetarios por medio de mecanismos burocrático-legales cada vez más sofisticados; bajo la forma de diferentes entes jurídico-administrativos que se pretenden ejecutores de “políticas sociales”.

Las políticas sociales no pueden ser privatizadas, fácilmente, de modo *clásico*. Hay amplias fracciones de la fuerza de trabajo –ocupada y excedente– que no poseen otra protección social que las políticas sociales en la cotidianidad de sus vidas. Estos trabajadores no tolerarían pasivamente a la venta de una Universidad Federal o de un hospital público, no obstante todas las limitaciones en la atención a los trabajadores, producida con frecuencia por el propio Estado, como elementos facilitadores de las privatizaciones. La clase trabajadora no obedecería, en el mismo proceso de baja resistencia, como ocurrió en el caso de las privatizaciones de las estatales arriba mencionadas. En el caso de derechos que se han hecho posibles por vía de las políticas sociales, no es ni será simplemente un proceso de privatización clásica por subasta en la bolsa de valores. Las instituciones ejecutoras de políticas sociales, si fueran privatizadas de modo “clásico”, podrían despertar un potencial de movilización y de luchas de fracciones de la clase trabajadora que o bien no encuentran puestos de trabajo para vender su fuerza de trabajo, o bien la venden de modo tan rebajado que su supervivencia supone servicios sociales.

La experiencia de las privatizaciones en el mundo hizo surgir numerosas formas de privatizar: las sociedades público-privadas, las fundaciones estatales de derecho privado (FEDP), las organizaciones sociales (OS), las organizaciones de la sociedad civil de interés público (OSCIP), la Empresa Brasileña de Servicios Hospitalarios (EBSEHR), la Fundación de Previsión Complementaria del Servidor Público Federal (FUNPRESP). Varios mecanismos son movilizados, simultáneamente y en todos los niveles del Estado brasileño, y se constata que, cuando no es posible alcanzar los objetivos de privatización del fondo público con uno de los instrumentos, se movilizan los demás, ya que la utilización de uno de los mecanismos no implica excluir los demás, incluso si son desarrollados por un adversario político que está en el poder. Los gobiernos del PSDB y del PT implementan, en los diferentes momentos del Estado brasileño, las diferentes formas de privatizar sin que precisen haber sido ellos los formuladores.

La privatización de las políticas sociales sigue el curso de convertirlas en “servicios”. Paso importante en la privatización fue la contrarreforma previsional impuesta a los trabajadores por el Estado a través de Luiz Inácio Lula de Silva en 2003, para responder a los clamores del mercado financiero y de los capitales ávidos por capturar parte del trabajo necesario de los servidores públicos federales, bajo la forma de la fuertemente ideologizada “previsión complementaria, la FUNPRESP.

Antes, en 1998, Fernando Henrique Cardoso ya había ejecutado un profundo ataque contra la previsión social de los trabajadores empleados por el capital cuando contrarreformó el Régimen General de Previsión Social.

La imposición de la previsión privada fue un acto de fuerza del gobierno de Lula, realizado durante el auge de su popularidad. Sabían, tanto el gobierno como los capitales, que de otro modo los trabajadores no optarían por la institución más inestable del modo de producción capitalista; no cambiarían la previsión basada en la solidaridad y en la distribución entre los trabajadores y no hipotecarían su futuro y su vejez a las piruetas ejecutadas por los bancos. Pero, de otro modo, tales espacios para la inversión de los capitales no conseguirían producirse y no se venderían nuevas mercancías. Tales mercancías, además; y en especial, la previsión privada fue la más importante mercancía creada por el gran capital en la segunda postguerra y sirvió, en Brasil y en otros países, como un cana generoso para irrigar –a costa del trabajo necesario y del trabajo excedente, del aumento de la explotación– el mercado de capitales. Además, tal mecanismo de “previsión” privada permitió a los grandes capitales los fondos mo-

netarios que potencian e impulsan la extracción de trabajo no pago. Para relacionar la previsión privada con los movimientos del gran capital, es preciso explicar que buena parte de los billones que el gran capital puso en movimiento y empleó en la expropiación de fuerza de trabajo se origina en el propio ahorro de fuerza de trabajo. Dicho de otro modo: la abstinencia de la fuerza de trabajo, al ser apropiada por los capitalistas, se torna capital porque tiene la función de operar la extracción de trabajo no pago. Accionados estos complejos engranajes, se desencadenan formas diversas de mercantilización y de financiarización de las políticas sociales.

¿En qué consistiría, entretanto, este rasgo de las políticas sociales que insisto en denominar financiarización? El estado pone a disposición recursos de los fondos públicos para las transferencias monetarizadas a los usuarios; transferencias que son pagadas por medio de instituciones bancarias financieras. Aquí nos valemos de la referencia teórica de Karl Marx, quien, en *El capital*, nos enseña que todo dinero que ingresa en instituciones bancario-financieras, la “*fuelle milagrosa*, es transformado en aplicaciones diferenciadas entre sí. De ese modo, incluso los R\$ 120,00 de la Bolsa Familia que son transferidos al usuario compone, en términos contables y de modo ficticio, los recursos monetarios para comprar acciones, títulos públicos, especular para los grandes inversores y acelerar la rotación de los capitales. Esto es posible porque las instituciones bancario-financieras no necesitan tener en especie la totalidad de la riqueza con la que operan. Así, el propio recurso de los fondos públicos que paga las becas en dinero, nueva mediación de la política social, es también el dinero utilizado en los mercados de capitales y financiero.

Así, la financierización de los fondos públicos se presta, fundamentalmente, para el crecimiento del capital en sus distintas formas: productivo, ficticio, portador de intereses, comercio de dinero y comercio de mercancías.

Los mismos engranajes privatizadores están presentes, en mayor o menor medida, en la totalidad de las políticas sociales y, de esta manera, alcanzan a los usuarios de diferentes políticas sociales; con todo, a pesar de la apariencia diferenciada en cada política social, no nos debe engañar: en su contenido reside su secreto.

Cabe ahora apuntar que modificaciones en la forma y en el contenido no implican la desaparición de las políticas sociales; implican, para algunas de estas políticas, reformulaciones tan profundas en su contenido que las tornen sabrosas para el momento del capitalismo puro, conforme lo denominó Husson (2008). En este momento, las políticas sociales asumen

formatos ideo-políticos sofisticados, condición necesaria para su metamorfosis, a fin de que su esencia no sea fácilmente indagada en la lucha de clases. Para que la nueva forma se torne viable, fue urgente implicar a los trabajadores y, especialmente a sus dirigentes, en la gestión de la “previsión complementaria” o fondos de pensión. Más allá de eso, hay una creciente reivindicación sindical, partiendo de la previsión privada, del gran capital, a través de planes de salud y educación, para la compra de esas mercancías en el mercado capitalista. Esto equivale –para la fuerza de trabajo– a renunciar a la lucha por la educación y la salud públicas de calidad y universales a cambio de un “salario indirecto” para comprar la educación privada por parte de pequeñas fracciones de fuerza de trabajo. Desde el punto de vista del capital, reducción de salarios y exenciones de impuestos. Desde el punto de vista de la clase trabajadora, una profundización de las luchas corporativas y limitadas al modo de producción capitalista.

Consideraciones finales

Cabe subrayar que las políticas sociales mínimas son efectivizadas, sobre todo, por las vías de la monetarización y la financierización cuando casi todos los derechos del trabajador y la acción del Estado se convierten en transferencia de dinero (monetarización) operada por instituciones que no guardan relación alguna con las políticas sociales (los capitales bancario-financieros). Abundan las becas de dinero como forma de política social del Estado brasileño bajo los gobiernos del PT. Hay una larga lista de becas de dinero en casi todos los ministerios del Estado.

El punto de semejanza más evidente es su forma miserable para los trabajadores: son escasos los recursos transferidos para ejecutar en el mercado su “libre elección y ciudadanía bancaria”, en los moldes que defienden Hayek y Friedman. Otro rasgo en común, igualmente grave en las políticas sociales, se refiere al conexo dismantelamiento de las políticas sociales, con fusión de ministerios, extinción de instituciones que son sustituidas en la relación con el usuario por la tarjeta bancaria, frecuentemente convertida en tarjeta de crédito. La mediación entre el usuario y el Estado se realiza “moderna y civilizadamente” por instituciones de excelencia de los monopolios y, de acuerdo con Lenin, firmemente desarrolladas bajo el imperialismo.

El refuerzo del Estado del capital, visible también en la transfiguración de las políticas sociales, se pone en evidencia como *comité ejecutivo de los asuntos de la burguesía*, por atender centralmente al gran capital en tiempos de “*capitalismo puro*”.

Las políticas sociales volcadas a la fuerza de trabajo ocupada serán cada vez más sustituidas, en momentos de escasa lucha y de declinación en la organización de la clase trabajadora, por servicios comprados por el propio trabajador, que no solo entrega al capital trabajo excedente bajo la forma de plusvalía, sino también una parte de su trabajo necesario a fin de viabilizar la compra de su jubilación llamada “complementaria” a la social, debido a la transformación de las políticas y derechos sociales en servicios. Entrega al capital una parte creciente de su salario y allí reside el “secreto” de la existencia de una previsión pública que precisa tener un techo de beneficios rebajados y un número insignificante de trabajadores que consiguen alcanzarlo y jubilarse. Si las políticas sociales fueran suficientes, públicas, de calidad y universales, no habría espacio para la venta y la gestión de estas nuevas mercancías.

En la radicalización de esta dirección, no solo tienen lugar políticas sociales pobres para pobres; contratos y condiciones de trabajo envilecidos para el conjunto de los trabajadores que operan las políticas sociales –en el ámbito del Estado– y los servicios –en el ámbito de la producción y reproducción del capital–. Tal Estado y tal política implicarán, como es obvio, que los capitales renuncien a las anteriores formas de expropiación de los recursos públicos y nuevas formas futuras de ponderación de sus crisis y la tentativa de reversión de la caída en la tasa de ganancias.

Estos días grises y nebulosos son días en que se profundiza la explotación de los trabajadores cuando se conjugan la expropiación del trabajo excedente y del trabajo necesario; días en que derechos sociales son reducidos a la dimensión natural, biológica del ser; estos son los días en que la humanidad no podrá prescindir de la vieja y buena lucha de la clase trabajadora.

Bibliografía

- Coutinho, Carlos Nelson, *O estruturalismo e a miséria da razão*. Río de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972.
- Behring, Elaine, *Brasil em contrarreforma: desestruturação do Estado e perda de direitos*. 2ª ed. San Pablo: Cortez, 2008.
- Granemann, Sara, *Para uma interpretação marxista da “previdência privada”*. Tesis de doctorado. PPGSS/UFRJ: Río de Janeiro. 2006. Disponible en: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=35589 (último acceso: 12/6/2016).
- Granemann, Sara, “Fundação Estatal; projeto de estado do capital”. En: Bravo, M. I. S. *et al.* (comps.), *Saúde na atualidade: por um siste-*

ma único de saúde estatal, universal, gratuito e de qualidade. 3ª ed., corregida y aumentada. Río de Janeiro: Rede Sirius/ADUFRJ-SSind, 2011. Disponible en http://www.adufrj.org.br/antigo/images/publicacoes_especiais/PDFs/Revista_cadernos_de_Saude_PAGINA.pdf (último acceso: 12/6/2016)

Husson, Michel, *Un pur capitalisme*. Lausana/Suiza: Page Deux, 2008.

Lenin, *O imperialismo – fase superior do capitalismo*. San Pablo: Alfa-Omega, vol. 1, 1986.

Mandel, Ernest, *O capitalismo tardio*. Trad. de Carlos Eduardo Silveira Matos *et al.* San Pablo: Abril Cultural, 1982.

Marx, Karl, *O capital - Crítica da economia política - O processo global da produção capitalista. (Os economistas)*. Coordinación y revisión: Paul Singer. Trad. de Regis Barbosa y Flávio R. Kothe. Vol 3., t.1-2. San Pablo: Abril Cultural, 1984.

Netto, José Paulo, *Capitalismo monopolista e serviço social*. San Pablo: Cortez, 1992.

Crisis, desarrollismo y neodesarrollismo en Brasil*

Frederico Daia Firmiano

Las relaciones de producción y tráfico burguesas, las relaciones de propiedad burguesas, la sociedad burguesa moderna, que crearon por arte de magia tan poderosos medios de producción y tráfico, se asemejan al maestro brujo que ya no puede dominar los poderes subterráneos por él conjurados. Desde hace decenios, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la sublevación de las fuerzas productivas modernas, en contra de las relaciones de propiedad, que son las condiciones de existencia de la burguesía y de su dominio. Basta con mencionar las crisis comerciales que, en su periódica recurrencia, ponen en cuestión de manera cada vez más amenazante la existencia de la entera sociedad burguesa (Marx/Engels, 2008: 32).

1

El desempeño actual de la economía brasileña se convirtió en el principal obstáculo del esfuerzo de sus formuladores para defender el así llamado neodesarrollismo. Con la profundización de la crisis internacional, expresión de la crisis estructural del capital, la confabulación económica que había dado sustento al desarrollo reciente de Brasil se reveló frágil.

* “Crise, desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo no Brasil”. Trad. de Martín Salinas.

En el inicio de su primer mandato, Dilma Rousseff buscó contener la crisis cíclica del capital por medio de la reducción significativa de la tasa básica de intereses (el Selic registró 7,25 en diciembre de 2012), la presión para la reducción del *spread* bancario, por medio de la actuación de los medios públicos y la manutención de gastos públicos (Carleial, 2015: 206). Así y todo, no demoró hasta la desaceleración del consumo interno y, consecuentemente, del crecimiento económico (¡basado en el consumo!).

Las medidas anticíclicas adoptadas por Rousseff no fueron capaces de asegurar la continuidad del crecimiento económico, afectado, todavía, por la reducción del crecimiento económico chino y el consecuente desequilibrio de las cuentas externas. En ese contexto, el gobierno aumentó el estímulo a la inversión privada desgravando la lista de pagos, sustituyendo la cuota patronal de la previsión por contribuciones variables sobre la receta bruta, de acuerdo con el sector, a fin de mantener el empleo y, simultáneamente, ofrecer mayores condiciones para la competitividad de las empresas.

Hubo, de este modo, una tentativa de reducir el costo de trabajo para el capital sin reducir la remuneración del trabajador. Por ello, en el mismo periodo, se mantuvieron altos niveles de rentabilidad sobre el patrimonio líquido de las empresas para el sector financiero, con la correspondiente caída de la industria de transformación. “Es decir, en estructuras de mercado oligopólicas con presencia de empresas multinacionales y sin el cobro explícito de la contrapartida, resulta difícil inducir al sector privado a utilizar los recursos en la dirección esperada”. Además, “la conjugación del real apreciado y los intereses estratosféricos, en ausencia de una política industrial que revierta la vulnerabilidad externa, se traduce en la reprimarización de la pauta exportadora brasilera; en el año 2000, la participación de los productos manufacturados era de un 60% y, en 2013, esa participación cae hasta el 39,3% [...] como no podría ser de otra manera, la combinación intereses –cambio presiona también, y de forma significativa, las transacciones corrientes de nuestro balance de pagos” (ibid.: 207).

En el primer trimestre de 2015 la economía retrocedió 1,06% en comparación con los tres primeros meses de 2014; y 0,9% con relación al segundo trimestre de 2013. Con la caída en las inversiones, el freno del consumo popular y la retracción del PBI, Brasil estaba en crisis. Las bajas de 1,5%, y 0,5%, respectivamente, en la industria y los servicios, dictaron, por

lo tanto, el retroceso del producto bruto interno. La industria automotriz, por ejemplo, forzó períodos de *lay-off*, por lo menos desde mayo de 2014.¹

Las exportaciones de bienes y servicios impulsadas por ventas de la industria extractiva mineral (petróleo y carbón), de la metalúrgica y de la agropecuaria apenas registraron un aumento (1,9%) en 2014, con relación al segundo trimestre de 2013. A pesar de eso, las inversiones en máquinas para la producción, en transporte, agropecuaria, energía y construcción civil, que indican la capacidad de crecimiento futuro por medio de la capacidad productiva y de la infraestructura, retrocedieron un 5,3% en el pasaje del primer trimestre al segundo de 2014.² La inversión público – estatal, que en 2010 representaba un 4,7% del PBI, pasó a un 4,4% en 2013 acusando una caída. Entre 2010 y 2014 por lo tanto disminuyó la tasa de inversiones total, pública y privada de un 19,2% a un 16,5%.³

Antes de asumir su segundo mandato, Rousseff insistió en las metas de superávit primario, elevando los intereses y promoviendo cortes en las “áreas sociales” (siempre vistas por el gobierno como “gasto público”), después de limitar la provisión de recursos del tesoro al BNDES. En mayo de 2015, el gobierno anunció el recorte de R\$ 69,9 billones de los cuales R\$ 25,7 billones del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que marcó el ilusorio periodo del neo desarrollismo; y casi R\$ 7 billones del programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Los ministerios de salud y de educación sufrieron recortes por R\$ 11,7 billones y R\$ 9,4 billones respectivamente. En aquella ocasión el gobierno también anunció una proyección de retroceso del PBI y un recorte de R\$ 65,1 de billones en el ingreso líquido esperado para 2015, como resultado de la crisis de la economía.

1 “Sindicato aprova suspensão de contrato de cerca de 900 funcionários da GM”. *Folha de São Paulo* (29 de agosto de 2014). Disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/08/1506008-sindicato-aprova-suspensao-de-contrato-de-930-funcionarios-da-gm.shtml>. (último acceso: 29 de agosto de 2014).

2 “Economia recua 0,6% no 2º trimestre, e o país entra em recessão técnica”. *Folha de São Paulo* (29 de agosto de 2014). Disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/08/1507743-pib-cai-06--no-2-trimestre-diz-ibge.shtml>. (último acceso: 29 de agosto de 2014).

3 “Investimento público empaca no país”. *Folha de São Paulo* (31 de agosto de 2014). <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/08/1508548-investimento-publico-empaca-no-pais.shtml>. (último acceso: 31 octubre de 2014).

El anuncio también daba cuenta de la ampliación de R\$ 4,5 billones de previsión de gastos del tesoro con la previsión social, en razón de las desgravaciones de la lista de pagos⁴ (lo que se tornó poco tiempo después, la justificación para la propuesta, que hoy gana fuerza de reforma o de contrarreforma de la previsión social. En este contexto, la caída del gobierno no se hizo esperar. En mayo de 2016, Dilma Rousseff fue apartada del cargo, dejándolo definitivamente en Agosto del mismo año. Con ello, el capital le ponía fin a las ilusiones del neodesarrollismo, explicitando los nexos estructurales de la crisis brasileira.

De este modo, la austeridad fiscal y monetaria y el conjunto de “prescripciones correctivas” puestos en marcha por el equipo económico del gobierno de Dilma (cuyo ritmo se aceleró con el gobierno golpista de Temer), lejos de producir cualquier efecto sustentable o de largo plazo en el crecimiento económico tiene a profundizar el padrón del desarrollo servil de la formación económica brasileira.

2

El keinesianismo, contradiciendo a los neoclásicos, introdujo la idea según la cual el ciclo económico no se autorregula; el capitalismo es un sistema inestable, cíclico, que produce desempleo, que, en función de ello, precisa de políticas autocíclicas. Desarrollada todavía en la década de 1930, con el trasfondo de la fuerte intervención estatal conducida por Roosevelt en la tentativa (exitosa) de sacar a los EE.UU de la crisis de 1929, la teoría de Keynes encontró bases sólidas después de la II Guerra Mundial, cuando el padrón de expansión capitalista y la nueva hegemonía (ejercida por los norteamericanos) crearon las condiciones para un relativamente largo proceso de inducción de desarrollo.

Pero más que eso, las nuevas condiciones políticas y económicas de posguerra legitimaron y viabilizaron el desarrollo como un proceso posible de ser acelerado y, en cierto sentido, conducido y controlado. Para ello, bastaba promover determinadas transformaciones institucionales y la aceleración del crecimiento económico. Así, por el impulso de los países centrales, nacen las teorías del desarrollo y el neodesarrollismo “[...] como la ideología que justificaba, comprendía y al mismo tiempo legitimaba el des-

4 “Governo federal anuncia corte recorde no Orçamento e freia investimentos do PAC”. *O Estado de São Paulo* (22 de mayo de 2015). Disponible en: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-federal-anuncia-corte-recorde-no-orcamento-e-freia-investimentos-do-pac,1692585>. (último acceso: 11 octubre de 20146).

cubrimiento y la conciencia de que el mundo era terriblemente desigual”; pero se trata de una desigualdad que podía ser superada. Su fundamento teórico reside en la aceptación de que “[...] la intervención de un factor ajeno al mercado estaba en condiciones de sustentar un crecimiento más veloz del generado espontáneamente por el funcionamiento del mercado”. En el plano teórico, el keynesianismo no se desarrolló fuera del liberalismo, pero se afirmó como una especie de oposición a los neoclásicos, a partir de la idea de la necesidad de una intervención estatal; precisamente en ese sentido, Keynes produjo un movimiento interno de autocritica y economía política, pero “[...] sin tener nada que ver con el marxismo o el izquierdismo, como algunos parecen creer hoy día” (Fiori, 1998: 68 y s.).

En el contexto de la expansión pos II Guerra Mundial, la posibilidad de desarrollo y de control sobre la expansión capitalista también ganó fuerza con un conservador, W. W. Rostow, para quien el camino al desarrollo era lineal, acumulativo e igual para todos los países. Desde su perspectiva, el proceso dependía de la adopción de políticas económicas correctas (Rostow, 1974). Sin embargo, como dijera Atilio Borón décadas más tarde, en la base de la argumentación de Rostow se encuentran dos falsas suposiciones: la primera, que las sociedades compartan la misma naturaleza, siendo, en lo esencial iguales, aunque estuviesen en extremos opuestos; la segunda, que la organización de los mercados internacionales precisaba de asimetrías estructurales para afectar las chances de desarrollo de los países que se encontraban en los extremos opuestos. De este modo, si hubiese obstáculos delante de “leyes de desarrollo”, nada tendría que ver con los fundamentos estructurales o con la forma desigual de desarrollo capitalista, como había sugerido Marx (Borón, 2010: 20).

De cualquier modo, el “desarrollo realmente existente”⁵ fue viabilizado por el pragmatismo norteamericano y la desobediencia de los acuerdos establecidos en Breton Woods. El arbitraje de las reglas monetarias y comerciales, bajo su batuta, les permitió una flaqueza que los favorecía en el contexto de la Guerra Fría y de la corrida contra la URSS. Con eso,

5 Llamaré “desarrollismo” a las teorías, principalmente en el radio de acción del CEPAL, que buscaron formular teóricamente la posibilidad de superación del subdesarrollo; y “desarrollismo realmente existente” al proceso concreto de expansión capitalista, por medio de la industrialización y de la modernización, que tuvo lugar, sobre todo, en la periferia del sistema del capital. Aunque sea necesario preciso anotar que no siempre las teorías del desarrollismo y el proceso histórico vayan por caminos tan separados.

EE.UU practicaron una política exterior “benevolente”, por medio del cual fue posible la realización del Plan Marshall, la ayuda para Asia y la expansión capitalista de algunas naciones. Este proceso permitió, todavía, la reconstrucción de Italia, de Alemania, de Japón, así como la expansión capitalista, por medio de la industrialización, de algunos países de la periferia.

En el espacio de autonomía de las políticas nacionales, en que el Estado tenía margen de libertad para tratar la renta interna, la de distribución, la de incentivos para la demanda y la referida al crecimiento, manteniendo las reglas internacionales gracias a la soltura de la política monetaria norteamericana, los europeos realizaron el *Welfare state*. En ese espacio, realizamos nuestra industrialización (Fiori, 1998: 75).

Pero una vez que la reconstrucción de la pos II Guerra hubo pasado, el (relativamente) extenso ciclo de expansión capitalista que permitió la realización del *Welfare State* y el impulso inicial de la industrialización de la periferia comenzó a descender, sin recuperar nunca más el aliento con el cual había impulsado los mejores años del capital en el siglo XX. Desde entonces, las políticas anticíclicas perdieron su eficacia, derrocando progresivamente el emprendimiento keynesiano, así como la propia idea de que era posible controlar la expansión capitalista.

István Mészáros demostró, más tarde, que aquel proceso de ascenso y descenso de la era de oro del capital no podía acabar de otra manera. El keynesianismo, y su programa económico correlativo, por definición, nunca operó por fuera del radio de acción institucional del capital, de modo que su capacidad de intervención tenía el alcance de la coyuntura de algunas décadas de la reconstrucción de posguerra. “Originalmente, el keynesianismo fue una tentativa de ofrecer una alternativa a la lógica de estancamiento y avance, por el cual las dos fases serían administradas de forma equilibrada”. De esta manera, como estrategia de control, su programa fracasó, y permaneció atado a la fase de expansión del capital. Una vez perturbados sus límites absolutos, no solo se tornó evidente la imposibilidad de control, también las contradicciones del sistema del capital se tornaron más explosivas, lo que condujo a crisis cíclicas cada vez más frecuentes (Mészáros, 2009: 25 y s.).

Veamos este proceso un poco más de cerca.

El modo de control sociometabólico del capital se constituye históricamente cuando el dominio del valor del uso, característico de los sistemas de autosuficiencia en la relación entre la producción material y el control, da lugar a conexiones reproductivas más amplias. Libre de las ligaduras

de la autosuficiencia, el capital se convirtió en la forma más dinámica de extraer trabajo excedente; una forma que no conoce fronteras y sobrepasa todos los obstáculos, definiendo y redefiniendo, siempre que las circunstancias se modifiquen, las formas de control sobre el trabajo. De este modo, el sistema del capital, hasta cierto momento, definió y entendió sus límites relativos, manteniendo siempre el más alto grado posible de extracción de trabajo excedente. El proceso de liberación de las restricciones impuestas por la autosuficiencia promovió, de manera contradictoria y simultánea, la pérdida de control sobre el conjunto del sistema de reproducción social (ibíd.: 101-103).

Esta contradicción, mientras tanto, permaneció imperceptible durante un largo período de desarrollo histórico del capital, en razón de su capacidad para transferir sus contradicciones internas. Pero en la medida en que el proceso de libre expansión del capital fue bloqueado por la pérdida progresiva de espacio de transferencia de sus antagonismos internos, las contradicciones inherentes al proceso de expansión se vieron potenciadas, con lo que se consumó el fin de la fase de ascenso histórico del capital y, con ello, el fin de cualquier posibilidad de control del proceso de desarrollo capitalista (ibíd.: 104).

Esto ocurre, en razón de lo que István Mészáros llama “defectos estructurales de control”, o por la ausencia (no compensable) de unidad entre las estructuras reproductivas del capital, que reside: a) en el aislamiento u oposición entre producción y el control de la producción; b) en la independencia entre las esferas de producción y consumo (donde se puede verificar el exceso de consumo concentrado, por un lado, y en la negación de las necesidades más fundamentales, por otro lado); c) en la contradicción entre producción y circulación, en la cual los microcosmos del sistema del capital acaban por combinarse en alguna forma de conjunto administrable, de modo que el capital social total pueda penetrarlos en el dominio de la circulación total, buscando resolver el antagonismo entre producción y circulación. Así, prevalece la necesidad de dominación y de subordinación, no solo en el interior de microcosmos particulares, por medio de cada personificación del capital, pero también fuera de los límites de los microcosmos particulares, de las fronteras regionales y nacionales.

El carácter irremediable de la falta de unidad se debe al hecho de que la propia fragmentación interna de las estructuras reproductivas del capital asume la forma de antagonismos sociales. En otras palabras, ella se manifiesta en conflictos fundamentales de interés entre las fuerzas sociales hegemónicas

alternativas [que no solo no pueden ser resueltas, dado su carácter estructural, sino que] [...] son necesariamente reproducidas bajo todas las circunstancias históricas que cobran en la era del capital, fuesen cuales fuesen las relaciones de poder dominantes en cualquier punto determinado del tiempo (ibíd.: 105).

Por eso, como modo de control sociometabólico, el capital no tolera ningún principio de regulación que restrinja su dinámica orientada a la expansión. O, dicho de otro modo, la expansión es una manera absolutamente necesaria (y, por lo tanto, una función económica relativa) de transferir las contradicciones propias del sistema del capital. El problema es que, una vez consumada su fase de ascenso histórica, el margen de transferencia de las contradicciones se torna, progresivamente, más estrecho (ibíd.: 119), lo que activa sus límites absolutos, o “[...] la plena afirmación de la ley del valor bajo condiciones estipuladas por la clausura de la fase progresista de ascendencia histórica del capital” (ibíd.: 226). De este modo, “[...] se puede decir que la fase progresista de la ascendencia histórica del capital comprende los límites absolutos más allá de los cuales la ley de valor no puede ser acomodada en sus límites estructurales” (ibíd.).

De acuerdo con la interpretación de François Chesnais, la competencia intercapitalista y la incorporación cada vez más preponderante de la ciencia y de la tecnología al proceso productivo tornaron la producción más costosa, intensificando la contradicción entre capital y trabajo. Con la capacidad de recaudación e inversiones del Estado cada vez más comprometidos, la visibilización de la reproducción capitalista dependía de la remoción de las barreras proteccionistas tan necesarias al desarrollo que marcó la fase de oro del capital, pero que, bajo nuevas condiciones, representaban obstáculos para el proceso permanente de valorización (Chesnais, 2003).

Esto impuso modificaciones en la forma de su regulación [sic], adecuándola a la lógica de dominio financiero que, poco a poco, pasó a presidir el proceso de acumulación (ibíd.). No por nada el aventurismo financiero ganó proporciones gigantescas a partir de 1970, de manera concomitante a la crisis de los ramos de la producción capitalista y de las perturbaciones resultantes de su letargo. Por el contrario, el dominio financiero que, desde entonces, rige la economía mundial fue una tentativa del capital de encontrar una especie de camino de salida de los obstáculos con los cuales se encontraba, pero que, por su naturaleza, lo condujo todavía de una manera más decidida al lugar del que quería escapar. Esto no significó, en absoluto,

la interrupción del proceso de desarrollo capitalista. Por ello, la reducción del margen productivo del capital, que resultaba de la tendencia a su (auto) bloqueo interno, marcó el proceso de acumulación, y produjo un padrón de reproducción cualitativamente distinto.

La reconstrucción de posguerra había creado, en primer lugar, la ilusión de que el desarrollo podría ser controlado e inducido y, en segundo lugar, la ilusión de que los países “atrasados” conseguirían alcanzar a los demás, solo con aplicar la receta keynesiana-desarrollista. Pero con el fin de este proceso las contradicciones intransponibles para la realización plena del valor pasaron a representar un freno a la expansión de las fuerzas productivas del capital. De allí en adelante, el desarrollo quedó necesariamente condicionado por el avasallador potencial destructivo del capital, en la forma de reproducción ampliada de sus contradicciones internas más explosivas.

Fue justamente en este intervalo, entre la “era de oro” y la *debacle* del capital, donde el largo proceso de transición de la fase ascendente a la de crisis estructural del capital, que una parte de la periferia completó su industrialización, con lo que se inició, simultáneamente, una especie de reacomodación de su posición en la nueva división internacional del trabajo que surgía en el seno de la mundialización del capital.

3

La economía brasileña, que dependía del flujo de capitales financieros, vio subir sus tasas de crecimiento de manera significativa entre las décadas de 1950 y 1970, registrando, respectivamente, un crecimiento acumulado del PBI de 99,03%, 80,33% y 131,26%. No en vano, a pesar de la dependencia económica, cobró vigor entre nosotros la creencia de que Brasil podría alcanzar el desarrollo de los países centrales, aunque (y aquí radicaba toda la diferencia) la industrialización se basase en la internacionalización de la producción de la empresa multinacional, sobre todo norteamericana (Paulani, 2009: 73-83).

En realidad, el país se industrializó, pero profundizando la dependencia de la inversión externa directa (IED). Para hacerse una idea: en 1970 Brasil respondió por una remisión anual media de relativa a servicios de lucro y dividendos de inversiones directas de US\$ 314 millones – cifra que creció de manera vertiginosa en las décadas posteriores: US\$ 969 millones en 1980, US\$ 2.589 millones en 1990, y US\$ 4.477 millones en el período 2000-2004 (ibíd.: 86).

Por otro lado, el IED que se expandió en la periferia lo hizo en un cuadro de cierre de las posibilidades de valorización en el centro del sistema del capital. Antes del shock del petróleo y de la crisis del dólar (¡algo con que contaban las políticas anticíclicas keynesianas!) el capital extranjero buscó otras formas de valorizarse, y la periferia absorbió la oferta de crédito y la liquidez del capital. De este modo se formó una especie de “confluencia virtuosa” entre la demanda y la oferta de capitales y la industrialización brasileña buscó más y nuevas inversiones en un cuadro de dificultades para la reproducción capitalista en la esfera productiva, que en el virtuosismo de la acumulación global del capital. Pero eso no es todo. Surgió también de los anhelos de la esfera financiera que surgía (y adquiriría autonomía) vis-à-vis a la crisis de los ramos productivos.

En otras palabras, en cuanto el arribo del capital productivo le otorgaba a la periferia una supervivencia al proceso de acumulación estrictamente productivo (que perderá el aliento luego del agotamiento de las posibilidades abiertas por la reconstrucción de posguerra), ya se preparaban las condiciones para el dominio financiero previsto (ibíd.: 88).

El crecimiento económico producido bajo la tutela militar en Brasil creó una especie de espejismo, a saber, que el desarrollo llegaría por medio de la industrialización, con lo que se corroboraba todavía la idea según la cual la industrialización y el desarrollo eran sinónimos. Esto les hizo creer a muchos desarrollistas (incluso a una parte de los dependentistas) que los países menos desarrollados podían equipararse a los países desarrollados. Algo que, como sabemos, no ocurrió. Según Giovanni Arrighi:

[...] la industrialización de la semiperiferia y de la periferia fue, en último análisis, un canal, no de subversión, sino de reproducción de la jerarquía de la economía mundial [...] En la década de 1940, las actividades industriales (o, por lo menos, muchas de ellas) eran, de hecho, actividades de núcleo orgánico. En la década de 1950, atraídos por los “premios espectaculares” lanzados para esas actividades, los actores políticos y económicos de la periferia y la semiperiferia se lanzaron a la “industrialización”. En un principio, cosecharon algunos beneficios y eso indujo a muchos otros a hacer lo mismo. En las décadas de 1960 y 1970, las actividades industriales se tornaron cada vez más superparceladas, de tal modo que no solo los premios espectaculares desaparecieron, sino que hasta los mismos beneficios menores cosechados por los primeros atrasados se transformaron progresivamente en pérdidas generalizadas en la década de 1980 (Arrighi, 1998: 86 y s.).

De acuerdo con el sugestivo argumento del profesor Plínio de Arruda Sampaio Jr., el golpe militar de 1964 en Brasil echó por tierra el ideal desarrollista, a) al convertir el capital internacional en condición para el desarrollo cuando, en la interpretación de CEPAL, este era visto como un obstáculo; y b) al ver el problema de la abismal desigualdad social interna como residuo colonial sin grandes consecuencias para la dinámica capitalista. Restringido a un proceso de industrialización y modernización, el desarrollo no podía enfrentar el problema central que ponía en jaque la autonomía nacional y la integración social. Así, “reducida a la relación entre acumulación del capital y modernización de los padrones de consumo, la problemática de desarrollo se transforma en una problemática de desarrollo capitalista” (Sampaio Jr, 2012: 677).

Por cierto, la comprensión más o menos común entre los intelectuales cepalinos, según la cual las estructuras que producían el subdesarrollado y la dependencia económica eran producto de contingencias históricas que podían ser superadas por la voluntad política nacional, resultó ferozmente derrotada por el “desarrollismo realmente existente”, sobretodo, durante los años de la dictadura cívico-militar. Y por más que hubiese (¡y había!) una especie de honestidad intelectual y compromiso político de muchos de los formuladores teóricos del desarrollismo con la idea de un capitalismo domesticado, subordinado a los designios de la sociedad nacional, decurrente del enfrentamiento del imperialismo y de la realización de reformas estructurales de base (ibíd.: 674), parece bastante razonable proponer la hipótesis de que, independientemente de la voluntad política interna (¡que no había!) el camino para la conciliación entre capitalismo, democracia y soberanía nacional ya estaba cerrado *a priori*. El padrón de acumulación de capital tornaba inviable, bajo la crisis estructural que, progresivamente pasaba a dictar el ritmo de las economías nacionales periféricas (y no solamente de ellas), cualquier desarrollismo capitalista autónomo.

A través de este prisma, la industrialización de la periferia nunca fue un ciclo virtuoso que portara la posibilidad de lanzar a los países subdesarrollados más allá de la condición de dependencia económica que padecían (y que más tarde se convertiría en servidumbre financiera). Por el contrario, como el incipiente proceso de financierización de la economía global indicaba, la industrialización de la periferia resultaba de la contradicción existente entre la necesidad permanente del capital de (auto) valorizarse y la imposibilidad de hacerlo en el transcurso de su (auto) bloqueo. En este sentido, la industrialización y el “desarrollismo realmente existente” ya eran la expresión de la crisis estructural del capital o producto de las

contradicciones inalienables del sistema del capital. Así, cualquier formulación alternativa de la expansión capitalista en la periferia tendía a ser devorada por las nuevas condiciones de acumulación global.

En este sentido, el desarrollismo no fue una ilusión por el hecho de que la industrialización no fue capaz de llevar a los países periféricos al núcleo orgánico del sistema del capital, tal como propone Arrighi (1998: 187), sino porque lanzó a la periferia al torbellino abierto por las nuevas condiciones de acumulación que se derivaban de los límites más allá de los cuales la ley del valor no puede ser acomodada.

Por otra parte, si fuera verdad que la industrialización de la periferia, como sostiene Leda Paulani, “[...] se tornó necesaria para la nueva plataforma de valorización que comenzaba a surgir y que, desde un inicio, necesitaba de la internacionalización de la producción, aunque prescindiese de su desarrollo posterior” (Paulani, 2009: 84), entonces, también es cierto que, producto de la crisis del capital, la industrialización que estuvo en el centro del desarrollismo realmente existente fue absolutamente necesaria para la producción del actual padrón de reproducción capitalista en Brasil, fuertemente caracterizado por la sujeción financiera al capital y por la especialización productiva, a la que volveremos más adelante.

El desarrollismo realmente existente, por consiguiente, actuó como una especie de terapia contra el cáncer que, para alcanzar su éxito, precisó desarrollar ciertas capacidades del paciente. Pero al hacerlo eleva, inmediatamente, el tumor a su máxima potencia, hasta el punto que la terapia deja de funcionar. El capital internacional (en franco proceso de transnacionalización) se convirtió en la condición *sine qua non* de la expansión de la economía brasileña, de la organización de los centros de decisión, de la acción de la política económica interna, reforzando los nexos de la dependencia externa y abdicando de la posibilidad de enfrentar el problema de la integración social.

Pero, como sostiene Paulani, “el Brasil del final de los años 1980 no estaba adecuadamente preparado para desempeñar su papel en la nueva etapa de la mundialización financiera” (ibíd.: 93). La organización de un nuevo padrón de acumulación, impuesto por las condiciones de crisis del capital, exigió, pues, profundizar las transformaciones productivas y político-institucionales que venían siendo aplicadas, por lo menos, desde la dictadura cívico-militar, en el sentido de ampliar el margen de viabilidad productiva del capital.

A partir de aquellos años, incluso luego de las conquistas (aunque muy relativas) cristalizadas por la Constitución Federal de 1988, de las

intensas movilizaciones y luchas sociales, de la formación de importantes instrumentos políticos de organización de la clase trabajadora (cuya función en este cuadro todavía no fue reflejada)⁶ la crisis estructural del capital siguió dictando los rumbos de la vida económica nacional, con la liberación generalizada de las actividades financieras; con la desmantelación del raquítrico estado de bienestar social construido bajo la égida del desarrollismo realmente existente; la desregulación de las relaciones de trabajo y la regresión de los derechos laborales; la transferencia de los ejes dinámicos de la acumulación orientadas a las empresas transnacionales, que ya operaban por aquí, entre otras innumerables medidas que convertían a Brasil en la plataforma de valorización financiera para los capitales especulativos e inducían a la especialización productiva.

En esa línea, las políticas neoliberales puestas en marcha aún hacia el final de la década de 1980 no suponían simplemente un movimiento de interrupción del desarrollismo realmente existente, sino una especie de continuidad, en el exacto sentido de la profundización de las condiciones y contradicciones de la expansión capitalista derivada de la plena afirmación de la ley del valor. Así, la llamada “década neoliberal” (¡que ya se extiende por más de 20 años!) surgió, menos como ruptura del desarrollismo realmente existente que como una especie de segunda fase dentro del largo proceso de transición burguesa iniciado con la internacionalización y consecuente mundialización/financierización del capital. De este modo, parece cada vez más evidente que la propia industrialización que sustentó el desarrollismo realmente existente ya respondía a la crisis del capital, pudiendo, en ese sentido, ser considerada una especie de primer impulso del neoliberalismo.

4

Después de la década de 1990, Brasil desempeñó su “nueva” función en la estructura global producida por la mundialización del capital. Ahora conducido por una especie de “trípode de desarrollismo capitalista servil” (ajuste fiscal, interés real elevado y cambio fluctuante) el crecimiento eco-

6 Maria Orlanda Pinassi fue quien me apuntó la necesidad de referirnos del modo más sistemático a la función social de estos instrumentos de organización de la clase trabajadora que surgen durante la transición burguesa, en el período que media entre el final de la dictadura cívico-militar brasileña y la consolidación de la democracia política.

nómico, la generación de empleo, las políticas y todos los clamores desarrollistas fueron definitiva e irreversiblemente condicionados por el ajuste estructural a las condiciones de crisis del capital. Operando como plataforma de valorización financiera del capital especulativo transnacional, con una amplia estructura de producción asegurada por la industrialización del período desarrollista anterior, bajo una fuerte inducción del Estado, Brasil saltó rumbo a la especialización productiva.

La voracidad del capital en crisis estructural, alimentada por la búsqueda incesante de la ampliación de su viabilidad productiva en los años 2000, creó, mientras tanto, una nueva ilusión: la de que el país estaba viviendo una especie de nuevo desarrollismo, un neodesarrollismo. A través de los principales instrumentos, la Política de Desarrollismo Productivo (PDP) y el Plano de Aceleración de Crecimiento (PAC), los gobiernos de los partidos de los trabajadores intentaron activar el crecimiento de la economía, generando empleos y apoyando sus programas sociales. Con el primero, el Estado pasó a destinar voluminosos recursos públicos a la reestructuración patrimonial de determinados sectores del capital. A través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) ayudó a formar verdaderos *players* globales para actuar en el mercado internacional en los ramos de la construcción civil, alimentos, energía, siderúrgica, transportes, etcétera. Ya con el PAC, en sus fases 1 y 2, promovió un proceso de recomposición y formación de infraestructura social y productiva, principalmente para los sectores de energía, saneamiento, habitacional, ferroviario, aeroportuario, portuario, carreteras, entre otros (Pochmann, 2010: 41 y s.).

Junto a las pesadas inversiones en infraestructura productiva y social y de los voluminosos recursos destinados al capital privado, hubo un incremento del consumo popular y una expansión del mercado interno, con el aumento del salario mínimo, y con la introducción del crédito consignado al crecimiento del empleo: fueron cerca de 21 millones de nuevos empleos creados en el país en cerca de 10 años (Cf. Pochmann, 2012). Después de 2005 las inversiones en educación también aumentaron y el número de estudiantes con acceso a la educación superior se duplicó con el Programa Universidad para Todos (Pró-Uni), que subsidiaba el ingreso del estudiante a las universidades o centros universitarios privados en el país, y el Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo (PRO-NATC) que amplía el acceso a la enseñanza en nivel técnico, buscando calificar al trabajador para el ingreso en el mercado de trabajo. Conforme recordó Maria Pinassi, los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff

fueron pródigos en la concesión de derechos para las llamadas “minorías”; con la Ley Maria da Penha, se ampliaron los derechos de los negros, los indios, los homosexuales, entre otros (Pinassi, 2013).

Incluso bajo las condiciones de crisis del capital, los aspectos arriba expuestos ofrecieron

“[...] una garantía mínima de realidad a la fantasiosa falacia según la cual, finalmente, Brasil estaría viviendo un (nuevo) ciclo (virtuoso) de desarrollo” y que sería posible constituir una especie de “tercera vía” que concilie el compromiso incondicional con la estabilidad de la moneda, la austeridad fiscal, la búsqueda de competitividad internacional con el crecimiento económico, las políticas sociales y el papel regulador del Estado (Sampaio Jr., 2012: 201).

Un rápido paréntesis. Este trágico postulado neodesarrollista atrajo la colaboración activa de una variedad de ideologías, entre las cuales, el así llamado posneoliberalismo que, por lo menos a través de la pluma del ex secretario ejecutivo de CLACSO, consubstanció una afinidad electiva (en términos weberianos, una *Wahlverwandtschaft*) con el neodesarrollismo, convirtiéndose rápidamente en propaganda oficial de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (Cf. Sader, 2008, 2009, 2013). Cierre de paréntesis.

En el seno de la mundialización del capital, la liberalización de la economía brasileña condenó definitivamente a la servidumbre financiera dentro del orden (Paulani, 2009), dejándola a merced del libre movimiento del capital transnacional. Esto, en el momento en que la así llamada “revolución molecular-digital” exigió una acumulación científico-tecnológica que la periferia no podía acompañar. En el cuadro de ascenso del neodesarrollismo

La difusión desigual del progreso técnico acentuó la asimetrías de la división internacional del trabajo y exacerbó las características predatorias del capital [...] Sometidas a la ferocidad de la competencia global y al despotismo de las potencias imperialistas, las sociedades que conforman la periferia del sistema capitalista se tornaron presas de un proceso de reserva neocolonial [...] (Sampaio Jr., 2012: 679).

No fue por azar que, incluso después de una década de pesadas inversiones públicas y de la consolidación de la milagrosa fórmula neodesarrollista, la economía brasileña no fuera capaz de encontrar una ruta de crecimiento sustentable y de desarrollo endógeno, y que quedara de rodillas ante los viejos dilemas puestos por el desarrollismo y, más recientemente, ante

las nuevas contradicciones generadas en el curso de su ruta en el sistema del capital. El programa de expansión capitalista de los gobiernos del PT ni siquiera fue capaz de recuperar la tasa de acumulación del capital fijo productivo, que en el inicio de 1980 cayó cerca de un 40% con relación a la década anterior, manteniéndose, hasta hoy, en este nivel (Paulani, 2009: 35).

El neodesarrollismo tampoco fue capaz de ir más allá del ordenamiento macroeconómico, típico de las economías periféricas industrializadas en la fase de crisis estructural del capital, basado en la inversión gubernamental (que ya está en retracción, como vimos anteriormente, y que no es capaz de substituir la inversión privada) y en el consumo caro por el crédito, consignado que, como se sabe, no es sustentable a largo plazo y no posee el dinamismo para conducir el crecimiento económico, conforme lo muestran los breves datos presentados en la primera sección de este ensayo.

La leve mejora del desempeño de la industria en los años 2000 fue apenas de un 5% por año hasta el 2010, luego del estancamiento del período comprendido entre 1981 y 2003, cuando creció solamente un 1,4% por año, aprovechando la expansión del comercio exterior y con la impactante presencia de los sectores ligados al agronegocio y al beneficio mineral. Pero con un cambio cualitativo fundamental: las condiciones de reproducción capitalista en el actual estadio del desarrollo de las fuerzas productivas llevaron a Brasil a la desindustrialización, en el sentido exacto de la pérdida cualitativa y cuantitativa de los sectores de progreso técnico e innovación industrial, y a un giro orientado a la reprimarización de la pauta de exportaciones.⁷

En el primer caso tiene lugar el paulatino abandono del progreso técnico endógeno como motor del crecimiento industrial. En el segundo caso, se remite casi toda la responsabilidad de la competitividad externa a las actividades no industriales: los servicios que exportan poco y el sector primario que exporta mucho, en base a las “ventajas comparativas naturales”. El equilibrio externo, en tales condiciones, es muy precario y dependiente del capital extranjero (Delgado, 2014).

Con esto, el desarrollo capitalista de la periferia del sistema del capital quedó condicionado por las articulaciones económicas responsables por

7 Sobre el padrón de desarrollo del capital actual a partir de la expansión de los agronegocios en Brasil, cf. Firmiano, 2014.

el patrón destructivo de la acumulación del capital, que no dejaba margen para ninguna forma de control social posible sobre la reproducción capitalista más allá de la atenuación temporaria de las contradicciones de este proceso. Algo, por cierto, fácilmente reversible, como lo demuestra el caso brasileño, actualmente bajo el comando de los sectores más voraces del capital.

El programa neodesarrollista (tan en boga en algunos países de la periferia del sistema del capital) ni siquiera puede realizar el programa mínimo de desarrollo del pasado, habiendo cumplido, eso sí, una función revitalizadora de la periferia en lo que concierne a su lugar en la división internacional del trabajo, anteriormente preparada por la industrialización, como ser la función de plataforma de valorización financiera y de exportador de productos de baja densidad tecnológica y *commodities*. No sin penalizar drásticamente a la clase trabajadora.

5

[...] Dada la crisis estructural del sistema del capital, aun cuando una alteración coyuntural pudiese traer de vuelta, por lo menos por algún tiempo, una tentativa de institución de alguna forma de keynesiana de administración financiera del Estado, solo podría existir por un período muy corto, dada la falta de condiciones materiales para facilitar su extensión por un período mayor, incluso en los países capitalistas dominantes. Todavía más importante: un renacimiento coyuntural como este no tendría nada que ofrecer para la realización de una alternativa socialista radical. Pues sería absolutamente imposible construir una alternativa viable al modo de control sociometabólico del capital con base en una forma interna coyuntural de administración del sistema; una forma que dependa de la expansión y acumulación saludables del capital como precondition necesaria de su propio modo de operación (Mészáros, 2009: 26).

La crítica a la teoría económica neoclásica a la que hoy se lanzan muchos desarrollistas en sus distintos matices no puede encontrar ninguna ruta de salida de la crisis del capital. Por eso insiste en el carácter conflictivo del proceso de reproducción social vigente. Y ningún “camino del medio”⁸ es capaz de revertir el actual cuadro de crisis de la economía brasileña;

8 Ver las formulaciones de Amartya Sen sobre un “camino del medio” para el desarrollismo y de Ignacy Sachs, quien, a partir de Sen, buscó elaborar la idea de desarrollismo sustentable. En ambos, la fórmula de tipo keynesiana, basada en el

eufemismo de coyuntura que explica poco los obstáculos que le impiden a la formación económica brasileña saltar rumbo a una sociedad autónoma, libre de la servidumbre y del actual padrón de especialización productiva (Osorio, 2012).

De este modo, en la fase actual de la crisis estructural, el control absoluto del capital bajo la reproducción social no deja margen para ninguna variante de desarrollo y ninguna “solución” al interior del orden, sea de tipo neoclásica, sea keynesiana, gradualista, institucional. Las contradicciones agudas que hoy le imprimen un tono melancólico a cualquier previsión del futuro, en especial para la periferia del sistema del capital, solo pueden ser enfrentadas por la subordinación integral de la esfera de producción (capitalista) a la esfera social. Y para este requisito, la única alternativa societal viable:

[...] se define como un conjunto de prácticas que cumplen las funciones mediadoras primaria de reproducción sociometabólica socialmente constituida y (conforme a las necesidades humanas que cambian históricamente) alterables en su estructura, es decir, sin subyugar a los individuos al “poder de las cosas” (Mészáros, 2009: 215).

Bibliografía

- Arrighi, Giovanni, *A ilusão do desenvolvimento*. 5ª ed. Petrópolis/Río de Janeiro: Vozes, 1998.
- BBC. Brasil, “Alta de juros terá impacto bilionário na dívida pública”. 19/01/2015. Disponible en: <<http://www.msn.com/pt-br/dinheiro/economiaenegocios/alta-de-juros-ter%C3%A1-impacto-bilion%C3%A1rio-na-d%C3%ADvida-p%C3%BAblica/ar-AA8s21J?ocid=mailsignoutmd>> (último acceso: 23 de enero de 2015).
- Borón, Atilio, *O socialismo no século 21: há vida após o neoliberalismo?* San Pablo: Expressão Popular, 2010.
- Carleial, Liana Maria da Frota, *Política econômica, mercado de trabalho e democracia: o segundo governo Dilma Rousseff*. Estud. av., São Paulo 29/85 (diciembre de 2015), pp. 201-214, diciembre 2015. Disponible en: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142015000300014&lng=en&nrm=iso> (último acceso: 11 de octubre de 2016). <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142015008500014>.

crecimiento económico orientado por el empleo y en el gasto público, es esencial para la viabilidad del desarrollismo. Cf. Sen, 1999; y Sachs, 2002.

- Chesnais, François, “A ‘Nova Economia’: uma conjuntura própria à potência econômica estadunidense”. En: Chesnais, François *et. al.*, *Uma Nova Fase do Capitalismo?* San Pablo: Xamã, 2003.
- Corrêa, Marcello / Spitz, Clarice / Aguiar, Flavia, “Economia brasileira encolhe 0,6% no segundo trimestre e está em recessão técnica”. 29/08/2014. Disponible en: <<http://oglobo.globo.com/economia/economia-brasileira-encolhe-06-no-segundo-trimestre-esta-em-recessao-tecnica-13764799>> (último acceso: 29 de agosto de 2014).
- Delgado Guilherme, “Raiz estrutural do binômio desindustrialização/reprimarização da economia permanece intacta”. En: *Correio da Cidadania* (11/04/2012). Disponible en: <http://www.correiodacidade.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7009:manchete110412&catid=34:manchete> (último acceso: 14 de octubre de 2014).
- Fiori, José Luís, “O capitalismo e suas vias de desenvolvimento”. En: Haddad, F. (comp.), *Desorganizando o consenso*. Petrópolis/Río de Janeiro: Vozes, 1998.
- Firmiano, Frederico Daia, *O padrão de desenvolvimento dos agronegócios no Brasil e a atualidade histórica da reforma agrária*. Tesis de doctorado en Ciencias Sociales. Facultad de Ciências e Letras-UNESP, Araraquara, 2014.
- G1 (San Pablo), “Caixa aumenta a partir desta segunda os juros para financiar a casa própria”. 19/01/2015. Disponible en: <<http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2015/01/caixa-aumenta-partir-desta-segunda-os-juros-para-financiar-casa-propria.html>> (último acceso: 23 de enero de 2015).
- Haubert, Mariana / Cucolo, Eduardo, “Governo muda benefícios como pensão por morte e seguro-desemprego”. 29/12/2014. Disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/12/1568439-governo-muda-regra-de-pagamento-de-beneficios-como-seguro-desemprego.shtml> (último acceso: 2 de enero de 2015).
- Marx, Karl / Engels, Friedrich, *El manifiesto comunista*. Traducción, introducción y notas de Miguel Vedda. Buenos Aires: Herramienta, 2008
- Mészáros, István, *Para além do capital: rumo a uma teoria da transição*. 3ª reimpressão. San Pablo: Boitempo, 2009.
- Osorio, Jaime, “América Latina: o novo padrão exportador de especialização produtiva – estudo de cinco economias da região”. En: Ferreira, Carla / Osorio, Jaime / Luce, Mathias (comps.). *Padrão de reprodução*

- do capital: contribuições da teoria marxista da dependência*. San Pablo: Boitempo, 2012.
- Patu, Gustavo / Mantoan, Victória, “Investimento público empaca no país” (31/08/2014). Disponible en: <<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/08/1508548-investimento-publico-empaca-no-pais.shtml>> (último acceso: 31 de octubre de 2014).
- Paulani, Leda, *Brasil Delivery: servidão financeira e estado de emergência econômico*. San Pablo: Boitempo, 2008.
- , “A crise do regime de acumulação com dominância da valorização financeira e a situação do Brasil”. En: *Estudos Avançados* 66/23 (2009).
- Pinassi, Maria Orlanda, “(Neo)desenvolvimentismo ou luta de classes?”. En: *Herramienta Web* 13 (junio de 2013). Disponible en: <<http://www.herramienta.com.ar/revista-web/herramienta-web-13>> (último acceso: 14 de noviembre de 2013).
- Pochmann, Márcio, “O Estado e seus desafios na construção do desenvolvimento brasileiro”. En: *Margem Esquerda* 15 (noviembre de 2010), pp. 34-43.
- , *Nova classe média?: o trabalho na base da pirâmide social brasileira*. San Pablo: Boitempo, 2012.
- Rivero, Oswaldo de, *O mito do desenvolvimento. Os países inviáveis do século XXI*. Petrópolis/Río de Janeiro: Vozes, 2002.
- Rostow, Walt Whitman, *Etapas do desenvolvimento econômico: um manifesto não comunista*. Río de Janeiro: Jorge Zahar, 1974.
- Sachs, Ignacy, *Caminhos para o desenvolvimento sustentável*. Río de Janeiro: Garamond, 2002.
- Sader, Emir. *Posneoliberalismo en America Latina*. Buenos Aires: Instituto de estudios y formación CTA, 2008.
- , “Postneoliberalism in Latin America”. En: *Development Dialogue* (Uppsala) 51 (enero de 2009).
- , “A construção da hegemonia pós-neoliberal”. En: Sader, Emir. (comp.), *10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil: Lula e Dilma*. San Pablo: Boitempo; Río de Janeiro: FLACSO Brasil, 2013.
- Sampaio Jr., Plínio de Arruda, “Desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo: tragédia e farsa”. En: *Serviço Social e Sociedade* (São Paulo) 112 (octubre-diciembre de 2012).
- Santos, Theotônio dos, “A teoria da dependência: um balanço histórico e teórico. 2009”. Disponible en: <<http://theotoniodossantos.blogspot.com.br/2009/06/textos-do-prof-theotonio-dos-santos.html>> (último acceso: 15 de octubre de 2014).

Sen, Amartya, *Desenvolvimento como liberdade*. San Pablo: Companhia das Letras, 1999.

Soares, Pedro / Vettorazzo, Lucas, “Economia recua 0,6% no 2º trimestre, e o país entra em recessão técnica” (29/08/2014)Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/08/1507743-pib-cai-06--no-2-trimestre-diz-ibge.shtml>> (último acesso: 29 de agosto de 2014).

Sobre los autores

Roberta Traspadini

Profesora del curso de Relaciones Internacionales e Integración de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA); profesora voluntaria de la Escuela Nacional Florestan Fernandes. Economista, magíster en Desarrollo Económico, doctora en EDUCACIÓN. Correo electrónico: robertatraspadini@gmail.com.

Álvaro Álvarez

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), maestrando en Ciencias Sociales por la misma Universidad y doctorando en Geografía por la Universidad Nacional de La Plata. Miembro del Centro de Investigaciones Geográficas (FCH/UNICEN) y del Instituto de Geografía Historia y Ciencias Sociales (FCH/UNICEN - CONICET). Correo electrónico: alvaroa22@yahoo.com.ar.

Mariano Félix

Licenciado en Economía (UNLP), magíster en Sociología Económica (UNSAM), doctor en Ciencias Sociales (UBA), Doctor en Ciencias Económicas (París XIII/Nord), profesor adjunto ordinario (UNLP), investigador independiente (CIG-IdIHCS/CONICET-UNLP), La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Recientemente ha publicado en *Review of Radical Political Economics*. Integrante de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay. Militante de Colectiva en Movimiento por

una Universidad Nuestramericana (COMUNA) en el Frente Popular Darío Santillán - Corriente Nacional. Correo electrónico: marianfeliz@gmail.com

Gabriel Oyhantçabal Benelli

Docente de la Universidad de la República (Uruguay). Ingeniero agrónomo y magíster en Ciencias Sociales Agrarias (UdelaR), doctorando en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Correo electrónico: gaboyha@gmail.com

Cecilia Vuyk

Politóloga, docente, militante e investigadora social del Centro Cultura y Participación para el Cambio Social, de Paraguay. Correo electrónico: ceciliavuyk@gmail.com

Guillermo Cieza

Militante popular y escritor. Ha militado en distintas propuestas populares en Argentina desde 1971. Vivió en Venezuela, entre 2013 y 2016, apoyando la Revolución Bolivariana. Es militante del Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional. Correo electrónico: guillermofpds@gmail.com

María Gabriela Guillén Carías

Graduada y doctorada en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual Paulista. Profesora de Sociología en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Grande Dourados, MS. Profesora de la Escuela Nacional Florestan Fernandes. Correo electrónico: gabyllen@gmail.com.br

Judite Stronzake

Profesora del Curso Educação do Campo en la Facultad Intercultural Indígena de la Universidad Federal de Grande Dourados/MS.

Franck Seguy

Magíster en Servicio Social por la Universidad Federal de Pernambuco, doctor en Sociología por la UNICAMP. Profesor de Teorías Sociológicas

y Epistemología en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Estado de Haití donde se graduó en Sociología.

Maria Orlanda Pinassi

Profesora jubilada FCL/UNESP Araraquara. Autora del libro *Da miséria ideológica à crise do capital: uma reconciliação histórica* (Boitempo, 2010). Profesora de la Escuela Nacional Florestan Fernandes. Integrante del consejo asesor de la revista Herramienta. Correo electrónico: mpinassi@gmail.com

Silvia Beatriz Adoue

Profesora de la Escuela Nacional Florestan Fernandes, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y de la Universidad Estadual Paulista. Correo electrónico: sbadoue@hotmail.com

Arlete Ramos dos Santos

Posdoctorado por la UNESP. Doctorado en Educación por la FAE/UFMG. Profesora de la Universidad Estatal de Santa Cruz - UESC-BA. Autora del libro *Aliança (neo)desenvolvimentista e decadência ideológica no campo: movimentos sociais e reforma agrária do consenso* (CRV, 2016). Correo electrónico: arlerp@gmail.com.br

Célia Congilio

Dra. en Ciencias Sociales, Docente del Programa de Posgraduación en Dinámicas Territoriales y Sociedades de la Amazonia (PDTSA) - UNIFESS-PA. Líder del Grupo de Estudios e Investigaciones sobre el Cambio Social en el Sudeste Paranaense (GPEMSSP) y miembro del NEILS. Correo electrónico: conborg@uol.com.br.

Camilla Marcondes Massaro

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual Paulista, campus de Araraquara. Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC/CAMPINAS. Coordinadora del grupo de estudios “Sistema Previsional, Derechos Humanos y Sociedad”. Correo electrónico: c.massaro@gmail.com

Sara Granemann

Profesora asociada de la Escuela de Servicio Social (ESS) de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Investigadora del NEPEM (Núcleo de Estudios e Investigaciones Marxistas). Posdoctorado en el IHC-Universidade Nova de Lisboa. Áreas de investigación y publicaciones: marxismo, Estado, política social y seguridad social pública y privada. Correo electrónico: sgranemann@uol.com.br

Frederico Daia Firmiano

Magíster en Sociología (2009) y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual Paulista. Profesor doctor de la Universidad Estadual de Minas Gerais-UEMG. Correo electrónico: fredericodaia@hotmail.com

